Colección

LOGOS

SIGNUM

Subcampos de aplicación de la psicología jurídica

Luis Orlando Jiménez Ardila (comp.)

Juan José Cañas Serrano

Juan Camilo Carvajal-Builes

Elías Devia Vega

José Raúl Jiménez-Molina

Ever José López Cantero

Carlos Alfonso Murillo

Carlos José Quintero-Cárdenas

Luis Alberto Quiroga-Baquero

Alianza

UNIVERSIDAD CATÓLICA
de Colombia
Unidad Manizales

ASCOFAPSI
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA

5

Luis Orlando Jiménez Ardila

Psicólogo, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses, magíster en Psicología, doctor en Psicología. Exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación, actualmente es el coordinador de la Especialización en Psicología Jurídica de la Universidad Católica de Colombia.
ljimenez@ucatolica.edu.co

Juan José Cañas Serrano

Psicólogo, especialista en Docencia Universitaria, especialista en Investigación Criminal, especialista en Psicología Jurídica y Forense, magíster en Psicología Jurídica. Exfuncionario del Instituto de Medicina Legal (psicólogo forense), perito privado, actualmente es el vicepresidente nacional del Colegio Colombiano de Psicología.

Juan Camilo Carvajal-Builes

Psicólogo, especialista en Psicología Jurídica, magíster en Psicología, magíster en Psicopatología legal, forense y criminológica, doctorando en Psicología. Docente de planta, de tiempo completo, de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia y líder del laboratorio de psicología jurídica y criminológica.
Jccarvajal31@ucatolica.edu.co

Elías Devia Vega

Psicólogo, especialista en Psicología Jurídica, magíster en Resolución de conflicto y mediación. Exfuncionario de la Secretaría Distrital de Salud, docente universitario en diversos ámbitos de la psicología, en especial en psicología jurídica, investigador y coordinador del semillero de investigación en psicología jurídica de la Universidad Incca de Colombia, perito privado en derecho.
edevia@gmail.com

José Raúl Jiménez-Molina

Psicólogo, magíster en Psicología y doctorando en Psicología. Exmagistrado de tribunales deontológicos y bioéticos de psicología, centro y suroriente. Docente de planta de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.
jrjimenez@ucatolica.edu.co

Ever José López Cantero

Psicólogo, magíster en Justicia transicional, desplazamiento forzado, paz, desarrollo y cooperación, magíster en Derecho, especialista en Administración Pública, doctorando en Psicología. Docente de planta, de tiempo completo, de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.
ejlopez@ucatolica.edu.co

Carlos Alfonso Murillo

Psicólogo, especialista en Psicología Jurídica, magíster en Psicología Jurídica, magíster en Desarrollo Educativo y Social. Psicólogo en el Sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), en Defensorías de Familias y, actualmente, en Comisarias de Familia de Bogotá y en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Docente universitario de pregrado y posgrado en Psicología Jurídica y Forense, Psicología forense en contextos informáticos, Familia, Sociedad y Estado.
camurillo@ucatolica.edu.co

Carlos José Quintero-Cárdenas

Magíster en Psicología Jurídica (cum laude) de la Universidad Santo Tomás, doctorando en Psicología con énfasis en Psicología Jurídica. Miembro del grupo de investigación Psicología, Prisión y Sociedad, de Psychology, Prison and Law Consultants-Psychprilaw SAS y director de la misma empresa. Experiencia en procesos de reinserción sociolaboral de personas con sentencia condenatoria. Perito en psicología forense y asesor privado en psicología jurídica y forense. Miembro profesional de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP). Docente en Psicología de la Universidad Manuela Beltrán (UMB).
cjquinteroc@gmail.com

Luis Alberto Quiroga-Baquero

Psicólogo, magíster en Análisis Experimental del Comportamiento, doctorando en Ciencia del comportamiento: opción en análisis de la conducta.
luisquiroga@usantotomas.edu.co

COLECCIÓN

LOGOS

SIGNUM

5

Subcampos de aplicación de la psicología jurídica

Luis Orlando Jiménez Ardila (comp.)

Juan José Cañas Serrano

Juan Camilo Carvajal-Builes

Elías Devia Vega

José Raúl Jiménez-Molina

Ever José López Cantero

Carlos Alfonso Murillo

Carlos José Quintero-Cárdenas

Luis Alberto Quiroga-Baquero

UNIVERSIDAD CATÓLICA
de Colombia
Vigilada Mineducación

Cañas Serrano, Juan José

Subcampos de aplicación de la psicología jurídica / Juan José Cañas Serrano, Juan Camilo Carvajal-Builes, Elías Devia Vega, Luis Orlando Jiménez Ardila, José Raúl Jiménez-Molina, Ever José López Cantero, Carlos Alfonso Murillo, Carlos José Quintero-Cárdenas y Luis Alberto Quiroga-Baquero; Luis Orlando Jiménez Ardila (compilador); con la colaboración de Lina Marcela Aldana Coronado, Sebastián Chaparro, Tatiana Muñoz, Juanita Rhenals, Laura Ximena Restrepo Aristizábal, Danna Carolina Rubiano García, Karen Lorena Ruiz Pérez y Natalia Zamudio Barragán —Bogotá Universidad Católica de Colombia, 2020

224 páginas; 17 x 24 cm.

ISBN: 978-958-5133-50-1 (impreso)

978-958-5133-51-8 (digital)

I. Título II. Carvajal Builes, Juan Camilo III. Devia, Elías IV. Jiménez Ardila, Luis Orlando V. Jiménez-Molina, José Raúl VI. López Cantero, Ever José VII. Murillo, Carlos VIII. Quintero-Cárdenas, Carlos José IX. Quiroga-Baquero, Luis Alberto

1. Psicología criminal 2. Psicología del derecho 3. Psicología-aspectos jurídicos

Dewey 364.3 ed. 21

- © Universidad Católica de Colombia
- © Luis Orlando Jiménez Ardila (comp.)
- © Juan José Cañas Serrano
- © Juan Camilo Carvajal-Builes
- © Elías Devia Vega
- © José Raúl Jiménez-Molina
- © Ever José López Cantero
- © Carlos Alfonso Murillo
- © Carlos José Quintero-Cárdenas
- © Luis Alberto Quiroga-Baquero

Primera edición, Bogotá, D.C.
Diciembre de 2020

DIRECCIÓN EDITORIAL
Stella Valbuena García

COORDINACIÓN EDITORIAL
María Paula Godoy Casasbuenas

CORRECCIÓN DE ESTILO
Gabriela de la Parra M.

DISEÑO DE COLECCIÓN
Juanita Isaza

DIAGRAMACIÓN
Juanita Isaza

CÓMO CITAR EN APA

Impreso:

Jiménez Ardila, L. O. (Comp.). (2020). *Subcampos de aplicación de la psicología jurídica*. Editorial Universidad Católica de Colombia.

Digital:

Jiménez Ardila, L. O. (Comp.). (2020). *Subcampos de aplicación de la psicología jurídica*. Editorial Universidad Católica de Colombia.
<https://doi.org/10.14718/9789585133518.2020>

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Avenida Caracas # 46-22
Bogotá, D. C.
psicologia@ucatolica.edu.co

EDITORIAL
Universidad Católica de Colombia
Av. Caracas 46 - 72 piso 5
Bogotá, D. C.
editorial@ucatolica.edu.co

Licencia Creative Commons Atribución-
CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

AUTORES

Juan José Cañas Serrano

Juan Camilo Carvajal-Builes

Elías Devia Vega

Luis Orlando Jiménez Ardila

José Raúl Jiménez-Molina

Ever José López Cantero

Carlos Alfonso Murillo

Carlos José Quintero-Cárdenas

Luis Alberto Quiroga-Baquero

COLABORADORES

Lina Marcela Aldana Coronado

Sebastián Chaparro

Tatiana Muñoz

Juanita Rhenals

Laura Ximena Restrepo Aristizábal

Danna Carolina Rubiano García

Karen Lorena Ruiz Pérez

Natalia Zamudio Barragán

COMPILADOR

Luis Orlando Jiménez Ardila

CONTENIDO

A LOS LECTORES	9
PRÓLOGO	11
PRESENTACIÓN.....	15
INTRODUCCIÓN	17
PRIMERA PARTE	
La psicología criminológica	23
CAPÍTULO 1	
La criminología y la psicología criminológica.....	25
SEGUNDA PARTE	
La psicología victimal	49
CAPÍTULO 2	
La negligencia parental como expresión silenciosa de la violencia intrafamiliar. Una aproximación desde la psicología victimológica.....	51
TERCERA PARTE	
Psicología del testimonio.....	71
CAPÍTULO 3	
Psicología del testimonio: evidencia actual de su desarrollo	75
CUARTA PARTE	
Psicología jurídica del menor de edad y de la familia	93
CAPÍTULO 4	
Psicología jurídica en el contexto de niño, niña, adolescente y familia.....	95

QUINTA PARTE

Psicología forense	119

CAPÍTULO 5

La autopsia psicológica: evaluación retrospectiva sobre las circunstancias de muerte	121

CAPÍTULO 6

Evaluación psicológica forense de las víctimas de abuso sexual infantil	137

SEXTA PARTE

Psicología jurídica de la mediación y la conciliación	169

CAPÍTULO 7

La psicología jurídica en el ámbito de la mediación y la conciliación.....	171

SÉPTIMA PARTE

Otros enfoques como categorías emergentes de la psicología jurídica	193

CAPÍTULO 8

Perspectiva psicojurídica de la adicción a sustancias psicoactivas.....	195

CONCLUSIONES GENERALES.....	221

Resumen

Este libro expone la definición de la psicología jurídica como área de especialización de la psicología general y algunos de los campos aplicados que constituyen el quehacer del profesional que se dedica a esta parte de la disciplina. Su objetivo es presentar, de manera indirecta, un enfoque diferente al forense, con el que se busca aclarar, tanto al experto como al lego, que el tribunal judicial no es el único escenario en el que puede desempeñarse el psicólogo jurídico. Los capítulos corresponden a productos académicos que ilustran las líneas de investigación que han venido desarrollándose paralelamente al ejercicio del derecho y a la función de la administración de justicia, relacionadas con la intervención o el abordaje de víctimas, criminales, testigos y personas en procesos de conciliación judicial, así como la intervención con niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad social y familiar, para contribuir al restablecimiento de sus derechos.

Palabras clave: víctima; criminal; testigo; conciliación; forense; psicología jurídica.

Summary

This book presents the definition of legal psychology as an area of specialization within general psychology and some of the applied fields that constitute the work of the professional who is concentrating on this area of expertise. Its objective is to present, indirectly, a different approach to the forensic one, which seeks to clarify, both to the expert and to the layman, that judicial court is not the only scene in which legal psychologists can work. The chapters correspond to academic products that illustrate the lines of research that have been developing in parallel with the exercise of the law and the function of justice management, related to intervention or approaching victims, criminals, witnesses and people in judicial conciliation processes, as well as intervention with children and adolescents in vulnerable social and family conditions to contribute to the restoration of their rights.

Keywords: Victim; Criminal; Witness; Conciliation; Medical examiner; Legal psychology.

A los lectores

El texto está dirigido a profesionales de las ciencias humanas y sociales cuyo trabajo se desarrolla en el ámbito de la resolución de problemas psicojurídicos y, de igual manera, a los abogados y funcionarios judiciales cuya perspectiva del derecho sea amplia, más allá de la simple y pura aplicación de la norma jurídica, en la que, además de los aspectos normativos, han de considerarse las variables psicológicas y conductuales que puedan ser de utilidad en la aplicación proporcional y justa de la ley. También puede servir a estudiantes y profesores en la complementación de contenidos de asignaturas relativas a la psicología, al derecho, a la criminología, a la victimología, a la investigación judicial y a la criminalística.

El compilador

PRÓLOGO

Recibí la convocatoria por parte del doctor Luis Orlado Jiménez para colaborar en el prólogo de este libro, que significa un avance positivo y gratificante para todos aquellos que decidimos dedicarnos a la psicología jurídica. Primero que todo, quiero agradecerle a él todas sus enseñanzas, ya que fue mi mentor tanto en las clases de pregrado y luego, ya como profesional, me permitió seguir progresando en este campo nada fácil, pero muy emocionante por toda la complejidad que existe en el comportamiento humano que se desenvuelve en el ámbito jurídico. Los invito a leer cada uno de los apasionantes capítulos, escritos con calidad y eficiencia por los colegas, con quienes en algún momento compartí escenario y puedo dar fe de sus competencias. También agradezco a los estudiantes que, con su entusiasmo, colaboraron en el desarrollo del texto y, seguramente para algunos, es el inicio de una trayectoria en lo psicojurídico. A continuación dedicaré unas breves palabras a cada uno de los capítulos, para tener una idea aproximada de las temáticas que se presentan en el texto.

El primer capítulo ahonda en uno de los subcampos de la psicología jurídica más interesantes, sin descuidar los otros que también son relevantes, y es el de la psicología criminológica. Se establecen definiciones del concepto, distinciones de otras áreas del conocimiento como la criminología y la criminalística y tipos de criminologías; además, se visibiliza el comportamiento criminal desde la óptica legal, moral, social y psicológica, así como diversos factores tanto de riesgo como protectores que se relacionan con la conducta delictiva. Por último, se muestra un cuadro comparativo entre la criminología y la psicología criminológica.

El segundo capítulo se trata de psicología victimal, área supremamente importante, dados los altos índices de violencia que se producen en nuestro país. Tan solo hay que revisar la cifra que presenta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses (2019), se elaboraron 78.314 valoraciones por reconocimientos médicos en el año 2018. Inicia con la presentación de la violencia intrafamiliar como uno de los fenómenos delictivos que más daño le hacen a la sociedad y se indican unos apuntes teóricos sobre el concepto de familia y de violencia intrafamiliar, las tipologías de violencia intrafamiliar y el concepto de negligencia como una de las expresiones de la violencia intrafamiliar.

En el tercer capítulo se trata la psicología del testimonio que, como bien se mencionó, muchos autores la identifican como uno de los subcampos pioneros en psicología jurídica. Se centra en la credibilidad del testimonio y las estrategias utilizadas en la detección del engaño, con base en diversas investigaciones sobre el tema.

El cuarto capítulo está dirigido al papel del psicólogo jurídico en el ámbito de niños, niñas y adolescentes (NNA) y su entorno familiar. Comienza con la iniciativa que tienen los órganos internacionales de proteger los derechos de NNA, tras reconocer su importancia y participación en la resolución de problemas que surgen en el entorno familiar. Se visibiliza la relevancia del actuar del psicólogo jurídico en el equipo técnico dentro del proceso de restablecimiento de derechos bajo los lineamientos de la Ley 1098 de 2006. Otro apartado tiene que ver con el rol que ejerce la psicología en instituciones que tienen la función de proteger a la familia en casos de violencia, tema fundamental debido a los altos índices de casos que se producen a diario en el país, lo cual evidencia la inmensa necesidad de los psicólogos en estos entornos. Finaliza exponiendo la participación de los psicólogos ante las situaciones de los adolescentes en conflicto con la ley y ante procedimientos especiales en circunstancias donde niños, niñas y adolescentes son testigos o testigos víctimas de una conducta punible.

El quinto capítulo aborda la psicología forense, en específico, la autopsia psicológica; se ofrecen varias definiciones del concepto según varios autores, así como también la aplicabilidad de este procedimiento en casos de suicidio. Luego se exponen el origen y el desarrollo histórico del concepto, la metodología para su desarrollo y sus fuentes de información, así como los dos modelos de autopsia psicológica de mayor reconocimiento: el modelo de autopsia psicológica integrado (MAPI) y el método de la estrella, de Núñez de Arco. El capítulo cierra con la aplicabilidad de tal autopsia en el proceso legal colombiano.

El sexto capítulo desarrolla el tema de la evaluación psicológica forense en víctimas de abuso sexual infantil. Esta sección del libro empieza con una contextualización histórica de la relación entre psicología y derecho, de la cual surge la psicología jurídica como una subespecialidad de la psicología, encargada del estudio del comportamiento humano inmerso en un contexto jurídico. De igual manera, se habla de la psicología forense como un área de la psicología jurídica que se desarrolla en el foro,

para responder los interrogantes que surgen en el juicio. También se muestra una precisión en relación con la evaluación psicológica forense, pues, si bien se enfatiza en su rigor científico como el que se tiene en cuenta en una investigación científica, su propósito es muy diferente a esta última, ya que su objetivo es eminentemente práctico. Más adelante se examinan el tema del abuso sexual infantil, su magnitud y complejidad, para profundizar en los elementos que componen un informe pericial y finaliza con la importancia que tiene elaborar un informe de calidad.

El séptimo capítulo alude a la mediación y la conciliación. Empieza con generalidades sobre psicología jurídica, mecanismos alternativos de resolución de conflictos y relaciones humanas. Asimismo, aborda temáticas relacionadas con mediación y conciliación, como los conflictos humanos, conflictos en el ámbito jurídico, etc. Profundiza en los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC): se explica uno a uno, cada modalidad, y su aplicabilidad en diversas áreas del derecho. Otra sección del capítulo está dedicada al rol del psicólogo jurídico en la mediación y la conciliación. Por último, se habla del panorama actual de la psicología jurídica en la mediación y la conciliación en América Latina.

El último capítulo está dedicado a las áreas emergentes de la psicología jurídica, en especial, la perspectiva psicojurídica de la adicción a las sustancias psicoactivas. Empieza con una definición y clasificación de sustancias psicoactivas, la conceptualización de términos como adicción, tolerancia y abstinencia, se establecen algunos factores asociados a las adicciones y termina con el debate ético sobre el consumo de sustancias psicoactivas y su tratamiento. El texto cuenta con tablas de referencia en las que se presentan normas relacionadas con el consumo de tales sustancias, así como políticas de prevención y seguridad. Termina afirmando que la información sobre estadísticas recientes sobre el tema es muy limitada y esto impide tener un panorama más cercano a la realidad. Los invito a leer cada uno de los capítulos y, al mismo tiempo, a identificar el potencial ilimitado y necesario que tiene la psicología jurídica.

Iván Antonio Zúñiga Barros¹

1. Psicólogo, especialista en Investigación Criminal, magíster en Psicología Jurídica. Docente universitario y asesor de prácticas en el área de psicología jurídica.

PRESENTACIÓN

Esta publicación se elaboró con el ánimo de fortalecer y visibilizar la producción del programa de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica, y contó con la participación de ocho profesores vinculados a la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia y otras instituciones de educación superior, todos con actividad profesional en el campo de la psicología jurídica y formación académica posgradual (especialistas, magísteres y doctores), expertos en los temas de sus respectivos capítulos. También se vincularon a este proyecto estudiantes de pregrado de Psicología de la propia Universidad Católica de Colombia como de otras universidades que, con su concurso, dinamizaron y agilizaron el proceso editorial.

El texto, además, tuvo como objetivo principal mostrar un panorama general de algunos de los subcampos de aplicación de la psicología jurídica, el cual queda reflejado en su tabla de contenido. Está estructurado en siete partes que conceptualizan estos subcampos antes de cada capítulo. La primera parte se trata sobre la psicología criminológica y expone una revisión conceptual y comparativa con otras disciplinas que están en el mismo plano explicativo. La segunda parte aborda la psicología victimal; en ella se plantean el concepto de familia y sus funciones sociales, la negligencia parental, la violencia intrafamiliar y las consecuencias psicojurídicas. La tercera parte se refiere a la psicología del testimonio, en la que el autor se aproxima al estado actual de la investigación relacionada con la detección del engaño con base en una revisión de alcance en un período de trece años. La cuarta parte explora la psicología jurídica del menor y de la familia en el contexto de niño, niña y adolescente respecto a los procedimientos y la gestión profesional en este tipo de contextos psicojurídicos. La quinta parte se refiere a la psicología forense, en la que se presentan dos capítulos: uno sobre la autopsia psicológica y otro sobre la evaluación psicológica forense de las víctimas de abuso sexual infantil. La sexta parte trata

Presentación

la psicología jurídica de la mediación y la conciliación como categorías de estudio interdisciplinario con el derecho y la psicología de la comunicación, a partir de los principios de la psicología básica, experimental y social. Por último, la séptima parte alude a una perspectiva psicojurídica de la adicción a sustancias psicoactivas como enfoque emergente de la psicología jurídica, que es complementario a las intervenciones psicoterapéuticas clásicas.

El libro presenta las temáticas de manera que el lector podrá ver algunos de los desarrollos teóricos de la disciplina acompañados, como es de esperar, de una abundante bibliografía que orienta la revisión teórico conceptual de los capítulos, siempre con la visión articuladora de los subcampos de aplicación de la psicología jurídica.

Luis Orlando Jiménez Ardila*

* Psicólogo, especialista en Ciencia Forenses, magíster en Psicología y doctor en Psicología. Coordinador del programa de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

INTRODUCCIÓN

Luis Orlando Jiménez Ardila*
Universidad Católica de Colombia

El origen de la psicología jurídica se puede ubicar con el psicólogo experimental Hugo von Münsterberg, quien, en el año 1908, escribió un texto fundante titulado *En la posición del testigo* (On Witness Stand: Essay on Psychology and Crime) (Perles, 2002), que explica la utilidad de la psicología en los tribunales de justicia. Münsterberg nació en la ciudad prusiana de Danzing o Gdansk (Hergenhahn, 2001), antiguo territorio de Polonia, hoy Alemania. Viajó a Estados Unidos a finales del siglo XIX, país en el que dirigió un laboratorio de psicología experimental en la prestigiosa Universidad de Harvard (Hothersall, 1997); allí trabajó en diferentes frentes de la psicología, como la clínica, las relaciones laborales y la justicia, al punto que también se le considera el iniciador de la psicología aplicada (Moskowitz, 1977). Sin embargo, Manzanero (2010) sostiene que Münsterberg no fue el primero en reflexionar sobre el uso de la psicología en ámbitos legales, pues Hans Gross, considerado el padre de la criminalística, había publicado en 1897 un libro titulado *Kriminalpsychologie*, el cual contenía temas relacionados con la exactitud, la percepción, la imaginación y la memoria de testigos de casos judiciales. Perles (2002), por su parte, afirma que Raymond Catell (1895), Alfred Binet (1903) y William Stern (1903) divulgaron algunos aspectos psicológicos implicados en el testimonio legal. Ahora bien, quienes utilizaron por primera vez el rótulo de psicología jurídica fueron J. B. Friedrich, en 1835 (Perles, 2002) y A. Motet, en 1887 (Manzanero, 2010).

De acuerdo con lo anterior, en la historia de la psicología jurídica se reconoce como tema inicial la incidencia de la sugestión y del estrés en los procesos atencionales, perceptivos y nemotécnicos de testigos, circunstancia que origina la psicología del testimonio que, al ser aplicada en el foro judicial, impulsa el nacimiento de la psicología forense (Hergenhahn, 2001).

* <https://orcid.org/0000-0003-0191-3832>

Fariña y otros autores (2005) sugieren la construcción progresiva de la psicología jurídica a partir de las áreas de intervención: i) la prueba psicológica en materia penal; ii) la evaluación psicológica y resocialización del delincuente; iii) la evaluación y el tratamiento de la víctima, y iv) el estudio del comportamiento y de los procesos de razonamiento de los operadores jurídicos.

Respecto a la producción histórica y conceptual en Colombia cabe citar el capítulo de Vargas, Norza y Rodríguez, así como el de Jiménez, contenidos en el libro *Con-ciencia criminal: criminología, psicología jurídica y perfilación criminal* (Norza y Egea, 2017).

Por otro lado, hay una marcada tendencia en la literatura especializada a describir la psicología jurídica según los denominados subcampos de aplicación: i) psicología criminal; ii) psicología victimal; iii) psicología penitenciaria; iv) psicología forense; v) psicología del testimonio; vi) psicología policial; vii) psicología de la mediación y la conciliación; viii) psicología del menor de edad y la familia; ix) psicología de los tribunales o psicología legal; x) psicología jurídica del tránsito vehicular terrestre, y xi) adicciones y su repercusión legal (Perles, 2002; Vázquez, 2005; Soria, 2005; Soria y Sáiz, 2006; Garrido et al., 2006), entre otras. Esta tendencia le da el carácter de psicología aplicada.

A continuación, se describen algunas de estas áreas de conocimiento psicojurídico especializado:

La psicología criminal es el subcampo que analiza los factores individuales como la personalidad criminal y la motivación, además de las variables biológicas y sociales de una persona que la llevan a convertirse en delincuente (Ovejero, 2009), los elementos asociados al desarrollo y al mantenimiento de la conducta criminal, y las técnicas psicológicas para su intervención (Soria et al., 2006).

La psicología victimal es un campo profesional muy solicitado en evaluación forense e intervención psicojurídica cuando se producen situaciones de conflicto humano en las que las personas se ven seriamente afectadas en su psicología (procesos cognitivos y emocionales) ocasionados por un hecho criminal (Soria et al., 2006).

La psicología policial es una rama poco conocida de la psicología jurídica que toma elementos de la psicología clínica, laboral y educativa para contribuir a mejorar procesos organizativos, de formación, administrativos y de apoyo interno de las fuerzas de policía (Soria et al., 2006). El psicólogo policial ejerce sus funciones en el tratamiento breve a agentes de policía; evaluación y tratamiento psicológico a policías involucrados en incidentes traumáticos; servicios de entrenamiento y desarrollo de habilidades profesionales relacionadas con el manejo de estrés; entrevista para

procesos de selección e incorporación, e implementación de programas para mejorar los servicios de policía (Soria, 2005).

La psicología forense es la práctica profesional de los psicólogos que, en calidad de expertos, proporcionan conocimientos de diferentes áreas de la psicología a la administración de justicia; esta práctica responde a criterios de rigor científicos, a un marco jurídico establecido y a principios éticos que tienen como objetivo general contribuir a una eficaz y eficiente impartición de justicia. Lobo y otros autores (2016) muestran que la APA (2008) conceptualiza la psicología forense como “la aplicación de la ciencia y la profesión de la psicología a las preguntas y problemas relacionados con la ley y con el sistema legal” (p. 2).

La psicología del testimonio se basa en los estudios experimentales sobre precisión de la memoria y búsqueda de indicadores de la mentira. Se encarga de evaluar las variables psicológicas presentes en el testimonio judicial para ayudar a determinar su veracidad (Ruiz, 2011). Según Manzanero (2008), el profesional de la psicología entrenado en este campo tiene como función primordial ayudar al sistema judicial a erradicar creencias e imaginarios sobre la memoria y la mentira, para que se elaboren declaraciones testificales lo más cercanas posible a la realidad de los hechos que se investigan.

La psicología penitenciaria es la rama que analiza y aplica procesos de evaluación y tratamiento de personas que se hallan bajo custodia penitenciaria, sean condenados o estén a la espera de juicio, así como procesos de tipo comunitario destinados a su reinserción social (Soria, 2005, citado por Ovejero, 2009).

La psicología de la conciliación se ocupa de conocer, desarrollar y emplear las metodologías y técnicas psicológicas dirigidas a facilitar los procesos de la negociación y la mediación como medios para resolver los conflictos sociales sin adentrarse en la vía de litigio judicial (Soria, 2005).

El avance de estas áreas de conocimiento de la psicología jurídica, como es de esperarse en cualquier disciplina científica, ha implicado el trabajo de muchos psicólogos, dedicados tanto a la investigación como a la docencia, quienes se han interesado por diversidad de problemáticas, con lo que queda claro que tales asuntos (víctimas, agresores, testigos, personas privadas de la libertad, escenarios forenses, personal policial y personas en situación de mediación judicial) se van ampliando exponencialmente en la medida en que las sociedades crecen, evolucionan y se integran de manera cada vez más compleja (Tabla 1).

Introducción

Tabla 1. Relación de autores según país, temática y subcampo de aplicación

Autor	Natalicio o año del aporte	País	Temática	Subcampo de aplicación
Eckards Hausen	1800	Alemania	Escribió sobre la necesidad de conocimientos psicológicos para juzgar los delitos.	Psicología criminal
Johann Hoffbauer	1825	Alemania	Escribió sobre la psicología aplicada a la administración de justicias.	Psicología de los tribunales
Krafft Ebnigs	1892	Alemania	Escribió sobre psicopatología judicial.	Psicología criminal
Hans Gross	1898	Alemania	Publicó <i>Psicología criminal</i> .	Psicología criminal
Alfred Binet	1857	Francia	Procesos cognitivos aplicados a testigos.	Psicología del testimonio
William Stern	1871	Alemania	Psicología aplicada.	Psicología del testimonio
Raymond Catell	1905	Inglaterra	Procesos de memoria aplicada a testigos.	Psicología del testimonio
Hugo Münsterberg	1863	Alemania	Iniciador de la psicología jurídica y del testimonio.	Psicología del testimonio
Hans von Hentig	1887	Alemania	Victimología y conducta criminal.	Psicología criminal y victimología
Emiro Mirá y López	1932	España	Escribió el primer manual de psicología jurídica en España.	Fundamentos
Frederic Munné	1932	España	El problema interdisciplinario en la psicología jurídica.	Fundamentos
Ramón Bayes	1930	España	Introducción a la psicología jurídica.	Fundamentos
Enrique Echeburúa	1951	España	Trabajos sobre victimización.	Psicología victimal
Miguel Ángel Soria	2011	España	Psicología de la victimización criminal y psicología criminal: prevención de la delincuencia.	Psicología victimal y psicología criminal
Vicente Garrido	1958	España	Psicopatología criminal, <i>modus operandi</i> , huella psicológica.	Psicología criminal y perfilación
Santiago Redondo	1991	España	Estudios sobre tratamiento de condenados.	Psicología penitenciaria
Noel Bernard Tiffon	1972	España	Trabajos sobre psicopatología criminal	Psicología criminal y forense

Autor	Natalicio o año del aporte	País	Temática	Subcampo de aplicación
Javier Urrea Portillo	1957	España	Publicaciones sobre procesos de victimización.	Psicología victimal
Blanca Vázquez Mezquita	1995	España	Evaluación del abuso sexual infantil y procesos de victimización criminal.	Psicología forense
Elizabeth Lofftus	1944	Estados Unidos	Investigadora sobre la memoria humana.	Psicología del testimonio
Robert Hare	1934	Canadá	Estudios sobre psicopatía y delito.	Psicopatología criminal
Adriane Rine	1954	Canadá	Estudios sobre neuroimágenes en criminales.	Neurocriminología
Alan Kazdin	1954	Estados Unidos	Estudios sobre la conducta de oposición, agresiva y antisocial en niños y adolescentes.	Psicología del menor y de la familia
David T. Lykken	1928	Estados Unidos	Estudio de gemelos y detección de mentiras.	Psicología del testimonio
Donald Dutton	1997	Canadá	Estudios sobre agresores de pareja.	Psicología forense
Paz del Corral	1948	España	Secuelas psicológicas y tratamiento de agresiones sexuales y violencia familiar.	Psicología forense
Miguel Clemente	1980	España	Fundamentos de psicología jurídica.	Fundamentos
Luis Muñoz Sabaté	1980	España	Introducción a la psicología jurídica.	Fundamentos
Florencio Jiménez Burillo	1943	España	Intervención psicológica en violencia y sistema penal.	Psicología judicial

Fuente: elaboración propia.

El derecho es una disciplina social cuyo objeto de estudio es la norma jurídica con la que los Estados y los gobiernos imponen control social a sus ciudadanos. Por su parte, la psicología se enfoca en describir, medir y predecir el comportamiento humano y sus variables, para explicar y prevenir. En ese orden de ideas y desde un enfoque interdisciplinario, la psicología jurídica se enmarca en la relación psicología-derecho, como una especialidad de la psicología que estudia aquellos fenómenos psicológicos y conductuales que inciden en el sistema de administración de justicia y utiliza los métodos propios de la psicología científica para el desarrollo de su quehacer (Marín y Esparcia, 2009).

Referencias

- Fariña, F., Arce, R. y Novo, M. (enero, 2005). Notas sobre la historia de la psicología jurídica en España. En F. Fariña, R. Arce y M. Novo (eds.), *Psicología jurídica* (pp. 45-55). Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local.
- Garrido, E., Masip, J. y Herrero, C. (2006). *Psicología jurídica*. Pearson Prentice Hall.
- Hergenhahn, B. (2001). *Introducción a la historia de la psicología*. Paraninfo.
- Hothersall, D. (1997). *Historia de la psicología*. McGraw-Hill.
- Manzanero, A. (2008). *Psicología del testimonio: una aplicación de los estudios sobre memoria*. Psicología Pirámide.
- Manzanero, A. (noviembre, 2010). Hitos de la historia de la psicología del testimonio en la escena internacional. *Boletín de psicología* (100), 89-104.
- Marín, M. y Esparcia, A. (2009). *Introducción a la psicología forense*. Universitat de Barcelona.
- Moskowitz, M. (1977). Hugo Munsterberg: A Study in the History of Applied Psychology. *American Psychologist*, 32(10), 824-842. doi: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.32.10.824>
- Norza, E. y Egea, G. (2017). *Con-ciencia criminal: criminología, psicología jurídica y perfilación criminal*. Manual Moderno.
- Ovejero, A. (2009). *Fundamentos de psicología jurídica e investigación criminal*. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Perles, F. (2002). *Psicología jurídica*. Ediciones Aljibe.
- Ruiz, J. (2011). *Psicología jurídica: evaluación y tratamiento de la conducta antisocial*. Universidad del Bosque.
- Soria, A., Garrido, E., Rodríguez, R. y Tejedor, D. (2006). *Psicología jurídica: un enfoque criminológico*. Delta publicaciones.
- Soria, M. (2005). *Manual de psicología jurídica e investigación criminal*. Psicología pirámide.
- Soria, M. y Sáiz, D. (2006). *Psicología criminal*. Pearson Prentice Hall.
- Vázquez, B. (2005). *Manual de psicología forense*. Síntesis.

Luis Orlando Jiménez Ardila*

Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia

La psicología criminológica

La psicología criminal es el subcampo de aplicación de la psicología jurídica que se encarga de estudiar el comportamiento, los procesos cognitivos y emocionales, la estructura de personalidad, la motivación y otros aspectos relacionados con el delincuente. Asimismo, aborda los factores intrapersonales que como factores (individuales) son influenciados por variables externas, pues la conducta delictiva no ha de tomarse simplemente como una forma de expresar la agresividad, como una manera sobresaliente de un rasgo de personalidad o un simple comportamiento que desconoce la norma social o jurídica, dado que en ella están implicados múltiples variables y constituyen un problema multicausal y de salud pública en el que el análisis de la conducta criminal es un ejercicio necesario para los entes encargados de hacer cumplir la ley.

Para Vicente Garrido (2005), la psicología criminológica analiza las causas y los autores del delito y da herramientas para su prevención. Para Soria (2005), es la rama encargada de explicar la etiología del delito, así como los motivos subyacentes a la persona que lo comete; San Juan y Vozmediano (2019) la entienden como una vertiente de la psicología jurídica que aborda psicológicamente la comprensión de la delincuencia, sus causas y su tratamiento, para ayudar a reducirla mediante métodos preventivos o de intervención.

Entre los tópicos de interés para la psicología criminal están: i) la psicopatología criminal, que es una de las áreas intradisciplinarias (dentro de la psicología criminal) que estudia la enfermedad mental y los trastornos de personalidad relacionados con la conducta criminal; ii) la carrera criminal, entendida como los cambios que va sufriendo un delincuente en su ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, y que determinan su *modus operandi* y su huella psicológica; iii) los perfiles criminales

* Psicólogo, especialista en Ciencia Forenses, magíster en Psicología y doctor en Psicología. Coordinador del programa de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

que, como técnica de investigación criminal, ayudan al rastreo y a la captura de delincuentes violentos, y iv) el diseño de métodos de intervención de los delincuentes para lograr en ellos un comportamiento prosocial.

Actualmente, existe controversia en cuanto a la forma más adecuada de denominar a este campo de trabajo: psicología criminal o psicología criminológica, pero en la práctica jurídica y en los escenarios de aplicación, se tiende a usarlos como sinónimos. Lo que sí es claro es que es una subárea de la psicología jurídica.

Referencias

Garrido, V. (2005). *¿Qué es la psicología criminológica?* Biblioteca Nueva.

San Juan, C. y Vozmediano, L. (2019). *Psicología criminal*. Síntesis.

Soria, M. (2005). *Manual de psicología jurídica e investigación criminal*. Pirámide.

1

LA CRIMINOLOGÍA Y LA PSICOLOGÍA CRIMINOLÓGICA

José Raúl Jiménez-Molina*

Ever José López Cantero**

Luis Alberto Quiroga-Baquero***

Danna Carolina Rubiano García

Natalia Zamudio Barragán

Resumen

El objetivo de este capítulo es hacer una revisión conceptual sobre la psicología criminológica y sus características y establecer diferencias con otras ciencias afines al estudio del delito, en especial, con la criminología. Se presentan teorías explicativas del comportamiento criminal desde los dos saberes, con el fin de mostrar similitudes y particularidades entre los dos campos de conocimiento. Además, se expone una aproximación conceptual de criminología, psicología criminal, criminalística, psicología criminológica y sus términos asociados. Si bien estos conceptos pueden estar relacionados, tienen rasgos propios tanto epistemológicos como ontológicos.

Palabras clave: criminología, psicología, criminalística, criminal, antisocial.

Introducción

Se define la conducta delictiva como toda acción determinada como legalmente inaceptable, enunciada dentro de un marco legal que tiende a castigarlas, es decir, este tipo de conductas no es un constructo psicológico y parte de una categoría jurídico-legal que enmarca una serie de comportamientos o variables psicológicas calificadas como conducta antisocial (López y López, 2003). La conducta, según Gil, García, Carmona y Ortega (2018) es la actitud de enfrentamiento contra figuras que representan mandato o autoridad, junto con la transgresión de normas o leyes ya establecidas. Estas conductas se caracterizan en algunas ocasiones por comportamientos agresivos, delictivos y vandálicos, contra pares o incluso contra animales, que infringen normas sociales y legales.

* <https://orcid.org/0000-0003-4806-5068>

** <https://orcid.org/0000-0003-1921-4159>

*** <https://orcid.org/0000-0002-9646-9860>

Taylor (2016) resalta las diferencias entre el comportamiento criminal, desviado y antisocial. El desviado se entiende como el comportamiento moralmente inaceptable, de acuerdo con factores como el sexo, la edad, la cultura y el punto de vista de quien observa y de quien lo realiza; el criminal es aquel comportamiento que está por fuera de un marco normativo, y el antisocial se califica a partir de la moralidad de quien observa los comportamientos y desde un marco normativo, por ejemplo, gritar y humillar a la pareja en público, ensuciar el jardín del vecino, hacer ruido a altas horas de la noche o caminar en estado de ebriedad por la calle, que no necesariamente están enmarcadas en la normatividad, pero pueden verse como antisociales.

La criminología surge a principios del siglo XIX, ante la necesidad de estudiar los comportamientos delictivos y antisociales, con la intención de promover su prevención y comprensión. Así, la criminología florece como la ciencia de estudio de estos comportamientos y los mecanismos de acción social empleados para su control (Buil, 2016). Sin embargo, en el siglo XVIII comenzaron a surgir discrepancias frente al concepto de “criminología”. A pesar de ello, la mayoría de los autores que la han definido están de acuerdo en que es una ciencia que emplea el método empírico para estudiar el comportamiento antisocial y las reacciones sociales que se presentan para controlarlo (Buil, 2016).

Según Trujillo (2006), la criminología es una ciencia que busca explicar el porqué del comportamiento criminal y reúne conocimientos de otras ciencias y disciplinas como la filosofía, la antropología, la psicología, la criminalística y la victimología, entre otras. Con base en ellas, la criminología sostiene que la conducta criminal surge del aprendizaje, de la educación y de la cultura; la criminología emplea conocimientos universales para estudiar y explicar los comportamientos humanos con características antisociales.

Se define la criminología como una ciencia natural que utiliza una metodología científica y emplea conocimientos de otros saberes, sin limitarse a ninguno, para abordar los componentes de los actos criminales, quién los comete y sus consecuencias, mediante el uso de técnicas, métodos y conceptos que abarcan contexto, enfoque social, emociones, expresiones, actitudes y comportamientos de los autores, para contribuir a la normatividad y al tratamiento del sujeto criminal (Trujillo, 2006).

Piquero (2016) habla de una criminología teórica, la cual, con ayuda de diversas disciplinas, formula una teoría referente a su propio objeto de estudio, para explicar el comportamiento criminal, sus fenómenos y cómo puede prevenirse. También propone una criminología que trata de comprender las acciones y los pensamientos de los individuos, al ver e interpretar el mundo desde una perspectiva criminal, para clasificar las variables relevantes del delito y del delincuente.

Garrido (2018) define la criminología forense como la ciencia que brinda hipótesis para explicar y, si es posible, predecir los comportamientos irracionales. Así mismo, contribuye al derecho y a la justicia, pues estas ramas solo explican el comportamiento desde lo social, mientras la criminología ofrece un punto de vista desde los comportamientos humanos y de las características que influyen en él; así, su misión en los tribunales es aportar información y conocimientos para que el juez comprenda el hecho delictivo y tenga en cuenta aquellos factores que llevaron al sujeto a actuar de cierta forma.

La psicología criminal es definida por Guardiola (2011) como la parte de la psicología que estudia el comportamiento del delincuente, sus factores internos y externos y sus motivaciones al delito. Durrant (2018) la concibe como la ciencia que usa la psicología para comprender las causas del crimen e incluye el estudio de la personalidad y la cultura, la influencia social y el desarrollo cognitivo del individuo; resalta que, aunque existe un acuerdo respecto a los límites entre la criminología y la psicología, aún no existe un consenso frente al concepto de psicología criminal, por lo que es confundida con otras ramas como la psicología forense, la psicología criminológica e incluso la misma criminología.

Durrant (2018) retoma el concepto de psicología forense como la aplicación de la psicología en los sistemas penales y reafirma la definición de psicología criminal como una disciplina académica que contribuye a la elaboración de perfilación criminal, con la descripción de los comportamientos por medio de las causas, las motivaciones y los contextos del delincuente.

Se hallan similitudes en las definiciones de psicología criminal y criminología. Algunos autores expresan que la primera forma parte de la segunda, aunque ambas se basan en diferentes disciplinas, cuya misión es estudiar los componentes psicológicos de la criminalidad, sentar bases teóricas y prácticas para el diagnóstico y tratamiento óptimo a partir del estudio de la personalidad criminal e integrar una praxis terapéutica destinada a la modificación comportamental o un desarrollo de perfiles criminales (Arcia, 2019).

Otro concepto relevante es el de criminalística. Burgos (2010) tomó diversas concepciones teóricas para después formar una definición que engloba toda la información encontrada. Abarca nociones como la de Sossa, quien afirma que la criminalística es una ciencia penal auxiliar, cuyos conocimientos metodológicos se aplican en el estudio de las evidencias materiales, lo cual le permite descubrir y verificar científicamente un hecho presuntamente delictuoso y sus autores, para aportar pruebas a los organismos de justicia.

Burgos (2010) también tiene en cuenta la definición de la Asociación de Criminalística de California, que la concibe como una disciplina científica dirigida al reconocimiento, a la identificación, a la individualización y a la evolución de las evidencias

físicas, mediante la aplicación de las ciencias naturales en el campo de las ciencias legales. A partir de esto, Burgos (2010) sostiene que la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho, cuyo fin último es la investigación de hechos presuntamente delictivos por medio de la prueba material significativa, en el sitio del suceso y en el laboratorio, para descifrar, con base en conocimientos técnico-científicos y de manera verificable, preguntas como el qué, el cómo, el dónde, el cuándo y el quién mediante la aplicación del método científico, el reconocimiento, la evaluación y el análisis de la evidencia física.

Ahora bien, hay que establecer una distinción entre la psicología y las otras disciplinas y profesiones que comparten un interés por el crimen. El enfoque de la psicología es el estudio del comportamiento criminal de los individuos, diferente de los estudios de sistemas corporales (biología), estudios de variaciones en las medidas agregadas de tasas de criminalidad y estructura de grupos (sociología) y estudios de historia y economía política (derecho y justicia penal) (Bonta y Andrews, 2017).

Autores como Norza y Egea (2017) asumen la psicología criminológica como el estudio del comportamiento antisocial y delictivo por medio del análisis del desarrollo, del estilo de vida y de la personalidad del delincuente, para encontrar variables que lo hacen más proclive a la comisión del delito. Además, identifica factores de adquisición, mantenimiento y desistimiento de este tipo de conductas.

Ching (2005) propone que la psicología criminológica es el estudio de las motivaciones y las causas de la delincuencia. Se refiere al análisis de factores endógenos y exógenos, como la predisposición hereditaria, la influencia del medio y las influencias sociológicas, para crear leyes desde las relaciones que guardan estos fenómenos respecto al crimen como un conjunto psicosocial.

Durrant (2018) explica la psicología criminológica como la aplicación de métodos y teorías de la psicología en la comprensión, el tratamiento y la reducción de los comportamientos delictivos.

Bartol y Bartol (2017) proponen una distinción entre la criminología y la psicología criminológica. La primera tiene como enfoque los grupos y la sociedad del delincuente, así como la forma en la que estos influyen en su comportamiento; la segunda es la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales del delincuente. El conjunto de ambas disciplinas examina el comportamiento de forma individual, cómo es adquirido, mantenido y modificado por el sujeto e incluye las influencias biológicas, sociales y psicológicas.

A continuación, se expone la diferencia entre las dos corrientes que generan mayor interés por la comunidad científica. En primer lugar, se muestran las escuelas criminológicas y los tipos de criminología; en segundo lugar, se abordan los paradigmas de

la psicología criminológica y por último se muestra un cuadro comparativo sobre las principales características de ambas corrientes.

Criminología

Las escuelas criminológicas intentan explicar el comportamiento delictivo por medio de una serie de factores sociales e individuales asociados a la aparición de estas conductas. En este apartado se expondrá la criminología clásica, que hace referencia al delito como una elección racional, y la criminología positiva, basada en teorías biológicas (Abidin, 2005).

Escuela clásica

Existen autores que definen la criminología desde el siglo XVIII y desde diferentes escuelas. La criminología clásica comenzó a llamarse de esta forma con el surgimiento de nuevas vertientes en la época de la Ilustración, a partir de la cual se denominó escuela positiva (Abidin, 2005).

Los autores de la criminología clásica se centran especialmente en el delito desde el delincuente, pues la delincuencia es una elección de este: opta por actuar de esta manera sin respetar la ley. Esta escuela parte del hecho de que el hombre es dueño de sus actos y se fundamenta en la responsabilidad de cada quien, sin contar con variables externas al comportamiento; por tanto, la delincuencia solo se puede explicar por el mal uso de la libertad del individuo (Álvarez, Montenegro y Martínez, 2012). Otro tema central de la escuela clásica son los métodos penales empleados con los delincuentes: algunos pensaban que estos métodos debían ser coercitivos frente a quienes habían violado las normas sociales para así reestablecer el orden normativo, mientras que otros creían que el propósito de estos métodos debía ser disuadir al individuo de continuar cometiendo delitos (Abidin, 2005).

Los principales exponentes de la escuela clásica fueron Cesare Beccaria, Giovanni Carmignani, Pellegrino Rossi y Francisco Carrara. Desde el derecho penal estudiaron los abusos de autoridad y la arbitrariedad frente a las penas ejercidas y defendieron el respeto hacia las garantías individuales; por esto, el derecho penal y la pena son, para la escuela clásica, un método para defender a la sociedad del crimen y no para modificar la conducta del delincuente (Álvarez, Montenegro y Martínez, 2012).

En 1764, Beccaria publicó su obra *De los delitos y de las penas*. Exponía un alegato contra los métodos abusivos y arbitrarios empleados y desarrollaba una defensa contra los métodos humanitarios, fundamentado en la proporción entre el delito y las penas (Álvarez, Montenegro y Martínez, 2012). Por su parte, Giovanni Carmignani explica que la pena que se impone a un delincuente tiene la intención de evitar que vuelva a

cometer actos delictivos y no la de vengar su comportamiento, pues, independiente de su estatus social o sus privilegios, al ver la severidad del castigo, cualquier individuo elegirá no cometer actos delictivos (Bartol y Bartol, 2017).

Francisco Carrara, considerado como uno de los padres de la escuela clásica, en su obra *Programa di diritto criminale*, de 1859, sostiene que una pena no debe exceder las necesidades del derecho jurídico y que son estas las que aseguran el funcionamiento y el equilibrio en la sociedad, porque el actuar del individuo se basa en su libre albedrío, el cual pasa por tres etapas psicológicas: deliberación, decisión y ejecución; por tanto, cuando este toma la decisión de delinquir, debe responder ante la sociedad con una pena equivalente a dicho delito (Canevello, 2000).

Se puede afirmar que la escuela clásica también puede ser llamada escuela jurídica, basada en el derecho, porque contribuyó a la finalización de los métodos bárbaros e injustos e incentivó el trato humanitario por medio del respeto a la ley, al derecho individual y a la limitación del poder del Estado (Álvarez, Montenegro y Martínez, 2012).

Escuela positiva

Mientras que para la escuela clásica el principal propósito era el estudio del delito como un ente jurídico y abstracto, para la escuela positiva el delito es un hecho real, empírico, histórico y concreto, que orienta su interés hacia los autores de los hechos delictivos, el comportamiento y las causas (Abidin, 2005). La escuela positiva surge a finales del siglo XIX con la llegada del positivismo, contrapuesta a la idea del libre albedrío, al explicar que el criminal está totalmente determinado por factores antropológicos, psicológicos y sociológicos (Abidin, 2005).

Para el positivismo criminológico, el ser humano es un animal salvaje inmerso en su herencia patológica, en referencia a su determinismo biológico, o es un receptor de procesos externos causales, en alusión a un determinismo social. Esta corriente expresa que el individuo actúa con base en estímulos y respuestas mediados por el contexto natural o social en el que emerge (Álvarez, Montenegro y Martínez, 2012). Como ya se vio, en la escuela clásica el sujeto es castigado por ser un delincuente, pero en la escuela positiva, el sujeto es castigado por sus actos delictivos; así, para el positivismo, el individuo es un sujeto diferente a los demás, determinado y que no actúa desde su consciencia, sino por variables que guían sus comportamientos (Abidin, 2005).

Entre los principales exponentes de la criminología positiva se encuentra el criminólogo Cesare Lombroso, quien propone su teoría biológica del hombre criminal, según la cual el individuo presenta una regresión de estados evolutivos que caracterizan

la conducta criminal como innata; además, el criminal se reconoce por unos rasgos físicos, como un excesivo desarrollo del cerebelo, asimetría del rostro o un hoyuelo en medio del occipital (Álvarez, Montenegro y Martínez, 2012).

Por otro lado, Enrico Ferri identifica al criminal como un ser que no posee autodeterminación frente a sus comportamientos, por lo que, dentro de un medio social que le brinde ciertas características psíquicas e individuales, cometerá un número de delitos; así, este autor explica cómo este tipo de conductas obedece a diversas condiciones físicas y sociales, en combinación con factores congénitos. Si bien Ferri no contradice la teoría de Lombroso respecto a que las conductas delictivas surgen por variables congénitas, sostiene que además se deben tener en cuenta las variables sociales (Canevello, 2000).

El abogado Rafael Garófalo afirma que el delito es la consecuencia de anormalidades psicológicas o morales heredadas, diferentes a las enfermedades mentales y, aunque el delito se presenta cada vez de forma diferente, hay algunas conductas con similitudes constantes y el positivismo no puede centrarse únicamente en la explicación del delincuente, pues debe abordar el delito como una noción individual y universal (Canevello, 2000).

El pensamiento de estos tres autores abarca los postulados fundamentales de la escuela positiva, que analiza el delito, el delincuente, el juicio y la sanción impuesta, y evalúa un delito previsto y penalizado, junto con las condiciones personales y ambientales que han llevado al individuo a actuar de esta manera y, de este modo, examinar su responsabilidad frente a los hechos (Álvarez, Montenegro y Martínez, 2012).

Tipos de criminología

Criminología clínica

La criminología clínica nace de la escuela positivista con el criminólogo Cesare Lombroso, como la ciencia de las conductas antisociales y criminales. Se basa en la observación de casos individuales, normales o anormales que presenten algún tipo de patología, para dar una explicación a cada uno de ellos desde un ámbito social, psicológico, biológico y moral. Lombroso decía qué se podía diferenciar entre el grado de peligrosidad de cada delincuente (Ríos, 2017).

Desde su origen, la criminología clínica busca explicar el hecho criminal con base en los estudios, diagnósticos y tratamientos personalizados de cada delincuente, así como establecer el grado de peligrosidad de cada individuo teniendo en cuenta el contexto en el que emerge y su constitución biológica y psicológica. A partir de

lo anterior, la criminología clínica afirma que el individuo puede convertirse en un criminal por influencia de su entorno físico y social, sin dejar de lado la herencia cromosómica y biológica que puede provocar reacciones con estímulos externos hasta desarrollar un comportamiento delictivo (Ríos, 2017).

En otra instancia, la clínica como parte de la criminología cumple con tres aspectos importantes: auxiliar el proceso penal, emitir diagnósticos o clasificaciones ideográficas y nomotéticas a las conductas delictivas, y brindarles abordaje terapéutico, pues son estas interpretaciones las que funcionan como prueba en el proceso penal (Viquez, 2016).

Criminología crítica

La evolución de la criminología surge al pasar de una perspectiva micro a una macro de la criminalidad, desde dos teorías: la reacción social y el etiquetamiento y la teoría de los conflictos. De ahí emerge la criminología crítica materialista, que incorpora conceptos de estas dos teorías y orienta su objeto de investigación a las actuaciones del sistema penal y las relaciones entre estructura política y control social (Carvalho, 2014). Cohen expresa que la criminología crítica tiene sus inicios con la reacción social y la sociología del conflicto, y aborda temas como la ley, el Estado y la clase. Se aparta del positivismo, al postularla desde un ámbito político y económico (Piquero, 2016).

Como su nombre lo indica, la criminología crítica tiene como objeto anteponerse a los fundamentos de la criminología positiva, mediante la negación del modelo causal determinista del delito y del sistema político y económico punitivo, y para demostrar la relación entre las condiciones de poder, el control social y el despliegue de la criminalidad. Lo anterior permite identificar que la delincuencia no solo tiene un carácter patológico, sino también una influencia del contexto social, y que la víctima es quien tiene un protagonismo en la acción criminal, por lo que se convierte en un elemento dinámico del delito (Carvalho, 2014).

Piquero (2016) señala como una de las principales causas de la criminalidad al sistema económico y a las desigualdades que se generan en las estructuras sociales. Esta teoría se enfoca en la forma desproporcional en la que se dividen el poder y los recursos materiales entre razas, etnias y géneros y cómo, al cambiar estas estructuras y culturas, se puede disminuir la criminalidad y promover la justicia social.

Criminología mediática

Para esta, lo más importante son los medios de comunicación, pues son estos los encargados de difundir información sobre aspectos políticos, sociales, culturales y económicos y transmiten un mensaje específico al receptor, información que no

solamente sirve como estímulo, sino que crea un procesamiento cognitivo y ofrece una perspectiva frente a dicha información, a partir de las necesidades, creencias y experiencias del individuo y es de esta manera como ejercen influencia en los receptores (López y García, 2018).

La criminología mediática, según Zaffaroni (cómo se citó en López y García, 2018), nace hacia el año 1900, en respuesta a los estereotipos desarrollados sobre el criminal y el no criminal por parte de los medios de comunicación, estos deciden de qué manera mostrar las conductas delictivas, para ocasionar mayor conmoción con unas u otras y que así el público elija cómo juzgar la información recibida.

La criminología mediática cumple con dos funciones: provocar sensación de inseguridad y pánico en las personas, para que el Estado ejerza control sobre la sociedad a causa del miedo a ser víctima de los delitos (Miranda, 2019).

La criminología mediática es la concepción que tienen un ciudadano común frente al crimen y lo mantiene en constante alerta y reacción; este tipo de criminología puede influenciar en las decisiones penales tomadas frente a los crímenes, pues afecta diferentes esferas estatales y gubernamentales (Torres, 2018).

La criminología de la personalidad

La teoría de la personalidad fue ignorada durante varias décadas; sin embargo, hoy en día es una de las principales teorías en las que se basa la criminología. Los primeros autores en interesarse por la personalidad fueron Schuessler y Cressey, alrededor del año 1950 y encontraron notables diferencias entre la personalidad de los delincuentes y de los que no lo son. Seguido a estos, Tennenbaum, en 1977, encontró una relación significativa entre los delitos y las teorías de la personalidad antisocial (Bonta y Andrews, 2017).

En la actualidad existe consenso en cuanto a la asociación entre los índices de criminalidad y las teorías de la personalidad. Gottfredson y Hirschi, con su teoría general del crimen, ejercen gran influencia para convertir la criminología tradicional en un estudio de la personalidad, con base en el estudio del autocontrol como causa de este; sin embargo, pronto se rechazó el autocontrol como parte de las teorías de la personalidad. Más adelante, autores criminológicos como Terri Moffitt, David Farrington, Rolph Loeber, Richard Tremblay y Terence Thornberry abordaron las investigaciones sobre el temperamento, frente al desarrollo de delincuentes, como eje principal de la personalidad (Bonta y Andrews, 2017).

En los últimos años, algunas investigaciones demostraron la importancia de la personalidad en el crimen, así como la emocionalidad, la restricción limitada, entendida como el autocontrol de la persona, y la relación de la delincuencia con la

cultura, el contexto, la edad y el género. De esta forma, el estudio de la personalidad y del crimen ya no se encuentra limitado, al incluir factores como la amabilidad y la consciencia del individuo en relación con las conductas antisociales (Bonta y Andrews, 2017).

A continuación se profundizará en el concepto de psicología criminológica y sus paradigmas explicativos con respecto al comportamiento delictivo.

La psicología criminológica, como ciencia, ha sido concebida por Bonta y Andrews (2017) como un enfoque para comprender el comportamiento criminal de los individuos, por medio de la aplicación de métodos empíricos sistemáticos de investigación y la construcción de sistemas explicativos racionales.

Se describen los comportamientos humanos delictivos como la consecuencia de la interacción de factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales, lo que algunos autores denominan “evidencia conductual”, es decir, los comportamientos humanos y su evidencia (Varela, 2014).

Antes de adentrarse en el tema de psicología criminológica, se revisarán las múltiples definiciones de conducta criminal. Bonta y Andrews (2017) proponen cuatro tipos de conducta criminal:

1. *Legal*: acciones que están prohibidas por el Estado y son punibles bajo la norma vigente.
2. *Moral*: acciones que violan las normas de religión y moralidad que, se cree, son castigadas por seres supremos.
3. *Social*: acciones que violan las normas de costumbre y tradición y son castigadas por la comunidad.
4. *Psicológica*: acciones que pueden ser gratificantes para el actor, pero inflige dolor en otros, es decir, un comportamiento antisocial.

La psicología criminológica busca conocer tanto los hechos observables con respecto a la naturaleza y al alcance de la variación individual en la conducta delictiva como también las variables biológicas, personales, interpersonales, situacionales y sociales asociadas o relacionadas con el comportamiento delictivo y de predictores, conocidos como factores de riesgo (Bonta y Andrews, 2017).

Sin embargo, se ha observado una dificultad en la definición de la psicología jurídica y de sus ramas, entre ellas, la psicología criminológica: para Varela (2014), en gran parte de las situaciones en las que se denomina psicología jurídica solo se definen los usos de la psicología en el mundo del derecho, porque no existe interrelación entre ellas y no se identifican las ramas que nacen y se desarrollan en la psicología.

Morales y García (2010) sostienen que en América Latina hay siete áreas de aplicación de la psicología jurídica, con base en los contextos en donde se llevan a cabo las prácticas profesionales y se ejercen las funciones. Además, distinguen la psicología forense de la criminológica: la primera es un área con funciones de evaluación probatoria, mientras que la segunda examina el comportamiento antisocial y delictivo con especial interés en los procesos y los factores involucrados en el inicio, el mantenimiento y la extinción de la conducta delictiva. Chan (2016) plantea que el concepto de psicología criminológica también entra en controversia con el concepto propio del derecho penal, pues la definición de esta dependerá de las perspectivas psicológicas que se asuman y el objeto de estudio. Porque, si bien hay consenso en cuanto al análisis del comportamiento criminal, este puede variar de acuerdo con fenómenos psicológicos individuales, clínicos, de violencia social, de inseguridad ciudadana, colectivos y culturales vinculados con el control social. La inserción de este conocimiento en el proceso penal se dificulta debido a que no se somete a los límites epistemológicos de la verdad.

Si el modelo de psicología criminológica que se adopta sigue vinculado a la idea de que esta disciplina investiga “qué es lo que induce a un individuo a delinquir”, se mantiene en una posición individualista-peligrosista, directamente empalmada con una noción de derecho penal de autor, muy contraria a la concepción de derecho penal por el hecho cometido (típico, antijurídico, culpable) que debe imponerse en el contexto de las democracias liberales. (Chan, 2016).

Chan (2016) plantea que la definición de psicología criminológica depende del objeto y del método de construcción de conocimiento, porque bien se sabe que no existe una sola psicología y, por ende, tampoco una sola psicología criminológica, sino una multiplicidad de posiciones, con diferentes bases epistemológicas y diversos métodos, técnicas o mecanismos para el acercamiento y la construcción del conocimiento sobre el objeto de estudio, que pueden ir desde las posiciones especulativas hasta aquellas con bases metodológicas de indagación extremadamente cercanas a las ciencias duras.

A continuación se refieren múltiples explicaciones del comportamiento humano asociado al delito y su control desde la psicología criminológica.

Teoría cognitiva del aprendizaje social

Bonta y Andrews (2017) proponen una teoría general de personalidad y aprendizaje cognitivo social de la conducta criminal, la cual incluye ocho factores de riesgo, que aumentan la probabilidad de que un individuo cometa conductas antisociales o delictivas.

Tabla 1. Ocho riesgos centrales

Historial criminal	Participación temprana en variedad de actividades delictivas en diversidad de entornos. Los principales indicadores incluyen ser arrestado a una edad temprana, una gran cantidad de delitos previos y violaciones de las reglas mientras se encuentra en libertad condicional.
Actitudes procriminales	Actitudes, valores, creencias, racionalizaciones y pensamientos que son favorables al crimen. Los estados cognitivo-emocionales asociados con el crimen son ira, irritación, resentimiento y desafío.
Asociados procriminales	Asociación con otras personas criminales.
Patrones de personalidad antisocial	Impulsividad, aventura en busca de placer, problemas generalizados, agresividad.
Familia	Calidad de las relaciones interpersonales dentro de la unidad, expectativas de comportamiento y normas con respecto a la conducta delictiva, incluidos el monitoreo y los enfoques disciplinarios.
Colegio y trabajo	Calidad de las relaciones interpersonales dentro de los entornos de la escuela y del trabajo. El riesgo está reflejado en bajo rendimiento y poca participación gratificante.
Abuso de sustancias	Problemas actuales con sustancias indican mayor riesgo que un historial previo de abuso.
Ocio y recreación	Baja participación y sola satisfacción en actividades de ocio.

Fuente: elaboración propia con base en Bonta y Andrews (2017).

Teoría de personalidad

Bonta y Andrews (2017) también plantean una perspectiva de personalidad desde la psicología criminológica. La postura más aceptada se remonta al modelo del Big five, que abarca cinco factores: i) neuroticismo, observable como ansiedad, ira, hostilidad e impulsividad; ii) extraversión, en emociones positivas y excitabilidad; iii) apertura a la experiencia, basado en la creatividad y la inteligencia; iv) amabilidad, en actitudes altruistas y obedientes, y en confiabilidad, y v) consciencia, basado en la autodisciplina y el orden.

En relación con la criminalidad, se ha encontrado, tras un meta análisis, que los factores de personalidad que se correlacionan con las conductas antisociales son la impulsividad, el neuroticismo y la extraversión (Bonta y Andrews, 2017).

Garrido (2005) ha expuesto algunos paradigmas explicativos de la conducta criminal, los cuales brindan información a la investigación en esta ciencia y la explicación del comportamiento delictivo.

Paradigma biosocial

Para Garrido (2005) y Guardiola (2011), este paradigma integra tres aproximaciones biológicas al estudio de la conducta humana. La primera se refiere a la psicología evolucionista, la cual es una rama de la psicología que busca aplicar los principios de la evolución darwiniana por selección natural a rasgos complejos del comportamiento humano, incluido el criminal (Miller, 2017).

De acuerdo con Garrido (2005), todo organismo actúa en pro de la reproducción y la supervivencia. Los rasgos físicos y psicológicos que muestran la superioridad reproductiva tienden a ser una evolución adaptativa, en la medida en que permiten el mantenimiento de su ajuste a las características del ambiente en el que se desenvuelve. En este sentido, el comportamiento criminal puede parecer una forma de comportamiento desadaptativo extremo, pero, en ciertas circunstancias, es una estrategia de supervivencia altamente eficiente. Características como el egocentrismo, la agresividad y la falta de remordimiento pueden ser censuradas por la comunidad en general; sin embargo, tales condiciones les garantizan a los individuos su reproducción (Miller, 2017).

La siguiente aproximación es la genética conductual, una disciplina que se enfoca en las diferencias individuales del comportamiento que surgen a partir de las diferencias genéticas o ambientales (Rebollo et al., 2010).

Implica explorar hasta qué punto las variaciones de un rasgo dado en la población (como el IQ) pueden explicarse por genética en lugar de factores ambientales. La heredabilidad se expresa en términos de un coeficiente en un rango de 0 a 1 y que especifica cuánto de la varianza en la población puede ser atribuible a factores genéticos (Durrant, 2018).

Uno de los estudios de mayor relevancia para dar respuesta a si existe alguna relación entre la herencia y el ambiente es el de Cloninger, en 1982 (citado por Garrido, 2005). Dividió su muestra de 862 niños en cuatro grupos, de acuerdo con la presencia o ausencia de padres biológicos con antecedentes delictivos o un ambiente favorecedor por parte de los padres adoptivos. Encontró que, cuando estaba presente únicamente el factor favorecedor del ambiente, la delincuencia en los niños era de 6,7 %, mientras que si estaba presente únicamente el factor de antecedentes delictivos de los padres biológicos, la puntuación de la delincuencia era de 12 %.

Otro estudio significativo es el de Mednick, quien trabajó con 14.227 niños adoptados. Halló que, cuando ambos padres adoptivos no eran delincuentes, la puntuación de delincuencia de los hijos era de 13,5 mientras que la puntuación de delincuencia cuando los padres adoptivos tenían registro delictivo fue solo un poco mayor, con 14,7 %. Cuando se registraban antecedentes delictivos de los padres biológicos, la puntuación de delincuencia subió hasta 20,0 % y, lo más importante, cuando ambos

padres biológicos y adoptivos tenían antecedentes delictivos, la puntuación de delincuencia fue de 24,5 % (Garrido, 2005).

De ambos estudios se puede concluir que existe una relación entre la herencia y el ambiente. Queda claro que los genes, por sí solos, no son responsables de la conducta delictiva; sin embargo, sí son una variable significativa que podría influir en la varianza de los resultados de varios estudios (Garrido, 2005).

Para terminar, se encuentra la teoría de la neurociencia o la neurofisiología, o sea, el estudio del sistema nervioso central y las respuestas del sistema nervioso autónomo. Diversas investigaciones en torno a este tema han encontrado que los procesos mentales más importantes tienen lugar en la corteza cerebral. El lóbulo frontal es la parte del cerebro más relevante para nuestra comprensión del comportamiento criminal y antisocial, por lo que se ha estudiado el área conocida como la corteza prefrontal (Durrant, 2018).

Se ha observado que las lesiones en esta área producen diversas consecuencias, por ejemplo, afectaciones en la corteza orbito frontal, que está relacionada con el sistema límbico cuya función principal es el procesamiento y la regulación de emociones, estados afectivos y el control de la conducta, pueden llevar a la persona a cometer conductas disruptivas sin control alguno. Además, alteraciones en regiones hemisféricas, que soportan procesos más desarrollados y exclusivamente humanos, pueden afectar la cognición social, la mentalización, el autoconocimiento y la metacognición (Flores y Ostrosky, 2008).

Un estudio que involucra otra variable —la personalidad— es el de Luengo y colaboradores, en 1994. Advirtieron que personas con tendencia a la búsqueda de sensaciones tienen, en alguna medida, relación con conductas antisociales. La búsqueda de sensaciones se remonta a una activación de los neurotransmisores y del sistema hormonal, que desinhibe ciertas respuestas como la agresión e inhibe respuestas como la huida (Garrido, 2005).

Asimismo, Gray (citado por Garrido, 2005) explica que la relación entre personalidad y delincuencia está ligada a la biología; esto se debe a que la delincuencia se vincula con una alta necesidad de obtener recompensas con una probabilidad de castigo mínima y a que la impulsividad está ligada a este concepto de aproximación. Así, personas con alta impulsividad tendrán un sistema de aproximación fuerte.

Paradigma control social y autocontrol

El control social se refiere a los métodos utilizados en la sociedad y por grupos dentro de la sociedad para influir en el comportamiento de sus miembros, para que se ajusten al conjunto normas, costumbres y actitudes (Taylor, 2016).

Dentro de este paradigma se encuentran dos teorías explicativas de la comisión del delito. La primera, conocida como la teoría clásica del control, de Travis Hirschi (2003), señala que hay cuatro mecanismos que convierten a un niño en un ser pro-social y obediente de las leyes. El primero se refiere al apego, el cual es un mecanismo que designa la relación emocional que tiene un individuo con instituciones como la familia o la escuela; cuando el niño se siente valorado y respetado por las personas con quienes se relaciona, se establece un buen apego y, por ende, no querrá disgustar a su grupo al cometer actos que susciten desaprobación y rechazo (Garrido, 2005).

De acuerdo con Hirschi (2003), la esencia de la internalización de las normas, la consciencia, radica en la vinculación del individuo con los demás; este concepto del vínculo con la sociedad se halla en la mayoría de las teorías y de las investigaciones centradas en el control social.

El siguiente mecanismo se refiere al compromiso, que designa un estilo de vida en el que se invierte mucho tiempo y energía en una meta específica y esto se convierte en un compromiso para vivir en línea con las leyes (Garrido, 2005).

La idea es que la persona invierte su tiempo y su energía en una determinada actividad, bien sea educarse, levantar un negocio o adquirir una reputación virtuosa y, en ese sentido, debe de considerar los costos de la conducta desviada y el riesgo que corre de perder su inversión en la conducta convencional (Hirschi, 2003).

Otro mecanismo de control social es la implicación o participación, que se deriva de los dos anteriores. Una persona que no tiene tiempo para pensar en actividades desviadas simplemente no podrá llevarlas a cabo. Así, personas que se involucran en relaciones o proyectos estarán ocupadas, lo cual disminuirá la probabilidad de cometer conductas delictivas (Hirschi, 2003; Garrido, 2005).

El último mecanismo alude a las creencias. Personas que tienen estilos de vida pro-sociales tienen creencias que apoyan estos comportamientos, mientras que personas que no tienen creencias que incluyan comportamientos morales justifican sus comportamientos mediante la racionalización de sus actos (Hirschi, 2003).

Otra teoría dentro de este paradigma es la del bajo autocontrol, cuyo concepto clave es que la ausencia de autocontrol es causa suficiente y necesaria de la criminalidad, desde que exista la oportunidad tanto física como material de que el delito se pueda cometer. De acuerdo con Hirschi (2003, citado por Garrido, 2005), este concepto se define como el grado de vulnerabilidad de las personas ante las tentaciones del momento; suelen tener características como:

Tabla 2. Características de sujetos con bajo autocontrol que se constituyen en delincuentes

Número	Características
1	Orientados al presente y buscan el delito porque les permite obtener de inmediato lo que desean.
2	Gusto por correr riesgos y vivir sensaciones fuertes, desprecian la prudencia y la reflexión.
3	Ausencia de paciencia, persistencia y de esfuerzo.
4	Egocéntricos e insensibles.

Fuente: elaboración propia con base en Garrido (2005).

Esto significa que las personas que presentan grados elevados de autocontrol tienen la capacidad de controlar sus actos impulsivos y de tener en cuenta que los comportamientos delictivos, aunque puedan otorgar beneficios inmediatos, también conllevan resultados perjudiciales. Por el contrario, las personas con bajo autocontrol tenderán a actuar impulsivamente, guiadas por la necesidad de satisfacer sus deseos y conseguir resultados rápidos, lo que hace más probable la conducta delictiva (Rodríguez, 2010).

Los padres tienen gran influencia en el desarrollo de conductas delictivas, pues el autocontrol se origina en la educación y se consolida hasta los 10 años, a partir de la enseñanza de normas, el modelamiento de sentimientos de culpa y la preocupación por las actividades de los hijos (Garrido, 2005).

Paradigma del desarrollo

Las teorías de desarrollo del delito se ocupan muy ampliamente de cómo el comportamiento criminal se relaciona con los procesos de desarrollo. La investigación se ha centrado en el vínculo entre los procesos de desarrollo “normales” con el proceso de pubertad y los comportamientos antisociales, así como las experiencias de desarrollo específicas, como el abuso infantil, y su impacto en el delito penal (Durrant, 2018).

Las relaciones sociales y los comportamientos se modifican en las transiciones entre la adolescencia y la adultez. Entonces, a partir de estos cambios, se puede iniciar la conducta delictiva hasta llegar a eliminarse o, por el contrario, hacerse más intensa, rápida y esporádica.

Terrie Moffitt (1955, citado por Bringas y Novo, 2017) explica dos patrones de comportamiento delictivo en los adolescentes. Refiere que la mayoría de las personas que delinquen lo hacen durante la adolescencia, pero con el tiempo este comportamiento disminuye; no obstante, existe un pequeño porcentaje de individuos que combinan disfunciones neurológicas graves con problemas familiares, lo cual contribuye en

gran medida a la aparición de conductas antisociales. De acuerdo con la autora, un funcionamiento neurológico deficiente compromete de forma significativa las funciones intelectuales de los niños y el desarrollo del lenguaje lo que dificulta la crianza y el modelado adecuado de los padres, además de la pérdida en la capacidad de auto-control o de las funciones ejecutivas.

Paradigma del delincuente racional

Este paradigma surge a partir del fracaso de los programas de prevención del delito, pues la delincuencia aumentaba en todo el mundo a pesar de los programas de rehabilitación que se implementaban en los años setenta (Garrido, 2005).

Según Durrant (2018), los delincuentes son seres racionales que buscan, mediante una acción ilegal, obtener un beneficio que de otro modo tendrían que lograr por medio del trabajo. Para prevenir la delincuencia se tendría que obrar para que el individuo estime los costos y beneficios de su delito y concluya que su acción no resulta provechosa, por lo que se abstendría de cometerlo.

Marcus Felson presenta un concepto fundamental dentro de este paradigma, que se refiere a la teoría de las actividades rutinarias. Señala que la probabilidad de que se cometa un delito depende de tres factores: i) un delincuente motivado; ii) la presencia de un objeto accesible, y iii) la ausencia de guardianes del objeto. La idea es que un individuo abandonará el plan delictivo si no hay un objetivo de valor que merezca la pena o si el riesgo para obtenerlo es muy alto. Además, plantea que los delincuentes buscarán la oportunidad de delinquir en el contexto en donde realizan sus actividades diarias (Durrant, 2018).

El siguiente concepto relevante dentro de este paradigma es el de la prevención situacional, propuesto por Ronald Clarke. Interesado en estudiar el aumento de fugas de los institutos carcelarios, Clarke encontró que estas se debían a aspectos situacionales como la ausencia de personal de vigilancia durante los fines de semana. Este concepto se apoyó en múltiples datos empíricos, lo cual promovió el pensamiento que afirmaba que cuanto más tiempo pasaran los sujetos en la cárcel, menor oportunidad de cometer delitos (Garrido, 2005).

Adquisición de la conducta delictiva

Desde la psicología se asume que cualquier comportamiento, incluso el criminal, es aprendido bajo los conceptos de refuerzo y castigo. La propuesta fundamental es que el refuerzo corresponde a un estímulo que incrementa la probabilidad de ocurrencia de la conducta; entonces, la conducta criminal se presenta porque es reforzada. Sin embargo, también existe otro mecanismo de aprendizaje —el modelamiento— cuya característica principal es que, al observar que otra persona obtiene un reforzamiento

por cometer una conducta criminal, se aumenta la probabilidad de ocurrencia (Bonta y Andrews, 2017).

Se deben tener en cuenta otros factores que influyen en el aprendizaje, pues los refuerzos y los castigos varían de una sociedad a otra y se condicionan según los estados económicos, sociales y políticos inherentes a la sociedad particular. Por ejemplo, una sociedad con alto desempleo no puede proporcionar suficientes recompensas por el comportamiento prosocial por medio del empleo, por lo que los comportamientos antisociales son un medio más accesible para ganar dinero (Bonta y Andrews, 2017).

Factores de riesgo y factores protectores

La psicología criminológica busca determinar los factores de riesgo que interactúan con la aparición de la conducta delictiva, así como los factores moderadores o protectores que previenen su aparición de esta. Mendoza (2008, citado por Varela, 2014) habla de factores de la conducta ocasional o persistente, los predictores dinámicos y estáticos y los factores protectores.

Factores de riesgo

Miranda y Zambrano (2017) están de acuerdo con que la adolescencia es la etapa en la que los individuos establecen un comportamiento determinado, donde se definen conductas desadaptadas o delincuenciales a causa de las interacciones de varios factores (individual, familiar, escolar, comunitario y social). Estas conductas no siempre permanecen a lo largo de la vida, por lo cual son llamadas conductas delictivas transitorias o esporádicas y son los mismos factores de riesgo los que hacen que una conducta sea persistente en el tiempo.

En cuanto a los factores individuales se encuentran las características congénitas. Como su nombre lo indica son aquellas heredadas. Lombroso, en 1876, en su libro *L'uomo delinquente*, habla del delincuente nato, con unas particularidades físicas anormales, que pueden indicar un desarrollo somático retardado. Por ejemplo, características como la edad, el sobrepeso y la baja autoestima se relacionan con complejos de inferioridad, los cuales se consideran un impedimento para un desarrollo evolutivo y emocional que motiva la conducta delictiva (Vásquez, 2003).

Sin embargo, estos no son los únicos factores que determinan la conducta delictiva. Por ejemplo, el entorno familiar es uno de los principales espacios de la socialización del individuo y puede predisponer la aparición de estas conductas. Las pautas de crianza permisivas, con falta de control y negligencia por parte de los padres o estilos autoritarios que recurren a la violencia, dinámicas conflictivas, modificación

de la estructura familiar por separación o pérdida de uno de los padres, carencias afectivas y de comunicación asertiva, falta de enseñanza de valores prosociales y modelamiento de conductas delincuenciales por parte de los padres promueven la conducta delictiva (Massanet, 2015).

En cuanto a los factores escolares, Massanet (2015) afirma que el ambiente escolar es el segundo contexto de socialización de los niños; por lo tanto, el fracaso, el vandalismo, el absentismo o el abandono son las principales causas de aparición de conductas antisociales; se presentan con acciones violentas hacia los compañeros, profesores u objetos del colegio, bajo rendimiento académico, faltas a clases e insultos.

Como ya se mencionó, la conducta delictiva puede surgir de modelamientos. Es aquí donde entran los elementos socioculturales de donde se desenvuelve el individuo, pues cuando se encuentra inmerso en contextos de violencia, promiscuidad, pobreza y uso de sustancias psicoactivas, se genera un factor de riesgo; el individuo adopta este tipo de conductas por observación o por aceptación social. Cabe resaltar que la pobreza y la delincuencia no están estrictamente ligadas, lo que se indica es que las condiciones de vida presentadas por la pobreza pueden llevar a desarrollar este tipo de conductas (Rico, 2016).

El último factor relevante que se toma en cuenta en los estudios de la delincuencia es el consumo de sustancias. Si bien no es un factor determinante, Pérez y Ruiz (2017) afirman que las conductas antisociales pueden aparecer en presencia de los efectos de las sustancias o por la necesidad de conseguirlas y que existe una gran relación entre estas conductas y el incremento del consumo, en especial en cuanto a agresiones sexuales. Sin embargo, se explica que no todas las sustancias son predisponentes a los mismos delitos; por tanto, el alcohol y la marihuana ejercen más influencia en la comisión de delitos contra la propiedad, incremento de la violencia y delitos asociados a tráfico de drogas (Pérez y Ruiz, 2017).

Factores protectores

Con frecuencia, los factores de riesgo son compensados con factores de protección que, de acuerdo con Blasco (2012), son circunstancias, características, condiciones y atributos que posibilitan la salud integral de la persona. Este concepto se complementa con el de resiliencia, que consiste en una adaptación exitosa a pesar de circunstancias ambientales amenazadoras y el mantenimiento de un comportamiento socialmente aceptable en escenarios de adversidad.

Se ha encontrado que variables como una buena relación con los progenitores, la supervisión parental y la motivación en la escuela o en el estudio son factores protectores ante la criminalidad; dichos factores dependen en gran medida de la edad del individuo: para el rango de 13 a 16 años, son las buenas relaciones con sus iguales, las

sanciones psicoeducativas en el hogar, el miedo a ser capturado y el bajo consumo de sustancias; para el rango entre 17 y 19 años, se encuentran las habilidades para hallar un trabajo, el miedo a ser detenido y el bajo consumo de sustancias (Blasco, 2012).

Lerner y otros autores (2005) proponen que las habilidades sociopersonales son factores protectores que pueden disuadir al joven de cometer algún delito y promueven el desarrollo positivo de adaptación en la sociedad. Plantean cinco competencias protectoras: la primera se refiere al contacto, pues los vínculos positivos con grupos como la familia, de adultos u otras instituciones disminuyen la probabilidad de cometer conductas delictivas. El segundo se refiere a la confianza, porque una valoración positiva sobre sí mismo disminuye la probabilidad de delinquir. El carácter, como tercer componente, alude a la adopción de modelos de conducta adecuados y de autocontrol. El cuarto es el cuidado de los demás, basado en la expresión de simpatía y empatía. El quinto componente se denomina capacidad, relacionado con el buen rendimiento tanto en actividades académicas como sociales y vocacionales (Lerner et al., 2005).

Sánchez (2012) elaboró una lista de factores protectores encontrados a lo largo de su investigación. Halló, por una parte, que eventos relacionados con la reducción de la sensibilidad ante factores de riesgo, como experiencias exitosas al enfrentamiento de problemas, es un factor protector de gran influencia, seguido de la supervisión parental adecuada, buenas habilidades en manejo de conflictos, relaciones personales seguras y alto apoyo social. También se deben incluir aquellos que promueven el procesamiento cognitivo positivo de las experiencias negativas, como permanecer en la escuela, tener capacidad de planificación, proactividad hacia la solución de problemas y tener una personalidad resiliente.

A continuación se expone un cuadro comparativo de los conceptos encontrados en la revisión, lo cual permitió desarrollar posteriormente una definición propia de cada área y formular conclusiones y observaciones específicas sobre cada teoría.

Tabla 3. Cuadro comparativo entre criminología y psicología criminológica

Categoría	Criminología	Psicología criminológica
Objetivo de estudio	Componentes actos criminales.	Comportamiento humano asociado al delito y a su control.
Definición	Ciencia interdisciplinar que estudia los actos delictivos con base en todos los componentes involucrados en el hecho: conducta del delincuente, motivaciones, escena del crimen, estadísticas y estudios biologicistas, entre otros.	Ciencia que estudia el comportamiento humano. Emplea la investigación empírica, con el fin de predecir, explicar y controlar el comportamiento, a partir del análisis de factores predisponentes,

José Raúl Jiménez Molina, Ever José López Cantero, Luis Alberto Quiroga Baquero,
Danna Carolina Rubiano García, Natalia Zamudio Barragán

Categoría	Criminología	Psicología criminológica
Definición	Además de crear conocimiento, sirve como auxiliar al derecho o al juez para entender los actos delictivos en los tribunales.	precipitantes y mantenedores de la conducta.
Teorías explicativas	Explica el delito a partir de tres enfoques: la criminología clínica describe a partir de un diagnóstico y tratamiento ideográfico; tiene en cuenta características sociales, psicológicas y congénitas para el desarrollo del delincuente. La criminología crítica asume la delincuencia como la causa final de los factores estatales y la falencia de estos para responder ante las necesidades de la sociedad. La criminología mediática aborda los estereotipos que se tienen de los delincuentes a causa de los medios de comunicación y las noticias sensacionalistas que despliegan la emocionalidad de la sociedad hacia los actos delictivos.	Explica el comportamiento delictivo a partir de variables psicológicas, con la interacción entre una predisposición biológica y el ambiente del individuo. Plantea teorías de control a partir de las contingencias y el refuerzo social que obtiene el individuo, con especial importancia de los métodos de crianza y de la prevención del delito desde la educación a los padres. Resalta el control situacional o contextual del crimen, puesto que el ambiente en donde se encuentra inmerso el delincuente establece y limita las pautas de comportamiento.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

En la revisión se encontraron similitudes conceptuales entre los términos de criminología, psicología criminal y psicología criminológica: la definición de psicología criminal es cercana a la de psicología criminológica y, al tiempo, algunos autores tratan la criminología con el mismo nombre de la psicología criminal. Lo que provoca cierta confusión es el objeto de estudio de la psicología criminológica y la criminología, pues uno se enfoca en el comportamiento delictivo y el otro, en todos los componentes que abarca el delito.

La psicología criminológica se entiende como un área de la psicología jurídica que explica, describe y predice el comportamiento humano asociado al delito, sus causas, sus consecuencias y el control. Por otra parte, la criminología es interdisciplinaria, a diferencia de la psicología criminológica, que es transdisciplinaria.

Además, se hallaron diferentes posturas en las teorías explicativas de la criminología. En primer lugar, la criminología clínica parte del supuesto de que el crimen obedece a un diagnóstico o una etiqueta de un comportamiento desviado, debido a la presencia o ausencia de factores sociales, psicológicos o congénitos; sin embargo, es preciso profundizar en la explicación de las causas y relaciones del fenómeno, y no limitarse a exponer variables presentes en los individuos.

También se encuentra que la criminología mediática no explica las causas del crimen ni de la conducta criminal, pues se enfoca en describir los imaginarios que se crean en la sociedad a partir de la presentación del crimen por los medios de comunicación.

Para finalizar, se sugiere establecer parámetros consensuados para obtener una única definición sobre cada concepto. Asimismo, se recomienda a la comunidad evitar denominar criminología a todo aquello que estudie el crimen y sus componentes.

Referencias

- Abidin, C. (2005). La imagen del delincuente en la escuela clásica y en la escuela positiva. *Cartapacio de derecho: revista virtual de la Facultad de Derecho* (8), 1-17.
- Álvarez, G., Montenegro, M. y Martínez, J. (2012). *Textos de apoyo didáctico. Unidad 2. Apuntes acerca de dos escuelas criminológicas: clásica y positivista*. Facultad de Psicología, UNAM.
- Arcia, W. (2019). Entre la psicología criminal, la psicología forense y la psicología penitenciaria (Review). *Ciencia Digital*, 3(1.1), 1-17. doi: <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i1.1.357>
- Bartol, A. y Bartol, C. (2017). *Criminal Behavior: A Psychological Approach*. Pearson.
- Bonta, J. y Andrews, D. (2017). *The Psychology of Criminal Conduct*. (6a. ed.). Routledge.
- Bringas, C. y Novo, M. (2017). *Colección psicología y ley No. 14. Psicología jurídica: conocimiento y práctica*. Sociedad española de psicología jurídica y forense.
- Buil, D. (2016). ¿Qué es la criminología? Una aproximación a su ontología, función y desarrollo. *Derecho y cambio social* (44), 1-56. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5456246>
- Burgos, A. (2010). La criminalística y su importancia en el campo forense. *Revista digital de la Maestría en ciencias penales de la Universidad de Costa Rica* (2), 239-270. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/12576>
- Blasco, C. (2012). *Descripción y análisis de los factores protectores de adolescentes en la prevención del delito: el perfil de adolescentes resistentes y las competencias emocionales asociadas*. Centro de estudios jurídicos y formación especializada, Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
- Canevello, P. (2000). *Criminología: la evolución del pensamiento internacional*. Centro argentino de estudios internacionales.
- Carvalho, S. (enero-junio, 2014). Criminología crítica: dimensiones, significados y perspectivas actuales. *Revista de derechos humanos y estudios sociales*, 6(11), 93-115.
- Chan, G. (2016). Comentario al libro “Psicología criminológica” del profesor Msc. Mario Viquez Jiménez. *Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales* (9), 1-7. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/29761/29789>

- Ching, R. (2005). *Psicología forense: principios fundamentales*. EUNED.
- Durrant, R. (2018). *An Introduction to Criminal Psychology*. Routledge. doi: <https://doi.org/10.4324/9781315625041>
- Flores, J. y Ostrosky, F. (2008). Neuropsicología de lóbulos frontales, funciones ejecutivas y conducta humana. *Neuropsicología, neuropsiquiatría y neurociencias*, 8(1), 47-58. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3987468>
- Garrido, V. (2005). *Qué es la psicología criminológica*. Biblioteca Nueva.
- Garrido, V. (2018). *Tratado de criminología forense I. La criminología forense y el informe criminológico*. Tirant lo Blanch.
- Gil, M., García, J., Carmona, E. y Ortega, E. (2018). Conducta antisocial y funciones ejecutivas de jóvenes infractores. *Revista de psicodidáctica*, 23(1), 70-76. doi: <https://doi.org/10.1016/j.psicod.2017.09.001>
- Guardiola, J. (2011). Psicología criminal como ciencia. *Derecho y criminología* (1), 9-24. <http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/582/Psicolog%C3%ADa%20criminal%20como%20ciencia.%20Juan%20Jos%C3%A9%20Nicol%C3%A1s%20Guardiola.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hirschi, T. (2003). Una teoría del control de la delincuencia. *Capítulo criminológico*, 31(4), 5-31. <http://produccioncientificaluz.org/index.php/capitulo/article/viewFile/5036/5026>
- Lerner, R., Almerigi, J., Theokas, C. y Lerner, J. (2005). Positive Youth Development. A View of the Issues. *The Journal of Early Adolescence*, 25(1), 10-16. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0272431604273211>
- López, M. y García, J. (2018). Desde lo mediático a lo real. Criminología mediática: la verdad de los medios a la audiencia. Estudio en Ecuador caso Karina del Pozo. *Razón y palabra*, 22(101), 231-246. <http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1198>
- López, C. y López, J. (2003). Rasgos de personalidad y conducta antisocial delictiva. *Psicopatología clínica legal y forense*, 3(2), 5-19. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=982275>
- Massanet, A. (2015). *Delincuencia juvenil. Características de los menores con conductas delictivas en España* [Tesis de pregrado, Universidad de las Islas Baleares]. <https://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/3828>
- Miller, L. (2017). Psychological Theories of Criminal Behavior. En V. van Hasselt y M. Bourke (eds.), *Handbook of Behavioral Criminology* (pp. 43-62). Springer Link.
- Miranda, E. (2019). *La criminología mediática: la construcción de la cuestión criminal por los medios de comunicación* [Tesis de pregrado, Universidad de los Andes]. <http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10622>
- Miranda, C. y Zambrano, A. (2017). Factores asociados a la interrupción y mantenimiento de conductas delictivas: un estudio con adolescentes atendidos por el Programa de Intervención Integral Especializada de la comuna de Osorno, Chile. *Revista Criminalidad*, 59(1), 49-64.

- Morales, L. y García, E. (2010). Psicología jurídica: quehacer y desarrollo. *Diversitas: perspectivas en psicología*, 6(2), 237-256. <http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v6n2/v6n2a04.pdf>
- Norza, E. y Egea, G. (2017). *Con-ciencia criminal. Criminología, psicología jurídica y perfilación criminal*. Manual Moderno.
- Pérez, E. y Ruiz, S. (2017). El consumo de sustancias como factor de riesgo para la conducta delictiva: una revisión sistemática. *Acción psicológica*, 14(2), 33-50. doi: <https://doi.org/10.5944/ap.14.2.20748>
- Piquero, A. (2016). *Wiley Handbooks in Criminology and Criminal Justice. The Handbook of Criminological Theory*. Wiley Blackwell.
- Rebollo, I., Polderman, T. y Moya, L. (2010). Genética de la violencia humana. *Revista de Neurología*, 50(9), 533- 540. doi: 10.33588/rn.5009.2009337
- Rico, Y. (2016). Influencia de los factores psicosociales de contexto en la conducta delictiva de los menores infractores del centro de formación juvenil de los patios. *Summa Iuris*, 4(2), 264-285.
- Ríos, G. (2017). La herencia de la criminología clínica. *Horizonte médico*, 17(2), 71-76. doi: <https://doi.org/10.24265/horizmed.2017.v17n2.10>.
- Rodríguez, J. (2010). Bajo autocontrol y conducta antisocial en perspectiva de género. *Cenipec* (29), 215-240. https://www.researchgate.net/publication/308255645_Bajo_autocontrol_y_conducta_antisocial
- Sánchez, D. (2012). Factores de riesgo y protección ante la delincuencia en menores y jóvenes. *Revista de educación social* (15), 2-12. http://www.eduso.net/res/pdf/15/factores_res_15.pdf
- Taylor, S. (2016). *Crime and Criminality: A Multidisciplinary Approach*. Routledge.
- Torres, T. (2018). *Criminología mediática, influencia de los medios de comunicación en la creación del tipo penal homicidio culposo por mala práctica profesional en el Ecuador* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica de Ecuador]. <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/15675>
- Trujillo, P. (2006). *Criminología dinámica. Ensayos, reflexiones y propuestas clínico-criminológicas*. Alfil.
- Varela, M. (2014). Psicología jurídica y psicología criminológica. Temática y áreas de interés. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 17(4), 1351-1373. <http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/47906>
- Vásquez, C. (2003). *Delincuencia juvenil. Consecuencias penales y criminologías*. Colex.
- Viquez, M. (2016). Epítome del libro: curso de psicología criminológica. *Revista digital de la Maestría en Ciencias Penales*, 9(9), 1-30.

Luis Orlando Jiménez Ardila*
Universidad Católica de Colombia

Carbó (2006) reconoce la denominación de psicología victimal, mientras que Soria (2005) se refiere a ella como psicología de la victimización. Con frecuencia es confundida con la victimología, pero, de hecho, es un área de conocimiento diferente. La primera analiza los procesos psicológicos de la víctima; la segunda estudia multidisciplinariamente a la persona que ha visto afectado cualquiera de sus derechos como producto de una conducta criminal de la que el derecho penal, la medicina legal, la antropología y la sociología, entre otras, determinan su paradigma explicativo. La psicología victimal contribuye a entender las causas cognoscitivas y comportamentales por las que ciertas personas son víctimas de un delito y cómo su estilo de vida conlleva una mayor o menor probabilidad de que sean víctimas de un crimen (Giner, 2011).

Este campo de la psicología jurídica genera conocimiento sobre la conducta victimal y la relación víctima-victimario (victimodogmática), que permite comprender las necesidades de las víctimas e identificar los mecanismos más efectivos para su protección. Según Jiménez (2010), “se encarga de analizar el comportamiento de las víctimas de delitos, sus predisposiciones psicológicas y factores psicosociales que favorecen la victimización, así como las consecuencias psicológicas del delito” (p. 63). Para Soria (2005), “es la rama de la psicología jurídica que estudia los efectos psicosociales y legales sobre la víctima y su entorno sociocomunitario, que son derivados de la comisión de una conducta consagrada en el Código Penal” (pp. 150-151).

De acuerdo con Jiménez (2017, citado por Norza y Egea, 2017) el objeto de estudio de la psicología victimal lo constituyen el daño psicológico en la víctima, la predisposición victimal (estudio de la personalidad de la víctima que facilita su victimización) y el estudio de los efectos psicosociales y psicopatológicos desde la perspectiva psicojurídica, para adelantar procesos de evaluación y diagnóstico tendientes a la implementación de un tratamiento o a la posibilidad de prevención para contribuir a mejorar la situación de la víctima y su interacción con el sistema legal. La actuación

* Psicólogo, especialista en Ciencia Forenses, magíster en Psicología y doctor en Psicología. Coordinador del programa de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

del psicólogo victimal se ha de concretar en el estudio, la evaluación, el diagnóstico y la intervención del sujeto pasivo del delito a partir del paradigma explicativo de la psicología jurídica y forense para responder a la problemática de la victimidad criminal.

Una de las teorías psicológicas que ha facilitado visualizar la aplicación de la psicología victimal es la indefensión —o desesperanza aprendida, como también se le denomina— estudiada por la psicología social y la psicología positiva. Esta teoría se refiere a la incapacidad de algunas personas para reaccionar frente a eventos traumáticos recurrentes en su vida, bajo el influjo cognitivo de ideas reforzadas por las circunstancias adversas que les hacen creer que cualquier acción que ejecuten es inútil para salir de la situación calamitosa. Esta idea se ve claramente expuesta en la teoría del ciclo de violencia de pareja descrito por Lenore E. A. Walker en 1979 con una muestra de 10.000 mujeres violentadas por sus parejas, según la cual el comportamiento de la víctima entra en una dinámica perniciosa y repetitiva en su relación con el agresor que le impide romper la situación de abuso (Walker, 2012). La autora explica que la dependencia de la violencia radica patológicamente en la dinámica cíclica de la violencia, descrita en tres etapas o fases: i) acumulación de tensión; ii) ataque físico, y iii) luna de miel. Por su parte, Seligman (2002) sostiene que la violencia hacia la mujer la expone a estímulos negativos que inhiben su capacidad de reaccionar, dado que las acciones que ella ha implementado para evitarla no han dado resultados positivos, lo que la conduce a adoptar una actitud de pasiva frente a tales estímulos. La psicología victimal, así ejemplificada, revisa el papel de la víctima en el proceso de victimización criminal.

Referencias

- Carbó, P. (2006). Psicología de la victimización criminal. En C. San Juan y L. Vozmediano (eds.), *Psicología criminal* (pp. 245-274). Pearson.
- Giner, C. (2011). Aproximación psicológica de la victimología. *Derecho y criminología* (1), 25-54.
- Jiménez, L. (2010). Victimología, victimodogmática y psicología victimal. *Rostros y rastros* (4), 57-69.
- Norza, E. y Egea, G. (2017). *Con-ciencia criminal: criminología, psicología jurídica y perfilación criminal*. Manual Moderno.
- Seligman, M. (2002). *Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize your Potential for Lasting for Fulfillment*. Simon & Schuster.
- Soria, M. (2005). *Manual de psicología jurídica e investigación criminal*. Pirámide.
- Walker, L. (2012). *The Battered Woman Syndrome*. Springer Publishing Company.

2

LA NEGLIGENCIA PARENTAL COMO EXPRESIÓN SILENCIOSA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA VICTIMOLÓGICA

Elías Devia Vega*

Resumen

En el contexto colombiano, como casi en todos los países del mundo, la familia es vista como el núcleo de la sociedad. La violencia se presenta como un fenómeno que suele afectarla, a partir de diversas expresiones como la física y la sexual, entre otras. La negligencia es una de las expresiones de violencia intrafamiliar con consecuencias lamentables; sin embargo, es común que pase desapercibida o que no se le otorgue la relevancia que merece. Es precisamente por esta razón que se considera necesario mostrar las múltiples afectaciones que puede generar en las víctimas. Por ello, es preciso delimitar y comprender la negligencia, con el fin de lograr su identificación e intervención adecuadas y así buscar mecanismos para mitigarla.

Palabras clave: negligencia, intrafamiliar, victimología, familia, abandono.

Introducción

En Colombia, como casi en todos los países del mundo, la familia es vista como el núcleo de la sociedad y por eso se espera que tenga derechos y más si pensamos que es un Estado social de derecho, pero el grupo familiar también tiene obligaciones en dos direcciones tanto hacia sus integrantes como hacia la sociedad. No es una entidad impermeable a las condiciones del contexto; por el contrario, el entorno, con sus variables, suele afectarla.

La violencia intrafamiliar se convierte en el némesis para muchos de los grupos familiares, dado que se puede presentar en diferentes expresiones (física, emocional

* <https://orcid.org/0000-0002-5312-9479>

y sexual, entre otros). La negligencia también aparece como una manifestación que suele pasar imperceptible y se minimizan sus consecuencias; muestra de esto son los pocos estudios recientes referentes a este comportamiento. Sin embargo, en el contexto colombiano, el fenómeno de la negligencia es una de las conductas más comunes dentro de los grupos familiares.

Estadísticas de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (2017) señalan seguimiento a reportes de 2.998 casos de negligencia de un total de 8.230 eventos de violencia intrafamiliar, lo que equivaldría a un 36,5 % solo en esa ciudad para el año 2017. La negligencia puede traer consecuencias tan nefastas como la muerte, por lo que se consideró importante traer a debate dicha expresión de violencia, desde las disciplinas que interactúan con los grupos familiares, en especial el sector salud y el educativo, pues ambos tienen la posibilidad de contactar a los usuarios e identificar las situaciones de presunta negligencia.

El presente escrito pretende contextualizar al lector sobre la negligencia como expresión de la violencia intrafamiliar, lo que incidirá en una mejor comprensión de este fenómeno para establecer consecuencias victimológicas y proponer elementos encaminados a la mitigación de esta problemática.

Es claro que el fenómeno de la violencia se ha abordado desde diferentes disciplinas y enfoques. En este caso, se centrará en la delimitación del concepto y en las consecuencias para las víctimas; por lo tanto, se considera pertinente hacer un abordaje de la psicología victimológica.

La psicología victimológica es la subárea aplicada de la psicología jurídica que tiene como objetivo principal estudiar a los sujetos que han sido actores en una situación delictiva como persona que sufre el daño. Dicho abordaje busca identificar factores de riesgo y protectores asociados con los hechos victimizantes, así como tratar las consecuencias para los sujetos de esos actos y la relación con el aparato judicial en cada contexto (Morales y García, 2010).

Inicialmente se expondrá el concepto de familia y sus funciones, el concepto de violencia, los tipos de violencia intrafamiliar, modelos teóricos explicativos de la violencia intrafamiliar y las consecuencias de acuerdo con los grupos poblacionales que afecta.

Sobre el concepto de familia

De acuerdo con el Artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, la familia, además de ser el núcleo de la sociedad, tiene su origen en la decisión libre de las personas que, al unirse, conforman un nuevo núcleo familiar que debe contar con la protección del Estado. Estos grupos han sido estudiados desde diferentes

disciplinas o enfoques, entre ellos, la biología, la sociología, la economía, la antropología, el derecho y la psicología entre otras.

Para Oliva y Villa (2014), la familia es el medio o espacio donde se gesta la vida y va más allá, al proponer que allí se deben brindar los cuidados esenciales que permitan preservarla.

También puede ser entendida como aquel grupo que une esfuerzos para enfrentar los riesgos que corre cada uno de los integrantes (Carbonell et al., 2012). Existen afirmaciones acerca de que esa relación no solo es funcional, es decir, no solo tiene el fin de unificar esfuerzos, sino que, de manera más simple, convoca a ver la familia como la unión de personas que llevan algo en común y es un parentesco de consanguinidad (Pina, 2005). Una postura un poco más antigua propone que esa unión de personas surge al convivir en un mismo lugar, denominado hogar (Febvre, 1961).

Desde un enfoque sistémico, la familia se comprende como:

[...] la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad, y dependencia (Malde, 2012, p. 3).

Las anteriores definiciones son solo algunas de las múltiples opciones de ver la familia. Se puede, entonces, señalar que es la unión o el grupo de personas que comparten vínculos de consanguinidad o afectivos y desarrollan unas dinámicas propias, con el fin de alcanzar unos objetivos. Los grupos familiares tienen una estrecha relación con el entorno social el cual se afecta de manera bidireccional.

Funciones sociales de la familia

Al ser la familia el núcleo de la sociedad, se pueden identificar diversas funciones, entre las cuales se pueden mencionar las de educadora, comunicadora, socializadora, protectora, afectiva, económica, reproductiva y normativa (Pérez, Reina, 2011). Estas competencias permiten la satisfacción de las necesidades de los miembros del grupo y preparan o facilitan su adaptación y sobrevivencia (Martín y Tamayo, 2013). Tales funciones no son aisladas; por el contrario, convergen y se complementan.

A continuación se describirán algunas de ellas, con el ánimo de facilitar la comprensión del concepto de negligencia, su afectación y sus implicaciones dentro del grupo familiar.

- La función educadora permite que los integrantes del grupo familiar compartan conocimientos en pro de facilitar la adaptación y desarrollar las competencias de los integrantes. Estos aprendizajes suelen ir más allá de unos conocimientos básicos, pues también pretenden la adquisición de normas y valores que trasciendan y faciliten otros procesos.
- La función socializadora busca generar competencias para que el sujeto se vincule y se desempeñe funcionalmente dentro del contexto social, en donde las normas cobran vital importancia; un sujeto que se adapte a las normas tendrá más fácil aceptación en su entorno, lo que implica la aparición de la función normativa.
- Otra función de gran valor es la protectora, es decir, algunos miembros asumen roles de cuidado que faciliten la sobrevivencia y la garantía de derechos de los más vulnerables del grupo; no solo se habla de los más pequeños en edad, sino de todos aquellos que, por sus características, requieran un mayor acompañamiento o sean más dependientes para satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, recién nacidos, adultos mayores o discapacitados, entre otros (Flaquer, 1995).

La violencia intrafamiliar

Contextualizar el concepto de negligencia como un tipo de violencia no es una tarea sencilla, dado que los dos conceptos a relacionar (violencia y negligencia) suelen tornarse algo esquivos. Por tal razón, en este apartado se hará una breve revisión de dichas nociones, así como de algunas de las expresiones de violencia que se presentan en los grupos familiares.

- *Violencia*: la Organización Mundial de la Salud (2014), señala que la violencia puede entenderse como “el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad. Es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte” (p. 2). Otra posible definición sugiere: “Yo llamaría violencia al uso de una fuerza abierta o escondida, con el fin de obtener de un individuo o un grupo eso que ellos no quieren consentir libremente” (Blair, 2009, p. 16).

La violencia es y ha sido un fenómeno estudiado por muchos escritores e investigadores a lo largo de la historia. Sin duda, las acciones y consecuencias de los comportamientos humanos denominados violentos abren interrogantes: ¿Qué lleva a un ser humano a causar daño voluntario a otro? Es un cuestionamiento que provoca interés y, quizá de manera arriesgada, se puede afirmar incluso que la violencia impacta la sociedad casi como un producto de consumo. Muestra de ello es la gran acogida

que tienen las películas y series televisivas en las que se hace apología a la violencia, a esa capacidad de destrucción del otro de manera instrumental. Por ejemplo, al buscar explicaciones de las acciones de personas como Luis Alfredo Garavito, Pedro Alonso López, Manuel Octavio Bermúdez o Daniel Camargo, colombianos que asesinaron, torturaron y cometieron un sinnúmero de acciones violentas, se encuentra la disminución o ausencia de empatía, aprendizajes por vía vicaria, vulnerabilidad social, coacción por parte de pares u otros y bajo control de impulsos, entre otras variables, que les conduce a atacar y dañar a personas, en su gran mayoría, desconocidas para ellos. Ahora bien, si pensamos qué es lo que lleva a un ser humano a provocar daño a un integrante de su familia o a alguien con quien tiene afinidad emocional, surgen unos nuevos interrogantes. “[...] basta un loco para desatar la violencia [...] antes de que alguien pueda comenzar la violencia, muchos otros ya han preparado el terreno” (Wertham y Flores, 1971, p. 3).

Para intentar comprender esas expresiones de violencia en el contexto familiar es preciso recordar la diferencia entre agresión y violencia. La teoría evolutiva nos recuerda que, en ocasiones, es necesario que las especies —no solo la humana— expresen ciertos comportamientos en pro de garantizar su vida. Sanmartín (2000) señala que el ser humano es agresivo de forma innata y violento culturalmente; estas conductas agresivas son entendidas desde el modelo evolutivo como necesarias para asegurar la existencia.

La comprensión del comportamiento violento no ha sido fácil, en tanto existen variables diversas que interactúan con este. Algunos comportamientos de ese tipo se justifican y otros son aprovechados con fines de lucro, como se aprecia en la publicidad expuesta en los medios de comunicación, en la que la violencia facilita comercializar productos audiovisuales con gran aceptación por parte del público; este fenómeno puede promover distorsiones cognitivas, al justificar dichas conductas, pues no se presentan como inadecuadas. Para la existencia de una conducta violenta se requiere un contexto en el cual confluyan interacciones grupales o individuales con una intencionalidad en dicha conducta y que conlleven consecuencias de daño para el otro.

Por otro lado, se entiende por violencia intrafamiliar toda relación de abuso, crónico o permanente, que ocurre entre los miembros de una familia. Es considerada relación de abuso toda conducta que, por acción u omisión, ocasiona daño físico o psicológico a otro miembro de la familia (Ortiz et al., 2005). En estos actos violentos se puede presentar uso de fuerza física, acoso, matoneo e intimidación tanto física como verbal; de esta forma, la violencia es una respuesta a los conflictos mediante la fuerza, las amenazas, las agresiones y el abandono (Huertas, 2012), con el propósito de causarle daño al otro, ya sea físico, psicológico o emocional.

Asimismo, la violencia intrafamiliar se presenta sin importar las condiciones políticas, económicas, sociales, laborales e intrafamiliares, y se expresa de múltiples formas: física, psicológica, sexual, verbal y económica. Puede ocasionar suicidio, homicidio, desaparición, secuestro, masacre, maltrato, chantaje o ultrajes, sin diferencias por edad, sexo o estrato socioeconómico (Sierra et al., 2006).

Tipos de violencia intrafamiliar

En cuanto a los tipos de violencia intrafamiliar no existe un consenso. Al revisar la literatura nacional e internacional se encuentran diferentes clasificaciones de acuerdo con variables como: los tipos penales, quién es el agresor y su relación con la víctima y las consecuencias de los comportamientos violentos.

A continuación se hará una breve descripción de cinco tipos de violencia con base en dos criterios del marco normativo colombiano y la frecuencia de aparición en los escritos académicos. Se hará alusión a las violencias física, emocional, económica, sexual y por abandono, y en el siguiente apartado se hablará sobre la negligencia, con el fin de aclarar el concepto de interés.

Violencia física

Este tipo de violencia es quizás uno de los que genera mayor impacto, dadas las consecuencias para las víctimas, de acuerdo con el Sistema de vigilancia epidemiológico de la violencia intrafamiliar de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (2017), más conocido por su sigla Sivim. La violencia física corresponde a acciones intencionales que causan daño a la víctima, sin importar su gravedad, por ejemplo, empujones, golpes, bofetadas, zarandeos, quemaduras, infligir o amenazar con daño o lesiones, en forma de empujones, bofetadas, golpes, tirones de pelo, mordiscos, patadas, torcedura de brazos, golpes con objetos o quemaduras, entre otros, mediante coerción y limitación de los movimientos (Alonso y Castellanos, 2006; Seura, 2008). Según otra definición, son acciones intencionales ejercidas sobre el cuerpo o sobre la salud de las personas que lo sufren (Echeburúa, 1998; Garzón, 2000).

Este tipo de violencia suele dejar lesiones físicas. Debido al mecanismo que las genera, el daño puede ser leve o grave. Dichas acciones causan afectaciones directas en el cuerpo y en la salud de las personas agredidas y provocan dolor, heridas, mutilaciones e incluso la muerte. Para el año 2017, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá reportó 1.796 casos de violencia física en contra del sexo femenino y 487, del sexo masculino (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2017).

Violencia emocional

Este tipo de violencia es quizás el más común, por sus múltiples expresiones, aunque en ocasiones pasa desapercibido y sus consecuencias no necesariamente son evidentes. Alejo (2016) expresa que es cualquier acción u omisión por la cual la principal afectación recae sobre la autoestima de la víctima e incluye acciones de violencia verbal, lenguaje corporal de rechazo, descalificación, chantaje emocional, faltas de respeto a sus creencias, desprecios, insultos y comentarios sarcásticos y omisiones (Echeburúa, 1998; Garzón, 2000; Labrador et al., 2004, Seura, 2008). La violencia emocional o psicológica es la más difícil de identificar. Otras expresiones de este tipo de violencia son el control y la limitación de acceso a amigos, escuela o trabajo; aislamiento forzado; ser testigo involuntario de actividades e imágenes violentas; intimidación; usar el miedo o el daño físico; amenazas; chantajes; amenazas de suicidio; acoso hacia los demás, y destrucción de propiedades y mascotas (Alonso y Castellanos, 2006).

Según Seura (2008), la violencia psicológica tiene ciertas características que llevan a clasificarla en tres categorías: maltrato, acoso y manipulación. La primera se caracteriza por la continuidad de un trato fuerte y degradante, así como conductas de engaños, celotipia y control sobre el otro individuo; en el acoso, se ejecutan acciones planeadas y organizadas, con el objetivo de lastimar o vulnerar la seguridad y la autoestima de la otra persona, lo que trae un mayor control; en la manipulación se emplean mecanismos coercitivos sobre el otro para lograr fines instrumentales. En relación con este tipo de violencia, para el año 2017, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (2017) reportó 1.140 casos; sin embargo, cualquier expresión de violencia también trae consecuencias emocionales, es decir, es necesario tener en cuenta las demás expresiones.

Violencia económica

Consiste en ejercer control por medio de los recursos económicos, generalmente en la pareja, como se resalta en la Ley 1257 de 2008. La violencia en la pareja tiene diferentes matices, entre ellos, utilizar o aprovechar la garantía económica para vulnerar la voluntad del compañero sentimental. La Organización Mundial de la Salud (2009) afirma que es una de las maneras más comunes de violencia en contra de la mujer, aunque esto no implica que los hombres no la sufran. El agresor tiene el control de los ingresos limitando al otro el acceso al dinero, por ejemplo, al prohibirle trabajar, para mantener su dependencia; al presionarlo a tomar decisiones o no considerarlo para ello. También significa usar mal el dinero en gastos fuera de la familia, con lo que se perjudica a la pareja (Seura, 2008). Por su parte, Alejo (2016) señala que dentro de este grupo se pueden encontrar situaciones en las cuales la

víctima es utilizada para obtener recursos materiales o económicos en pro de beneficiar exclusivamente a una tercera persona (mendicidad y trabajo de menores) y también que, en algunos casos, se utiliza el poder adquisitivo propio en contra de la persona que depende económicamente, para hacerle exigencias en contra de su voluntad. Este tipo de violencia no ha tenido tanta exploración como los citados antes y solo recientemente se han venido disponiendo mecanismos legales para identificarlo y abordarlo institucionalmente para garantizar los derechos.

Violencia sexual

Sin duda alguna, esta tiene un gran impacto social, más cuando sucede en el marco del contexto familiar. Se caracteriza por la coerción o uso de la fuerza para que la víctima ejecute o presencie prácticas de tipo sexual. Hace referencia a todo contacto sexual sin consentimiento, coercitivo o con fines de explotación, por ejemplo: caricias, relaciones sexuales vaginales o anales, ataques a zonas sexuales del cuerpo, obligar a ver imágenes o actividades sexuales y amenazar con contactos sexuales (Alonso y Castellanos, 2006). También incluye conductas como someter a actos humillantes y obligar a ver material pornográfico (Seura, 2008).

En Colombia, el Código Penal describe un buen número de actos tipificados entre los cuales se cuentan la explotación sexual, el acoso sexual y el acceso carnal violento, entre otros. La Ley 599 de 2000 no contiene el conjunto de conductas como el acoso sexual callejero (piropos y violencia simbólica, entre otros) que forman parte de la violencia sexual, pero no constituyen un tipo penal.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registra en 2017 un total de 23.798 valoraciones por presuntos delitos sexuales; en un 45,08 % de los casos, el presunto agresor fue un familiar, lo que deja ver claramente el impacto de este flagelo y más cuando señalamos que dentro de este grupo la pareja o expareja representan 1.872 casos (Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, 2019).

Abandono

Se enmarca en los comportamientos por omisión o inacción. Suele afectar a personas en condición de vulnerabilidad y que requieren del otro para garantizar las condiciones mínimas para su supervivencia y mínimos vitales, como los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad o con enfermedades que precisan asistencia permanente; la víctima es dejada sola de manera permanente por sus cuidadores, lo que eleva los riesgos que corre. Incluye personas institucionalizadas que no reciben el apoyo de sus familiares y personas obligadas a salir de casa (Alejo, 2016). Según los programas de vigilancia de la Secretaría de Salud del distrito, en

2017 se presentaron 2.928 casos con este tipo de comportamiento (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2017).

La negligencia como expresión de la violencia intrafamiliar

La negligencia es una de las expresiones de violencia más comunes en el contexto colombiano. Aunque este concepto suele utilizarse con gran frecuencia, saber distinguirlo o identificarlo dentro de los grupos familiares no resulta tan sencillo. Por otra parte, la tendencia a considerar que dichas acciones no son preocupantes y a minimizar sus consecuencias demuestra la necesidad de ahondar en este fenómeno.

La negligencia

Este tipo de violencia afecta principalmente a niños, niñas, adolescentes y ancianos, cuando se manifiesta abandono o falta de preocupación por ellos (Seura, 2008). Se enfoca sobre todo en las situaciones de omisión por parte de los padres hacia sus hijos (Martínez, 1997); Lago (2006) señala que la negligencia es “la privación de las necesidades biológicas, afectivas, intelectuales, sociales, morales, éticas, de valores y estructurales del niño cuando se le pueden brindar” (Lago, 2006, p. 4). De acuerdo con las anteriores definiciones, diversos autores coinciden en que este tipo de violencia afecta en primer lugar a la población infantil, pese a que una de las principales funciones de la familia es el cuidado o la protección hacia sus miembros con el ánimo de garantizar sus condiciones de seguridad y supervivencia.

El concepto de negligencia depende mínimo de dos condiciones: por un lado, el marco sociojurídico y, por otro, la relación entre el concepto de infancia y el rol del grupo familiar (Borgioli, s. f., citado por Saavedra, 2014).

Delimitar la negligencia no es sencillo, debido a la multiplicidad de definiciones posibles que dificultan aclarar cuál comportamiento está dentro de este tipo de violencia. Esto incide en que la población general y los profesionales encargados de vigilar el fenómeno no tengan la posibilidad de identificar casos de negligencia y que, en consecuencia, las víctimas sean más vulnerables. Asimismo, en muchos casos, la negligencia no depende de acciones observables, sino que se identifican a partir de indicadores de calidad de vida que se enmarcan dentro de condiciones perceptuales del evaluador, por lo que determinar su ocurrencia se vuelve un acto subjetivo. Por ejemplo: es función del cuidador aportar alimentos al niño. Se sugiere que sean cinco raciones al día o, como mínimo, tres; sin embargo, si a un niño se le dan cinco porciones de un cereal como el arroz, sin ningún otro aporte nutricional, se podría decir que el cuidador cumple con la frecuencia indicada, pero no en cuanto a la calidad de los alimentos. Dicha situación representaría un riesgo, según

la percepción de quien la evalúe, dado que se cumple con la frecuencia esperada; si el evaluador cuestiona esa condición, el cuidador puede atribuir su comportamiento a una cuestión cultural. La pregunta aquí sería si este hecho es negligencia o no. Entonces, una primera conclusión es que hay una relación entre mínimo dos sujetos: una persona en condición de vulnerabilidad, bien sea asociada a su edad, estado de salud o situación económica, y una segunda (o más) que ejerce el rol de cuidador. Es en esta relación en la que el cuidador omite o se niega a brindar las condiciones mínimas para una calidad de vida.

Otro elemento para analizar es a quién afecta, ya que en las definiciones propuestas se observa que recaen especialmente en la infancia; sin embargo, Seura (2008) señala que también involucra a la población adulta mayor. Para la Organización Panamericana de la Salud (s. f.), la negligencia implica descuido u omisión en las atenciones o incluso el desamparo de una persona, la cual tiene una relación de dependencia con un cuidador por la cual se genera una obligación legal o moral.

Este no es un fenómeno nuevo y ha sido estudiado con antelación; sin embargo, en la literatura se observa que la preocupación está centrada en la población infantil, lo que propicia un sesgo en relación con los otros grupos poblacionales que también son víctimas de este tipo de violencia, situación que debe hacerse visible.

Otro grupo poblacional que suele requerir cuidados particulares es el de las personas que padecen enfermedades que limitan su funcionalidad, como parálisis cerebral, esclerosis múltiple, cuadriplejias o cuadriparesias, entre muchas otras, lo que genera una condición de dependencia y de cuidados permanentes que, al no recibirse, representan riesgo vital. La condición de dependencia puede ser temporal, como en el caso de los posoperatorios o las incapacidades asociadas a accidentes que limitan por un tiempo el funcionamiento del sujeto, al requerir cuidados especiales que exigen apoyo parcial o constante tanto por su salud física como por la necesidad de apoyo social y económico.

En conclusión, la condición de negligencia afecta a población vulnerable: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con afectación de salud permanente o temporal y discapacidad, que requiere de un apoyo físico, económico o social.

En cuanto al elemento volitivo, se plantean dos tipos de negligencia: la voluntaria, que se manifiesta mediante el rechazo a las obligaciones de cuidar, con la intención de provocar estrés físico o emocional en la persona victimizada, y la involuntaria, que es el fracaso en las obligaciones de cuidar, sin intención de causar estrés físico o emocional, por ejemplo, falta de dinero o alimentos, pobre cuidado de la salud y de protección sexual, entre otros, debido a ansiedad, conocimiento inadecuado, pereza o enfermedad (Alonso y Castellanos, 2006).

De acuerdo con lo anterior, para tener una definición holística de la negligencia, se propone la siguiente: es un tipo de violencia intrafamiliar que, de manera voluntaria o involuntaria, afecta a la población vulnerable, incluidos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con afectación de salud permanente o temporal o discapacidad, que requiere de un apoyo físico, económico o social. Surge cuando el responsable del cuidado está en condición de prestar la atención y no lo hace.

En la legislación colombiana se encuentra un marco normativo que permite contextualizar las condiciones señaladas. En primera instancia, la Constitución Política señala:

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos (art. 44).

Si bien es cierto que el artículo alude de manera explícita a los niños, por igualdad, dicha disposición cobija a los demás sujetos de derecho.

Por otra parte, la Ley 1098 de 2006, por la cual se establece el Código de Infancia y Adolescencia, expresa la importancia del desarrollo y de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes para que crezcan en plenitud en el seno de la familia y la comunidad.

En esta misma línea, el Consejo Nacional de Política Económica y Sociedad (Conpes) dispuso en 2007 la política “Colombia por la primera infancia”, para tener herramientas que faciliten la actuación de las entidades en pro de garantizar los derechos, como el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, que vela especialmente por la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, para el caso de los adultos mayores y la población con discapacidad, la ley no es tan robusta; esto no significa ausencia de normas legales, sino que hay un mayor interés en la protección de niños, niñas y adolescentes.

La Ley 1850 del 19 de julio de 2017 estipula medidas de protección para el adulto mayor, crea y fortalece normas anteriores que favorecen a las personas más vulnerables dentro de la sociedad, en especial, con mecanismos legales para sancionar a quienes vulneren los derechos del adulto mayor. Se modifica la Ley 1315 de 2009 y propone espacios de protección para el adulto mayor lesionado dentro del grupo familiar; también modifica los artículos 229 y 230 del Código Penal e impone unas sanciones para quienes violen los derechos fundamentales del adulto mayor de 60

años, así como de las personas vulnerables por su condición. Asimismo, el Código Penal instituye el “maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años o más [...] genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud” (Código Penal Colombiano, art. 229A).

De acuerdo con lo anterior, es evidente que en el país existen mecanismos sancionatorios frente a este tipo de violencia. Las leyes mencionadas en el presente escrito no son las únicas; sin embargo, las cifras dan cuenta del desconocimiento de las normas y de las posibles consecuencias de la negligencia, así como de la importancia de empoderar a la sociedad ante este tipo de violencia y el rol ético de los profesionales en la identificación temprana de esta conducta.

Algunos ejemplos de negligencia

Sería un reto interminable intentar clasificar o tipificar los comportamientos que se presentan en los grupos familiares como se ha venido señalando. No obstante, cabe hacer alusión a una serie de conductas que se presentan con cierta regularidad y que pasan desapercibidas al no identificar una consecuencia inmediata para la persona vulnerada. Un ejemplo claro es el caso de la mujer gestante que, aun con la posibilidad de recibir seguimientos médicos, no lo hace porque no le parecen necesarios u otras excusas similares; sin embargo, la importancia del control prenatal radica en la detección temprana de riesgos para la madre o el niño en formación, lo cual impacta en las cifras de muerte perinatal y muertes maternas durante la gestación, el alumbramiento o el puerperio.

Otro comportamiento común en la negligencia es la falta de acompañamiento y asistencia a reuniones escolares asociadas a los procesos educativos; sin duda es uno de los mecanismos que tienen los padres para verificar y comprender las dificultades académicas de sus hijos y la inasistencia implica un impacto en la corrección oportuna de las limitantes en el proceso formativo, puesto que la responsabilidad de la educación no es solo de la institución, sino, en primer lugar, del grupo familiar.

Otro ejemplo frecuente es la corresponsabilidad de los gastos de los adultos mayores que no tienen un ingreso económico para sus gastos básicos, frente a lo cual los familiares no garantizan las condiciones mínimas o los acompañamientos en los procesos que certifiquen su seguridad. El último ejemplo de negligencia al que se quiere hacer alusión se refiere a las personas que, de manera temporal, requieren atención para evitar descuidar la hidratación, la nutrición, úlceras de presión sin atender, la higiene personal; mantener un ambiente poco sanitario, y abandonar a la persona en la cama, en la calle o en algún servicio público (Organización Panamericana de la Salud, s. f.).

Consecuencias de la negligencia: una perspectiva victimológica

En los apartados anteriores se mencionaron algunas de las consecuencias de la negligencia; sin embargo, es necesario contextualizar, de una manera más organizada, las afectaciones psicológicas. En términos generales, esta conducta impacta en diferentes esferas y ámbitos de la vida de los seres humanos, desde lo físico a lo psicológico, como también desde lo imperceptible hasta el fallecimiento, similar a otros tipos de violencia (Klevens y Leeb, 2010).

En la salud física

La negligencia reiterada en los cuidados básicos como hábitos de higiene, controles médicos y odontológicos, esquema de vacunación y adecuada alimentación impacta en las condiciones de salud. Por lo tanto, la ausencia o el inadecuado mantenimiento de estos facilita la aparición de enfermedades, potencia las comorbilidades y disminuye la posibilidad de que una persona con quebrantos de salud tenga una recuperación oportuna, lo que afecta la calidad de vida de la víctima y del grupo familiar. Si dichos descuidos se presentaran en una persona con alto grado de vulnerabilidad podrían llevar incluso a la muerte prematura.

La negligencia en el seguimiento y la supervisión de los niños, niñas y adolescentes puede representar un riesgo mayor de accidentes como caídas, quemaduras, ingesta de sustancias tóxicas; de igual forma, la inadecuada nutrición trae afectaciones sobre el proceso normal del desarrollo (Jordan, 2007). Otros indicadores físicos de la negligencia puede ser el retraso no orgánico del crecimiento, dado por falta de supervisión, ayunos prologados e inadecuadas condiciones higiénicas (Gracia, 1995).

La experiencia como miembro del sistema de vigilancia Sivim, en la ciudad de Bogotá, permitió identificar que, entre las conductas más comunes asociadas a la negligencia se encontraban el consumo accidental de medicamentos por almacenamiento inadecuado, el consumo de productos de aseo al ser reenvasado en recipientes de bebidas gaseosas y caídas que ocasionan fracturas o traumas craneoencefálicos, en especial, en niños menores de 2 años.

En las habilidades sociales

La familia es uno de los primeros escenarios de socialización del ser humano; es en el seno familiar en donde se construyen muchas habilidades tendientes a adquirir las herramientas para que el sujeto alcance unas competencias sociales adecuadas. La negligencia reduce los aprendizajes de dichas herramientas, por lo que el sujeto tendrá dificultades para adaptarse a los retos de la interacción social; tales condiciones

facilitan otras expresiones de violencia del contexto familiar e inciden en la espiral de la violencia intrafamiliar. De acuerdo con Jordan (2007), la adquisición de malos hábitos higiénicos afecta también en las relaciones sociales del niño, dificultando su proceso de adaptación a los contextos sociales dado que el grupo de pares puede sentir rechazo hacia él.

En algunos lugares es común identificar que algunas familias se habitúan a pobres condiciones higiénico-sanitarias tanto en sus inmuebles (desorden, basuras, plagas, etc.) como en su aseo personal, escenarios que afectan las interacciones de los grupos familiares con su comunidad; por ejemplo, los niños que asisten al colegio con escasos cuidados higiénicos suelen ser víctimas de matoneo por parte de sus pares, lo que genera segregación y secuelas psicológicas como la baja autoestima. Otra variable frecuente en el contexto capitalino es el hacinamiento, condición que aumentó luego de 2017, dado el fenómeno social de migración de población venezolana y por el desplazamiento forzado. Esta situación incide en variables como mayores índices de vulnerabilidad y en la aparición de otras expresiones de violencia como la sexual y la emocional.

En el campo psicológico

Van desde la aparición de síntomas hasta el desarrollo de síndromes y trastornos mentales. Según Little y otros autores (2003) es necesario revisar siete áreas para la identificación de la negligencia, que son: salud física y psicológica y desarrollo físico, comportamental, intelectual, educativo, social y emocional. Sin embargo, se agruparán las consecuencias psicológicas en tres aspectos: cognitivo, afectivo y lo comportamental.

Consecuencias cognitivas

De acuerdo con la teoría cognitiva, Piaget y Vygotsky resaltan el impacto que tienen los primeros años de vida en la construcción del conocimiento, la cual depende de la interacción con el entorno y el cuidador para la formación de los primeros esquemas que fundamentarán estructuras más complejas del conocimiento. Asimismo, desde el modelo histórico-cultural de Vygotsky, hay una dependencia necesaria para que el niño adquiera unos conocimientos básicos a partir de la denominada zona de desarrollo próximo.

Se han encontrado evidencias de afectaciones como limitación del desarrollo físico y psicológico (James, 2007), por ejemplo, desnutrición por negligencia, que altera en algún grado el avance cognitivo, así como la evolución del lenguaje y psicomotora (Glaser, 2000).

En el estudio realizado con 57 niños entre 8 y 13 años de España, en el cual se recolectó información a partir de tres fuentes (los niños víctimas de negligencia, sus compañeros de estudio y sus docentes), se halló que dichos niños presentaban como consecuencias bajo rendimiento académico, niveles de atención disminuidos y un alto grado de hiperactividad, lo que explica su desempeño escolar.

Por otra parte, Erikson (1989, citado por Ruiz y Gallardo, 2002) reporta que los niños víctimas de abandono, entre 3 y 6 años, presentaban un rendimiento cognitivo menor y también alta afectación en procesos atencionales, lo que incidió en sus actividades académicas y exigió un mayor acompañamiento por parte del docente. Resultados similares encontró Wolfe (1987) y, en la misma línea, Amrung y otros autores (1986, citado por Ruiz y Gallardo, 2002) lograron identificar en estudios un coeficiente intelectual más bajo en personas víctimas de negligencia.

Consecuencias afectivas

Síntomas como el miedo expresado de manera verbal y no verbal, malestar psicológico significativo, cuadros depresivos, estrés postraumático y somatización de estrés son asociados a la negligencia (Slep y Heyman, 2006). Asimismo, las investigaciones empíricas han demostrado que la privación del afecto y del cuidado maternos inciden en la personalidad (Bowlby, 1989) y que la construcción del vínculo afectivo entre el niño y su cuidador está mediada por sus interacciones, es decir, un cuidador diligente crea un lazo más adecuado que uno negligente (Papalia, 2005). Por otra parte, los cuidados oportunos repercuten en la percepción de seguridad del niño y en la formación del autocuidado (Méndez, 2006); en caso contrario, se puede entablar fácilmente un vínculo ambivalente resistente (Instituto de Bienestar Familiar, 1995), así como desarrollar una baja autoestima, resultante de inadecuadas pautas de crianza que afectan la construcción de los factores de personalidad y, en el caso de las niñas y las adolescentes, adoptar expresiones asociadas a la cultura patriarcal (Daza, 2012).

Tener una baja autoestima hace que la persona se juzgue y se rechace a sí misma, lo que provoca sentimientos de culpa, complejos de inferioridad, inseguridades y comportamientos rígidos que pueden generar apegos y que permanezca en un ámbito donde surgen situaciones de violencia (Montaño, 2011). La relación del sujeto consigo mismo depende de tres aspectos psicológicos: identidad, autoestima y manejo corporal, a partir de los cuales el sujeto se diferencia de los demás y construye el apego y la identidad social.

También se ha logrado identificar que de las conductas negligentes se derivan cuadros depresivos, el trastorno más frecuente en víctimas de género femenino. Puede ser moderado o grave y conducir al fracaso personal, abandono del hogar, deterio-

ro de redes sociales y familiares, a la pérdida de poder adquisitivo y a la alteración de todas las áreas de ajuste; asimismo, los trastornos de ansiedad generan elevados niveles de activación y reactivación, lo que complica los cuadros afectivos de las víctimas de violencia (Labrador et al, 2010).

Consecuencias comportamentales

Sobresalen conductas como: fatiga o hambre persistente, hurto de alimentos, consumo de sustancias psicoactivas, y deserción escolar y de casa (Gracia, 1995). También se reportan somnolencia frecuente, mendicación de comida, permanencia prologada en lugares públicos, conductas agresivas, incapacidad de mantener relaciones duraderas y consumo de alcohol o sustancias psicoactivas (Jordan, 2007).

- Trastornos de inadaptación: es la afectación en las áreas de ajustes de la víctima, como consecuencia de una constante violencia que causa desestructuración vital en relación con el ámbito laboral (ausentismo o abandono del trabajo), el social (limitaciones para relacionarse con otras personas), el de tiempo libre (aislamiento), el familiar (afectación a los hijos y respuesta negativa ante allegados) y el de pareja (desconfianza para reestablecer relación de pareja), entre otras, que impiden a la víctima asumir los retos de la sociedad y provocan deterioro global en la vida de la persona, que puede llevar a ideación o intentos suicidas (Labrador et al, 2010).

Otros posibles trastornos que pueden derivarse de la negligencia son el trastorno impulsivo intermitente, trastorno disocial o antisocial de la personalidad o trastorno negativista desafiante. Todo acto de violencia tiene consecuencias a corto, mediano o largo plazo y, como se ha señalado, resultados tan lamentables como la muerte.

Conclusiones

La negligencia puede entenderse como un tipo de violencia intrafamiliar que, de manera voluntaria o involuntaria, afecta a población vulnerable como la de niños niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con afectación de salud permanente o temporal o discapacidad que requiere un apoyo físico, económico o social. Dicha conducta se presenta cuando el responsable del cuidado está en condición de prestar la atención y no lo hace.

En segundo lugar, la negligencia es un fenómeno de violencia intrafamiliar que debe ser estudiado a profundidad, ya que puede traer múltiples consecuencias a quienes

son víctimas directas y sus grupos familiares, las cuales varían entre la aparición de síntomas, síndromes o trastornos e incluso la muerte. Pueden clasificarse en tres grupos: consecuencias en la salud física, sociales y psicológicas; estas últimas, a su vez, las podemos dividir en afectos sobre la esfera cognitiva, la comportamental y la afectiva.

También es importante resaltar la escasez de investigaciones en el contexto colombiano acerca de la negligencia.

Se insiste en la formación de los profesionales para identificar los signos y síntomas de la negligencia, para que no pase desapercibida, como también en los adecuados procesos de evaluación para detectarla, a partir del uso de entrevistas e instrumentos que garanticen unos resultados objetivos, debido a las dificultades de categorización.

Por último, se invita a empoderar a la comunidad y a visibilizar lo cotidiano de los comportamientos negligentes dentro de los grupos familiares, para evitar que se siga desestimando la necesidad de mitigar este tipo de violencia intrafamiliar.

Referencias

- Alejo, H. (2016). *Anexo operativo del subsistema de vigilancia de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual*. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
- Alonso J, y Castellanos J. (2006). Por un enfoque integral de la violencia familiar. *Psychosocial Intervention*, 15(3).
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592006000300002
- Blair, E. (2009). Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición. *Política y cultura* (32), 9-33. <http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n32/n32a2.pdf>
- Bowlby, J. (1989). *Una base segura: aplicaciones clínicas de la teoría del apego*. Paidós.
- Carbonell, J., Carbonell, M. y González, N. (2012). *Las familias en el siglo XXI: una mirada desde el derecho*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Colombia, Congreso de la República. (19 de julio de 2017). *Ley 1850 de 2017*, “Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (8 de noviembre de 2006). *Ley 1098 de 2006*, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
- Deza, S. (2012). ¿Por qué las mujeres permanecen en relaciones de violencia? *Avances psicológicos*, 20(1), 45-55.
- Echeburúa, E. (1998). *Personalidades violentas*. Pirámide.
- Febvre, L. (1961). *La tierra y la evolución humana. Introducción geográfica a la historia*. (2ª ed.). Unión Tipográfica. Editorial Hispanoamericana.

- Flaquer, L. (1995). Las funciones sociales de la familia. *Documentación social*, 98, 39-48. <https://www.researchgate.net/publication/270684327>
- Foucault, M. (2006). *Seguridad, territorio, población*. Fondo de Cultura Económica.
- Garzón, R. (2000). *El peritaje sociofamiliar frente a la violencia conyugal*. Publicaciones Universidad Libre.
- Glaser, D. (2000). Child Abuse and Neglect and the Brain –A Review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 41 (1), 97-116.
- Gracia, E. (1995). Modelos explicativos, factores de riesgo e indicadores de los malos tratos a la infancia. En M. Oñorbe, M. García y J. A. Díaz (dirs.), *Maltrato infantil: prevención, diagnóstico e intervención desde el ámbito sanitario*. Consejería de Salud.
- Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. (2019). *Forensis 2018. Datos para la vida*. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- Huertas, O. (2012). Violencia intrafamiliar contra las mujeres. *Logos, ciencia & tecnología*, 4 (1), 96-106. <https://www.redalyc.org/pdf/5177/517751763006.pdf>
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (1995). *Escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil (desde el nacimiento hasta los seis años)*. Autor.
- Jordan, N. (2007). Síndrome de niño maltratado: variedad negligencia. *Revista de la Facultad de Medicina UNAM*, 50(3), 128-130.
- Klevens, J. y Leeb, R. (20 de marzo de 2010). Child Maltreatment Fatalities in Children Under 5: Findings from the National Violence Death Reporting System. *Child Abuse & Neglect*, 34(4), 262-266. doi: 10.1016/j.chiabu.2009.07.005
- Labrador, F., Fernández, M. y Rincón, P. (2010). Características psicopatológicas de mujeres víctimas de violencia de pareja. *Psicothema*, 10(1), 99-105. <http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=3702>
- Labrador, F., Rincón, P., De Luis, P. y Fernández-Velasco, R. (2004). *Mujeres víctimas de la violencia doméstica. Programa de actuación*. Pirámide.
- Lago, G. (2006). *Negligencia o descuido*. Sociedad Colombiana de Pediatría.
- Little, M., Axford, N. y Morpeth, L. (2003). *Threshold: Determining the Extent of Impairment to Children's Development*. Warren House Press.
- Malde, I. (2012). *La familia: el divorcio y los hijos*. Recuperado el 12 de marzo de 2018 de <http://www.psicologia-online.com/monografias/separacion-parental/que-es-la-familia.html>
- Martín, M. y Tamayo, M. (2013). Funciones básicas de la familia. Reflexiones para la orientación psicológica educativa. *EduSol*, 13(44), 60-71.
- Martín, M. y Tamayo, M. (julio-septiembre, 2013). Funciones básicas de la familia. Reflexiones para la orientación psicológica educativa. *EduSol*, 13(44), 60-71.
- Martínez, M. (1997). Concepciones parentales en la definición de negligencia infantil. *Psykhe*, 6 (1), 21-34. <http://www.psykhe.cl/index.php/psykhe/article/view/99/99>

- Montaño, N. (2011). *Características psicológicas de las mujeres de 20 a 35 años de edad, maltratadas por su pareja* [Tesis de pregrado, Universidad Central del Ecuador]. <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2765/1/T-UCE-0007-90.pdf>
- Morales, L. y García, E. (2010). Psicología jurídica: quehacer y desarrollo. *Diversitas: perspectivas en psicología*, 6 (2), 237-256. <http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v6n2/v6n2a04.pdf>
- Oliva, E. y Villa, V. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. *Justicia Juris*, 10 (1), 11-20.
- Organización Mundial de la Salud. (2014). *Resumen de orientación: informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014*. Organización Mundial de la Salud, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/145089/WHO_NMH_NVI_14.2_spa.pdf;jsessionid=298D27BF79420DCB6E24238EAC8D868B?sequence=1
- Organización Panamericana de la Salud. (s. f.). *Abuso (maltrato) y negligencia (abandono): guía de diagnóstico y manejo*. Organización Panamericana de la Salud, <http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/guia01.pdf>
- Ortiz, M., Padilla, M. y Padilla, E. (2005). Violencia intrafamiliar y mujer: un aspecto para meditar. *Revista de la Unión Latinoamericana de Psicología*. <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psilat/n3/n3a02.pdf>
- Papalia, D., Olds, S. y Feldman, D. (2005). *Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia*. McGraw-Hill.
- Pérez, A. y Reinoza, M. (2011). El educador y la familia disfuncional. *Educere*, 15 (52), 629-634.
- Pina, R. (2005). *Diccionario de derecho*. Porrúa.
- República de Colombia. (1991). *Constitución Política*. Legis.
- Ruiz, I. y Gallardo, J. (2002). Impacto psicológico de la negligencia familiar (leve versus grave) en un grupo de niños y niñas. *Anales de Psicología*, 18 (2), 261-272.
- Saavedra, J. (2014). La negligencia parental en los sistemas familiares y los elementos favorecedores de procesos resilientes en niños, niñas y adolescentes [Tesis de Pregrado, Universidad Academia de Humanismo Cristiano]. <http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/1770/TTRASO%20435.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sanmartín, J. (2000). ¿Qué es la violencia? Una aproximación al concepto y a la clasificación de la violencia. *Daimon Revista internacional de filosofía* (42), 9-21.
- Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (2018). *Informe de vigilancia en salud pública Bogotá año epidemiológico 2017*. Recuperado el 12 de marzo de 2019 de http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Inf_Sivigila/Informe%20Anual/INFORME%20VIGILANCIA%20EN%20SALUD%20P%20C%20ABLICA%20BOGOT%20C%20A%20C%20I%20O%202017.pdf
- Seura, C. (2008). *Las medidas de protección al niño, niña o adolescente en el ámbito de la violencia intrafamiliar, desde perspectiva del derecho de familia* [Tesis de Pregrado, Universidad de Chile]. <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107851>

- Sierra, R, Macana, N. y Cortés, C. (2006). *Impacto social de la violencia intrafamiliar*. Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses. <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49496/Violencia+Intrafamiliar.pdf>
- Slep, A. y Heyman, R. (agosto, 2006). Creating and Field-testing Child Maltreatment Definitions: Improving the Reliability of Substantiation Determinations. *Child Maltreatment*, 11(3), 217-236.
- Wertham, F. y Flores, H. (1971). *La señal de Caín*. Siglo XXI.
- Wolfe, D. (1987). *Child Abuse: Implications for Child Development and Psychopathology*. Sage.

Luis Orlando Jiménez Ardila*

Universidad Católica de Colombia

En la administración de justicia, el testimonio es la figura procesal más utilizada en la judicialización de conductas punibles, pero también es el elemento probatorio que suscita mayor controversia y duda por parte de los operadores de justicia, debido a su gran carga de subjetividad y los errores de omisión o comisión en los que con frecuencia incurren los testigos. Sin embargo, puede ser un procedimiento que contribuya efectivamente a la toma de decisiones judiciales, si se aplican las técnicas apropiadas de evaluación de los procesos psicológicos que inciden en él; además, son precisamente los testigos quienes logran la convicción del juez sobre la inocencia o culpabilidad de un acusado, dado que él hace la valoración testimonial, pero como no está entrenado en los procesos psicológicos de los testigos y su incidencia en el tribunal, esa valoración puede ser sesgada o imprecisa.

Si hoy existe un aporte significativo de la psicología jurídica, sería la llamada psicología testimonial, que es un apartado importante para la administración de justicia. No puede dudarse de que la mayor parte de las cosas no ciertas expresadas por testigos bajo la gravedad del juramento, durante la investigación o el juicio, son mentiras conscientes y voluntarias, quizá con un fin utilitario o de venganza, motivadas por la ley del silencio o por cualquier otra circunstancia que, ante los tribunales, constituye la mentira procesal y que, de hecho, trasciende la posibilidad de la técnica probatoria y deja al funcionario judicial incapacitado para establecer la diferencia entre quien dice la verdad y quien miente.

Pero también es preciso reconocer que muchas cosas no verídicas dichas por testigos presenciales no revisten el carácter de mentira, es decir, no existe la intención de engañar a la autoridad judicial, sino que son aseveraciones hechas de buena fe, sin que el sujeto se percate en ese momento del engaño en el que pudiera incurrir acerca del hecho sobre el cual es llamado a deponer; se trata de errores en los procesos de atención, percepción o memoria, que surgen con mucha frecuencia y afectan el ejercicio de procuración de justicia. Es aquí donde la psicología jurídica del testimonio

* Psicólogo, especialista en Ciencia Forenses, magíster en Psicología y doctor en Psicología. Coordinador del programa de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

desempeña su mejor papel, al señalar los procedimientos más idóneos y científicos para la obtención de la prueba testifical.

Manzanero (2010) es claro en señalar que la psicología del testimonio es un campo disciplinar con entidad propia, signada por una historia que inicia en los albores del siglo XX y que sufrió una primera crisis importante debido a la Segunda Guerra Mundial y otra en la mitad de siglo, relacionada con el “abandono” de las investigaciones sobre memoria; tuvo un auge y desarrollo en la década del setenta, debido al avance de las psicologías experimental y cognitiva y su aplicación en los tribunales de justicia (Prieto et al., 1994). La influencia de este progreso no solo se hizo sentir en la propia psicología, sino también en el ámbito del derecho.

La psicología del testimonio es el área de conocimiento de la psicología jurídica que se ocupa de las variables psicológicas relacionadas con los testigos presenciales de hechos punibles, en particular de la exactitud (atención, percepción, memoria) y la credibilidad (motivación) (Jiménez, 2017, citado por Norza y Egea, 2017). El testimonio es una actividad judicial por medio de la cual se obtiene información pertinente para el caso que se está investigando. Constituye la base para la resolución de investigaciones en las que no se cuenta con otro elemento probatorio; esto, si se tiene en cuenta que la información es precisamente la materia prima de toda investigación criminal. Es un procedimiento directo que involucra a víctimas, testigos e informantes en un caso judicial.

Querejeta (1999) define la psicología del testimonio como el estudio de los factores que determinan la calidad del testimonio, entendido como la información aportada por una persona acerca de un suceso que ha presenciado directamente. El psicólogo especializado en la evaluación del testimonio tiene una formación esencial en el área forense y experimental, conocimientos en procesos psicológicos básicos, experticia en la valoración del desarrollo evolutivo infantil, habilidad comunicativa y entrenamiento en aplicación, calificación e interpretación de pruebas psicométricas.

Mira y Diges (1991) se refieren a la psicología del testimonio como el conjunto de conocimientos derivados de los resultados de la investigación científica en psicología experimental y psicología social, con los que se busca identificar la exactitud y credibilidad de los testimonios en la jurisdicción penal. Ibabe (2000) dice que la psicología del testimonio es el campo de investigación que examina los factores que influyen en la calidad del testimonio

Para Muñoz y otros autores (2011) el interés por los estudios en psicología cognitiva de los procesos básicos (atención, percepción y memoria, principalmente) surge de la necesidad de obtener y valorar el testimonio judicial. Por su parte, Manzanero (2008) presenta cuatro aspectos que han orientado recurrentemente la investigación sobre

psicología del testimonio: i) los factores que afectan la exactitud del testimonio; ii) los procedimientos de obtención de declaraciones que permitan alcanzar la exactitud; iii) la evaluación de la credibilidad del testimonio, y iv) las pruebas de identificación hechas por testigos y la evaluación de su exactitud.

La literatura psicológica ha señalado algunos elementos que influyen en la manera como las personas hacen identificaciones erróneas de otras personas y de cómo identifican a individuos que han conocido en el pasado. Se sabe que las variables implícitas en el acto criminal como la duración, el grado de agresividad, la iluminación y el tipo de suceso pueden afectar directamente la memoria y la percepción de los testigos, así como las variables inherentes al testigo mismo, como el estrés, el género, la edad y el estado fisiológico, que además pueden influir en los estados de atención, que es el proceso básico anterior a la memoria. Ello suele conducir a fallos dudosos, poco sustentables y débiles que llevan al error judicial, resultado, por ejemplo, de las identificaciones erróneas de los testigos. La proporción de errores es tan elevada que alarma y preocupa al aparato judicial. En tal circunstancia se hace necesario que los operadores jurídicos, sujetos procesales y demás intervinientes en los eventos judiciales adquieran el conocimiento científico sobre los procesos psicológicos involucrados en la información suministrada por los testigos, que ha de ser objetiva para probar la verdad judicial.

En los últimos tiempos se ha ahondado en la investigación en psicología del testimonio, para sacarla de la tendencia de los estudios de memoria y ubicarla en temas de mayor practicidad para los operadores jurídicos; así, se citan el estudio español de Selaya y otros autores (2020), quienes hicieron un metaanálisis a partir de la Web of Science para conocer el efecto que tiene la conformidad en la introducción de información errónea del relato de testigos presenciales de conductas delictivas, cuyos resultados muestran las implicaciones de la evaluación del testimonio en la toma de decisiones judiciales; y el estudio peruano de Robles (2020) en el que se plantea el papel de la cámara de Gesell en el proceso penal, sobre todo para la toma del testimonio de menores de edad en casos de delitos sexuales para evitar su revictimización.

La psicología del testimonio proporciona al administrador de justicia los conceptos, la metodología y las pruebas psicológicas necesarias para evaluar el testimonio y cualificarlo como evidencia válida y confiable en los procedimientos judiciales.

Referencias

Ibabe, I. (2000). Influencia de los estereotipos sobre delincuentes en la identificación de personas. *Eguzkilore* (14), 99-110.

- Manzanero, A. (2008). *Psicología del testimonio: una aplicación de los estudios sobre memoria*. Pirámide.
- Manzanero, A. (2010). Hitos de la historia de la psicología del testimonio en la escena internacional. *Boletín de psicología* (100), 89-104.
- Mira, J. y Diges, M. (1991). Psicología del testimonio: concepto, áreas de investigación y aplicabilidad de sus resultados. *Papeles del psicólogo*, 48. <http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=484>
- Muñoz, J., Manzanero, A., Alcázar, M., González, J., Pérez, M. y Yela, M. (2011). Psicología jurídica en España: delimitación conceptual, campos de investigación e intervención y propuesta formativa dentro de la enseñanza oficial. *Anuario de psicología jurídica*, 21, 3-14.
- Norza, E. y Egea, G. (2017). *Con-ciencia criminal: criminología, psicología jurídica y perfilación criminal*. Manual Moderno.
- Querejeta, L. (1999). Validez y credibilidad del testimonio. La psicología forense experimental. *Eguzkilore* (13), 157-168.
- Robles, A. (2020). Los desafíos de la entrevista única en cámara Gesell en el proceso penal peruano. *Derecho y cambio social* (59), 385-425.
- Selaya, A., Sanmarco, J. y Arce, R. (2020). Estimación de la conformidad en el testimonio: una revisión meta-analítica. *Psicología jurídica: investigación para la práctica profesional. Colección psicología y ley* (16), 69-80. doi: <https://doi.org/10.2478/9788395609596-005>
- Sobral, J., Arce, R. y Prieto, Á. (1994). *Manual de psicología jurídica*. Paidós Ibérica.

3

PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO: EVIDENCIA ACTUAL DE SU DESARROLLO

Juan Camilo Carvajal-Builes*
Juanita Rhenals
Tatiana Muñoz
Sebastián Chaparro

Resumen

El engaño es un comportamiento social que ha generado el interés de las personas desde hace cientos de años. La detección de esta conducta ha estado enfocada principalmente en tres perspectivas: las respuestas psicofisiológicas, el comportamiento no verbal y el lenguaje verbal. Este capítulo tiene como objetivo describir y analizar los principales hallazgos sobre detección de engaño a partir de una revisión de estudios empíricos publicados entre 2007 y 2020. Se concluye que existen diversas alternativas para detectarlo; no obstante, debido a la complejidad que implica evaluar este comportamiento es necesario hacer uso de metodologías complementarias para ofrecer conceptos más ágiles y sólidos en contextos forenses reales.

Palabras clave: testimonio, engaño, credibilidad, psicofisiología, lenguaje no verbal, análisis de contenido, estilo lingüístico.

Introducción

Este capítulo tiene como objetivo describir los hallazgos sobre credibilidad de testimonio a partir de las respuestas psicofisiológicas, el comportamiento no verbal y el lenguaje verbal. Se iniciará con una breve contextualización conceptual e histórica del engaño; luego se abordarán los principales hallazgos sobre detección de engaño por medio de la psicofisiología, del lenguaje no verbal y del lenguaje verbal y, por último, se explicarán con base en la teoría y los procesos psicológicos asociados.

* <https://orcid.org/0000-0001-8928-6604>

La conducta del engaño ha sido un comportamiento que ha provocado curiosidad no solo en las personas del común, sino también en la comunidad científica, ya que este tipo de comportamiento es social, forma parte de los seres humanos y está presente en todo tipo de sociedad (Csaba, 2013; DePaulo et al., 2003).

El engaño es una conducta intencional, social y adaptativa que se caracteriza por la omisión, adición, distorsión o exageración de la información suministrada mediante lenguaje verbal y no verbal, así como de las respuestas psicofisiológicas para lograr el convencimiento y la manipulación del receptor (Csaba, 2013; DePaulo et al., 2003).

El engaño y su estudio tienen origen en la hechicería, ya que era de interés para los magos conocer el funcionamiento sensorial de la persona para así producir trucos convincentes basados en la distracción, principalmente. Asimismo, las sociedades antiguas enfatizaron en métodos de tortura para facilitar la detección del engaño y la credibilidad, basados en algunas respuestas psicofisiológicas como la resequedad de la boca (Cameron et al., 2015).

En el siglo XX surgió la psicología del testimonio, la cual tiene sus orígenes en los trabajos de sugestionabilidad de Binet y en declaraciones de testigos de Stern (Espinosa, 2011). Estuvo centrada hasta la década del setenta en estudios sobre la exactitud de un relato, pero a partir de ese momento su énfasis ha estado en el análisis de la credibilidad del testimonio y la detección del engaño (Manzanero y González, 2015), desde tres perspectivas: el análisis de las respuestas psicofisiológicas, el análisis del comportamiento no verbal y el análisis del comportamiento verbal (Valverde et al., 2013).

Respuestas psicofisiológicas y credibilidad

El estudio de las respuestas psicofisiológicas en credibilidad de testimonio ha sido asociado con las investigaciones poligráficas; sin embargo, sus resultados han sido altamente cuestionados y su implementación en contextos forenses está restringido en gran parte del mundo (Ebrahimzadeh et al., 2013; Peth, 2014).

En la actualidad se identifican diversos instrumentos que se utilizan para la detección del engaño, como el polígrafo, la cámara térmica, la resonancia magnética funcional, el espectroscopio, el electroencefalograma y el eye tracker (Builes y Gutiérrez, 2018).

Polígrafo

El polígrafo es un instrumento que registra un conjunto de medidas de respuestas psicofisiológicas durante una tarea determinada. Los estudios de poligrafía han estado enfocados en la medida de la respuesta galvánica de la piel (la conductancia de la electricidad en la piel), los indicadores cardiovasculares (la medida del flujo sanguíneo) y la respiración relacionada (los procesos de inhalación y exhalación de aire).

En cuanto a medidas de respuesta galvánica, los estudios han mostrado que las personas deshonestas tienen una mayor conductancia de la electricidad, lo cual podría estar asociado al aumento de la sudoración en el momento de engañar (Elaad y Sommerfeld, 2016; Mejía et al., 2019; Peth, 2014; Staunton y Hammond, 2011; Ströfer et al., 2015). Algunos autores han reportado que esta medida psicofisiológica tendría una discriminación del engaño de 99 % si es combinado con otra respuesta fisiológica (Breska et al., 2014).

En relación con indicadores cardiovasculares, se observa que el pulso en dedos se incrementa al engañar (Chatterjee et al., 2019; Csaba, 2013; Elaad, 2011; Peth, 2014). Por otra parte, algunos estudios muestran que la respiración puede aumentar o disminuir en el momento de engañar, por lo que sus resultados aún no son concluyentes (Farahani y Moradi, 2013; Peth, 2014).

Cámara térmica

Los estudios sobre este instrumento son escasos. No obstante, el incremento de la temperatura facial ha sido relacionado con el comportamiento de engaño, ya que, al parecer, el rostro muestra un incremento en 0,5 grados centígrados en las personas que engañaron en comparación con las honestas (Warmelink et al., 2011).

Por otro lado, se encuentran investigaciones sobre detectar las mentiras mediante análisis de imágenes infrarrojas, en las que se logró un 75 % de éxito al detectar mentiras y 100 % al detectar verdad. El perfil de temperatura fue mayor en la fase número 1, que corresponde a la de interrogatorio, en comparación con la simulación de mentiras (Bedoya et al., 2017).

Resonancia magnética funcional

Los estudios con resonancia magnética funcional para la detección del engaño han ido en ascenso en los últimos años (Builes y Gutiérrez, 2018). Estas investigaciones han mostrado, por lo general, una mayor activación cerebral en zonas del lóbulo frontal, motoras, temporoparietales y límbicas en el momento de engañar (Abe et al., 2008; Chen et al., 2015; Ding et al., 2012; Ito et al., 2011; Lisofsky et al., 2014; Peth et al., 2015; Sip et al., 2013).

Espectroscopio

Al igual que la resonancia magnética funcional, este instrumento mide el funcionamiento cerebral, por medio de los cambios en la cantidad de hemoglobina y de oxígeno en las áreas del cerebro ante una tarea determinada. Las investigaciones muestran

hallazgos similares a los reportados previamente y están orientados a una mayor concentración de oxígeno y hemoglobina en zonas frontales del cerebro en el instante de engañar (Ding et al., 2013; Ding et al., 2014; Sai et al., 2014).

Electroencefalograma

El electroencefalograma mide los cambios en la actividad eléctrica cerebral en un momento determinado. Los estudios con electroencefalograma son abundantes y se han convertido en el instrumento de medida psicofisiológica más utilizado, con una frecuencia de 39,3 % para la detección del engaño, debido al bajo costo de implementación en comparación con otras técnicas como la resonancia magnética funcional y el espectroscopio (Builes y Gutiérrez, 2018).

Los hallazgos de estas investigaciones coinciden con los de estudios sobre resonancia magnética funcional y espectroscopio en cuanto a una mayor activación de zonas frontales y parietales del cerebro en el momento de engañar en comparación con las personas honestas (Camargo et al., 2016; Gao et al., 2012; Isaychev et al., 2011; Sowdwen et al., 2015; Teufel et al., 2009). Algunos autores han reportado una efectividad de discriminación del engaño superior a 95 % al hacer uso de este tipo de instrumentos (Bowman et al., 2014; Gao et al., 2013; Wang et al., 2016).

Eye tracker

Este instrumento ofrece la alternativa de medir diversas variables del comportamiento visual, entre las cuales se encuentran las fijaciones, la dilatación pupilar y los movimientos sacádicos. El eye tracker ha sido escasamente utilizado en el campo de la credibilidad de testimonio; sin embargo, en los últimos años, su implementación ha aumentado debido a su practicidad y a los porcentajes de detección de engaño, cercanos a un 90 % (Carvajal et al., en prensa).

Se halló que los tiempos de fijaciones podrían ser mayores en el momento de engañar; no obstante, los resultados aún no son concluyentes (Cook et al., 2012; Peth, 2014). Así mismo, el número de fijaciones podría indicar el reconocimiento de un estímulo, principalmente, la primera fijación (Gamer y Perstzov, 2018). Por otro lado, los movimientos sacádicos parecen incrementar en personas que engañan (Pavlov y Zlokazov, 2018; Tomer et al., 2018; Vrij et al., 2015).

Por último, otras investigaciones han reportado que la dilatación pupilar es mayor en las personas que engañan (Choi et al., 2016; Proudfoot, et al., 2015; 2016). Esta variable del comportamiento visual podría ofrecer discriminaciones efectivas de engaño en un 84 % (Walczyk et al., 2013).

Comportamiento no verbal y credibilidad

El lenguaje no verbal está compuesto por tres conjuntos de conductas: faciales, movimientos y paralingüísticas. Los comportamientos faciales hacen alusión a las variaciones en las posiciones de partes del rostro; los movimientos se relacionan con los cambios posicionales que ocurren desde el cuello hasta los pies y las conductas paralingüísticas tienen que ver con la producción del mensaje, pero no tienen asociación con el contenido del relato, como las muletillas, el tiempo de respuesta y el tono de voz, entre otros (Vrij, 2008).

Las investigaciones sobre lenguaje no verbal han vinculado diversos tipos de conductas relacionadas con el engaño, las cuales pueden ser agrupadas en las categorías anteriores (facial, movimientos y paralingüística).

Entre las conductas acerca de aspectos faciales, se encuentran incremento en el parpadeo, dilatación pupilar, aumento de movimientos oculares y evitación del contacto visual, entre otros. Respecto a movimientos, se cuentan tocarse o rascarse el cuello, encoger los hombros, cruzar los brazos y movimientos rítmicos de piernas y manos, entre otros (Carvajal et al., 2018). Se ha encontrado que la aversión de la mirada está asociada con el engaño, explicada por el nerviosismo que puede provocar este comportamiento (Bogaard et al., 2016).

En cuanto a aspectos paralingüísticos, se reportan comportamientos como usar oraciones incompletas, frases repetitivas, pausas en el relato, muletillas y cambios súbitos en el tono de voz, entre otros (Carvajal et al., 2018). A pesar del gran entusiasmo y del interés que genera la detección de engaño mediante el lenguaje no verbal, esta estrategia solo debe ser tenida en cuenta con fines de orientación, ya que la gran cantidad de información no verbal presente durante la interacción y las experiencias previas de los evaluadores sobre indicadores de engaño podrían sesgar, desviar y, por tanto, afectar la discriminación de relatos deshonestos (Carvajal et al., 2018).

Comportamiento verbal y credibilidad

Las investigaciones sobre detección de engaño por medio del lenguaje verbal han estado centradas en técnicas de análisis de contenido. No obstante, con la llegada de ordenadores han aparecido otras metodologías como el análisis del estilo lingüístico, que permiten examinar un gran volumen de información en cortos períodos (Andréu, 2000).

El análisis de contenido visibiliza aspectos relacionados con el significado en un mensaje, mientras que el estilo lingüístico, con la sintaxis. En otras palabras, el análisis de contenido alude al qué se dice y el estilo lingüístico, al cómo se dice (Tausczik y Pennebaker, 2010).

Técnicas de análisis de contenido

La literatura muestra la implementación de diversas técnicas, como el análisis de contenido basado en criterios (content based of criteria analysis, CBCA), el control de la realidad (reality monitoring, RM) y el análisis científico de contenido (scientific content analysis, SCAN).

Análisis de contenido basado en criterios (content based of criteria analysis, CBCA)

El CBCA se deriva del protocolo Statement reality assessment (SRA), creado por Udo Undeutsch en Alemania a finales de la década del sesenta y fue retomado y ampliado por Steller y Köhnken a finales de los años ochenta, en el protocolo Statement validity assessment (SVA), el cual está centrado en la evaluación del relato de niños y niñas, presuntas víctimas de abuso sexual. El CBCA está compuesto por diecinueve criterios divididos en cinco categorías: características generales: 1) consistencia lógica; 2) producción no estructurada; 3) cantidad de detalles y características específicas; 4) incorporación contextual; 5) descripciones de interacciones; 6) reproducción de conversación; 7) complicaciones inesperadas durante el incidente y contenido particular; 8) detalles inusuales; 9) detalles superfluos; 10) detalles informados con precisión malentendidos; 11) asociaciones externas relacionadas; 12) cuentas del estado mental subjetivo; 13) atribución del estado mental del autor y componente motivacional; 14) correcciones espontáneas; 15) admitir falta de memoria; 16) plantear dudas sobre el propio testimonio; 17) autodesprecio; 18) perdonar al perpetrador, y 19) detalles característicos del delito (Oberlader, et al., 2016).

Respecto a la evidencia empírica, por medio de este instrumento se ha encontrado que las declaraciones verdaderas son más extensas y aportan mayor cantidad de detalles, a diferencia de relatos falsos o inventados (Bogaard et al., 2019). Sin embargo, a pesar de que la cantidad de detalles se vincula con hecho creíbles, estas características en los relatos deben ser analizadas con cautela, ya que pueden provocar sesgos en la evaluación y juicios erróneos (Manzanero et al., 2019).

Otros estudios han encontrado que puntuaciones altas en este instrumento se han asociado con la credibilidad (Bogaard et al., 2019). No obstante, es necesario tener en cuenta variables personales como la edad, la personalidad y las habilidades para producir engaño, razón por la cual los puntajes del CBCA no deben considerarse como decisivos para la evaluación de credibilidad y requieren evaluaciones complementarias (Schemmel et al., 2020).

Un metaanálisis realizado por Oberlader y otros autores (2016) reportó que la discriminación efectiva de relatos honestos mediante técnicas como el CBCA se

encuentra alrededor de un 70 %. Lo anterior se debe, quizás, a la falta de capacitación y entrenamiento para la implementación adecuada de esta técnica. Ello explicaría la diversidad de resultados que se hallan en la literatura científica, así como al hecho de que estas investigaciones se han desarrollado en contextos de laboratorio, por lo cual es recomendable indagar más acerca del contexto y de los procesos de memoria en ambientes reales (Maier et al., 2018; Roulin y Powell, 2018).

Control de la realidad (reality monitoring, RM)

Esta técnica está basada en el análisis de procesos amnésicos y plantea que los hechos vividos poseen mayor cantidad de detalles externos (del contexto y sensoriales) que internos, como las interpretaciones. El RM examina cuatro aspectos: i) detalles sensoriales; ii) detalles contextuales; iii) significados, y iv) operaciones cognitivas (Arce y Fariña, 2006; Manzanero, 2009; Ruiz et al., 1998).

Estudios empíricos con este instrumento reportaron mayor cantidad de detalles sensoriales y contextuales en relatos vividos (Bogaard et al., 2019). Asimismo, la implementación del RM mejora en un 10 % la discriminación de relatos honestos en comparación con otras técnicas como el CBCA (Oberlader et al., 2016). No obstante, a pesar de que esta técnica podría ser útil para diferenciar los detalles provenientes de fuentes externas e internas, es necesario considerar que cuando la persona engaña o imagina combina detalles vividos con otros inventados, lo cual dificulta aún más la discriminación del engaño (Warren et al., 2018).

Análisis científico de contenido (scientific content analysis, SCAN)

El SCAN fue creado por Sapir en el año 1987, derivado su experiencia poligráfica. Mezcla algunos elementos del análisis de contenido y de palabras para evaluar la credibilidad. Por ejemplo, el SCAN sostiene que los relatos deshonestos hacen mayor uso de introducciones y conjunciones, y muestra una mayor variabilidad en el uso de pronombres (Arce y Fariña, 2006).

Respecto a la evidencia empírica de esta técnica, se observa que la efectividad en la discriminación de relatos honestos y deshonestos es baja, así como la evidencia presente en la literatura científica. Por lo anterior, este procedimiento no es aconsejables para contextos forenses reales, ya que requieren mayor soporte teórico y empírico que sustenten su aplicación (Bogaard et al., 2016; Masip et al., 2002).

Estilo lingüístico

El estilo lingüístico, a diferencia del análisis de contenido, está centrado en cómo se usa el lenguaje, mas no en el significado que se desea transmitir, es decir, el análisis

de contenido está centrado en qué se quiere relatar, mientras que el estilo lingüístico enfatiza en cómo se relata; el análisis de contenido examina la semántica de las palabras, mientras que el estilo lingüístico, la sintaxis y pragmática del lenguaje (Tausczik y Pennebaker, 2010).

Investigaciones han encontrado que a partir del uso de palabras es posible identificar procesos psicológicos que subyacen a la conducta de engaño. También, se ha planteado que existe un uso diferencial de las palabras cuando las personas relatan un hecho honesto y un deshonesto (Duran et al., 2010). En la actualidad hay varias alternativas para analizar el estilo lingüístico, entre las que se encuentran Spacyner, LIWC, algoritmos de machine learning y codificación manual (Kleinberg et al., 2017; Kleinberg et al., 2018; Salerno et al., 2017).

Estas investigaciones han encontrado variaciones en el uso de las palabras en relatos honestos y deshonestos. Por ejemplo, se han observado diferencias en el uso de pronombres y verbos en relatos honestos y deshonestos, lo cual refleja cercanía o distanciamiento social y psicológico del otro con el propósito de mostrarse empático o de evitar el malestar derivado del hecho de engañar (Pennebaker, 2011; Ten Brinke y Porter, 2012). De igual forma, han reportado la cantidad de palabras como una variable útil para la discriminación del engaño (Ali y Levine, 2008; Duran et al., 2009; Duran et al., 2010; Hauch et al., 2015).

Por otro lado, investigaciones de detección de engaño por estilo lingüístico han encontrado diferencias en palabras que expresan emociones. Algunos estudios muestran que, al relatar hechos deshonestos, las personas incluyen palabras que expresan emociones positivas y negativas. Lo anterior aporta evidencia al hecho de que la conducta de engaño implica una alteración en procesos emocionales, reflejada en emociones negativas como la angustia, por la probabilidad de ser descubierto, o en emociones positivas, con el propósito de ser percibido como alguien tranquilo y, por tanto, confiable (Ali y Levine, 2008; Braun y Van Swol, 2016; Buller y Burgoon, 1994; Fornaciari y Poesio, 2013; Villar et al., 2013).

Se ha llegado a reportar discriminación del engaño cercana a un 90 % cuando esta metodología es complementada con análisis estadísticos robustos (Hernández y Calvo, 2017). Acorde con lo anterior y sumada a la agilidad de su implementación, se convierte en una alternativa útil para ser aplicada en contextos forenses reales (Crabb, 2014; Vrij et al., 2007).

Metodología

Diseño

En esta investigación se elaboró una revisión de alcance sobre la detección de engaño a partir de las respuestas psicofisiológicas, el comportamiento no verbal y el lenguaje verbal. La revisión de alcance aborda literatura específica y delimitada sobre un tema determinado (Arksey y O'Malley, 2005).

Procedimiento

Esta investigación tuvo cuatro fases: 1) delimitación de palabras clave y operación de búsqueda; 2) búsqueda de documentos; 3) revisión de documentos, y 4) sistematización de información. En la primera etapa se delimitaron las palabras clave y las operaciones de búsqueda a partir de las comunalidades en las palabras clave encontradas en los primeros documentos revisados. Derivado de lo anterior, se utilizaron las siguientes operaciones de búsqueda “deception detection”, psychophysiology AND deception, “non verbal language” AND deception, “content analysis” AND deception, “linguistic style” AND deception, “detección de mentiras, psicofisiología y engaño”, “lenguaje no verbal” y engaño, “análisis de contenido” y engaño, “estilo lingüístico” y engaño, en las bases de datos Scielo, Redalyc Scopus, ScienceDirect, Proquest y EbscoHost publicados entre 2007 y 2020.

En la segunda fase se procedió a buscar los documentos publicados en las bases de datos mencionadas y se seleccionaron aquellos relacionados con la detección del engaño en contextos jurídicos. En la tercera fase se revisaron los documentos seleccionados y en la cuarta se organizó y sistematizó la información.

Conclusiones

Existen varias alternativas para la detección del engaño, según las respuestas psicofisiológicas, así como el comportamiento no verbal y el lenguaje verbal. Esta diversidad posiblemente se deriva de la dificultad que implica el hecho de engañar, ya que incluye adiciones, omisiones y distorsiones de información por medio de diferentes modalidades y canales sensoriales (Cameron et al., 2015; Csaba, 2013).

Por lo general, las personas sobreestiman su capacidad de detección de engaño, pero su efectividad está alrededor de un 50 %, por lo cual hacer uso de estas estrategias es una necesidad (Masip, 2005; Peth, 2014).

En cuanto a los hallazgos de los estudios sobre respuestas psicofisiológicas, se formulan al menos dos conclusiones. La primera se relaciona con el hecho de que

engañar implica activación psicofisiológica, evidente en indicadores cardiovasculares, respiración, respuesta galvánica de la piel y actividad cerebral, debida al esfuerzo cognitivo que requiere la conducta de engaño para lograr convencer y manipular al otro (Carvajal, 2017).

La segunda conclusión que puede extraerse y que está relacionada con lo anterior es el papel de las zonas frontales del cerebro en el momento de engañar, lo cual tiene que ver con la necesidad de planeación e inhibición que exige la ejecución exitosa de este comportamiento y que está ligada al esfuerzo cognitivo.

Por otra parte, se advirtió que las investigaciones sobre conducta no verbal son escasas y que, si bien esta perspectiva de detección de engaño despierta un amplio interés, los productos de estos procedimientos deben tomarse con cautela y deben ser complementadas con otros instrumentos y otras perspectivas para potenciar y corroborar la información obtenida (Carvajal et al., 2018).

Existen variadas técnicas para examinar el comportamiento verbal con el propósito de establecer la credibilidad de un relato. No obstante, se aprecia una producción predominante acerca del análisis de contenido. Sin embargo, esta alternativa exige entrenamiento para ser empleada correctamente y no ofrece la agilidad suficiente para ser utilizada ampliamente en contextos reales que precisen rapidez para revisar la extensa cantidad de elementos probatorios (Fuller et al., 2009; Kleinberg et al., 2017; Masip et al., 2012). En este sentido, el estilo lingüístico ofrece una alternativa objetiva para abarcar gran cantidad de información en cortos períodos, lo que la convierte en una opción viable en contextos forenses, que no solo podría abordar la credibilidad de un relato, sino también los procesos psicológicos que subyacen al comportamiento (Crabb, 2014; Lee, 2017; Vrij et al., 2007).

En resumen, el engaño es un comportamiento complejo que precisa una evaluación integral, es decir, para lograr una adecuada valoración de la credibilidad es necesario hacer análisis complementarios mediante varias metodologías, con el propósito de ofrecer un concepto de credibilidad más sólido que permita tomar mejores y más rápidas decisiones judiciales y de investigación.

Referencias

- Abe, N., Okuda, J., Suzuki, M., Sasaki, H., Matsuda, T., Mori, E., Tsukada, M. y Fuji, T. (27 de marzo de 2008). Neural Correlates of True Memory, False Memory, and Deception. *Cerebral Cortex* 2, 18(12), 2811-2819. doi: 10.1093/cercor/bhn037
- Ali, M. y Levine, T. (7 de noviembre de 2008). The Language of Truthful and Deceptive Denials and Confessions. *Communication Reports*, 21(2), 82-91. doi: <https://doi.org/10.1080/08934210802381862>

- Andréu, A. (2000). *Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada* [Archivo PDF]. <http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf>
- Arce, R. y Fariña, F. (2006). Psicología del testimonio y evaluación cognitiva de la veracidad de testimonios y declaraciones. En J. Sierra, E. Jiménez y G. Buela (coords.), *Psicología forense: manual de técnicas y aplicaciones* (pp. 563-601). Biblioteca Nueva.
- Arksey, H. y O'Malley, L. (2005). Scoping Studies: Towards a Methodological Framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19-32. doi: <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Bedoya, S., Belalcázar, H., Loaiza, H., Nope, S., Pinedo, C. y Restrepo, A. (2017). Detección de mentiras por medio del análisis de imágenes térmicas del rostro. *Revista Facultad de Ingeniería*, 26(44), 47-59. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0121-11292017000100047&lng=en&nrm=iso&tlng=es
- Bogaard, G., Colwell, K. y Crans, S. (2019). Using the Reality Interview Improves the Accuracy of the Criteria-Based Content Analysis and Reality Monitoring. *Applied Cognitive Psychology*, 33(6), 1018-1031. doi: <https://doi.org/10.1002/acp.3537>
- Bogaard, G., Meijer, E., Vrij, A. y Merckelbach, H. (25 de febrero de 2016). Scientific Content Analysis (SCAN) Cannot Distinguish between Truthful and Fabricated Accounts of a Negative Event. *Frontiers in Psychology* 7. doi: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00243>
- Bowman, H., Filetti, M., Alsufyani, A., Janssen, D. y Su, L. (7 de marzo de 2014). Countering Countermeasures: Detecting Identity Lies by Detecting Conscious Breakthrough. *Plos One*, 9(3). doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090595>
- Braun, M. y Van Swol, L. (2016). Justifications Offered, Questions Asked, and Linguistic Patterns in Deceptive and Truthful Monetary Interactions. *Group Decision and Negotiation* 25, 641-661. doi: <https://doi.org/10.1007/s10726-015-9455-5>
- Breska, A., Zaindenberg, D., Gronau, N. y Ben-Shakhar, G. (2014). Psychophysiological Detection of Concealed Information Shared by Groups: An Empirical Study of the Searching CIT. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 20(2), 136-146. doi: <https://doi.org/10.1037/xap0000015>
- Builes, J. y Gutiérrez, C. (2018). Instrumentos, medidas, procedimientos y procedencia de los estudios producidos para la detección del engaño a través de medidas psicofisiológicas. *Revista Criminalidad*, 60(2), 75-88. <http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v60n2/1794-3108-crim-60-02-00075.pdf>
- Buller, D. y Burgoon, J. (1994). Interpersonal deception: III. Effects of Deceit on Perceived Communication and Nonverbal Behavior Dynamics. *Journal of Nonverbal Behavior*, 18(2), 155-184. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02170076>
- Camargo, A., Urrea, C. y Mongui, J. (2016). *Medición de patrones de actividad cerebral registrados con el equipo de EEG Emotiv-Epoc, como indicador de engaño en estudiantes universitarios* [Tesis de especialización, Fundación Universitaria Los Libertadores]. <http://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/797/CamargoAndrés.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

- Cameron, M., Gudaitis, T., Holt, T. y Kilger, M. (2015). *Deception in the Digital Age*. Elsevier.
- Carvajal, J. (2017). Detección de engaño a través de medidas psicofisiológicas y carga cognitiva como alternativa explicativa. En Y. Gómez, A. Ceballos y O. Ruiz (comps.), *Congreso Desafíos de la psicología. Un compromiso con la salud y el bienestar* (pp. 50-53). Universidad de Nariño. http://sired.udenar.edu.co/6007/1/Desafios_de_la_Psicologia2017.pdf
- Carvajal, J., Blanco, C. y López, M. (2018). Validación de indicadores de mentira a través del lenguaje no verbal. *Misión Jurídica*, 11(14), 173-187. doi: <https://doi.org/10.25058/1794600X.904>
- Carvajal, J., Gómez, E. y Barreto, I. (en prensa). Comportamiento visual y engaño. *Anuario de Psicología*.
- Chatterjee, S., Thapliyal, H., Kacker, P y Selwin, G. (2019). Facial Psychophysiology in Forensic Investigation: A Novel Idea for Deception Detection. *Journal of Forensic Dental Sciences*, 11(2), 90-94. <https://www.jfds.org/text.asp?2019/11/2/90/276636>
- Chen, Z., Xue, L., Yiang, C., Wang, L., Mei, W., Zhang, Q. y Zhao, H. (2015). Specific Marker of Feigned Memory Impairment: The Activation of Left Superior Frontal Gyrus. *Journal of Forensic and Legal Medicine* 36, 164-171. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jflm.2015.09.008>
- Choi, H., Kim, S., Lee, S. y Lee, J. (2016). A Possibility of Pupil Diameter as Reliable Index for Lie Detection. *International Journal of Psychophysiology* 108, 150. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2016.07.435>
- Cook, A., Hacker, D., Webb, A., Osher, D., Kristjansson, S., Woltz, D. y Kircher, J. (2012). Lying Eyes: Ocular-motor Measures of Reading Reveal Deception. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 18(3), 301-313.
- Crabb, E. (2014). "Time for Some Traffic Problems": Enhancing E-Discovery and Big Data Processing Tools with Linguistic Methods for Deception Detection. *Journal of Digital Forensics, Security and Law*, 9(2). doi: <https://doi.org/10.15394/jdfsl.2014.1179>
- Csaba, K. (2013). The Influence of Stimulation/Accommodation Tests for the Polygraph Examination Economy. *Forensic Science*, 14(4), 1404-1410.
- DePaulo, B., Malone, B., Muhlenbruck, L., Charlton, K. y Cooper, H. (2003). Cues to Deception. *Psychological Bulletin*, 129(1), 74-118. doi: <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.1.74>
- Ding, X., Du, X., Lei, D., Hu, C., Fu, G. y Chen, G. (2012). The Neural Correlates of Identity Faking and Concealment: An fMRI Study. *Plos One*, 7(11). doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048639>
- Ding, X., Gao, X., Fu, G. y Lee, K. (2013). Neural Correlates of Spontaneous Deception: A Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) Study. *Neuropsychologia*, 51(4), 704-712. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.12.018>
- Ding, X., Sai, L., Fu, G., Liu, J. y Lee, K. (2014). Neural Correlates of Second-Order Verbal Deception: A Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) Study. *Neuroimage* 87, 505-514. doi: [10.1016/j.neuroimage.2013.10.023](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.10.023)

- Duran, N., Crossley, S., Hall, C., McCarthy, P. y McNamara, D. (19-21 de marzo de 2009). *Expanding a Catalogue of Deceptive Linguistic Features with NLP Technologies*. 22nd International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, FLAIRS-22, Florida, Estados Unidos.
- Duran, N., Hall, C., McCarthy, P. y McNamara, D. (2010). The Linguistic Correlates of Conversational Deception: Comparing Natural Language Processing Technologies. *Applied Psycholinguistics*, 31(3), 439-462. doi: <https://doi.org/10.1017/S0142716410000068>
- Ebrahimzadeh, E., Alavi, S., Bijar, A. y Pakkeshal, A. (2013). A Novel Approach for Detection of Deception Using Smoothed Pseudo Wigner-Ville Distribution (SPWVD). *Journal Biomedical Science and Engineering*, 6(1), 8-18. doi: <http://dx.doi.org/10.4236/jbise.2013.61002>
- Elaad, E. (2011). Effects of Incomplete Information on the Detection of Concealed Crime Details. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 36(3), 159-171. doi: <https://doi.org/10.1007/s10484-011-9153-2>
- Elaad, E. y Sommerfeld, E. (2016). Effects of Guilt, Disbelief, and Assessed Lie-Truth Telling Abilities on Physiological Responses in the Guilty Action Test. *Psychology*, 7(8), 1075-1091. doi: <http://dx.doi.org/10.4236/psych.2016.78108>
- Espinosa, A. (2011). La psicología del testimonio. En G. Hernández, *Psicología jurídica iberoamericana* (pp. 197-229). Manual Moderno.
- Farahani, E. y Moradi, M. (2013). A Concealed Information Test with Combination of ERP Recording and Autonomic Measurements. *Neurophysiology* 45, 223-233.
- Fornaciari, T. y Poesio, M. (2013). Automatic Deception Detection in Italian Court Cases. *Artificial Intelligence and Law* 21, 303-340. doi: <https://doi.org/10.1007/s10506-013-9140-4>
- Fuller, C., Biros, D. y Wilson, R. (2009). Decision Support for Determining Veracity Via Linguistic-Based Cues. *Decision Support Systems*, 46(3), 695-703. doi: <https://doi.org/10.1016/j.dss.2008.11.001>
- Gamer, M. y Perstzov, Y. (2018). Detecting Conceal Knowledge from Ocular Response. En P. Rosenfeld (ed.), *Detecting Concealed Information and Deception: Recent Developments* (pp. 169-186). Academic Press.
- Gao, J., Lu, L., Yang, Y., Yu, G., Na, L. y Rao, N. (2012). A Novel Concealed Information Test Method Based on Independent Component Analysis and Support Vector Machine. *Clinical EEG and Neuroscience*, 43(1), 54-63. doi: <https://doi.org/10.1177/1550059411428715>
- Gao, J., Wang, Z., Yang, Y., Zhang, W., Tao, C., Guan, J. y Rao, N. (2013). A Novel Approach for Lie Detection Based on F-Score and Extreme Learning Machine. *Plos One*, 8(6). doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0064704>
- Hauch, V., Blandón, J., Masip, J. y Sporer, S. (2015). Are Computers Effective Lie Detectors? A Meta-Analysis of Linguistic Cues to Deception. *Personality and Social Psychology Review*, 19(4), 307-342. doi: <https://doi.org/10.1177/1088868314556539>

- Hernández, A. y Calvo, H. (2017). Deceptive Text Detection Using Continuous Semantic Space Models. *Intelligent Data Analysis*, 21(3), 679-695. doi: <https://doi.org/10.3233/IDA-170882>
- Isaychev, S., Edrenkin, I., Chernorizov, A. e Isaychev, E. (2011). Event Related Potentials in Deception Detection. *Psychology in Russia: State of Art*, 5(1), 438. doi: 10.11621/pir.2011.0029
- Ito, A., Abe, N., Fujii, T., Ueno, A., Koseki, Y., Hashimoto, R., Mugikurab, S., Takahashib, S. y Mori E. (2011). The Role of the Dorsolateral Prefrontal Cortex in Deception when Remembering Neutral and Emotional Events. *Neuroscience Research*, 69(2), 121-128. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neures.2010.11.001>
- Kleinberg, B., Mozes, M., Arntz, A. y Verschuere, B. (2017). Using Named Entities for Computer-Automated Verbal Deception Detection. *Journal of Forensic Sciences*, 63(3), 714-723. doi: <https://doi.org/10.1111/1556-4029.13645>
- Kleinberg, B., Warmelink, L., Arntz, A. y Verschuere, B. (2018). The First Direct Replication on Using Verbal Credibility Assessment for the Detection of Deceptive Intentions. *Applied Cognitive Psychology*, 32(5), 592-599. doi: <https://doi.org/10.1002/acp.3439>
- Lee, R. (2017). *The Multifaceted Measurement of the Individual Through Language* [Tesis de Doctorado, Universidad de Texas]. <https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/47328/BOYD-DISSERTATION-2017.pdf?sequence=1>
- Lisofsky, N., Kazzer, P., Heekeren, H. y Prehn, K. (2014). Investigating Socio-Cognitive Processes in Deception: A Quantitative Meta-Analysis of Neuroimaging Studies. *Neuropsychologia* 61, 113-122. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2014.06.001>
- Maier, B., Niehaus, S., Wachholz, S. y Volbert, R. (2018). The Strategic Meaning of CBCA Criteria from the Perspective of Deceivers. *Frontiers in Psychology* 9, 855. doi: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00855>
- Manzanero, A. (2009). Análisis de contenido de memorias autobiográficas falsas. *Anuario de Psicología Jurídica* 19, 61-72.
- Manzanero, A. y González, J. (2015). Modelo holístico de evaluación de la prueba testifical (HELPT). *Papeles del psicólogo*, 36(2), 125-138. <http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2568.pdf>
- Manzanero, A., Scott, T., Vallet, R., Aróztegui, J. y Bull, R. (2019). Criteria-based Content Analysis in True and Simulated Victims with Intellectual Disability. *Anuario de Psicología Jurídica* 29, 55-60. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6823665>
- Masip, J. (2005). ¿Se pillan antes a un mentiroso que a un cojo? Sabiduría popular frente a conocimiento científico sobre la detección no-verbal del engaño. *Papeles del psicólogo*, 26(92), 78-91. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77809203>
- Masip, J., Bethencourt, M., Lucas, G., Sánchez, M. y Herrero, C. (2012). Deception Detection from Written Accounts. *Scandinavian Journal of Psychology*, 53(2), 103-111. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2011.00931.x>

- Masip, J., Garrido, E. y Herrero, C. (2002). La detección de la mentira mediante la técnica Scan. *Psicopatología clínica, legal y forense*, 2(2), 39-62. <https://www.researchgate.net/publication/235685664>
- Mejía, M., García, E. y Cediél, K. (2019). Estudio de respuestas psicofisiológicas asociadas con la valoración de la honestidad en una muestra de empleados administrativos y operativos. *Revista virtual Universidad Católica del Norte* (57), 100-116. doi: <https://doi-org.ucatolica.basesdedatos.ezproxy.com/10.35575/rvucn.n57a8>
- Oberlader, V., Naefgen, C., Koppehele, J., Quinten, L. y Schmidt, A. (2016). Validity of Content-Based Techniques to Distinguish True and Fabricated Statements: A Meta-Analysis. *Law and Human Behavior*, 40(4), 440-457. doi: 10.1037/lhb0000193
- Pavlov, Y. y Zlokazov, K. (2018). Deception Detection by Means of Eye-Tracking in the Concealed Information Test. *International Journal of Psychophysiology* 131, 169-184. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.07.425>
- Pennebaker, J. (2011). *The Secret Life of Pronouns. What Our Words Say about Us*. Bloomsbury Press.
- Peth, J. (2014). *Emotional Modulation of Memory Encoding and Retrieval in the Concealed Information Test* [Tesis de Doctorado, Hospital Universitario Hamburg-Eppendorf]. <https://ediss.sub.uni-hamburg.de/bitstream/ediss/5554/1/Dissertation.pdf>
- Peth, J., Sommer, T., Hebart, M., Vossel, G., Büchel, C. y Gamer, M. (2015). Memory Detection Using fMRI -Does the Encoding Context Matter. *Neuroimage* 113, 164-174. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.03.051>
- Proudfoot, J., Jenkins, M., Burgoon, J. y Nunamaker, J. (2015). Deception is in the Eye of the Communicator: Investigating Pupil Diameter Variations in Automated Deception Detection Interviews. En *The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI)* (pp. 97-102). doi: 10.1109/ISI.2015.7165946
- Proudfoot, J., Jenkins, M., Burgoon, J. y Nunamaker, J. (2016). More than Meets the Eye: How Oculometric Behaviors Evolve over the Course of Automated Deception Detection Interactions. *Journal of Management Information Systems*, 33(2), 332-360. doi: <https://doi.org/10.1080/07421222.2016.1205929>
- Roulin, N. y Powell, D. (2018). Identifying Applicant Faking in Job Interviews: Examining the Role of Criterion-Based Content Analysis and Storytelling. *Journal of Personnel Psychology*, 17(3), 143-154. doi: <https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000207>
- Ruiz, J., Cuevas, I. y López, I. (1998). El proceso de control de la realidad en sujetos con propensión a la alucinación. *Psicothema*, 10(1), 41-52.
- Sai, L., Zhou, X., Ding, X., Fu, G. y Sang, B. (11 de febrero de 2014). Detecting Concealed Information Using Functional Near-Infrared Spectroscopy. *Brain Topography* 27, 652-662. doi: <https://doi.org/10.1007/s10548-014-0352-z>
- Salerno, J., Bottoms, B. y Hagene, L. (2017). Individual Versus Group Decision Making: Jurors' Reliance on Central and Peripheral Information to Evaluate Expert Testimony. *Plos One*, 12(9). doi: 10.1371/journal.pone.0183580

- Schemmel, J., Maier, B. y Volbert, R. (2020). Verbal Baseline Within-Subject Consistency of CBCA Scores across Different Truthful and Fabricated Accounts. *The European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 12(1), 35-42. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7230451>
- Sip, K., Carmel, D., Marchant, J., Li, J., Petrovic, P., Roestorpf, A., McGregor, W. y Frith, C. (4 de febrero de 2013). When Pinocchio's Nose Does Not Grow: Belief Regarding Lie-Detectability Modulates Production of Deception. *Frontiers in Human Neuroscience* 7, 1-11. doi: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00016>
- Sowdwen, S., Wright, G., Banissy, M., Catmur, C. y Bird, G. (2015). Transcranial Current Stimulation of the Temporoparietal Junction Improves Lie Detection. *Current Biology*, 25(18), 2447-2451. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.08.014>
- Staunton, C. y Hammond, S. (2011). An Investigation of the Guilty Knowledge Test Polygraph Examination. *Journal of Criminal Psychology*, 1(1), 1-14. doi: 10.1108/20093829201100001
- Ströfer, S., Noordzij, M., Ufkes, E. y Giebels, E. (2015). Deceptive Intentions: Can Cues to Deception Be Measured before a Lie Is Even Started? *Plos One*, 10(5). doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125237>
- Tausczik, Y. y Pennebaker, J. (2010). The Psychological Meaning of Words: LIWC and Computerized Text Analysis Methods. *Journal of Language and Social Psychology*, 29(1), 24-54. doi: <https://doi.org/10.1177/0261927X09351676>
- Ten Brinke, L. y Porter, S. (2012). Cry Me a River: Identifying the Behavioral Consequences of Extremely High-Stakes Interpersonal Deception. *Law and Human Behavior*, 36(6), 469-477. doi: <https://doi.org/10.1037/h0093929>
- Teufel, C., Alexis, D., Todd, H., Lawrence, A., Clayton, N. y Davis, G. (2009). Social Cognition Modulates the Sensory Coding of Observed Gaze Direction. *Current Biology*, 19(15), 1274-1277. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.05.069>
- Tomer, E., Lupu, T., Golan, L., Wagner, M. y Braw, Y. (5 de septiembre de 2018). Eye Tracking as a Mean to Detect Feigned Cognitive Impairment in the Word Memory Test. *Applied Neuropsychology: Adult* 27, 1-13. doi: <https://doi.org/10.1080/23279095.2018.1480483>
- Valverde, M., Ruiz, J. y Llor, B. (2013). Valoración de la credibilidad de testimonio: aplicación del modelo Reality Monitoring. *Revista Internacional de Psicología*, 12(2), 1-30. doi: <https://doi.org/10.33670/18181023.v12i02.68>
- Villar, G., Arciuli, J. y Patterson, H. (2013). Remorse in Oral and Handwritten False Confessions. *Legal and Criminological Psychology*, 19(2), 255-269. doi: <https://doi.org/10.1111/lcrp.12012>
- Vrij, A. (2008). *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*. Wiley-Interscience.
- Vrij, A., Mann, S., Kristen, S. y Fisher, R. (2007). Cues to Deception and Ability to Detect Lies as a Function of Police Interview Styles. *Law and Human Behavior*, 31(5), 499-518. doi: <https://doi.org/10.1007/s10979-006-9066-4>
- Vrij, A., Oliveira, J., Hammond, A. y Erhlichman, H. (2015). Saccadic Eye Movement Rate as Cue to Deceit. *Journal of Applied Research of Memory and Cognition* 4, 15-19. doi: 10.1016/j.jarmac.2014.07.005

- Walczyk, J., Griffith, D., Yates, R., Visconte, S. y Simoneaux, B. (2013). Eye Movements and Other Cognitive Cues to Rehearsed and Unrehearsed Deception when Interrogated about a Mock Crime. *Applied Psychology in Criminal Justice*, 9(1), 1-23. <https://www.researchgate.net/publication/284635823>
- Wang, H., Chang, W. y Zhang, C. (1 de julio de 2016). Functional Brain Network and Multichannel Analysis for the P300-Based Brain Computer Interface System of Lying Detection. *Expert Systems with Applications* 53, 117-128. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2016.01.024>
- Warmelink, L., Vrij, A., Mann, S., Leal, S., Forrester, D. y Fisher, R. (2011). Thermal Imaging as a Lie Detection Tool at Airports. *Law Human Behavior*, 35 (1), 40-48. doi: <https://doi.org/10.1007/s10979-010-9251-3>
- Warren, K., Peterson, C. y Gillingham, C. (2018). Children Who are Coached to Lie: Does Linguistic Analysis Help in Understanding Why These Children are so Believable? *Psychiatry, Psychology and Law*, 25 (5), 789-805. doi: <https://doi.org/10.1080/13218719.2018.1478336>

Luis Orlando Jiménez Ardila*
Universidad Católica de Colombia

La psicología del menor de edad y de la familia es el subcampo de la psicología jurídica que se interesa por los problemas psicojurídicos que afectan a la unidad familiar; centran su atención en el individuo y el grupo familiar, al cual considera fuente para modelar y moldear comportamientos tanto negativos como proactivos. Esta es un área en construcción, que estudia a las personas menores de edad como unidades psicojurídicas de análisis para contribuir al proceso de protección y restablecimiento de sus derechos por parte de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley frente al abuso, a la negligencia y al daño psicológico.

Se abordan fenómenos psicológicos como la personalidad y los estados emocionales, cognitivos y parentales que inciden en el adecuado crecimiento de los niños, pues son los referentes para la adquisición de competencias sociales y ciudadanas como antesala para el ejercicio de los propios derechos y las responsabilidades en la vida adulta.

También es de su interés la familia, que tiene una función educadora y constituye el núcleo de la sociedad, pero que a la vez es el origen de estabilidad o inestabilidad psíquica infantil, pues es el escenario probable para el maltrato infantil y la violencia conyugal, que pueden ocasionar consecuencias importantes que se traducen en alteraciones del comportamiento y del desarrollo funcional.

El profesional dedicado a este subcampo ayuda al conocimiento y empoderamiento de las reglas jurídicas, tanto para el goce y la exigencia de los derechos como para el cumplimiento de los deberes, por medio de la descripción de modelos de intervención psicojurídica de víctimas e infractores menores de edad, susceptibles de aplicar en el marco de la ley. De igual manera, diseña programas de sensibilización para los funcionarios sobre la necesidad de utilizar técnicas de evaluación forense en el trabajo de protección a niñas, niños y adolescentes que eventualmente se vean involucrados como víctimas o agresores en procesos judiciales, con el objetivo de intervenir en las situaciones anómalas.

* Psicólogo, especialista en Ciencia Forenses, magíster en Psicología y doctor en Psicología. Coordinador del programa de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

* <https://orcid.org/0000-0003-0191-3832>

La jurisdicción del menor de edad y la familia, por su objetivo misional, requiere profesionales de la psicología que tengan la capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios en auxilio de los operadores jurídicos para resolver el tema de los menores de edad infractores, el restablecimiento de sus derechos y la corresponsabilidad parental. El psicólogo de esta área trabaja fundamentalmente en contextos psicojurídicos y psicosociales comunitarios, de cara a problemas relacionados con violencia escolar y doméstica; cuidado parental; guarda y custodia de menores de edad; análisis de los conflictos de las familias; niños, niñas y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad, y evaluación de los aspectos psicológicos concernientes a la interdicción de derechos. Según Hoyos (2002) también puede asesorar al juez de familia en eventos de separación y divorcio, adopción, acogimiento y matrimonio de menores de edad. Asimismo, le compete evaluar la idoneidad de los padres para la custodia de sus hijos, brindar orientaciones psicojurídicas para establecer el régimen de visitas en el caso de custodia compartida, determinar los efectos psicológicos de la separación o del divorcio, examinar las competencias de los aspirantes a adopción y evaluar psicológicamente al candidato a ser adoptado y hacer recomendaciones de manejo a la familia adoptante.

Según Fariña y otros autores (2005), existen dos psicologías relacionadas: i) la psicología jurídica del menor de edad, la cual se puede conceptualizar como la investigación que construye conocimiento psicológico para la prevención e intervención de sus necesidades y la protección de sus derechos, y ii) la psicología jurídica de la familia, porque esta gira, en buena medida, en torno a los menores de edad que la integran, lo que significa que las actuaciones de los operadores jurídicos que se lleven a cabo con la familia deben tener en cuenta el interés superior del Estado en su protección.

Referencias

- Fariña, F., Arce, R. y Novo, M. (2005). *Psicología jurídica del menor y de la familia*. Xunta de Galicia, Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local.
- Hoyos, C. (2002). *Manual de psicología jurídica*. Señal editora.

4

PSICOLOGÍA JURÍDICA EN EL CONTEXTO DE NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y FAMILIA

Carlos Alfonso Murillo*

Introducción

En este capítulo se hará un acercamiento a los problemas que rodean a NNA y sus familias y además se reconocerán los contextos jurídicos normativos especializados desde los cuales se abordan, así como los aspectos procedimentales y las autoridades administrativas, jurisdiccionales y judiciales con los que tendría que ver un psicólogo en su ejercicio profesional.

Se expondrán aproximaciones a la investigación administrativa y judicial del maltrato infantil en Colombia, la violencia intrafamiliar, los asuntos susceptibles de conciliación y la participación de los psicólogos en procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos, la acción de protección por violencia intrafamiliar y la investigación del eventual delito en sede judicial.

* <https://orcid.org/0000-0003-2012-4513>

También se examinarán escenarios de controversia litigiosa en cuanto a derechos debatidos a propósito de la patria potestad en sede administrativa y jurisdiccional (atribución de custodia, visitas y otros derechos derivados del ejercicio de la patria potestad).

Finalmente se revisará el procedimiento especial para la atención de NNA cuando son víctimas o testigos de delitos.

La voz de niños, niñas y adolescentes

Es esencial destacar el papel protagónico de la psicología jurídica en lo atinente a la voz de niños, niñas y adolescentes (NNA) en los procesos litigiosos o de vulneración de derechos en los que estén involucrados y la clave se halla en la Convención internacional sobre los derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de enero de 1989. Encontramos, por contraste, un principio establecido en el Preámbulo, que indica: “El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1989). A su vez, la misma Convención estipula el derecho del niño a ser escuchado:

Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que [lo afecte], ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional (ONU, 1989, art. 12).

Lo anterior ha abierto progresivamente el espacio a la psicología jurídica en dos circunstancias controversiales y de discusión jurisprudencial: por un lado, se predica en el contexto normativo una suerte de inmadurez psicológica de NNA y, por otra, la imperiosa necesidad de traer su voz a los escenarios legales y administrativos de protección, sumado a que media en sus circunstancias particulares la representación legal de un adulto, por lo general, sus progenitores o uno de ellos.

En una investigación titulada *Conveniencia de la participación de los niños en el proceso de mediación* (2015), se considera que este dispositivo tiene como intención favorecer la resolución de los conflictos teniendo en cuenta a todos los integrantes que conforman el núcleo familiar y responder a los intereses de niños y niñas que

se encuentran inmersos en la situación por medio de los padres, lo que limita su participación directa. Por lo anterior, en ese trabajo se sostiene que los intentos de limitar la participación de NNA son retrógrados y que es necesario un cambio legislativo que contemple el proceso de mediación desde el punto de vista del modelo circular narrativo, que deje de lado la consideración lineal centrada en los intereses de los padres (Alarcón, 2015). Contraria a la postura de la prevalencia de los intereses del adulto sobre los del niño, bajo la premisa de que hay que protegerlo por su estado de indefensión e inmadurez, incluso legalmente tanto antes como después del nacimiento, predicada en el Preámbulo de la Convención Internacional de derechos de los Niños, surge una investigación que sostiene que hay que escuchar activamente al niño y plantea que escuchar al niño, sin criterios de necesidad u oportunidad, supone oírlo, tomar en consideración lo que dice y presumir su capacidad para formarse un juicio propio (Zaera, 2015).

Se destaca la tesis de que la escucha técnica, rigurosa y documentada —como podría ser, por ejemplo, desde la psicología jurídica— es desestimada en el sistema judicial o administrativo de protección a menores de edad. El estudio *La voz de los niños en la justicia de familia de Chile* concluye que:

[...] la obtención de acuerdos entre las partes también incide en esta participación, ya que, aparentemente, los operadores del sistema judicial —principalmente, jueces, abogados y consejeros técnicos— no consideran necesario oír al niño en aquellos casos en que los adultos logran resolver sus controversias vía acuerdos (Vargas y Correa, 2011, p. 202).

Asimismo, el sistema general de protección a NNA ha reconocido la importancia de la obtención de evidencia científica desde la psicología para la adecuada toma de decisiones. Por lo anterior “se vuelve ineludible revisar los conceptos sobre incapacidad establecidos en la legislación interna, originados en la doctrina de la situación irregular y contradictoria con la noción del niño como sujeto de derecho” (Novella, 2010, p. 148).

No obstante, Ramiro (2016) insiste en que sigue primando “una visión paternalista de la infancia y de su ciudadanía y el énfasis en la autoridad y la familia como espacio de socialización cívica” (p. 144), lo cual indica que a NNA inmersos en el sistema de responsabilidad penal los siguen procesando desde esta mirada y no desde la evidencia científica. Esta mirada judicial ha ido cambiando de forma progresiva. Llovet y Litichever (2010) sostienen que el sistema de protección de menores de edad incurre en inadecuados análisis no soportados y concluyeron que:

Los términos culturales y psicosociales son dominantes en la descripción de la población vulnerable. La legislación actual y las políticas son desarrolladas de manera no acorde a los cambios presentados en la población y por tanto no responden a sus necesidades (p. 10).

Lo anterior da cuenta de que en los últimos años se han suscitado investigaciones respecto a la importancia de no caer en prejuizgamientos a propósito de la edad psicológica, inmadurez psicológica o de miradas paternalistas a la infancia involucrada en controversias administrativas o judiciales, sino en la evidencia protagónica que ha tomado la psicología jurídica; también ha mostrado que, en ciertos escenarios donde se discuten derechos de NNA, es imprescindible la psicoeducación, en particular para adolescentes infractores o contraventores de la ley. Al respecto, Gómez y Ruiz (2011) afirman que:

Se tiene que promover el crecimiento personal y desarrollo emocional de cada menor de edad en todos los procesos donde ellos intervengan, y sean tratados como sujetos de derecho, capaces de tomar decisiones y formarse un juicio propio sobre el asunto. No como objetos del proceso. Las personas mayores de edad, las cuales velan por sus intereses, sean quienes decidan por ellos y digan lo que mejor les convenga, puesto que en muchos de los casos, los menores están preparados tanto emocional como psicológicamente para poder enfrentarse a la toma de una decisión que afecte su presente y futuro (p. 190).

No es menos cierta la necesidad de recurrir a la intervención de especialistas en evaluación a NNA, habida cuenta de que investigaciones en tal sentido así lo indican. Barna (2014) encontró que:

Al mismo tiempo, los valores asociados a la negociación, el acuerdo y la elaboración consensuada de estrategias que vienen de suyo con la “novedosa” concepción del niño como sujeto de derechos, impone a los agentes estatales la necesidad de producir constantes clasificaciones formales sobre los niños, que permitan estimar, entre otras cosas, si es confiable, responsable u honesto o, por el contrario, manipulador, mentiroso, o conflictivo (p. 120).

Como se observa, son copiosos los retos que se proponen a los psicólogos que desarrollan su gestión profesional en estos contextos donde la psicología jurídica va ganando espacio, como una gestión disciplinar mucho más amplia que la psicología forense que invita a crear nuevos escenarios de aplicación:

Se trata, sin duda, de una “voz mediada” por terceros, pues el profesional traduce o interpreta lo que los niños dicen, piensan o quieren. Sin embargo, no es posible saber nada acerca de la calidad de esa “mediación” —qué se recoge, qué se deja de lado, cómo se enfoca la entrevista, etc.—, porque ello es oscuro al análisis realizado.

Sin perjuicio de lo anterior, constatamos que algunos jueces, consejeros técnicos y abogados de familia, consideran que estos informes sirven —incluso más que la audiencia reservada— para conocer los deseos y sentimientos de los niños, especialmente si se trata de niños pequeños (Vargas y Correa, 2011, p. 190).

El maltrato infantil y los procesos administrativos de restablecimiento de derechos

Una vez situada la voz de NNA en el primer escenario que se impone a los psicólogos en escenarios psicojurídicos sigue el de la actuación cuando los derechos son vulnerados, a la luz de lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia, que reza:

Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.

Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona (Congreso de la República, 2006b, art. 18).

De la anterior definición se desprenden diversos campos de actuación para el psicólogo, de acuerdo con el tipo de maltrato a intervenir y la autoridad que actúe, sea administrativa (defensor de familia) o jurisdiccional (Comisaría de Familia).

Las Defensorías de Familia son dependencias adscritas administrativamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero su superior funcional es la jurisdicción de familia, encarnada por los jueces de familia. El rol de los psicólogos que forman parte de dicha autoridad se desempeña en los siguientes escenarios:

Como perito, para la elaboración de informes de carácter probatorio de cara a la audiencia de prueba y fallo, según lo dispuesto en el Código de la Infancia y Adolescencia.

Parágrafo 1°. Cuando lo estime aconsejable para la averiguación de los hechos, el defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía, podrán ordenar que el equipo técnico interdisciplinario de la defensoría o de la comisaría, o alguno de sus integrantes, rinda dictamen pericial (Congreso de la República, 2006b, art. 100).

En este escenario, el psicólogo se ocupará de analizar posibles controversias derivadas de modalidades de maltrato infantil como negligencia y descuido, abandono total o parcial de parte de sus cuidadores primarios, violencia física, verbal, psicológica o sexual por fuera del contexto de la familia de origen, o cualquier otra circunstancia que comprometa su integridad, de cara a la toma de decisiones respecto a su futuro inmediato: mantenimiento en su medio familiar, retiro de su medio familiar, su eventual reintegro o el concepto respecto a la declaratoria de su adaptabilidad, desde la perspectiva de su desarrollo integral.

Por las anteriores consideraciones, uno de los más relevantes apoyos para el director del proceso administrativo de restablecimiento de derechos es el psicólogo, que lo acompaña como miembro titular de equipo técnico del que habla el Artículo 79 de la Ley 1098 de 2006, norma que depositó la función de gestión probatoria destinada a nutrir, entre otros, el proceso administrativo en el que se encuentren involucrados NNA. No obstante, no basta la orden legal para que este psicólogo se vuelva experto forense, puesto que requiere formación especial; de no hacerlo, podrían surgir dramáticas consecuencias judiciales (Hernández y Tapias, 2010) en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, adelantado por la Defensoría de Familia.

El psicólogo que se desenvuelve en los escenarios precisa unas competencias básicas para desarrollar en debida forma su labor. Entre ellas está la cognitiva, que no es más que el conocimiento del entramado normativo y administrativo en el que se insertan sus actuaciones. Además, debe estar actualizado en cuanto a la evolución jurisprudencial relacionada con su labor y contar con unas competencias técnico-científicas, praxeológicas, comunicativas y éticas que le permitan saber y saber hacer (Colombia, Congreso de la República, 2006a; 2006b, art. 2, num. 2).

El mayor desafío del psicólogo adscrito a la Defensoría de Familia es la elaboración del concepto psicológico con carácter de dictamen pericial, producto de la evaluación, requerido para la adopción de la medida de reintegro al medio familiar. El informe forense debe ser claro y preciso, y consignar la solicitud de la autoridad administrativa, las herramientas utilizadas para la evaluación (entrevistas a directos y a colaterales), los instrumentos objetivos de medición psicológicas (test, listas de chequeo o elementos similares, con criterios de validez y confiabilidad) y otras fuentes de información que conduzcan a un concepto sustentado y basado en la evidencia, como lo exige, entre otros, el Artículo 47 de la Ley 1090 de 2006, el 422 de la Ley 906 de 2004 y el 226 del Código General del Proceso. Asimismo, debe contener las evidencias científicas en las que se sustenta y aportarle al juez administrativo las referencias bibliográficas en las que se basó para su concepto.

Otro elemento de especial importancia es que, entre las garantías procesales a NNA, los funcionarios responsables deben ser especializados y tener capacidad de escucha y empatía, para que le generen al NNA la confianza y la seguridad de ser atendido y le garanticen el derecho a ser informados y a la agilidad en sus procesos (Palummo y Freyre 2019), por lo que no se puede obviar el consentimiento informado. En efecto, el consentimiento de NNA es central en estos procesos, en concordancia con lo señalado en el Artículo 36, ordinal i de la Ley 1090 de 2006 y el Artículo 193, ordinal 8 de la Ley 1098 de 2006.

En el proceso de evaluación psicológica a NNA y sus familias con miras al reintegro se deben tener en cuenta los principios de que cualquier tipo de intervención evaluativa tiene un efecto en el evaluado, así como el postulado de acción sin daño, esto es, desde los principios éticos de dignidad: todo ser humano es un fin en sí mismo, al que hay que respetarle su autonomía; que la acción del psicólogo debe apuntar a fortalecer la capacidad de acción dentro del proyecto de vida de NNA con su familia y favorecer y respetar su libertad para la toma de decisiones (Rodríguez, 2011).

Los criterios para la actuación del psicólogo en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos no se pueden deslindar de la actuación fundamentada en la evidencia mediante procedimientos verificables, aceptables técnico-científicamente y susceptibles de soportar la contradicción y la refutación. Si bien se ha definido en el Código de la Infancia y la Adolescencia que la atención a NNA en cualquiera de sus etapas debe ser especializada, no obliga a que los profesionales de los equipos técnicos de la Defensorías de Familia sean especialistas en el ejercicio profesional dentro de contextos jurídicos, jurisdiccionales o administrativos; tampoco es menos cierto que de cada una de sus actuaciones pende una consecuencia jurídica para un tercero, por lo cual este psicólogo debería instalarse dentro del campo de la psicología jurídica y la psicopatología forense, entendida como aquella que apunta a la evaluación retrospectiva y prospectiva. Como lo plantean García y Galicia (2019):

[...] la psicología jurídica actúa como estructura, contexto y fuente de la expresión forense, pero no es lo forense ya que la psicopatología en dicha vertiente representa el estudio y la evaluación de los trastornos mentales, los problemas emocionales, las conductas desadaptativas y en suma la discapacidad psicosocial de personas vinculadas a procesos legales con el fin directo de presentar dicha información ante el sistema de justicia (p. 11).

Se indican estrategias como la entrevista psicológica forense especializada en niños, los instrumentos de evaluación psicológica propios para el ámbito forense, la comprensión de la conducta transgresora y abusiva de los cuidadores y la prevención de

futura conducta antisocial de NNA maltratados, así como la investigación relacionada con el abuso infantil y sus consecuencias (Hernández y Tapias, 2010).

Lo anterior no riñe con el rol asignado por el Código de la Infancia y Adolescencia, en el Artículo 79, a los psicólogos adscritos a la Defensoría de Familia que, por ministerio de la ley, invistió sus informes con un carácter pericial.

El psicólogo no podrá perder de vista los criterios psicológicos de cara a una decisión respecto a NNA involucrados desde un posible reintegro, si están en protección, hasta una posible declaratoria de adaptabilidad. Estos parten de una estrategia definida dentro del modelo de atención una vez inicia el proceso de restablecimiento de derechos y ha sido definido como Plan de atención individual y familiar (Platinfa), que focaliza la actuación en un caso concreto, por lo cual el psicólogo debe analizar las variables psicológicas vulneradas al ingreso de NNA al sistema de protección y que fueron propiciadas por su núcleo familiar, la evolución del plan de atención durante la ubicación (bien sea hogar sustituto, medio institucional o medio familiar diferente al de origen), plan que, entre otras cosas, debe apuntar a reducir la afectación psíquica, emocional o remisión de sintomatología asociado al evento vulnerador.

El psicólogo deberá diseñar un plan evaluativo con las características antes descritas, que corresponda a la última fase de salida de NNA del proceso administrativo, de cara a su reintegro familiar, con otras dinámicas y proceso de cambio propios. Cada caso es, en principio, anacrónico y singular; deberá chequear si en cada una de sus actuaciones es tangible el concepto de interés superior de NNA, si se escuchó y se tuvo en cuenta su percepción de bienestar con las medidas futuras, tras garantizarle, dentro de lo razonable y legalmente permitido, el acceso a toda la información respecto a su situación.

Asimismo, se ha de considerar el estado cognitivo de NNA en cuanto a expectativas, intencionalidades, introspección, tipo y calidad de vínculos con sus redes de apoyo familiar (frecuencia, tipo de encuentros, duración, periodicidad, calidad), durante el tiempo en el que ha estado ubicado en alguna de las modalidades de protección. También se deberá evaluar su estabilidad emocional, como labilidad, apego, expresión de sentimientos y respuestas ansiolíticas que puedan surgir como consecuencias del inminente regreso a su núcleo familiar o de cualquier medida que se vaya a adoptar.

Dado lo hasta aquí expresado, los elementos psicológicos que deben reposar en su informe son, en términos generales, los siguientes: hechos psicológicos observables dentro del plan de atención individual; inferencias sobre datos específicos a propósito del proceso de reintegro, con evidencia de constructos psicológicos y grados de adaptación individual y familiar; inferencias sobre constructos específicos relacionados con la custodia (reintegro), que consisten en una descripción de las ventajas y

desventajas de las opciones de custodia; recomendación a la autoridad administrativa sobre la medida que se adopte, en procura de salvaguardar el interés superior de NNA (Tippins y Wittman, 2005). Asimismo, deben aparecer las entrevistas a colaterales, que evidencien información no visible o sean medio de contraste para el psicólogo en el momento del reintegro, como posibles redes de apoyo o familia extensa que ha tenido vínculo con NNA, entre otros datos relevantes para tomar la mejor decisión administrativa (Cantón y Cortés, 2007).

Con base en el Platinfa, se ha de observar y analizar el grado de participación de la familia de NNA como protagonistas concretos cuando ingresa al sistema de protección, así como a las demás redes de NNA. La estructura de la familia debe ser revisada desde su arquitectura psicológica interior, esto es, organización en cuanto a liderazgo parental; jerarquía; roles; disciplina; participación en las decisiones; equidad; estrés acumulativo; perspectiva de género; manejo de conflictos; vínculos afectivos; mecanismos para exteriorizar sentimientos, y tiempo compartido con el núcleo familiar y su calidad. También se ha de tener en cuenta la susceptibilidad al tratamiento interventor dentro del Plan de atención individual y familiar (Platinfa), esto es, adherencia, evolución del tratamiento o de las intervenciones, cambios observables, obstáculos y dificultades; lo anterior en virtud de que, aunque es posible identificar familias maltratantes y negligentes con características o patrones de funcionamiento similares, estas familias no constituyen un grupo homogéneo. Por tanto, el tratamiento debe iniciarse tras una evaluación individualizada (Arruabarrena y De Paúl, 2002).

Otro elemento que no se puede desconocer como oportunidad u obstáculo del trabajo en familia con miras al reintegro de NNA y para la elaboración de criterios de evaluación es la desconfianza hacia los profesionales de los servicios de atención y protección a la infancia y adolescencia, así como la ausencia de conciencia de los problemas y de motivación interna de cambio. La resistencia o falta de colaboración son situaciones esperables y frecuentes en la intervención con familias con actitudes de desprotección infantil, sobre todo en las fases iniciales de la intervención. Pese a que la resistencia y falta de colaboración están determinadas en gran medida por las características y circunstancias familiares, hay otros factores a tener en cuenta, como la historia previa de relación de la familia con los servicios de protección a la infancia y adolescencia, la idoneidad de los servicios y recursos de apoyo proporcionados y la propia actuación de los profesionales que tienen una influencia decisiva en la superación, el mantenimiento o la exacerbación de dichos problemas. Siempre que estas dificultades se mantengan, los profesionales han de indagar sobre sus causas y emplear nuevas estrategias de actuación y formas de relación con la familia que permitan transformar la desconfianza y resistencia en colaboración (Departamento de Empleo y Políticas Sociales, 2018).

Por lo anterior, se reitera la necesidad de que la actuación con la familia esté sujeta a verificación, contrastación y validación, ya que en estos contextos lo hallado a primera vista no es fuente de evidencia. En escenarios de vulneración de derechos a NNA, los cuidadores o representantes suelen faltar a la verdad y asumir conductas oprobiosas, de manipulación o engaño iguales o peores que los hechos discutibles en un execrable crimen investigado en sede penal.

Para el psicólogo, este espacio de evaluación no es ni ligero, fácilmente descriptible ni interpretable. Si bien puede operar la culpa (el hecho de no haber querido ocasionar un daño de forma activa, como ocurre en la negligencia), no es menos cierto que puede haber dolo (la intención activa de causar el daño, por lo general, con algún tipo de maltrato infantil), por lo que la evaluación psicológica con fines periciales suele encontrarse con algunas dificultades específicas, como que algún miembro de la familia o la familia completa no se presente de forma voluntaria ante el psicólogo, sino que su participación está determinada por su papel en el proceso judicial (denunciado/denunciante; demandado/demandante). Además, las consecuencias directas del dictamen pericial para el o los miembros de la familia evaluada aumentan la probabilidad de manipulación de la información aportada para conseguir beneficios o evitar el perjuicio.

Otras variables para considerar son, por un lado, el asesoramiento legal a las partes por sus abogados, que afecta el grado de sinceridad frente a la evaluación familiar cuando algún miembro de la familia es entrevistado (la estrategia letrada de la defensa) y, por otro lado, las múltiples exploraciones periciales (efecto aprendizaje). Los peritos pueden disponer de instrumentos de medida adecuados, pero el sujeto evaluado puede no colaborar en la evaluación o falsear los hechos, más o menos conscientemente. Ya no se trata solo del uso de herramientas inapropiadas, sino del control de las respuestas inadecuadas a los instrumentos (Echeburúa et al., 2011).

Lo anterior no hace sino confirmar que, en la decisión que se adopte, la evaluación de los miembros de la familia desde criterios psicológicos de acuerdo con el caso concreto debe estar cimentada en posturas empírico-analíticas de verificación y comprobación, que permitan detectar la disimulación y el engaño; además, la familia podría presentar, como ya se ha dicho, ausencia de voluntariedad frente a la evaluación que efectúan los servicios de protección (Esbec et al., 2000).

En el equipo técnico se debe ser consecuente con los hallazgos obtenidos dentro del Platinfa. El psicólogo titular de la Defensoría de Familia a cargo debe estar al tanto, de manera permanente y continua, del desarrollo del proceso de atención y contar con la articulación y el seguimiento permanente con los psicólogos del equipo interdisciplinario de la modalidad donde se encuentre NNA, conocer al detalle los avances de la

intervención psicológica que se lleva a cabo con la familia, y también los obstáculos que se presenten. De igual forma, en atención a que siempre se deben privilegiar y promover espacios entre NNA con sus familias o redes vinculares, se debe estar informado sobre la permanencia, emergencia o ausencia de familia nuclear o extensa de cara a los posibles escenarios de reintegro; lo anterior en coordinación y a la luz del trabajo en equipo con los otros profesionales tanto del operador, de la modalidad y de la propia Defensoría de Familia, con cuidado de no incurrir en intrusismo, sino de aportar evidencia probatoria desde lo psicológico, ya que este fenómeno emerge en los equipos de trabajo interdisciplinario, sobre todo en ambientes legales.

Por otro lado, no debe perderse de vista que, en estos escenarios de reintegro al medio familiar, el informe pericial no es estático, sino que tiene valor en relación con el momento de la exploración. Las circunstancias pueden ser cambiantes, por ejemplo, en el ámbito de los conflictos familiares (Echeburúa et al., 2011) y, en concordancia con ello, el psicólogo debe tener la competencia argumentativa para exponerlo en el equipo técnico.

El dictamen adquiere una mayor relevancia cuando la metodología utilizada se pone en relación con el estado actual de los conocimientos científicos y cuando se establece un nexo claro entre la evaluación psicológica y la problemática jurídica planteada a propósito de los pros y los contras, sin tergiversar o sobreinterpretar la información obtenida, con un lenguaje claro y riguroso, pero exento de tecnicismos innecesarios (Esbec et al., 2000).

Asimismo, se ha de tener en cuenta el estado cognitivo del niño en cuanto a expectativas, intencionalidades, introspección, el tipo y calidad de vínculos que tiene establecidos con sus redes de apoyo familiar (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2018).

En la presentación en equipo técnico, el psicólogo debe partir de que su opinión profesional se encuentra determinada por un informe detallado con diferentes estrategias de evaluación: entrevista semiestructurada de corte forense a NNA y a los miembros de la familia destinatarios dentro del proceso de reintegro; observación científica de NNA y su familia en diversos contextos; si se requiere, pruebas estandarizadas, escalas o protocolos, como medio de contraste a lo identificado en las dos fuentes anteriores. El valor pericial de las escalas es relativo; solo cuando la existencia del trastorno se ha demostrado por otras vías (entrevista, observación de la conducta, antecedentes del paciente, etc.) y las fuentes de información son múltiples, los test tienen interés para cuantificar la intensidad del trastorno (Echeburúa et al., 2011), es decir, es inobjetable la pertinencia de aplicación de instrumentos de evaluación psicológica, pero se deben elegir, en un juicio de ponderación, los que sean útiles y pertinentes para el caso concreto; en conclusión, es necesario saber aterrizar toda la

actuación precedente en un análisis en contexto y correlacionar las fuentes de información bajo la premisa del control cruzado (Buela, 2006).

La violencia intrafamiliar y las acciones de protección por violencia intrafamiliar

La actuación del psicólogo en el contexto del juzgamiento e intervención desde la Comisaria de Familia, autoridad jurisdiccional en lo atinente a la violencia intrafamiliar, es como en la Defensoría de Familia, desde el rol de perito:

Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente (Colombia, Congreso de la República, 1996, art. 4, modificado art. 1, L. 575/2000, modificado art.16, L. 1257/2008).

La misma actuación se nutre con el Código de la Infancia y la Adolescencia en cuanto a NNA y también de las disposiciones normativas específicas para el tratamiento de estos problemas: “Igualmente podrá solicitar prueba pericial, técnica o científica, a peritos oficiales, quienes rendirán su dictamen conforme a los procedimientos establecidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses” (Colombia, Congreso de la República, 1996, art. 11). No obstante, el psicólogo también cumple un rol de asesor al juzgador: “En todas las etapas del proceso, el Comisario contará con la asistencia del equipo interdisciplinario de la Institución” (Colombia, Congreso de la República, 1996, art. 16). Por tal razón, de cara a las decisiones que ha de adoptar el comisario de Familia dentro de las acciones de protección por violencia intrafamiliar, es esencial la participación de los psicólogos adscritos a estos despachos, más allá de la obtención de evidencia psicológica con los dictámenes periciales, máxime cuando las audiencias se rigen por el sistema de justicia oral. A propósito de lo anterior, García y Galicia (2019) indican:

En lo que respecta al área familiar el experto en psicología cumple un enorme desafío: informar a la autoridad ordenadora —de manera puntual, ética y precisa— sobre las características psicosociales que permitan al especialista en derecho, allegarse de los elementos necesarios (respecto con las áreas cognitivas, emocionales, interpersonales y sociales de las personas evaluadas) para promover alternativas de soluciones a las problemáticas planteadas en derecho familiar (guardia y custodia, visitas y convivencias, pérdida de patria potestad, alimentos, etc.) preponderando el interés superior de la niñez (p. 12).

En gracia de discusión, agregaría temas como los conflictos, el maltrato y, por supuesto, la violencia intrafamiliar.

La Ley 294 de 1996 establece que las medidas de protección que se adoptan, bien sean provisionales o definitivas, se rigen por una serie de principios, entre los cuales se destacan dos:

c) La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar (art. 3).

De lo anterior se deduce que el comisario actúa para prevenir la ocurrencia de un hecho.

Otro elemento que se debe considerar en el área del derecho comisarial es el cuidado que deben tener el juzgador y sus equipos interdisciplinarios, en los que el psicólogo toma especial relevancia, pues aporta evidencia a tener en cuenta cuando, dentro de las controversias familiares, un extremo utiliza la acción de protección por violencia intrafamiliar como mecanismo sustitutivo para obstaculizar el ejercicio de derechos o facultades del otro extremo, lo que termina limitando los derechos de NNA involucrados. Lo anterior se encuentra previsto en la Ley 294 de 1996: “Los procedimientos consagrados en la presente ley no sustituyen ni modifican las acciones previstas en la Constitución y en la ley para la garantía de los derechos fundamentales, ni para la solución de los conflictos jurídicos intrafamiliares” (art. 19). Esto ocurre con más frecuencia de lo que sería deseable y acá desempeña un doble rol de perito y asesor al comisario, y de mediador entre los extremos en discordia.

Por otro lado, de cara a las decisiones producto de la actuación del psicólogo, no se puede perder de vista que la Convención Internacional de derechos del niño establece:

Los Estados Parte velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres (ONU, 1989, art. 9, lit. 1).

De manera indirecta, de la actuación del psicólogo se desprende una consecuencia jurídica que afecta a un tercero. El rol profesional del psicólogo está dentro del campo de la psicología aplicada a contextos psicojurídicos, con miras a

la protección de los derechos de NNA y los demás miembros de la familia que gozan de especial protección del Estado, y apunta a la evaluación y posterior valoración del daño psicológico, mediante estrategias como la entrevista pericial semiestructurada, que permite abordar de una manera sistematizada, pero flexible, la exploración psicobiográfica, el examen del estado mental actual y los aspectos relevantes en relación con el objetivo del dictamen pericial (Echeburúa et al, 2011), y otros instrumentos de evaluación psicológica propios del ámbito psicojurídico, cuyo objetivo es la comprensión de la conducta transgresora y abusiva de los cuidadores y la prevención de futura conducta antisocial de NNA maltratados, así como la investigación relativa al abuso infantil y a sus consecuencias (Hernández y Tapias, 2010).

La literatura técnico-científica indica que las afectaciones psicológicas de NNA a quienes se les han vulnerado sus derechos muestra que, durante la etapa escolar, se hacen más evidentes los comportamientos agresivos, irritabilidad, rabietas y conductas oposicionistas y destructivas que, ligadas a la exposición a eventos violentos, aumentan su aparición (Pereda y Arch, 2012). Los niños que experimentan adversidades en la vida temprana tienen un alto riesgo de sufrir una variedad de trastornos mentales en la edad adulta, en particular, ansiedad, depresión, agresividad y estrés (Green et al., 2019).

La literatura científica expresa, a propósito del asunto que nos ocupa, que otro elemento psicológico impactado por las afectaciones a NNA producto de la violencia doméstica es el estrés postraumático. Su identificación y abordaje responde a la garantía del derecho de NNA involucrados en un disturbio familiar; la naturaleza y la gravedad de los síntomas específicos (por ejemplo, impulsividad, aislamiento, hipervigilancia, disociación, disforia y agresión) definirán el enfoque del tratamiento. Una consideración importante para el tratamiento es la distinción entre un solo evento discreto traumático (por ejemplo, accidente de tráfico o ser testigo de un asalto) y el trauma crónico o dominante (por ejemplo, el abuso crónico). Los síntomas después de un solo evento (por ejemplo, accidente automovilístico) tienden a ser menores y menos resistentes al tratamiento en comparación con los grupos de síntomas más complejos asociados con el estrés traumático crónico o penetrante (por ejemplo, una combinación de abuso físico y sexual) (Perry, 2007).

De especial importancia es que, entre las garantías procesales a NNA, los funcionarios responsables de su proceso sean especializados, con capacidad de escucha y empatía, capaces de brindarles la confianza y seguridad de ser escuchados y de garantizarles el derecho a ser informados y a la agilidad en sus procesos (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y Save the Children, 2019).

El adolescente en conflicto con la ley

La participación del psicólogo en este escenario psicojurídico obedece a lo establecido en los Artículos 79, 157 y 189 del Código de la Infancia y Adolescencia: los psicólogos adscritos a las Defensorías de Familia que operan dentro del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes en Colombia elaboran un informe para la audiencia ante el juez especializado de adolescentes con funciones de control de garantías, el cual es presentado por la autoridad administrativa (defensor de familia) en su calidad de interviniente especial en audiencia y muy excepcionalmente por el psicólogo. En ese primer informe se levanta un perfil de vulnerabilidad del adolescente, de cara no solo al proceso penal que inicia, sino a las posibles necesidades de restablecimiento de derechos, independientemente que se decrete o no la libertad dentro de la causa penal. Uno de los derechos más vulnerados es el de una vida libre del consumo de sustancias psicoactivas, por lo cual, aun decretada la libertad dentro del proceso penal, puede continuar a cargo de la Defensoría de Familia asignada, que podrá disponer de una ubicación institucional tendiente al restablecimiento del derecho, según sea el caso.

Un segundo momento es un informe más detallado, de cara a la audiencia de imposición de la sanción por parte del juez especializado de adolescentes con funciones de conocimiento, que le permite fundamentar su decisión en el documento interdisciplinario presentado por la Defensoría de Familia del ICBF y sobre el cual soporta la medida adoptada respecto al adolescente infractor una vez ha cometido el delito. Este informe tiene un peso específico determinante. Los aportes técnico-científicos desde la psicología sustentan que el comportamiento criminógeno se determina por factores como familia, reincidencia, carrera criminal y reforzadores negativos. Basanta (2012) retoma el tema de competencia parental y necesidades criminógenas en una muestra de menores infractores y evalúa la relación entre la presentación de la conducta delictiva y los estilos de crianza impartidos en el medio familiar. En esa línea encontramos a Pérez, Lagos y Báez (2012) que analizan trayectorias delictivas de adolescentes infractores; utilizaron varios instrumentos de evaluación como el instrumento adaptado del YLS/CMI, validado para la realidad chilena por Sergio Chesta en 2009, que sirve para identificar que en el actuar delictivo hay patrones implícitos que, al asociarse con los riesgos presentes, desencadenan las conductas antisociales y que la identificación de necesidades criminógenas en los jóvenes es fundamental para plantear cualquier tipo de intervención.

Por lo anterior, la delincuencia juvenil debe ser evaluada desde una perspectiva multicausal, en la que convergen situaciones tanto del mismo joven como de su entorno. Aquí es útil el modelo planteado por Bronfenbrenner (1998, citado por

Valdenegro, 2005) que habla de la ecología del desarrollo humano: propone que la conducta debe ser comprendida como una relación funcional entre la persona y su contexto, como un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe en la siguiente estructura e interactúa con ella.

Con base en el modelo anterior se explicaría que en el microsistema —el ámbito individual— existen factores que han afectado el desarrollo integral del adolescente de manera negativa, como situaciones de abandono o maltrato que han originado sentimientos de minusvalía, privación psicoafectiva, duelos no elaborados, inadecuada exteriorización emocional, mal manejo de la rabia, baja tolerancia a la frustración, validación de la agresión como mecanismo de defensa, necesidad de aprobación y reconocimiento de terceros, esquema autovalorativo negativo, situaciones relacionadas con dificultades de aprendizaje, hiperactividad, baja concentración, atención y memoria, e inadecuado desarrollo de juicio moral. Entre los factores familiares se tendrían en cuenta situaciones de violencia, maltrato en cualquiera de sus tipos, modelos inadecuados en la convivencia por participación de adultos o referentes significativos en situaciones de violencia o delincuencia, deficientes canales de comunicación, ausencia de mecanismos formativos, inconsistencia en la imposición de refuerzos o sanciones, separación de los padres, o fallecimiento o enfermedad de algún ser querido (Vásquez, 2003).

En el ecosistema se observan aspectos como pérdida de años escolares, mal rendimiento académico, deserción, dificultades de adaptación al entorno formativo, acoso escolar, cambios frecuentes de institución educativa o dificultad en los procesos de aprendizaje.

Por último, no menos importante, en el macrosistema los factores determinantes son pares negativos, bandas, pandillas, barras futboleras, acceso a sustancias psicoactivas legales e ilegales, contextos sociales de alto riesgo caracterizados por la presencia de delincuencia, sitios de expendio o consumo, dificultad en la satisfacción de necesidades con carencias económicas y de posibilidades de acceso a redes de apoyo o ayuda (Valdenegro, 2005).

Lo anterior trae como resultado historias vitales caracterizadas por la exposición constante a escenarios de violencia, por lo que los adolescentes, a lo largo de sus procesos de socialización, la validan como estrategia de interacción y construcción de relaciones o incluso con ellos mismos (Mosca, 2012).

Con el anterior escenario, el grado de detalle y de exigencia para el psicólogo es alto. Según Murillo (2010):

Todo lo anterior hace que el sistema sea especializado, único y diferenciado en nuestro país aunque de vida muy reciente, con perceptibles aciertos pero también desnudando dificultades de forma y de fondo objeto de intenso debate hoy día en mi país, que en el interés especial que me convoca se haya referido a la preparación de los psicólogos que están inmersos desde diferentes momentos en el proceso propio del SRPA, que han ido aprendiendo por ensayo y error y no por un proceso estructurado y concentrado que sea política institucional y que defina dos aspectos centrales la capacitación y el perfil deseado para este tipo de psicólogos y en donde no se tiene todavía claro cuáles deben ser las competencias argumentativas, explicativas y propositivas que deberían tener para cada momento del proceso, que sin embargo me atrevo a señalar deberá estar ligado a algunas de las subáreas de la psicología jurídica (p. 4).

Procedimientos especiales cuando niños, niñas o adolescentes son testigos o testigos víctimas de delitos

No puede dejar de hacerse alusión a la participación del psicólogo según lo establecido en el Código de la Infancia y Adolescencia:

Práctica de testimonios. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.

Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.

El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación (Congreso de la República, 2006b, art. 150).

El psicólogo, bien esté adscrito a la Defensoría de Familia, al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía o, a la Policía Judicial, es quien desarrolla el cuestionario mediante entrevista y registra en algún medio tecnológico la información obtenida. Es un proceso dinámico que NNA víctimas atraviesan en forma progresiva y lenta.

A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse por medio de comunicación de audio y video, caso en el cual no será necesaria la presencia física de NNA.

En concepto impartido por la Oficina Jurídica (ICBF, 2016) se tiene que la ley prevé que, en casos en los que no se cuente con los profesionales en entrevista forense, podrá ser realizada por un entrevistador especializado, según lo contemplado en la exposición de motivos la ley:

El profesional que entreviste a un niño debe tener conocimiento especializado en psicología infantil, desarrollo psicoevolutivo, en especial con lo cognoscitivo, técnicas de recuperación de memoria, protocolos de entrevista, procesos de la revelación y teoría del abuso sexual, entre otros [...]. El entrevistador debe conducir la entrevista teniendo en cuenta el nivel de desarrollo cognoscitivo, lingüístico, nivel de razonamiento, nivel de conocimiento y emociones del niño. Esto hace que la información obtenida del menor sea de mayor confiabilidad. También es imperativo que quien conduzca la entrevista entienda que la revelación es un proceso dinámico que el niño víctima atraviesa en forma progresiva y lenta.

Lo anterior no hace referencia más que a la psicología jurídica y, si miramos en detalle, en la práctica, cuando un niño es entrevistado en calidad de testigo o testigo víctima en un proceso de justicia ordinaria debe estar presente un psicólogo que forma parte de una Defensoría de Familia del ICBF, para que actúe como mediador entre el niño que rinde su testimonio y los intervinientes en la audiencia de juicio oral (acusado, juez, fiscal, abogados de la defensa y demás sujetos intervinientes) que lo interrogan. El psicólogo ingresa con el niño a una sala contigua e independiente del espacio donde se desarrolla la audiencia y en tiempo real, con ayuda de medios tecnológicos, el niño es escuchado y observado en la sala de audiencia, mientras el psicólogo como “intérprete” para el niño, readecúa cada una de las preguntas y canaliza la tensión que pueda experimentar durante la diligencia de interrogatorio, contrainterrogatorio y preguntas complementarias que se formulan desde la sala de audiencias. En otras latitudes, como en España, esta figura se conoce como acompañante judicial de niños y en nuestro ordenamiento está definido como: “En los casos en que un niño, niña o adolescente deba rendir testimonio deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un psicólogo, de acuerdo con las exigencias contempladas en la presente ley” (Congreso de la República, 2006b, art. 139, num. 12). Sabemos que, desde las máximas de la experiencia, deberá ser preferentemente un psicólogo jurídico entrenado en este tipo de acompañamiento especial.

Referencias

- Alarcón, M. (2015). Conveniencia de la participación de los niños en el proceso de mediación. *Ars boni et aequi*, 11(2), 11-47.
- Arruabarrena, I. y De Paúl, J. (2002). Evaluación de un programa de tratamiento para familias maltratantes y negligentes y familias alto-riesgo. *Invertención psicosocial*, 11(2), 213-227. <http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/78071.pdf>
- Barna, A. (2014). Clasificaciones y estimaciones en la clasificación de la infancia “con derechos vulnerados”. Prácticas cotidianas de intervención en un dispositivo estatal del conurbano bonaerense. *Antropolítica* (36), 113-148.
- Basanta, J. (2012). Competencia parental y necesidades criminógenas en una muestra de menores infractores. *Intervención psicoeducativa en la desadaptación social IPSE* (5), 37-46.
- Buela, G. (2006). Método y procedimiento de la evaluación psicológica forense para un peritaje psicológico forense en el proceso penal. En J. Sierra, E. Jiménez y G. Buela (eds.), *Psicología forense: manual de técnicas y aplicaciones* (pp. 131-147). Biblioteca Nueva.
- Cantón, J. y Cortés, M. (2007). Evaluación del abuso infantil y tratamiento de las víctimas. En J. Cantón y M. Cortés (eds.), *Malos tratos y abuso sexual infantil: causas, consecuencias e intervención* (7ª. ed., pp. 284-362). Siglo XXI de España.
- Colombia, Congreso de la República. (16 de julio de 1996). *Ley 294 de 1996*, “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”.
- Colombia, Congreso de la República. (4 de diciembre de 2008). *Ley 1257 de 2008*, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (6 de septiembre de 2006a), *Ley 1090 de 2006*, “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (8 de noviembre de 2006b). *Ley 1098 de 2006*, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
- Colombia, Congreso de la República. (9 de enero de 2018). *Ley 1878 de 2018*, “Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (9 de febrero de 2000). *Ley 575 de 2000*, “Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996”.
- Departamento de Empleo y Políticas Sociales. (2018). *Actualización del BALORA. Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los servicios sociales municipales y territoriales de atención a la infancia y adolescencia en la comunidad autónoma vasca*. Administración de la comunidad autónoma del País Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/balora/es_doc/adjuntos/web_ACTUALIZACION_INSTRUMENTO_BALORA.bopv.pdf

- Echeburúa, E., Muñoz, J. y Loinaz, I. (2011). La evaluación psicológica forense frente a la evaluación clínica: propuestas y retos de futuro. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 11(1), 141-159. <https://www.redalyc.org/pdf/337/33715423009.pdf>
- Esbec, E., Nevado, C. y Gómez-Jarabo, G. (2000). *Psicología forense y tratamiento jurídico legal de la discapacidad*. Edisofer.
- García, E. y Galicia, O. (2019). *Psicología forense en materia familiar*. Manual Moderno.
- Gómez, R. y Ruiz, M. (2011). *La aplicación de los mecanismo legales para la participación de niños (as) y adolescentes en la resolución alterna de conflictos dentro de la legislación costarricense* [Tesis de maestría, Universidad de Costa Rica]. <http://ijj.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/La-aplicacion-de-los-mecanismos-legales-para-la-participacion-de-ninosas-y-adolescentes-en-la-resolucion-alterna-de-conflictos-dentro-de-la-legislacion-costarricense.pdf>
- Green, M., Hindmarsh, G., Kariuki, M., Laurens, K., Neil, A., Katz, I., Chilvers, M., Harris, F. y Vaughan, J. (2019). Mental Disorders in Children Known to Child Protection Services During Early Childhood. *The Medical Journal of Australia*, 212(1), 22-28. <https://www.mja.com.au/journal/2019/212/1/mental-disorders-children-known-child-protection-services-during-early-childhood>
- Hernández, G. y Tapias, A. (2010). Maltrato infantil: normatividad y psicología forense. *Diversitas: perspectivas en psicología*, 6(2), 389-413. <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/diversitas/article/view/251/419>
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF]. (2018). *Lineamientos técnicos para la inclusión y atención de familias*. Oficina de comunicaciones y atención al ciudadano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lineamientos_tecnicos_para_la_inclusion_y_atencion_de_familias.pdf
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF]. (5 de febrero de 2016). *Solicitud de concepto radicado en el ICBF No. 010236 del 29 de enero de 2016*. https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0000013_2016.htm
- Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y Save the Children. (2019). *Protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de migración. Manual de aplicación de estándares internacionales y regionales de derechos humanos* [Archivo PDF]. https://www.savethechildren.org.co/sites/savethechildren.org.co/files/resources/ManualProteccionNinezMigrante_web.pdf
- Llovet, V. y Litichever, C. (2010). Desigualdad e inclusión social. ¿Qué proponen los programas de atención a niños, niñas y adolescentes? En J. Arzate, A. Itatí y J. Trejo (eds.), *Desigualdades sociales y ciudadanía desde las culturas juveniles en América Latina* (pp. 1-12). Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) .
- Mosca, G. (2012). La legitimación de la violencia en relación a la construcción de género en jóvenes infractores de la ley: un estudio exploratorio. *Revista de psicología UVM*, 2(3). <http://sitios.uvm.cl/revistapsicologia/revista-detalle.php/3/18/contenido/la-legitimacion-de-la-violencia-en-relacion-a-la-construccion-de-genero-en-jovenes-infractores-de-ley-un-estudio-exploratorio>

- Murillo, C. (2010). *Paradigmas asociados a la psicología jurídica sobre la responsabilidad penal adolescente 90 años después*. Jurisdicción de paz, medio alternativo de resolución de conflictos. <https://actitudenequidad.blogspot.com/2010/11/paradigmas-asociados-la-psicologia.html?m=0>
- Novella, L. (2010). Participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales. *Derecho y ciencias sociales* 1, 137-151.
- Organización de Naciones Unidas [ONU]. (1989). *Convención internacional derechos del niño*. Nuevo Siglo.
- Palummo, J. y Freyre, J. (2019). *Protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de migración. Manual de aplicación de estándares internacionales y regionales de derechos humanos*. Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y Save The Children [Archivo PDF]. https://www.savethechildren.org.co/sites/savethechildren.org.co/files/resources/ManualProteccionNinezMigrante_web.pdf
- Pereda, N. y Arch, M. (2012). Exploración psicológica forense del abuso sexual en la infancia: una revisión de procedimientos e instrumentos. *Papeles del psicólogo*, 33(1), 36-47. <http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2034.pdf>
- Pérez, R., Lagos, R. y Báez, C. (2012). Reincidencia y desistimiento en adolescentes infractores: análisis de trayectorias delictivas a partir de autorreportes de delitos, consumo de sustancias y juicio profesional. *Universitas Psychologica*, 11(4), 1209-1225.
- Perry, B. (2007). *Stress, Trauma and Post-traumatic Stress Disorders in Children* [Archivo PDF]. https://vibrantcouplescounseling.com/wp-content/uploads/2014/03/ptsd_caregivers-3.pdf
- Ramiro, J. (2016). Los derechos de los niños en las políticas españolas para la infancia. *Revista de derecho político* (95), 117-146. doi: <https://doi.org/10.5944/rdp.95.2016.16234>
- Rodríguez, A. (2011). *El enfoque ético de la acción sin daño. Módulo 1.1. Especialización acción sin daño y construcción de paz*. Universidad Nacional de Colombia.
- Tippins, T. y Wittman, J. (2005). Empirical and Ethical Problems with Custody Recommendations: A Call for Clinical Humility and Judicial Vigilance. *Family Court Review*, 43(2), 193-222. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2005.00019.x>
- Valdenegro, B. (2005). Factores psicosociales asociados a la delincuencia juvenil. *Psyke*, 14(2), 33-42.
- Vargas, M. y Correa, P. (2011). La voz de los niños en la justicia de familia de Chile. *Ius et Praxis*, 17(1), 177-204.
- Vásquez, C. (2003). *Factores de riesgo de la conducta delictiva en la infancia y la adolescencia*. Colex.
- Zaera, J. (2015). La audiencia al menor en los procesos de crisis matrimonial. Comentario a la STS Núm. 413/2014, de 20 de octubre (Rec. 1229/2013). *Actualidad jurídica iberoamericana* (3), 793-810.

Glosario

Abuso infantil: toda forma de trasgresión a la calidad de vida de NNA y que afecta su buen vivir.

Acción de protección por violencia intrafamiliar: dispositivo jurídico de carácter jurisdiccional para reparar los derechos conculcados por violencia intrafamiliar y evitar la comisión de nuevos hechos.

Carácter pericial: informe técnico-científico fundamentado en la evidencia, que adquiere valor probatorio en una controversia judicial.

Comisaría de Familia: entidad jurisdiccional interdisciplinaria distrital o municipal que se encarga de intervenir los derechos conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar.

Conducta delictiva: patrón comportamental persistente en el adolescente, determinado por factores criminógenos de mantenimiento de la conducta.

Custodia: en la Ley 1098 de 2006, Artículo 23, se determina que NNA tienen derecho a que sus padres, en forma permanente y solidaria, asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende a quienes conviven con ellos en los ámbitos familiar, social e institucional o a sus representantes legales.

Defensoría de Familia: dependencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargada de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de NNA.

Descuido y negligencia: comportamiento omisivo, culposo o doloso, de los padres o cuidadores respecto al mantenimiento de mínimo vital e integridad de NNA a su cargo.

Equipo técnico interdisciplinario: actividad de gestión coordinada de carácter interdisciplinar para la toma de decisiones en cuanto a medidas de protección respecto a una persona sujeta a protección.

Integridad: abarca todos aquellos aspectos alusivos al mantenimiento y a la promoción de la calidad de vida biopsicosocial de NNA.

Intérprete: profesional de la psicología que acompaña a NNA testigo o testigo víctima en el momento de rendir su testimonio en juicio oral.

Interés superior: máxima del derecho de infancia que sostiene que, frente a un conflicto de derechos, prevalecerá el de NNA.

Jurisdicción de Familia: conjunto de autoridades y procedimientos ordinarios o especiales atinentes a la regulación y protección de la institución jurídico-familiar.

Niños, niñas o adolescentes (NNA): se entiende como el período de crecimiento y desarrollo humano que inicia con el nacimiento y se prolonga hasta antes de los 18 años. No se deben utilizar expresiones “menor” o “pequeño”, para desechar toda pretensión de inferioridad y permitir que niños, niñas y adolescentes se consideren titulares de los mismos derechos que gozan los adultos.

- Maltrato infantil: según la Ley 1098 de 2006, Artículo 18, párrafo 2, es toda forma de perjuicio, castigo, humillación, abuso físico o psicológico, descuido, omisión, trato negligente, malos tratos, explotación sexual, actos sexuales abusivos, violación y, en general, toda forma de violencia o agresión sobre NNA por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.
- Patria potestad: el Código Civil, en su Artículo 288, establece que es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitarles el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Corresponde a los padres en conjunto, ejercer la patria potestad sobre sus hijos legítimos.
- Plan de atención individual familiar (Platinfa): estrategia metodológica que fija la ruta para el restablecimiento de derechos de NNA que han ingresado al sistema de protección del ICBF.
- Progresividad: principio que determina que las acciones de restablecimiento de derechos para NNA no deben ser estáticas, sino orientadas a la búsqueda de alternativas activas en una ventana de tiempo.
- Procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos: dispositivo jurídico de carácter administrativo para restaurar los derechos vulnerados por situaciones de maltrato infantil.
- Violencia intrafamiliar: es toda acción u omisión ocasionada por un miembro del grupo familiar u otro miembro que perturba la calidad de vida, integridad y dignidad.

Luis Orlando Jiménez Ardila*
Universidad Católica de Colombia

La psicología forense tiene como propósito la evaluación o medición psicológica de los comportamientos que tienen consecuencias legales en cualquiera de los subcampos de aplicación de la psicología jurídica y es una de las áreas que más se ha consolidado en el último tiempo debido al enfoque positivista del derecho. Urra (2000) la define como la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas de la psicología ante las preguntas de la justicia, en cooperación con los abogados y juristas que actúan en el Foro, para mejorar el ejercicio del derecho. Garzón (1990) la concibe, como toda psicología experimental o clínica, orientada a la investigación y a la comunicación de sus resultados, así como a la evaluación y valoración psicológicas para su uso en el contexto legal.

Manzanero (2009) la explica como la aplicación de la psicología (métodos y conocimientos) a la realización de pruebas periciales en el ámbito del derecho y de los tribunales (foro), relacionadas con la valoración de daños, capacidades, competencias e imputabilidades, desde un punto de vista psicológico. Amar y Tirado (2010, citado por Aristizábal y Amar, 2010) se refieren a la psicología forense como el área aplicada de la psicología jurídica que auxilia a los órganos de justicia en la toma de decisiones, al responder, mediante peritajes, a las preguntas que estos le formulan y que tradicionalmente se centran en la evaluación de la perturbación psíquica, la inimputabilidad y la veracidad del testimonio.

Respecto a su epistemología, la psicología forense es auxiliar de la administración de justicia, en cuanto sus técnicas e instrumentos ayudan a la constitución de la prueba pericial psicológica, que contribuye a la toma de decisiones por parte de los operadores jurídicos. En tal sentido, los profesionales especializados en esta área se encargan de recolectar y analizar datos científicos, técnicos y prácticos sobre las circunstancias litigiosas legales que están mediadas por procesos psicológicos; así, las partes procesales cuentan con valoraciones más idóneas en los dictámenes que se sustentan ante los tribunales.

En la perspectiva de su aplicación, aborda todo proceso cognitivo que discurre en ambientes judiciales. Se ocupa, por ejemplo, examinar el comportamiento criminal

* Psicólogo, especialista en Ciencia Forenses, magíster en Psicología y doctor en Psicología. Coordinador del programa de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

* <https://orcid.org/0000-0003-0191-3832>

para establecer los criterios que explican si una persona es inimputable o no (Feldman, 1995) o de revisar el testimonio infantil para determinar cuán ajustada a los hechos jurídicos es la narración de un menor de edad que se presume víctima de abuso sexual. De igual manera, se interesa por la valoración forense de la víctima de delitos para determinar el daño ocasionado por la conducta punible. Muñoz (2013) señala que la valoración del daño psíquico es una de las demandas más habituales formuladas al psicólogo forense por parte de los operadores jurídicos dentro del derecho penal, en las que se le solicita la evaluación de la psicopatología victimal.

Un aspecto para considerar es la delimitación entre la psicología clínica y la forense, con base en principios y guías especializadas que se ajustan a los requerimientos de los administradores de justicia (Heilbrun, 2001; Melton et al., 1997; Rogers y Shuman, 2000; Grisso, 2005, citado por Saborío y Viquez, 2006). Echeburúa y otros autores (2011) elaboraron un estudio teórico en el que se revisa el uso de la evaluación psicológica en la práctica forense y la adaptación de la terminología psicológica al lenguaje jurídico, a la vez que se resaltan las diferencias más notables entre lo clínico y lo forense; estos autores citan a Ackerman (2010, citado por Echeburúa et al., 2011), quien afirma que en lo clínico hay un enfoque asistencial y se tiene en cuenta la intervención terapéutica definida por resultados terapéuticos, mientras que en lo forense hay un enfoque pericial y se tienen en cuenta las consecuencias legales de las variables psicológicas y emocionales, las cuales necesariamente tienen que sustentarse mediante un informe pericial en la corte.

Referencias

- Aristizábal, E. y Amar, J. (2010). *Psicología forense: estudio de la mente criminal*. Universidad del Norte.
- Echeburúa, E., Muñoz, J. y Loinaz, I. (2011). La evaluación psicológica forense frente a la evaluación clínica: propuestas y retos de futuro. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 11(1), 141-159.
- Feldman, R. (2005). *Psicología con aplicaciones en países de habla hispana*. McGraw-Hill.
- Garzón, A. (1990). *Psicología y justicia*. Prolibro.
- Manzanero, A. (2009). Psicología forense: definición y técnicas. En J. Collado (coord.), *Teoría y práctica de la investigación criminal* (pp. 313-339). Instituto Universitario General Gutiérrez Mellao, UNED.
- Muñoz, J. (2013). La evaluación psicológica forense del daño psíquico: propuesta de un protocolo de actuación pericial. *Anuario de psicología jurídica*, 23(1), 61-69.
- Saborío, C. y Viquez, E. (2006). Mitos en torno a la evaluación psicológica forense en casos de agresión sexual contra menores de edad: la necesidad de un cambio de paradigma. *Medicina legal de Costa Rica*, 23(2), 51-85.
- Urrea, J. (2000). *Tratado de psicología forense*. Siglo XXI de España Editores.

5

LA AUTOPSIA PSICOLÓGICA: EVALUACIÓN RETROSPECTIVA SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MUERTE

Ever José López Cantero*

Laura Ximena Restrepo Aristizábal

José Raúl Jiménez-Molina*

Resumen

En el presente capítulo se expone una revisión bibliográfica acerca de la autopsia psicológica: su concepto, origen, metodología y empleo en el contexto legal colombiano. Se parte de la definición general de la autopsia psicológica como una evaluación retrospectiva que permite establecer características propias de la vida, la personalidad y las motivaciones de un sujeto fallecido, con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte, sobre todo cuando no son claras. Asimismo, se muestra que, a pesar de que en el contexto colombiano existen medidas legales para elaborar la autopsia psicológica en el marco legal, este uso es muy restringido, debido a cuestiones de tipo teórico.

Palabras clave: autopsia psicológica, derecho penal colombiano, muerte dudosa y psicología forense.

Introducción

La autopsia psicológica ha sido definida amplia y diferencialmente por diversos autores. En primer lugar, Itsometsä (2002) propone que constituye una serie de procedimientos investigativos que facilitan, de manera retrospectiva, obtener información en relación con las víctimas, en especial, de un suicidio consumado. Sugiere que su finalidad es abordar, con claridad y precisión, aspectos de la vida, la personalidad, la salud mental y los posibles procedimientos desarrollados por instituciones sanitarias frente al suicidio (Itsometsä, 2002).

* <https://orcid.org/0000-0003-1921-4159>

** <https://orcid.org/0000-0003-4806-5068>

Este primer autor hace énfasis en el suicidio y delimita el campo de acción de la autopsia psicológica para las personas que han acabado con su propia vida, sin poner en duda el hecho mismo de que la persona se ha suicidado. El propósito de la autopsia psicológica, para este autor, se limita a determinar las razones por las cuales esta persona optó por tomar esta alternativa y qué hicieron las instituciones de su entorno para evitarlo.

De modo más general, Ceballos (2015) afirma que la autopsia psicológica, como método, está enfocada en la búsqueda de características relacionadas con la personalidad y las condiciones en las que vivió un individuo, que este procedimiento es de naturaleza retrospectiva y que apunta a las circunstancias que rodean la muerte de una persona. El autor no se limita a hablar de la autopsia psicológica como un procedimiento utilizado en los casos de suicidio consumado, sino que amplía su uso a todos los tipos de muerte, para esclarecer las circunstancias de la muerte a partir de los conocimientos acerca de las características específicas del individuo cuando estaba vivo.

Jiménez (2001) considera que:

[...] la autopsia psicológica en esencia es la reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la vida de un individuo para obtener una comprensión psicológica acerca de quién era, por qué algunas situaciones se presentaron en su vida y en general qué papel jugaron sus rasgos de personalidad en las circunstancias de su muerte (p. 272).

A pesar de las discrepancias entre estos autores y otros que no se mencionan en esta introducción, se puede identificar un acuerdo teórico general respecto a que la autopsia psicológica hace referencia a la evaluación de las circunstancias de la muerte de un individuo con base en sus características en vida y de los hechos que rodearon su muerte.

En cuanto al origen histórico, es posible afirmar que este concepto fue utilizado por primera vez en los años sesenta por Schneidman, cofundador de Los Ángeles Suicide Prevention Center, quien definió la autopsia psicológica como un análisis de naturaleza retrospectiva, que es exhaustivo y permite esclarecer la intención del fallecido (Scott et al., 2006). En este primer momento se hablaba de determinar la intencionalidad de un sujeto que había fallecido, con el fin de precisar si su muerte correspondía a un suicidio o a una muerte accidental. Otro reconocido exponente fue Robert Litman, quien también utilizó el término autopsia psicológica como el proceso metodológico que se desarrolla de manera retrospectiva para abordar las características de personalidad y las condiciones en que vivió una persona, con el objetivo de aproximarse a las circunstancias de su muerte (Jiménez, 2001).

La autopsia psicológica ha tenido gran aplicabilidad investigativa en la criminología, debido a que:

[...] en el caso de muertes violentas, la manera como ocurre la muerte puede corresponder a homicidio, suicidio o accidente. En estas opciones pueden surgir dudas que lleven la investigación a necesitar de datos psicológicos del occiso para esclarecer la forma de su deceso (Jiménez, 2001, p. 273).

Es decir, la autopsia psicológica puede entenderse como una herramienta para establecer cuál fue la manera en que murió una persona, en los casos en que esta información no es clara o cuando se tienen dudas al respecto.

De acuerdo con Jiménez (2001), dicha autopsia también tiene aplicabilidad en los estudios de victimología tendientes a identificar el grado de implicación del individuo fallecido con las circunstancias en las que se presentó el deceso; de esta manera, abre la posibilidad de comprender si este hecho podía evitarse y eleva la utilidad de esta técnica a la práctica en casos concretos en los que se quiere esclarecer ciertas características relacionadas con el individuo y con su fallecimiento.

Respecto a una utilización más precisa de la autopsia psicológica y sus desarrollos teóricos en investigación científica, Itsometsä (2002) sostiene que “la utilidad de la autopsia psicológica ha sido demostrada en diferentes áreas, mayoritariamente se ha empleado bajo un enfoque cuantitativo en estudios epidemiológicos centrados en el suicidio” (p. 11), es decir, se emplea como un método cuantitativo en situaciones más generales donde no se estudia un sujeto concreto, sino una cantidad de sujetos que fallecieron debido a un suicidio, los cuales comparten otras características, como el período en el que fallecieron o la ubicación en la que se encontraban, entre otras.

Como un acercamiento al imaginario que tiene el sistema legal colombiano acerca de la autopsia psicológica, Andrade y otros autores (2013) afirman que en Colombia la autopsia psicológica ha sido un procedimiento de uso reservado para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que ha sido asociada a la práctica de peritos especializados en el uso de protocolos de investigación y en técnicas de manejo en casos de homicidio y suicidio o cuando las muertes son de naturaleza dudosa; con ello se limita el acceso a otros espacios investigativos.

Todo lo que se ha expuesto alude a las concepciones más genéricas y a aspectos sobresalientes de la autopsia psicológica, los cuales serán profundizados en este capítulo a partir de la revisión bibliográfica de sus concepciones y usos, sus desarrollos históricos y el soporte legal de su empleo como prueba pericial en el ambiente legal,

sobre todo en el caso colombiano, de manera que se pueda examinar su validez como prueba pericial y cuán amplia ha sido su utilización.

La autopsia psicológica: el significado del término

Para identificar sus características y la forma como se desarrolla en el contexto colombiano, se requiere determinar qué se entiende por autopsia psicológica y dejar claro que, pese a la inexistencia de acuerdo total entre diversos autores acerca del concepto, sí se plantean algunos puntos en común entre diferentes perspectivas.

Además de las concepciones ya expuestas de Itsometsä (2002), Ceballos (2015) y Jiménez (2001), se conocen las de Angelina y Yavarone (s. f.), quienes expresaron que:

[...] la autopsia psicológica es un método de exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad de una persona ya fallecida, a través de la entrevista a terceras personas que se supone lo conocieron íntimamente y la revisión de documentos relacionados con esta (p. 3).

Las autoras ya no ponen de relieve la importancia del conocimiento de las circunstancias de la muerte, sino de la personalidad del fallecido; también agregan un nuevo punto en el procedimiento de la autopsia psicológica y es el uso de entrevistas a personas que estuvieron íntimamente relacionadas con el fallecido, como un método para obtener la información acerca de él.

El Department of the Army (1988) afirma:

The psychological autopsy is a thorough, retrospective investigation of the intention of the victim relating to his or her being dead. The information for the autopsy is obtained by interviewing individuals who knew the victim's actions, behavior, and character well enough to report on them (p. 5).

Estos autores están de acuerdo con que la autopsia psicológica se trata de una investigación retrospectiva del fallecido y que esta investigación se realiza mediante entrevistas a personas que lo conocieron suficientemente bien como para dar cuenta de sus características específicas y sus pensamientos; pero a diferencia de las autoras anteriores, aquí se propone que tal investigación tiene como finalidad conocer las motivaciones de la persona acerca de su muerte. Por último, Vasudeva (2010) dice:

[...] a psychological autopsy may assist the coroner or medical examiner in clearing up the mystery. It refers to assessment of the mental state of deceased person before death. It involves evaluation of the sort of person they were, their personality, and thought processes, will be required to assist the investigation (p. 175).

Desde esta óptica, la autopsia psicológica no es un campo de evaluación en sí misma, sino un complemento de la autopsia del cuerpo, que permite aclarar los misterios que no se hayan resuelto con la revisión del cuerpo y que se refiere a una evaluación del estado mental de la víctima y sus rasgos de personalidad.

Con base en todos los autores mencionados, se podría establecer que la autopsia psicológica es una herramienta de investigación retrospectiva sobre factores de personalidad, motivacionales y de comportamiento de un individuo para detectar algunos aspectos de las circunstancias en que falleció.

Origen e historia de la autopsia psicológica

A pesar de que en un principio se pensaba que el término fue utilizado por primera vez en los años sesenta por Schneidman, cofundador de La Suicide Prevention Center, como “nada menos que una investigación retrospectiva exhaustiva de la intención del fallecido” (Scott et al., 2006, p. 805), Núñez de Arco (2005) sostiene que “el término como tal surge en 1958, cuando el médico forense del condado de los Ángeles Theodore J. Curphey se encontró con varias muertes por droga y no tenía la posibilidad de identificar con certeza la causa o mecanismo de la muerte” (p. 338), es decir, aunque existe un acuerdo acerca de que la denominación de autopsia psicológica se originó en Los Ángeles, como un proceso para esclarecer la muerte del fallecido, aún no hay una completa claridad acerca de quién fue su autor.

Incluso la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense (s. f.) afirma:

Algunos investigadores (Spellman y Heyne, 1989; Jacobs y Klein, 1981) le atribuyen a Edwin Schneidman el origen de la autopsia psicológica. Sin embargo, el propio Schneidman (1981) se refiere al doctor Theodore Curphey como el padrino de la autopsia psicológica, cuando —desempeñándose como médico forense del condado de Los Ángeles— se encontró frente a varias muertes con presencia de droga en la sangre donde no tenía posibilidad de certificar con certeza el origen o naturaleza de la muerte, pues la intencionalidad difícilmente podría establecerse a partir de la autopsia médica. De esa manera invitó a Norman Farberow y otros psicólogos conductuales para participar de las investigaciones, quienes tras un esfuerzo de aproximación multidisciplinaria acuñaron el término de autopsia psicológica para referirse a la exploración psicológica del sujeto *post-mortem* (p. 14).

Angelina y Yavarone (s. f.) explican que el surgimiento de la autopsia psicológica está ligado a la experiencia de frustración del forense Theodore Curphey en 1958, quien investigaba aspectos relacionados con las muertes por consumo de sustancias psicoactivas y, al no tener los resultados esperados, decidió compartir su experiencia

con científicos conductistas como Norman Farberow, Schneidman y Litman, quienes aportaron al origen del término, que luego fue abordado en el año de 1961, en la ciudad de Los Ángeles, como un método de gran uso para las discusiones médico-forenses alrededor de muertes que tenían una etiología dudosa.

Scott, Swartz y Warburton (2006) relatan:

A finales de la década de 1950, la oficina de Los Ángeles County Coroner se enfrentó con un número creciente de servicios relacionados con drogas en los que tenía dificultades para determinar si la muerte fue accidental o derivada de un suicidio. En un intento por resolver estos misterios, surgió la colaboración entre la oficina de Los Ángeles County Coroner y Los Ángeles Suicide Prevention Center. Como resultado de sus esfuerzos conjuntos, este equipo desarrolló una evaluación más centrada en la vida y el estado emocional del fallecido antes de su muerte. E. S. Schneidman, cofundador de LA Suicide Prevention Center, acuñó el término “autopsia psicológica” para describir este proceso de evaluación posterior a la muerte (p. 205).

Así mismo, Murphy (2010) afirma que:

It was developed in the 1950's by 2 psychologists working in a hospital in USA. They discovered a box in the basement containing over 200 suicide notes and they studied them and other aspects of suicide. The term 'Psychological autopsy' was coined in 1958 by Edwin Schneidman, Norman Earberow, and Robert Litman, the directors of the Los Angeles suicide prevention center (LASPC) Ebert in 1987 made a step towards formulising the conditions under which a behavioral scientist should carry out a “Psychological autopsy” (p. 177).

En conclusión, la autopsia psicológica resulta de la unión de esfuerzos entre Los Ángeles County Coroner y Los Ángeles Suicide Prevention Center como un método para ayudar a esclarecer las circunstancias de una muerte cuando las causas son dudosas y que este estudio provino de las ideas planteadas por Theodore J. Curphey a causa de las crecientes muertes por drogas de las cuales no se tenía claridad acerca de si constituían un accidente o un suicidio, y también de las estrategias de investigación propuestas por Edwin Schneidman, Norman Farberow y Robert Litman. Por esto, a pesar del consenso respecto a que Schneidman fue el primero en utilizar el término autopsia psicológica, se desconoce quién es realmente el padre de la autopsia psicológica.

Metodología para el desarrollo de la autopsia psicológica

Para establecer las principales metodologías utilizadas en la realización de autopsias psicológicas, primero se explicará cuáles son las principales fuentes de información

y cuál es la información que debe ser recolectada; luego se hablará de algunas herramientas de mayor relevancia.

En primer lugar, Itsometsä (2002) y Rodríguez (s. f.) están de acuerdo en que, sin importar cuál sea la metodología utilizada, debe estar basada en la evidencia que resulte del abordaje de dos fuentes principales: entrevistas a personas cercanas al fallecido y revisión documental de fuentes pertinentes para el caso.

En cuanto al proceso de entrevista:

El Dr. Edwin S. Schneidman describió su método de entrevistar a los supervivientes como una mezcla de conversación, entrevista, apoyo emocional, preguntas generales y una buena dosis de escuchar. Subrayó que, como parte de la autopsia psicológica, el investigador intenta reconstruir el estilo de vida de la víctima, prestando una atención especial al período que precede inmediatamente a la muerte (Rodríguez, s. f., s. p.).

Dicha entrevista, según Schneidman, debía basarse en la escucha y el respeto por la pérdida que había sufrido el entrevistado, más que enfocarse en preguntas rígidas, confusas e irrespetuosas.

De acuerdo con Rodríguez (s. f.), existen algunos criterios para analizar toda la información en la autopsia psicológica: primero se debe valorar la información básica o sociodemográfica, como la edad, el tipo de ocupación, el vínculo o estado civil y el género, entre otros; seguido de ello, los detalles de la muerte y el historial de la víctima, en especial respecto a intentos previos de suicidio o ideación suicida. Igualmente se deben revisar los antecedentes médicos familiares relacionados con la salud mental, ideación suicida, afectaciones o alteraciones en el estado de ánimo e incluso de suicidios. Otro aspecto muy importante tiene que ver con las características de la personalidad del individuo, las rutinas de su vida y los patrones de reacción ante diferentes estresores y experiencias emocionales. También se valoran la existencia de estresores o conflictos recientes, el consumo de sustancias psicoactivas y la relación de este consumo con el estilo de vida y con la muerte de la persona, el tipo y la calidad de vínculos interpersonales, la presencia o ausencia de cambios en la rutina o los hábitos, la información acerca de experiencias exitosas, el proyecto de vida y sus planes, la intencionalidad ante el hecho, los niveles de letalidad, las expresiones de las personas que constituyen una fuente de información o entrevistadas y, finalmente, los comentarios adicionales que puedan aportar información especial sobre los hechos (Rodríguez, s. f.).

Por otro lado, con un poco más de énfasis en el tipo de información que debe ser recolectada y no en las fuentes de información, Scott y otros autores (2006) con base

en Schneidman (Ellis, 2008), señalan que, mediante la autopsia psicológica, se deben responder los siguientes puntos: i) causa; ii) modo; iii) motivo; iv) intención; v) letalidad, y vi) suicidio sano frente a demente.

- La causa responde a qué dio lugar a la muerte de la persona.
- El modo se refiere a las circunstancias de la muerte del individuo: si se trata de una muerte accidental, natural, por homicidio o suicidio. Es en este punto donde la autopsia desempeña un papel primordial.
- En los casos de suicidio, el siguiente paso es determinar los motivos que llevaron a actuar a la persona; para esto Schneidman (citado por Scott et al., 2006) propone resolver las siguientes preguntas: “¿Por qué el individuo hizo esto? ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Por qué lo hizo en este momento determinado?” (p. 806).
- La intención es la consciencia o inconsciencia del individuo de llevar a cabo su muerte.
- El grado de letalidad representa el riesgo en la conducta suicida. Para explicar mejor este concepto, Schneidman la dividió en alta, media, baja y ausente (Ellis, 2008). Letalidad alta representa una decisión inequívoca que un individuo toma acerca de matarse a sí mismo; la media, una situación en la que el individuo tiene un importante papel para preparar su propia muerte mediante acciones conscientes o inconscientes; en la baja, la persona desempeña algún “papel pequeño, aunque no insignificante, para efectuar o preparar su propio fallecimiento” (p. 27), y la ausente indica que el individuo no desempeñó ningún rol para causar su propia muerte y la evidencia indica que el fallecido deseaba vivir (Scott et al., 2006).
- Determinar si una muerte se debió a un suicidio sano frente a demente alude a la intención de la persona de quitarse su propia vida y a la decisión racional de quitarse la vida.

El Department of the Army (1988) propone que:

This will usually be done jointly with a law enforcement officer to facilitate mutual access to persons and records. In the investigation, an attempt is made to obtain relevant information about any psychiatric idiosyncrasies, or the presence of any suicide warning signs the victim may have voiced. The following information should be gathered by the investigating officer or team: 1. Life history. 2. Psychiatric-psychological data. 3. Clues to or communications of suicide intent. 4. Recent life events. 5. Miscellaneous data that may be relevant to the death, but not necessarily psychological in nature (p. 7).

Aquí se proponen no solo unos criterios específicos que deben ser evaluados mediante la autopsia psicológica, sino que también se determina quién debe ser el encargado de recopilar esta información.

Por último, la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense (s. f.) resalta los siguientes temas para abordar durante la autopsia psicológica:

1. La existencia de eventos asilados o fugaces.
2. La identificación de precursores y de factores precipitantes.
3. El relacionamiento de la víctima con personas significativas para ella.
4. Las decisiones que había tomado la víctima, la existencia de diagnósticos o el historial de tratamiento.
5. La posición socioeconómica.
6. La mirada retrospectiva frente a condiciones de vida, estilos, hábitos y eventos de gran significancia para la persona.

Instrumentos para el abordaje de la autopsia psicológica

En los desarrollos de la autopsia y los protocolos institucionales que se han fijado para esta se sugieren herramientas o instrumentos que la facilitan metodológicamente. A continuación se abordarán los dos de mayor reconocimiento y uso:

Modelo de autopsia psicológica integrado (MAPI)

Este modelo constituye uno de los de mayor uso y aceptación internacional. De acuerdo con García (2007), se vale de la entrevista estructurada con base en respuestas estandarizadas o cerradas. Este enfoque sugiere comenzar un análisis en el lugar de los hechos, donde se recoge toda la información física que sea posible, al igual que huellas psicológicas que pudieran hacerse evidentes en el escenario y la entrevista a los familiares y personas cercanas; una vez recolectada esta información, el investigador se reúne con otros profesionales para unificar datos y elaborar el informe pericial (Andrade et al., 2013).

Procedimiento básico para realizar una autopsia psicológica (MAPI)

1. Concurrencia a la escena del crimen (fijación, evidencia conductual, evidencia forense).
2. Entrevistar a las personas que conocían a la víctima.
3. Revisión de la carpeta investigativa (junto al informe médico legal, informe de peritos, declaraciones, etc.).
4. Consultar a investigadores policiales.
5. Revisar el lugar de habitación y

objetos personales del occiso (huella psicológica, producciones). 6. Evaluar el estilo de vida y factores de riesgo (suicida, hétero-agresivo o accidental). 7. Analizar notas, apuntes de la víctima y cuentas en redes sociales (categorías discursivas, rastreo de discurso suicida). 8. Realizar entrevistas a los amigos, compañeros de trabajo y familiares. 9. Investigar los eventos precedentes a la muerte (cambios conductuales, rituales, despedidas, distribución de bienes, estresores recientes, pérdidas importantes). 10. Revisar la historia psicológica de la víctima y su historia de vida (manejo de estrés, estilos de afrontamiento, duelos no resueltos, conflictos psíquicos). 11. Entrevistar a alguien que pudiera estar al tanto de los sentimientos del occiso.

Áreas exploradas por el MAPI:

En definitiva, el procedimiento básico a realizar para llevar a cabo una autopsia psicológica persigue formarse un cabal conocimiento de ciertas áreas del sujeto, elementos que luego —mediante un análisis con los integrantes del equipo investigador— deberán ser sometidos a análisis para arribar a una conclusión (Ceballos, 2015, p. 17).

De acuerdo con Burgos (2006), este modelo tiene gran validez, ya que ha sido revisado en investigaciones de la doctora Teresita García Pérez entre los años 1991 y 1994, empleado en casos de suicidio y de personas víctimas de homicidio. En dichas investigaciones, el MAPI presentó resultados en cuanto a su validez y confiabilidad que permiten concluir que es un instrumento aplicable y generalizable, por lo cual cuenta con un importante reconocimiento científico y gran utilización en el mundo, principalmente en América Latina.

Método de la estrella, de Núñez de Arco

De acuerdo con Núñez de Arco y Huici (2005), el método de la estrella cuenta con validación por expertos. Ha sido utilizado en una gran cantidad de casos y en el marco de procesos penales. Como su nombre lo indica, este enfoque se desarrolla a partir de una estrella gráfica, cuyos parámetros investigativos son el uso de recursos biográficos, la identificación de características asociadas a la personalidad, el estudio de las relaciones familiares y redes de apoyo en el contexto familiar o psicosocial y la existencia de factores relativos al estado de ánimo, como podría ser el depresivo. El suicidio es un fenómeno multifactorial; en este método, el número de factores en cada una de las puntas de la estrella hace que esta se amplíe y, cuanto mayor es su tamaño, mayor posibilidad de hallar una amplia variedad de factores explicativos de la conducta suicida que se analiza.

Usos de la autopsia psicológica

Burgos (2006) expone: “Desde sus inicios y hasta la actualidad, la autopsia psicológica se utiliza principalmente para esclarecer decesos por causas dudosas, es decir, que tienen más de una posible explicación” (p. 76). También sostiene que “la autopsia psicológica es un método con el cual se reconstruyen aspectos biogeográficos y psicopatológicos del individuo mediante entrevistas a familiares y amigos y mediante la revisión de documentos personales y médicos” (p. 83). Por otro lado, Pérez y Ubaldo (2010) afirman que en el campo del derecho penal es donde esta autopsia tiene mayor cabida para establecer las circunstancias y las condiciones de la muerte cuando se sospecha de suicidio. Los autores mencionados, así como Núñez de Arco y Huici (2005) y Jiménez (2001), han sostenido que el principal objetivo de la autopsia psicológica es esclarecer las circunstancias de la muerte de un individuo. Asimismo, Rodríguez, Sarkissian y Olivera (2006) proponen que, en el caso específico de las notas suicidas, tal autopsia es una alternativa de investigación cuando el contenido de la nota y las características de la muerte no tienen una correspondencia lógica. Jiménez (2001) y Arco y otros autores (2005) también concuerdan en que esta puede ser aplicada en investigaciones de tipo victimológico para identificar en qué medida el fallecido se puso a sí mismo en la situación que causó su muerte.

Pinchansky y otros autores (s. f., citado por Burgos, 2006) expresan:

[...] el uso de la autopsia psicológica se ha ampliado en los últimos años y se ha empezado a utilizar con sujetos físicamente vivos que no aportan nada en el examen directo; se podría decir que estos son sujetos psicológicamente fallecidos. Por ejemplo, en estados de coma o demencias. (p. 76).

Desde un enfoque más teórico y epidemiológico, se puede decir que la autopsia psicológica tiene gran utilidad, ya que, como lo menciona Ceballos (2015), “mayoritariamente se ha empleado bajo un enfoque cuantitativo en estudios epidemiológicos centrados en el suicidio” (p. 68); en concordancia, García (1998):

[...] en Cuba, la autopsia psicológica forma parte de las acciones de prevención de las conductas autoquiricas. Cada área de salud hace el análisis y discusión de sus fallecidos por suicidio utilizando esta metodología para detectar qué factores de riesgo estaban presentes (s. p.).

Frente a la estrecha relación del derecho con la autopsia psicológica, se le han reconocido nuevas utilidades en varias ramas. Torres (2007) expresa que “en poblaciones como Norteamérica la autopsia psicológica no solo se aplica en contextos de derecho

penal sino también de civil o laboral, entre otros” (p. 127). Así mismo, Vidal y otros autores (2006) afirman:

La autopsia psicológica se realiza tanto en derecho penal como en civil. En materia penal los casos que con más frecuencia hacemos son: en la víctima, determinación del estado mental en el momento de la victimización, las muertes dudosas, equívocas o de etiología médico legal por precisar, la sospecha de suicidio inducido y el análisis inferencial del grado de secuela del acto lesivo en la posterior muerte. En el victimario o perpetrador es muy excepcional, debido fundamentalmente a que tras su muerte extingue la responsabilidad penal; no obstante, existen casos muy puntuales, como en los procesos de revisión de causa y otros. En el caso del derecho civil, lo más frecuente son las impugnaciones de acciones para las cuales se cree no era competente o no estaba psicológicamente apto (testar, contraer matrimonio, hacer donaciones, compra venta, permutar, etc. (p. 4).

Algunos autores han sugerido objetivos más generalizados de la autopsia psicológica. Por ejemplo, Acosta (2011) recomienda su uso ante cuatro necesidades específicas: i) identificar la manera en que un individuo ha fallecido, sobre todo en aquellos casos dudosos; ii) indagar acerca del momento y de los factores temporales de la muerte, para lo cual el investigador deberá fijarse en gran diversidad de aspectos de la vida de la persona fallecida y buscar una relación entre ellas; iii) contar con información que sea clara, pertinente y suficiente para evaluar los datos, con el fin de prevenir la ocurrencia o disminuir la letalidad de los intentos suicidas, y iv) abordar metodológicamente, por medio de entrevistas, las circunstancias de la muerte.

En conclusión, son muy diversas las áreas de aplicación de la autopsia psicológica, aunque tradicionalmente se ha visto como una medida para establecer las circunstancias del fallecimiento de una persona en los casos de la muerte dudosa.

La autopsia psicológica en el proceso legal colombiano

En Colombia, la aplicabilidad de la autopsia psicológica ha estado ligada al contexto penal, sobre todo al esclarecimiento de muertes dudosas en casos donde existe sospecha de suicidio. En primer lugar, en Colombia, el suicidio no es considerado hecho punible, pero en el Código de Procedimiento Penal colombiano, la inducción al suicidio y el favorecimiento o la ayuda para que este se consume son conductas punibles y, por ello, quien “eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión” (Andrade et al., 2013, p. 11) (art. 107). Por esto, con la autopsia psicológica, en el contexto penal colombiano no solo se busca establecer el tipo de muerte (accidental, suicidio, homicidio o natural),

sino también determinar las causas de la decisión del suicida y si estas tuvieron que ver con la presión o coacción de alguien más.

Para Rodríguez y otros autores (2006), la aplicabilidad de la autopsia psicológica en Colombia se ha visto limitada por diversos factores, entre los que se encuentran la baja especialización en los desarrollos teóricos y los abordajes metodológicos del psicólogo forense y la falta de herramientas válidas para el contexto específico que aporten al esclarecimiento de las circunstancias alrededor de muertes dudosas.

También existen otras limitaciones, que no expone Rodríguez y otros autores (2006), pero que sí son propias del contexto colombiano, en cuanto al desarrollo del óptimo procedimiento de la autopsia psicológica, como lo exponen Andrade y otros autores (2013).

La autopsia psicológica no se toma en cuenta dentro del proceso legal colombiano como una herramienta que permita establecer las circunstancias de la muerte en caso de muerte dudosa, sino que se ve como una técnica que puede complementar la autopsia médico-legal en casos aislados. En materia legal no se debe dejar de lado que:

La autopsia psicológica es un dictamen pericial, es decir, se podría constituir como prueba autónoma, por cuanto es un concepto de carácter técnico-científico, rendido por un perito experto en un determinado tema, en este caso un psicólogo o psiquiatra, encuadrado en la forma legal del artículo 267 del C.P.P. teniendo en cuenta que dentro del ordenamiento penal nada impide que los diferentes sujetos procesales soliciten la práctica de esta prueba. La conclusión del PAP como producto de entrevistas, documentos, experticios, huellas, necropsias, se constituiría como un hecho indicador o indicante que llevaría al juez al hecho desconocido: homicidio o suicidio (Gómez y Sáenz, 2000, p. 137).

Este apartado muestra que, a pesar de que la autopsia psicológica cuenta con el reconocimiento legal para constituir una prueba, la falta de su utilización en el contexto colombiano da cuenta del desconocimiento teórico que existe sobre esta.

En cuanto al procedimiento estipulado para la autopsia psicológica, en el Código de Procedimiento Penal colombiano se establece la utilidad de las herramientas periciales que aporten al esclarecimiento de muertes dudosas, mediante el uso de técnicas que respondan a las necesidades del contexto y que respeten los procedimientos legales fijados para ello: “[...] los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente, y sometidos a la regla de cadena de custodia” (Colombia, Congreso de la República, 2004, art. 277).

Así mismo, Gómez y Sáenz (2000) indican que “el Fiscal encargado solicitará PERITAJE a un psicólogo o psiquiatra pidiendo la realización del PAP. Inicio de PAP, colocando fecha, motivo de investigación, modo y causa de la muerte” (p. 93). Pone de relieve alguna de la información más importante que debe incluir la solicitud de autopsia psicológica, la cual debe elaborarse con base en la *Guía para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forenses mediante autopsia psicológica en la determinación de la manera de muerte (suicida, homicida o accidental)*, propuesta por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2010). La guía incluye una revisión de todos los documentos del caso, así como también las entrevistas a los allegados del fallecido, con el fin de determinar las características de personalidad del fallecido, así como de reconstruir sus últimas veinticuatro horas de vida, de manera que se logre el esclarecimiento de su muerte. Toda esta información y sus resultados deben quedar consignados en un informe pericial que será entregado a las autoridades.

Conclusiones

Con base en los autores revisados, se puede colegir, en primer lugar, que la autopsia psicológica es un método de investigación de carácter retrospectivo acerca de los aspectos más relevantes de un sujeto fallecido —su personalidad, sus comportamientos y sus motivaciones—, con el fin identificar cuáles fueron las circunstancias específicas que rodearon su muerte, en casos de dudas.

La autopsia psicológica surgió gracias a los esfuerzos combinados de Theodore J. Curphey y Edwin Schneidman, entre otros, como un procedimiento que permitiera indagar por la causa de la muerte en la gran cantidad de decesos por sobredosis de drogas que se presentaron en Los Ángeles.

También es claro que, aunque se cuenta con importantes instrumentos para elaborar dicha autopsia, como el MAPI y el método de la estrella, aún falta mucho por investigar en esta área para llegar a consensos relevantes sobre la metodología más apropiada. Ambos métodos son utilizados en varios campos, no solo relacionados con el derecho penal y el civil, sino también en investigación teórica.

En Colombia, a pesar de que se cuenta con unas condiciones legalmente establecidas para hacer la autopsia psicológica en contextos jurídicos y de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha elaborado un protocolo para ello, aún existen muchas limitaciones, en particular, de carácter teórico, para la apropiada utilización de tal autopsia como prueba pericial.

Referencias

- Acosta, S. (2011). La autopsia psicológica: una técnica forense para el esclarecimiento del suicidio. *Poiésis* (21), 1-4. doi: <https://doi.org/10.21501/16920945.88>
- Andrade, J., Téllez, C. y Giraldo, L. (2013). La autopsia psicológica en Colombia: exploración psicobiográfica del suicidio. *Revista internacional de psicología*, 12 (2), 1-45. doi: <https://doi.org/10.33670/18181023.v12i02.70>
- Angelina, L. y Yavarone, M. (s. f.). *La autopsia psicológica-técnica de trabajo pericial forense* [Archivo PDF]. <https://es.scribd.com/doc/51320422/Autopsia-psicologica-en-la-pericia>
- Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. (s. f.). *Diplomado en Psicología Jurídica y Forense* [Archivo PDF]. http://psicoforensezb.com/wp-content/uploads/2019/03/diplomado.Ps_-Juridica-y-Forense-GYE.pdf
- Burgos, A. (2006). La autopsia psicológica. *Revista de ciencias jurídicas* (110), 69-87. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/13637/12947>
- Ceballos, F. (2015). Aplicación forense de la autopsia psicológica en muertes de alta complejidad. *Anuario de Psicología Jurídica*, 25(1), 65-74. doi: <https://doi.org/10.1016/j.apj.2015.02.004>
- Colombia, Congreso de la República. (31 de agosto de 2004). *Ley 906 de 2004*, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
- Department of the Army. (30 de septiembre de 1988). *Suicide Prevention and Psychological Autopsy*. Recuperado el 15 de octubre de 2020 de <https://www.coursehero.com/file/41722903/DA-Pam-600-24-Suicide-Prevention-and-Psychological-Autopsypdf/>
- Ellis, T. (2008). Contribuciones de Schneidman para entender el pensamiento suicida. En *Cognición y suicidio: teoría, investigación y terapia* (pp. 27-49). Manual Moderno.
- García, T. (1998). La autopsia psicológica en el suicidio. *Medicina legal de Costa Rica*, 15 (1-2), 22-24. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00151998000200010&lng=en&nylng=es
- García, T. (2007). *Pericia en autopsia psicológica*. Ediciones La Rocca.
- Gómez, V. y Sáenz, M. (2000). *Aplicación de la autopsia psicológica en el proceso penal colombiano* [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. <https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis35.pdf>
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2010). *Guía para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forenses mediante autopsia psicológica en la determinación de la manera de muerte (suicida, homicida o accidental)* [Archivo PDF]. <https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/40473/Gu%C3%ADa+para+la+realizaci%C3%B3n+de+pericias+psiqui%C3%A1tricas+o+psicol%C3%B3gicas+forenses+mediante+autopsia+psicol%C3%B3gica+en+la+determinaci%C3%B3n+de+la+manera+de+muerte+suicida%2C+homicida+.pdf/3e166326-5933-7734-5b32-a80171456ac3>
- Itsometsä, E. (2002) Estudios de autopsia psicológica: una revisión. *European Psychiatry*, 9(1), 11-18. doi: <https://doi.org/10.1017/S1134066500006925>

- Jiménez, I. (2001). La autopsia psicológica como instrumento de investigación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 30(3), 271-276. <https://www.redalyc.org/pdf/806/80630305.pdf>
- Núñez de Arco, J. (2005). *La autopsia*. Cooperación técnica alemana. <http://www.nunezdearco.com/PDF/Autopsia%20Nunez.pdf>
- Núñez de Arco, J. (2015). *Psicología criminal y criminalística. El informe pericial en psicología y psiquiatría forense* (4ª ed.). El original.
- Núñez de Arco, J. y Huici, T. (2005). El uso de la autopsia psicológica forense en el proceso penal. *Identidad jurídica*, 1, 235-242.
- Pérez, M. y Ubaldo, P. (febrero-marzo de 2010). *La necropsia psiquiátrico-psicológica como prueba pericial en muertes dudosas. Revisión de un caso medicolegal*. 1211º Congreso Virtual de psiquiatría. Interpsiquis 2010. <https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-necropsia-psiquiatico-psicologica-como-prueba-pericial-en-muertes-dudosas-revision-de-un-caso-medico-legal/>
- Rodríguez, A. (s. f.). *Autopsia psicológica: una herramienta útil para el peritazgo psicológico*. <http://psicologiajuridica.org/psj4.html#:~:text=AUTOPSIA%20PSICOL%C3%93GICA%3A%20Una%20herramienta%20%C3%BAtil%20para%20el%20peritazgo%20psicol%C3%B3gico.ytext=Este%20procedimiento%20es%20considerado%20como,estado%20mental%20antes%20del%20deceso>
- Rodríguez, H., Sarkissian, P. y Olivera, J. (2006). Investigación de una muerte violenta con nota suicida electrónica. *Revista de Psiquiatría del Uruguay*, 70(1), 47-52. http://www.spu.org.uy/revista/jul2006/05_cc.pdf
- Scott, C., Swartz, E. y Warburton, D. (2006). Autopsia psicológica: resolver los misterios de la muerte. *Psychiatric Clinics of North America* 29, 805-822.
- Torres, R. (2007). Autopsia psicológica. Evaluación crítica y su aplicabilidad en el ámbito forense. *Anuario de Psicología Jurídica*, 17, 111-130. <https://www.redalyc.org/pdf/3150/315024768007.pdf>
- Vasudeva, C. (2010). Psychological Autopsy-A Review. *Al Ameen Journal of Medical Sciences*, 3(3), 177-181. <http://newajms.alameenmedical.org/ArticlePDFs/AJMS.3.3.2010.177-181.pdf>
- Vidal, L., Pérez, E. y Borges, S. (2006). Algunas consideraciones sobre la autopsia psicológica. *psiquiatria.com*, 10(1). <https://psiquiatria.com/psiquiatria-legal/algunas-consideraciones-sobre-la-autopsia-psicologica/>

6

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE DE LA VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

Juan José Cañas Serrano

Resumen

En este artículo se clarifica en qué consiste la evaluación psicológica forense de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil y, por extensión, la importancia de esta pericia psicológica; por qué metodológicamente no es adecuado hacerla equivalente a una investigación científica; qué caracteriza, como delito, el abuso sexual infantil; cuál es el punto de partida de esta pericia; a qué interrogantes responde; qué procedimiento se sigue para resolver las preguntas periciales; cómo evaluar la versión que proporciona la víctima; cómo examinar el impacto del evento traumático sobre la víctima; qué aspectos tomar en consideración al utilizar instrumentos psicológicos; de qué elementos consta un informe psicológico forense, y qué factores revisar en la práctica de la prueba pericial.

Palabras clave: abuso sexual infantil, evaluación psicológica forense, víctimas de abuso sexual, pericia psicológica, interrogantes periciales.

Introducción

La psicología forense es definida por Urra (2002) como “la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la Justicia, y coopera en todo momento con la Administración de Justicia, actuando en el Foro, mejorando el ejercicio del Derecho” (p. 3). La evaluación psicológica forense es una de las principales actividades que desarrolla el psicólogo forense, entre los cuales la que se efectúa a las presuntas víctimas de abuso sexual infantil es una de las más frecuentes.

En lo atinente a la estructura de la evaluación psicológica forense de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil, se toma como punto de referencia el modelo

implementado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IN-MLyCF), institución que ejerce labores periciales y está adscrita a la Fiscalía General de la Nación, en la que el autor laboró durante 32 años. En 2007, la puesta en marcha en Colombia del sistema penal acusatorio llevó a esta institución a sistematizar y estandarizar los procedimientos para las pericias psicológicas y psiquiátricas. Como resultado del trabajo realizado por cerca de noventa psicólogos y psiquiatras durante más de dos años, se elaboraron el *Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses*, que se publicó en diciembre 1 de 2009, y las *Guías para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forenses*; una de ellas es la *Guía para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forense en niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales*, que se publicó en febrero 1 de 2010.

El contexto histórico

El ser humano, en su proceso evolutivo, entendió que, si no se organizaba con normas que facilitaran la convivencia, estaba condenado al choque y al conflicto permanentes. De esta consideración surgió el derecho, que empezó por reconocer los deberes; cuando aceptó los derechos, la ley siempre se inclinaba por el más fuerte. Fue en la época de las grandes gestas revolucionarias, motivadas por el avance del pensamiento científico, que se instituyeron los derechos de las personas, entre estos, los relacionados con el debido proceso en litigios de carácter penal (Hernández, 2011).

Ante la imposibilidad de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de una conducta delictiva, por carecer de los conocimientos requeridos, los jueces se vieron abocados a apoyarse en disciplinas científicas como la biología, la física, la medicina, la química y la psicología, que ayudó al derecho a desentrañar las motivaciones de la acción criminal y le proporcionó herramientas e instrumentos para tomar decisiones justas, objetivas y acordes con las variables psicológicas de los involucrados en el proceso judicial (Hernández, 2011). La relación entre la psicología y el derecho se produjo con posterioridad a la que ya tenía con la psiquiatría, surgida de la necesidad de explicar aspectos del comportamiento delincuencial que no podían comprenderse desde la dimensión legal (Díaz, 2011).

Del entrecruzamiento de la psicología y el derecho surgió la psicología jurídica, una subespecialización de la psicología que describe, explica, predice y controla el comportamiento humano con unas consecuencias jurídicas (Hernández, 2011). La psicología forense es una variante de esta, se tipifica cuando el conocimiento psicológico se emplea para la solución de problemas legales y responde interrogantes o inquietudes que surgen en el ámbito legal. Para Urra (2002), esta es “la ciencia

que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la Justicia, y coopera en todo momento con la Administración de Justicia, actuando en el Foro, mejorando el ejercicio del Derecho” (p. 25).

En 2002, Colombia se acogió a un sistema procesal de tendencia acusatoria, un sistema de partes en un proceso adversarial modulado con tendencia acusatoria y claramente adjudicativo, que enfatiza la garantía de los derechos fundamentales del inculcado (Saray, 2016). Este hecho fue definitivo para el desarrollo de la psicología forense colombiana, pues abocó a los psicólogos forenses a desempeñar actividades como el peritaje forense y la asesoría legal, características de este modelo investigativo. El nuevo sistema posibilitó la conformación de equipos de peritos forenses no oficiales que oficiaran ante la Fiscalía en representación del imputado o acusado, hecho que amplió el radio de acción del psicólogo forense y contribuyó a posicionar la disciplina (Díaz, 2011).

El sistema acusatorio concibe al perito como un experto en ciencia, técnica, arte, oficio, afición o idioma, que aporta conocimiento veraz, específico y especializado a la justicia en el contexto de un proceso penal, para responder una petición expresa de las partes litigantes, bajo juramento y de manera documentada y oral. Aunque no ha sido testigo presencial de los hechos, durante el juicio oral y público, por los conocimientos especializados que posee, el perito desempeña el rol de testigo; se le permite emitir conceptos y opiniones como evidencia testimonial.

El Código de Procedimiento Penal (CPP) colombiano dispone que “la prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados” (art. 405). El psicólogo forense debe saber que, en su condición de perito experto, debe atender las reglas del testimonio y que uno de los conocimientos básicos que debe poseer es el dominio de la consideración jurídica de la prueba pericial. El ejercicio de perito experto no puede hacerse de manera adecuada si no se conoce su alcance en el campo legal; es un conocimiento imprescindible para poder comprender cómo un hecho de naturaleza psicológica se convierte en un hecho legal (Díaz, 2011).

La implementación del nuevo sistema penal, en 2007, indujo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a sistematizar y estandarizar los procedimientos para las pericias psicológicas y psiquiátricas. A partir de este momento, estas se rigen por los lineamientos establecidos en el *Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses* y en las *Guías para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forenses*, con el fin de hacerlas más expeditas, concretas y entendibles para los operadores jurídicos.

El campo profesional de la psicología jurídica es, sin discusión, el de mayor avance en los últimos tiempos en Colombia y la psicología forense, la subespecialidad de mayor acogida, pues ha ampliado su espacio en forma significativa hasta volverse casi imprescindible para abogados, fiscales, jueces, etc. Hoy es usual que los abogados cuenten en sus equipos de trabajo con la presencia del psicólogo forense. En la administración de justicia se observa la necesidad de tener su aporte y su concepto técnico-científico, que responda más allá del sentido común a las particularidades y los retos de la naturaleza humana que surgen en el vasto mundo jurídico. Resulta pertinente señalar que el avance de la psicología forense en nuestro país ha sido, como lo afirma Díaz (2011), más producto del ejercicio práctico que de la investigación y del análisis de problemas emanados de nuestra realidad.

De la amplia gama de posibilidades de actuación del psicólogo forense en el contexto penal, la evaluación psicológica forense —estudio para dar respuesta a los interrogantes periciales que formula una de las partes en el contexto de un conflicto legal— es la principal, la que lo identifica. Se produce de cara a una pregunta o inquietud proveniente del profesional del derecho que representa los intereses de una de las partes del conflicto jurídico. El abogado que solicita el servicio requiere que a su cliente o representado se le practique una evaluación psicológica forense, que se convertirá en prueba pericial y formará parte del debate probatorio. La prueba pericial psicológica sirve para aclarar un hecho que es materia de controversia jurídica y se rige por los principios y postulados instituidos para todo medio probatorio (Solórzano, 2011).

En lo atinente a la investigación y al juzgamiento del abuso sexual infantil, la participación del psicólogo forense se considera indispensable, pues entre los actores del proceso penal existe acuerdo respecto a la importancia de la pericia psicológica en este tipo de procesos. En la evaluación psicológica forense de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil, es la Fiscalía la que suele plantear los interrogantes periciales.

Una precisión pertinente

Respecto a la evaluación psicológica forense, algunos profesionales sostienen que es equivalente a una investigación científica dado el rigor metodológico con el que debe realizarse. Esta aseveración parece desmedida, exagerada, presuntuosa e, incluso, poco científica. Si bien entre la investigación científica y la evaluación psicológica forense existen similitudes, también hay diferencias marcadas.

La investigación científica parte de la percepción de que el acervo de conocimiento disponible es insuficiente para explicar determinados fenómenos, por ejemplo, el abuso sexual infantil; la evaluación psicológica forense surge de la necesidad de una persona envuelta en una causa legal.

En la investigación científica, el interrogante a resolver viene de la mente del investigador y es susceptible de ser depurado en el transcurso de esta; en la evaluación psicológica forense, el interrogante le es impuesto al psicólogo forense por la parte que, en el contexto de una investigación judicial, le solicita el servicio y debe ceñirse a él y limitarse a responderlo.

Lo que diferencia a la investigación científica de otras formas de investigación es el método que utiliza y la finalidad. En cualquier disciplina, el objetivo de la investigación científica es mejorar el conocimiento acerca de su objeto de estudio, el perfeccionamiento continuo de sus principales productos (las teorías) y medios (las técnicas) (Bunge, 1967); en la evaluación psicológica forense, el objetivo es esencialmente práctico, no es cognitivo.

Una vez el investigador se plantea el problema, dedica un buen tiempo a buscar información científica relacionada que lo oriente en la formulación de la hipótesis y le proporcione soporte conceptual; este no es el caso de la evaluación psicológica forense. ¿Qué tiempo le puede dedicar a esta fase el perito oficial que debe realizar una o dos pericias diarias y que cuenta como máximo con seis horas para cumplir con su tarea? ¿Qué tiempo le puede dedicar a esta fase el perito privado que presenta una o dos pericias mensuales y que cuenta con términos precisos para hacerlo? En el caso de los peritos privados, son contados con los dedos de la mano los que se dedican exclusivamente a realizar pericias psicológicas; la mayor parte de ellos son académicos de dedicación exclusiva, que escasamente tienen tiempo para evacuar sus compromisos docentes.

En el diseño de la investigación científica, al recurrirse a grupos de control, se garantiza el control de variables; asimismo, la hipótesis nula se acepta o se rechaza tras confrontarla con los escenarios de significación establecidos estadísticamente. Ni lo uno ni lo otro es posible en una evaluación psicológica forense en la que se trabaja un caso particular.

El producto final de la investigación científica entra a formar parte del cuerpo de conocimientos de su disciplina; el de una evaluación psicológica forense es la respuesta sustentada al interrogante pericial formulado (informe psicológico forense), con el que se espera incidir en el resultado de la investigación judicial en la que se participa.

Se espera que las conclusiones a las que se arribe en una investigación científica sean generalizables a la población objeto de estudio; las que se desprendan de la evaluación psicológica forense no van más allá del caso en el que se está trabajando y de ellas tan solo se beneficia quien la realiza y en ningún momento van a engrosar el cuerpo de conocimientos de la psicología forense, pues, si acaso le sirven al perito que la elaboró como punto de referencia en un caso similar.

Para que una evaluación psicológica forense responda en forma adecuada al interrogante pericial, debe seguir los estándares de la ciencia; en consecuencia, se debe trabajar con objetividad, rigurosidad, imparcialidad, coherencia y en forma sistemática, debe ser replicable, etc. Un psicólogo forense competente aprovecha aquellos conocimientos existentes relacionados con el asunto que se intenta responder, tanto en las ciencias formales (las que estudian ideas) como en las ciencias fácticas (las que estudian hechos) (Bunge, 1959).

En definitiva, una evaluación psicológica forense es, simplemente, uno de los tantos trabajos que el psicólogo forense puede comprometerse a desempeñar como parte de su quehacer profesional; un trabajo en el contexto de una investigación judicial. Si bien hay que hacerlo con rigurosidad y estándares de calidad altos, no es una investigación científica. Al hacerlas equivalentes, se corre el riesgo de que, al pretender realzar el trabajo pericial, se termine devaluando el trabajo científico.

Acerca del abuso sexual infantil (ASI)

La sexualidad forma parte de la naturaleza humana y suele ser fuente de placer y bienestar. En los seres humanos tiene más un carácter social que biológico y constituye una forma especial de comunicación, afecto y realización personal; como producto de la evolución, las personas contamos con un amplio repertorio de conductas prosociales; el amor conyugal es una de ellas.

Sin embargo, con frecuencia se presentan comportamientos sexuales que atentan contra la convivencia, incluidos las violaciones y los abusos de menores de edad como un doloroso ejemplo de ello. El delincuente sexual distorsiona las relaciones sexuales y las convierte en una forma de ejercer dominio, control y poder sobre sus víctimas. Cuando los individuos satisfacen sus apetitos sexuales sin tomar en consideración al otro, no solo constituyen una amenaza para la convivencia, sino que auténticamente hacen una regresión ontogenética.

Para regular el comportamiento sexual y evitar desbordes y atropellos, se han establecido algunos límites que, en el mundo occidental, son de dos tipos. En primer lugar, los comportamientos sexuales que implican a otras personas deben ser libres y consentidos; nadie puede ser forzado a mantener relaciones sexuales. En segundo lugar, a causa de que no cuentan con elementos para decidir, se protegen de contactos sexuales que se consideran inapropiados a los niños y a las personas con discapacidades mentales y psicológicas (Redondo, 2002).

El abuso sexual infantil no es un imaginario, no es un invento; es una dolorosa realidad que configura una especie de pandemia psicosocial, uno de los grandes flagelos

que enfrenta la especie humana. Es una de las formas de victimización en la infancia, cuyas secuelas son muy similares a las ocasionadas por el maltrato físico, el abandono emocional, etc. Es vivenciado por la víctima no como un atentado contra su sexo, sino contra su integridad física y psicológica.

Como lo expone la psiquiatra y psicóloga argentina Irene Intebi (1998), es una realidad difícil de detectar, problemática de abordar, compleja de resolver. Parte de la dificultad radica en que, aunque se trata de hechos que han ocurrido con impresionante frecuencia, la tendencia fue encubrir, negar, minimizar su continuidad y sus efectos, silenciar.

El abuso sexual infantil constituye un problema social serio con una magnitud y complejidad que trascienden cualquier acercamiento aislado. Resolverlo requerirá el compromiso y la participación no solo de los profesionales de las disciplinas e instituciones involucradas en la protección de la infancia, sino de toda la sociedad (Redondo, 2002). Es un problema universal. No resulta fácil precisar si se ha incrementado; lo que sí está claro es que se ha mejorado la forma de afrontarlo, pues se cuenta con una mayor sensibilidad social sobre este tema, los instrumentos de detección son más finos y los sectores implicados (padres, educadores, funcionarios judiciales, legisladores, etc.) han ganado en compromiso.

Existe un relativo consenso en cuanto a los criterios requeridos para que se configure un ASI: una relación de desigualdad en cuanto a edad, madurez o poder entre agresor y víctima y la utilización del menor de edad como objeto sexual. Se enfatiza en la existencia de una relación asimétrica y desigual, entre una persona con poder y otra indefensa o vulnerable.

Los delitos contra la libertad sexual se agrupan en dos grandes categorías: agresiones sexuales (cuando hay violencia o intimidación) y abusos sexuales (cuando no hay violencia ni intimidación, pero sí engaño o falta de consentimiento) (Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000).

El abuso sexual infantil es un fenómeno con unas características muy específicas que lo diferencian de los restantes delitos del Código Penal. A la hora de intervenir es muy importante el conocimiento que se posea acerca de estas. Actuar judicialmente con base en los clichés tradicionales del derecho penal, sin tener en cuenta las singularidades aludidas, es la causa de notorias injusticias con respecto a las víctimas. No es comparable que un adulto sea víctima de un robo conque una niña haya sido abusada sexualmente durante años en el seno de su hogar; actuar como si ambos delitos se rigieran por los mismos parámetros configura, claramente, un error; por eso, el conocimiento y la difusión de las características del fenómeno del abuso sexual infantil constituye un arma poderosa para revertirlo.

El abuso sexual al que se hará referencia es el crónico, o sea, el que se presenta en múltiples ocasiones, que es de carácter esencialmente seductivo. El secretismo es una de las características que determina que el abuso sexual infantil, como delito, sea diferente de los restantes contemplados en el Código Penal. Alude al acuerdo tácito, producto de la manipulación del agresor sexual, que se establece entre este y su víctima para no hablar de los contactos sexuales entre ellos y que desempeña un papel nuclear en el abuso sexual infantil. Está en el corazón del abuso sexual; sin esto, no habría abuso (Zabin, 2005).

Los niños que han sido objeto de abusos sexuales suelen evitar hablar de ellos; se sienten apenados y avergonzados y tienden a mantenerlos en secreto. A su vez, los victimarios requieren que no se sepa nada de su acción delictiva. No obstante, considerar que el secretismo tan solo sirve para encubrir las actividades ilícitas del delincuente es subestimar el papel que desempeña en el contexto del abuso sexual infantil. De hecho, para el agresor sexual conlleva una sensación de poder y valía personales y constituye su arma más efectiva para atraer a sus jóvenes víctimas.

Para atrapar a sus presas, los agresores sexuales recurren a diversas estrategias. No actúan en forma precipitada ni alocada: entre el momento en que un menor de edad les atrae y el momento en que lo seducen perfectamente puede transcurrir un año; cual ajedrecistas eximios, van varios pasos adelante de sus potenciales víctimas, estrategia con la que indefectiblemente terminan controlándolas y maniatándolas (Zabin, 2005).

Como los niños muestran una necesidad insaciable de cuidados y atención, los abusadores sexuales aprovechan esa carencia para abusar de ellos, detectan lo que ellos necesitan y se lo proporcionan. Sus métodos, aunque lentos, están ideados para crear poco a poco la necesidad de aceptar los secretos. El agresor sexual actúa en forma similar a la araña que va elaborando una telaraña con el fin de atrapar a sus víctimas; es una auténtica labor de orfebrería: detallada, minuciosa (Zabin, 2005).

Con esos procedimientos logran que los niños consideren los secretos como medios necesarios para proteger algo que ellos disfrutan. Crean un entorno psicológico en el que las víctimas empiezan a ver a sus agresores no solo como persona confiable, sino como la que más se preocupa por ellos; en ese contexto, los secretos se convierten en prueba de confianza mutua.

El hecho de guardar secretos insignificantes provoca en las víctimas una sensación de responsabilidad y culpabilidad compartidas y, para no tener que explicar su participación voluntaria, las lleva a no delatar al abusador, hecho que termina haciéndolas cautivas de los deseos enfermizos de sus agresores. En cuanto un niño se percata de que no puede contar lo sucedido sin incriminarse, abandona todo tipo de resistencia ante las nuevas insinuaciones sexuales (Zabin, 2005).

Es importante tener presente esta característica del abuso sexual infantil durante la investigación judicial para llevar a cabo una intervención adecuada. La ley del silencio es un elemento central de este delito y es uno de los factores que explica que la “cifra negra” alcance las proporciones que tiene. Al respecto, Perrone y Nannini (1997) manifiestan: “El secreto supone la convicción de que las vivencias en cuestión son comunicables. Entre las personas involucradas nace entonces un vínculo de facto, sin alternativas” (p. 138). El abusador manipula el poder y carga a la víctima con la responsabilidad del secreto. El silencio del niño protege no solo al abusador, sino a sí mismo y a su familia. El secretismo, aunado a otras características, hace del abuso sexual infantil uno de los fenómenos psicosociales más complejos que deben afrontar tanto el derecho como la psicología.

El descubrimiento del abuso les plantea a las víctimas problemas adicionales, pues tienden a ser cuestionadas, señaladas o acusadas por quienes, debido a su rol o cargo, deben intervenir. En lugar de recibir apoyo o protección por parte de sus interlocutores, son objeto de su hostilidad, cuando se pone en duda su versión y se encuentran más lógicos, más de sentido común, los argumentos de los ofensores. Frente a la confrontación, las víctimas se muestran temerosas, dubitativas y confusas. En estas condiciones, si un adulto que se percibe tranquilo, que argumenta en forma razonable y que tiene buena imagen en la comunidad es señalado por un menor de edad nervioso, confundido e inconsistente, la mayoría de quienes conocen el caso dudarán de su versión.

El abuso sexual prolongado produce con frecuencia diversos trastornos que adquieren relevancia durante la intervención judicial. Tanto los agresores, que por lo general difieren de la imagen que se tiene de un abusador sexual de niños, como las víctimas, desconciertan a los funcionarios inexpertos que deben enfrentar estos casos. Como afirma Intebi (1998): “Las personas que se acercan a este problema por primera vez, se sorprenden ante ciertas conductas que contradicen lo que, desde el sentido común parecería esperable. La víctima no protesta, no se defiende, no denuncia” (p. 148).

Es incuestionable que el conocimiento por parte de los operadores judiciales de las características del abuso sexual infantil, así como del daño psíquico que ocasiona en sus víctimas, resulta clave para llevar a cabo una intervención protectora. No obstante, transferir los hallazgos obtenidos sobre el fenómeno del ASI al entorno forense no es nada sencillo, dado que hay intereses particulares que dificultan probar la ocurrencia de los hechos denunciados.

En cuanto a los obstáculos que afronta el juzgamiento de los casos de abuso sexual infantil, Carlos Alberto Rozanski (2003), un connotado abogado argentino que durante muchos años ejerció como juez, manifiesta:

Debí juzgar numerosos casos de agresiones sexuales a niños. Eso me enfrentó a una problemática compleja y de la que sabía muy poco. Conocía algunas cosas, las estrictamente jurídicas y las de sentido común, y desconocía todas aquellas que no se describen en los libros de Derecho. La impotencia y la angustia que me generaba muchas veces no poder abordar los casos de una manera más integral y donde se tuviera en cuenta no sólo la necesidad de esclarecer un hecho, sino, además la de proteger a la víctima, fue mi incentivo para investigar el tema (p. 21).

El connotado jurista argentino también se pronuncia sobre la injusticia y la ilegalidad de determinadas prácticas en las intervenciones judiciales en casos de abuso sexual infantil; injustas, porque maltratan a quienes han sido víctimas de delitos atroces e ilegales, porque perjudican a los niños. Rozanski (2003) enfatiza en la necesidad de implementar un modelo de intervención respetuoso, que no lastime a las víctimas, que tenga en cuenta las principales características y consecuencias del fenómeno, así como la legislación protectora vigente, en el que la víctima no sea un folio más de un expediente, sino el núcleo y la razón de ser de esas actuaciones y el familiar no abusador que acude a la justicia reciba el trato y el apoyo que requiere.

La estructura de la evaluación

Como lo plantean O'Donohue y Elliot (1991, citado por Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000), la evaluación del abuso sexual infantil supone una tarea compleja, porque implica obtener y procesar información proveniente de múltiples fuentes (víctima, familiares, profesores, médicos, trabajadores sociales, etc.), en diversos ambientes (hogar, escuela, etc.), mediante la utilización de variadas técnicas de evaluación (entrevistas, cuestionarios, observación directa e informes de otros profesionales). Incluir el ambiente del niño, sus creencias, atribuciones y cogniciones y el funcionamiento de su familia posibilita contar con un cuadro clínico integrado.

Por ser el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la institución encargada oficialmente de realizar labores periciales y por haber sistematizado y estandarizado los procedimientos para las pericias psicológicas y psiquiátricas, en lo atinente a la estructura de la evaluación psicológica forense de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil, en este artículo se tomará como punto de referencia el derrotero trazado por esta institución en el *Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses*, y en la *Guía para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forense en niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales*. La secuencia para este tipo de pericia psicológica es la siguiente:

Solicitud del peritaje psicológico

La evaluación psicológica forense de una presunta víctima de abuso sexual tiene como punto de partida el oficio petitorio, usualmente emanado de la Fiscalía, mediante el que se solicita dar respuesta a los interrogantes periciales que formula. Dicho oficio deberá acompañarse de documentos procesales como la copia de la denuncia, informes de las entrevistas adelantadas por la policía judicial, audio y video de la entrevista forense, copias de historias clínicas, informes escolares, el escrito de acusación, evaluaciones psicológicas y sociofamiliares de entidades de protección, informe médico forense, etc.

Lectura y análisis de los documentos allegados

El paquete de documentos que allegue la Fiscalía deberá ser leído, estudiado y analizado meticulosamente por el psicólogo forense, pues para elaborar un trabajo pericial adecuado es necesario partir de la información con la que se cuenta. La lectura de las piezas procesales contextualiza la evaluación y le permite al perito ganar claridad sobre los aspectos en los que se debe focalizar, diseñar la pericia y administrar mejor el tiempo disponible. Por el acoso del tiempo o porque se consideran intrascendentes, en ocasiones estos documentos no se leen o se leen de forma descuidada, pasando por alto datos pertinentes, lo que puede invalidar las conclusiones a las que se llegue. El *Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses* (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [INMLyCF], 2009) señala que es conveniente hacer un resumen de aquellos documentos que se consideren relevantes, evitar hacer interpretaciones, inferencias o deducciones y transcribir entre comillas los apartes de importancia, especificando quién y cuándo lo dijo y el folio o registro magnético donde se encuentra consignado.

Establecimiento de los objetivos de la evaluación

Los objetivos de la evaluación, que se consignan en el motivo de la peritación, están determinados por los interrogantes periciales. Es importante que el perito los tenga claros en todo momento, porque lo centran, le ayudan a mantener el rumbo y no perder el norte. Determinar el impacto del evento traumático en la presunta víctima y las características de su relato suelen ser el contexto de la evaluación psicológica forense de las víctimas de ASI.

Algunos especialistas sugieren la necesidad de elaborar un marco teórico para la pericia que se va a realizar, aspecto que se puede omitir, sobre todo en el caso de los peritos oficiales, que disponen de muy poco tiempo para efectuar la evaluación. Salvo

que los interrogantes periciales traten temáticas desconocidas para el perito sobre las cuales se vea obligado a indagar, lo que ocurre es que aborda la evaluación con su bagaje conceptual y metodológico. Se espera que, en el momento de hacerse cargo de la pericia, el psicólogo forense posea la experiencia requerida y tenga conocimientos sobre el objeto de la pericia —en este caso, el abuso sexual infantil—; los aspectos jurídicos implicados; los instrumentos psicológicos que podría utilizar; los asuntos sobre los que giran los interrogantes periciales —en este caso, psicología del testimonio y daño psicológico—; etc.

Como las evaluaciones psicológicas forenses de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil son las más solicitadas a los peritos oficiales —cuatro o más por semana— y los interrogantes periciales son, en esencia, los mismos, razonablemente se supone que los peritos tienen claros los conceptos y los métodos que requiere. Es clave que el perito tenga claro cuál es su enfoque epistemológico y si con él puede responder adecuadamente a los interrogantes periciales, para evitar caer en contradicciones metodológicas o conceptuales que tornen vulnerable el informe psicológico forense.

Formulación de las hipótesis

Una hipótesis es una suposición que hay que probar y se acepta o se rechaza. En lo forense, las hipótesis están estrechamente relacionadas con los objetivos, a partir de los cuales se plantean al menos dos hipótesis: la que supone un posible resultado y la que lo descarta. El número de hipótesis dependerá, en consecuencia, del número de interrogantes periciales formulados para la evaluación. Como en el caso de la evaluación psicológica forense de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil los interrogantes periciales suelen ser dos, para cada uno de ellos se tendrá que formular una hipótesis de trabajo y una hipótesis nula. Algunos especialistas han señalado que la importancia de la formulación de las hipótesis radica en evitar que el perito tenga sesgos o ideas preconcebidas y que, en la medida en que se formulan hipótesis contradictorias, se garantiza su objetividad (Garrido et al., 2006, citado por Lobo, 2015). No necesariamente es así; la formulación de las hipótesis es un aspecto formal que, si bien puede ayudar a evitar sesgos, no garantiza la objetividad del perito. Formular una hipótesis es una postura metodológicamente correcta; lo que es incorrecto es acomodar la información, tomar en consideración la que conviene y desechar la que no conviene. Adicionalmente, cuando se formula una hipótesis, se debe contar con la posibilidad de rechazar la hipótesis nula, lo que, por las características del trabajo que se realiza (contar con un solo sujeto), no es posible.

Diseño de la evaluación

Una vez se tiene claro el “qué” de la evaluación y hacia dónde apunta, el siguiente paso tiene que ver con el “cómo”, o sea, a qué estrategias es necesario recurrir para responder a los interrogantes periciales.

Establecimiento de una atmósfera favorable a la evaluación (rapport)

La evaluación psicológica forense de las presuntas víctimas de abuso sexual es impuesta por el ente acusador, la considera necesaria como parte de la investigación que adelanta, para darle soporte a su teoría del caso. Con frecuencia, los niños llegan a la evaluación tensionados, temerosos, confusos, desconfiados, recelosos y no entienden por qué se encuentran allí; para que ganen tranquilidad, se permite que al ingresar al consultorio los acompañe el adulto que los trae (normalmente, uno de sus padres) y que se les dedique un tiempo para tranquilizarlos y lograr que asuman una actitud positiva ante la evaluación. La postura del psicólogo forense al inicio de la evaluación es clave para obtener su colaboración: debe ser amable, cálido, empático, paciente, no autoritario; de lo contrario, tan solo consigue que el menor se tense aún más, que se cierre y se torne resistente a proporcionar la información que se le solicita. Es muy importante que se sientan acogidos, comprendidos, lo que favorecerá que respondan adecuadamente a lo que se les solicita. Se les formulan preguntas sencillas, elementales, sobre aspectos que no tienen que ver con el objeto de la evaluación: sus amigos, pasatiempos, programas de televisión, comidas, etc.

Consentimiento informado

Ya tranquilizado el niño y en actitud de colaborar, se diligencia el consentimiento informado, que representa el derecho del examinado a ser informado, en forma clara y comprensible para él, sobre el procedimiento a seguir durante la evaluación, a contar con explicaciones sobre cada uno de los pasos a desarrollar y a conocer los riesgos que corre y los aspectos favorables que conlleva para él la evaluación (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2006). Tanto al menor de edad como a su acompañante se les explica en forma sencilla y clara, en qué consiste la evaluación psicológica forense y qué papel desempeña el informe pericial que se produzca en el contexto de la investigación judicial que se adelanta. Es importante comunicarles que lo que digan durante la evaluación psicológica forense, por tratarse de una actividad de corte legal, no está cobijada por el secreto profesional y que el informe que se elabore será enviado a la autoridad competente que lo solicita y luego será objeto de debate durante la audiencia pública. Asimismo, que aunque con la evaluación se busca hacer justicia por el abuso sexual del que fue objeto, tiene el derecho a rechazarla y, en caso de

aceptarla, tiene derecho a no hablar de aspectos que considere inconvenientes para él o para personas cercanas a él. También es conveniente enfatizar en la neutralidad e imparcialidad del perito.

Si quien acompaña al niño es uno de sus padres, se le pregunta si accede a la evaluación; la aceptación debe quedar plasmada en un documento que debe ser suscrito por el padre que lo acompaña o, en su ausencia, por el defensor de familia, con su firma, número de cédula y huella.

En el evento en que la persona adulta o el menor de edad se rehúse a la evaluación, esta no se realizará y deberá pasarse un informe de lo ocurrido (INMLyCF, 2009).

Por tratarse de un documento legal, el consentimiento informado debe quedar por escrito, ser explícito y estar firmado; de no presentarse durante la audiencia de juicio oral, la evaluación psicológica forense podría ser invalidada. Una vez se firme el consentimiento informado se procede a iniciar la evaluación.

Entrevista al menor

Creada una atmósfera favorable para la evaluación y diligenciado el consentimiento informado, es el momento de dialogar con el niño sobre el presunto abuso sexual del que ha sido víctima. Para evitar cualquier tipo de presión por parte del acompañante, se le pide que se retire.

Para que adquiera confianza y tranquilidad, se le formula al examinado una serie de preguntas tendientes a facilitar la comunicación (su edad, su colegio, sus amigos, las cosas que le gusta hacer); cuando se considera que es el momento adecuado para abordar los hechos objeto de investigación se le formulan las preguntas correspondientes.

Para evitar inducir las respuestas del examinado, se recurre a una entrevista semiestructurada, que se caracteriza porque inicia con preguntas abiertas, amplias y generales, y termina con preguntas específicas, puntuales y cerradas. Como toda entrevista técnicamente diseñada, debe haber sido planeada, con el objetivo de obtener información relacionada con los interrogantes periciales. Aunque la entrevista es dirigida, en la medida de lo posible debe ceñirse al cuestionario previamente elaborado y se espera que cuente con la suficiente flexibilidad ante variaciones en el momento en que la narración del niño lo haga necesario.

Las preguntas que integran el cuestionario se determinan por la revisión de los documentos allegados por la Fiscalía; en teoría, todos estos documentos son pertinentes, pero hay algunos, como la videograbación de la entrevista forense, que deben recibir atención especial. Como consecuencia de esta revisión surgen dudas e

inquietudes que se espera sean resueltas en el diálogo. Como no solo se proporciona información con palabras, es deseable que el entrevistador esté muy atento al lenguaje no verbal, a sus gestos, su tono de voz, los contenidos que enfatiza, etc. Adicionalmente, a la versión que proporcione sobre los hechos, es importante indagar sobre su vida anterior: sobre su vida familiar, académica y social, los problemas a los que se había visto abocado, sus pasatiempos, la relación con sus padres, amigos y compañeros de estudio, la forma como le afectó lo sucedido, los cambios que se produjeron en su vida a raíz de los hechos, etc.

Existe acuerdo en la comunidad psicológica forense acerca de que la entrevista es la técnica más adecuada para obtener información. Con ella se intenta integrar una historia que contenga los datos significativos de la vida del examinado y sus características de personalidad y acceder a información que permita inferir sus condiciones mentales y circunstancias relacionadas con el antes, durante y después de los hechos motivo de la investigación. Es, según Arruabarrena y De Paúl (1996, citado por Echeburúa y Guerricaechebarria 2000), junto con la observación, el medio fundamental de valoración de los abusos sexuales a menores de edad.

Si bien con la evaluación psicológica forense la Fiscalía cuenta con un soporte pericial para su teoría del caso y todos los documentos allegados apuntan a señalar que el acusado cometió el abuso sexual por el que se lo denunció, el evaluador debe asumir una postura imparcial y estar atento a cualquier dato que vaya en la dirección contraria. Es conveniente hacer extensiva esa postura de neutralidad a la situación de la entrevista y que, independientemente de lo que piense o crea sobre el caso, asuma una postura imparcial frente a los contenidos que el niño le proporcione, que lo escuche atentamente y que, con sus gestos y posturas, lo aliente a hablar. Si durante la entrevista el menor mostrara no estar en capacidad para responder, debe interrumpirse la evaluación y hacer la anotación correspondiente en el informe pericial (INMLyCF, 2009).

Historia personal y familiar

Una vez el niño ha proporcionado su versión de los hechos, es apropiado hacer ingresar nuevamente al acompañante para llenar la historia familiar y personal del examinado; es usual que los menores de edad desconozcan información respecto a ellos y a su entorno familiar.

En esta fase del proceso evaluativo se indaga por datos relacionados con sus antecedentes perinatales, el desarrollo psicomotor y sus comportamientos característicos y sobre su desenvolvimiento en los ámbitos escolar, social, médico y judicial. Es importante solicitar información sobre la vida anterior a los hechos del examinado: su vida familiar, académica y social, los problemas que enfrentaba, sus pasatiempos, la

relación con sus padres, amigos y compañeros de estudio, la forma como le afectó lo sucedido, los cambios que se produjeron en su vida a raíz de los hechos, etc. Es clave contar con información sobre el funcionamiento global del niño antes de la ocurrencia de los hechos objeto de investigación, así como de su reacción frente al evento traumático y cómo le afectó. Si ha pasado un tiempo considerable desde la ocurrencia del evento traumático, se debe indagar sobre la condición psicoemocional y psicosocial del examinado en el momento de la evaluación.

La información obtenida en esta fase del proceso evaluativo es determinante, de cara a los interrogantes periciales, en especial en lo referente al impacto psíquico que el evento traumático ha tenido sobre el niño.

Examen mental

Se termina el proceso de evaluación con el examen mental, que es una exploración de las funciones mentales superiores con el fin de detectar posibles alteraciones; se toma como punto de referencia la información verbal y no verbal proporcionada en el transcurso de la evaluación. Se recurre a la semiología para efectuar una valoración clínica del estado de las funciones mentales superiores: conciencia, orientación, afecto, pensamiento, inteligencia, juicio, raciocinio, memoria, atención, conación, sensopercepción, introspección y prospección.

Se cierra la sesión explicando al usuario que el informe será entregado a la autoridad solicitante, así que lo conocerá con posterioridad. Una vez culminada, el perito debe volver sobre la información obtenida y analizar si está en condiciones de responder, con relativa seguridad, a los interrogantes periciales. Si concluye que no, pues requiere información adicional, debe decidir con qué medios va a obtenerla. Aunque cuenta con múltiples opciones, hay dos recursos frecuentes a los que recurre el psicólogo forense: las entrevistas colaterales y las pruebas psicológicas. Tras elegir las técnicas, el perito debe tener clara cuál es la información que, desde la óptica de los interrogantes periciales, busca obtener.

Entrevistas colaterales

En el contexto de la evaluación psicológica forense de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil, las entrevistas colaterales, que son entrevistas a personas cercanas al examinado, interactúan con frecuencia con él y lo conocen (como profesores, amigos, parientes, vecinos, etc.), pueden proporcionar información útil que le ayude al perito a responder los interrogantes periciales. Se espera que las personas entrevistadas le brinden al psicólogo forense datos relevantes sobre el examinado. Para realizar estas entrevistas se deberá contar con el consentimiento informado del entrevistado.

Puesto que a estas entrevistas el perito llega con preguntas muy específicas, son bastante más breves que la del evaluado.

Aplicación de pruebas psicológicas

Como lo señala la *Guía para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forense en niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales*, la utilización de test durante la pericia es opcional (INMLyCF, 2010). Cuando el perito decide utilizar alguna prueba psicológica debe tener claro si esta cumple una función real en el contexto de la pericia y contribuye a resolver alguno de los interrogantes periciales. Que la utilización de las pruebas psicométricas le da el carácter científico a la pericia es una creencia arraigada contra la que se tiene que luchar. Desde luego, las pruebas psicológicas son una herramienta poderosa, pero no tienen ese rasgo mágico que se les ha atribuido. En el caso específico de la evaluación psicológica forense de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil, lo primero que hay que determinar es si se trata de una prueba forense, si está estandarizada en nuestro país para la población de la que forma parte el examinado, tener claros sus índices de validez y confiabilidad y para qué fue construida, y si es adecuada para la tarea encomendada (por ejemplo, proporcionar una medida del daño psicológico ocasionado). Una cosa es que mida depresión y otra, que mida el daño psicológico: no se puede hacer equivalente depresión con daño psicológico.

Es clave también precisar si el instrumento elegido es coherente con el enfoque epistemológico utilizado por el perito; un error relativamente frecuente es utilizar pruebas psicológicas correspondientes a enfoques epistemológicos contrapuestos, por ejemplo, utilizar en la misma pericia test y pruebas proyectivas, contradicción metodológica que torna vulnerable el informe psicológico forense. El análisis de contenido basado en criterios (ACBC), “que predice que las descripciones de eventos que realmente hayan sucedido difieren en contenido, calidad y expresión de aquellos hechos que son fruto de la imaginación” (Masip y Garrido, 207, p. 110), es un ejemplo excelente de instrumento de evaluación forense. Fue diseñado pensando en la población de niños que han sido víctimas de abuso sexual infantil y la información que proporciona contribuye a responder, en forma adecuada, a uno de los interrogantes periciales.

Análisis clínico-forense de los resultados

Cuando el examinado ha salido del consultorio se elabora el análisis clínico forense, el cual consiste en revisar e interpretar los hallazgos psicológicos obtenidos a la luz de los interrogantes periciales. En este se integra la información proveniente de

las distintas fuentes: entrevista, elementos procesales que reposan en documentos, examen mental, antecedentes personales y familiares, información proporcionada por el acompañante, etc., y contrastarla con las hipótesis forenses formuladas, con el fin de determinar cuál hipótesis acepta y cuál rechaza. En ninguna circunstancia los resultados de la evaluación pueden acomodarse, tergiversarse o variarse para que coincidan con los intereses de una de las partes; hacerlo conlleva sanciones éticas por parte del Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología y penales (Lobo, 2015).

La evaluación de la validez de la declaración

Las estadísticas existentes en Colombia y en el resto del mundo señalan que el abuso sexual infantil no es un imaginario y que en las últimas décadas se ha incrementado el número de denuncias (Masip y Garrido, 2007). Sin embargo, no todos los casos que se denuncian son reales. Bruck y otros autores (2001, citados por Masip y Garrido, 2007) estiman que entre un 5 % y un 35 % de los eventos denunciados no han sucedido. Green (1986, citado por Masip y Garrido, 2007) encuentra un 36 % de alegaciones falsas cuando el niño acusaba al padre no custodio de haber abusado sexualmente de él. Es necesario contar con criterios que permitan determinar cuáles son ciertas y cuáles son falsas (Masip y Garrido, 2007). Por estas razones y por las graves secuelas que ocasiona en sus víctimas, la administración de justicia se ve impelida a identificar a los responsables.

Los índices de impunidad de este delito son altos, pues no resulta fácil probar su ocurrencia. Las limitaciones de los procedimientos que se han propuesto, como los indicadores conductuales y los exámenes médicos, determinan que la declaración de la víctima es el único recurso del que se dispone para impedir que se evada la acción de la justicia, pero esta opción tampoco está exenta de dificultades. Para probar la ocurrencia del abuso sexual, la Fiscalía le solicita al psicólogo forense dictaminar sobre la credibilidad del testimonio de la presunta víctima. En relación con este peritaje es necesario precisar que, si bien el Código de Procedimiento Penal colombiano dispone que la credibilidad del testimonio es competencia exclusiva del juez, por carecer este de conocimientos técnico-científicos sobre los procesos mentales superiores de la atención, la sensorpercepción y la memoria, requiere la asesoría del psicólogo forense (Espinosa, 2011).

Iniciar un peritaje con la certeza de que el niño miente o que dice la verdad no es adecuado. Al psicólogo forense le corresponde asumir una postura neutral, objetiva e imparcial; está obligado a considerar toda la información existente y a estar vigilante en torno a sus sesgos. Cuando de entrada se asume que dice la verdad o

que miente, es muy probable que durante el proceso evaluativo se privilegien aquellos datos que confirman la hipótesis y se ignoren los que la desvirtúan (Cañas y Camargo, 2005).

Al efectuar esta evaluación, el psicólogo forense debe sortear dos tipos de dificultades: una, de naturaleza cognitiva, relacionada con la competencia del testigo (susceptibilidad a la sugestión y a la implantación de recuerdos falsos), que impide que pueda ofrecer un testimonio preciso de lo acontecido, pero no lleva a una alteración deliberada de los hechos; otra, de naturaleza motivacional (intento de engañar).

Respecto a los problemas de naturaleza cognitiva (distorsión accidental de los hechos por parte del niño), se han detectado en los entrevistadores prácticas que pueden sesgar el recuerdo; en cuanto a los de tipo motivacional (distorsión voluntaria), se ha concluido que los menores de edad son capaces de mentir, que de hecho mienten y que los adultos no son capaces de detectar sus mentiras (Masip y Garrido, 2007).

Para contrarrestar estas dificultades se cuenta con la Evaluación de la validez de la declaración (SVA), instrumento forense orientado a discriminar si la narración que hace el examinado corresponde a acontecimientos vividos o ficticios. El SVA contiene un protocolo de entrevista que no sesga el recuerdo y sirve para examinar si los hechos que describe son reales o imaginados, y una lista de elementos complementarios que es necesario comprobar antes de decidir acerca de la validez de la alegación (Masip y Garrido, 2007). El modelo de entrevista que propone tiene por objeto sortear las dificultades de naturaleza cognitiva que puedan limitar el testimonio.

El análisis de contenido basado en criterios (ACBC) se emplea para detectar declaraciones deliberadamente falsas y también comprende una lista de elementos a chequear antes de decidir sobre su validez. Una declaración se considera válida si se basa en hechos que el narrador ha experimentado directamente.

La entrevista utiliza un protocolo para evitar el sesgo en las respuestas del niño y se contrastan en forma sistemática una serie de hipótesis; debe ser realizada por una persona debidamente formada. El mayor problema lo tienen los entrevistadores a la hora de formular las preguntas, que deben ser abiertas, provocar narraciones libres y evitar sesgos en las respuestas del niño.

El ACBC consta de diecinueve criterios de contenido verbal que se aplican a la transcripción de la entrevista, específicamente a aquellos contenidos relacionados con el incidente sexual. La presencia de los criterios indica que la declaración se basa en hechos experimentados. Este instrumento diferencia las declaraciones verdaderas de las falsas. Parte de la premisa de que las versiones de eventos que realmente han sucedido difieren en contenido, calidad y expresión de aquellos que son fruto de la imaginación.

El ACBC proporciona indicios que sugieren que el acontecimiento pudo haber sucedido, pero su precisión está lejos de un 100 %, el ideal; su margen de error de 0,30 es alto, pero significativamente inferior al de cualquier otra variante metodológica que se utilice. En torno a este instrumento, las opiniones de la comunidad científica y profesional están divididas: algunos especialistas se oponen a que tenga el estatus de prueba científica y otros están abiertamente a favor de ello (Masip y Garrido, 2007). Esta situación no debería sorprender ni preocupar, pues la comunidad científica no es, como se piensa o argumenta, un bloque monolítico en el que todos conjugan el verbo de la misma manera. Ciencia es sinónimo de polémica, disenso, confrontación conceptual.

La lista de validez verifica que la entrevista se haya hecho correctamente, que el desarrollo cognitivo y lingüístico del niño sea el adecuado y que la evidencia externa más sólida no contradiga los resultados del análisis de la declaración (Masip y Garrido, 2007). El dictamen no debe aludir a si el niño miente o dice la verdad, sino a la validez de la declaración.

El SVA es el instrumento forense más elaborado y sistematizado del que se dispone, pero su valor es limitado; aunque reduce en forma significativa la incertidumbre, no permite concluir con seguridad total sobre la validez de las declaraciones. Lo que es claro es que su aporte es mayor que las meras intuiciones del profesional y que su utilización, al ser un instrumento científico, le proporciona peso al peritaje.

Hay que ser muy cautos a la hora de dictaminar sobre la validez de la declaración. No le corresponde al psicólogo forense determinar la inocencia o culpabilidad de un examinado, porque ese es territorio del juez, y tampoco tomar partido por la víctima o por el sindicado; debe asumir una postura profesional y científica, lo que exige contemplar con ecuanimidad todos los factores implicados. Su función es muy específica: responder, en forma técnica y científica, a las preguntas que se le formulan (Cañas y Camargo, 2005).

Si bien la evaluación de la credibilidad del testimonio ha mostrado ser útil, queda camino por recorrer, pues no se cuenta con pruebas estandarizadas confiables y válidas, se carece de información respecto al peso específico de cada uno de los criterios considerados pertinentes y se carece de normas adaptadas a cada grupo de edad y a la complejidad de la experiencia abusiva (Masip y Garrido, 2007). Por las implicaciones que tiene, este peritaje configura un auténtico reto en la práctica clínico-forense; es una intervención psicológica de alto nivel (Cañas y Camargo, 2005).

La evaluación del daño psicológico ocasionado

El impacto del suceso traumático (el daño psicológico ocasionado) es el segundo interrogante que la Fiscalía le plantea al psicólogo forense en el contexto de una evaluación psicológica forense de las presuntas víctimas de abuso sexual infantil. El resultado al que se llegue puede incidir no solo en la sentencia que se emita en lo penal, sino también en los incidentes de reparación integral que se surten una vez establecida la responsabilidad del procesado e impuesta su condena (Lobo, 2015).

El abuso sexual infantil es una de las variantes delictivas que más traumas psíquicos ocasiona a las víctimas, pues incide negativamente en la estructuración de su personalidad; su efecto es equivalente al de un balazo en el aparato psíquico, al causar daños en el tejido emocional que dificultan la cicatrización (Intebi, 1998). Configura un suceso traumático que ocasiona efectos psicológicos negativos a corto plazo (casi siempre) y a largo plazo (menos frecuentemente). Según Jumper (1995, citado por Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000), las alteraciones que origina en la salud mental se traducen en mal funcionamiento en las esferas emocional, social, afectiva y sexual, lo que indefectiblemente afecta su capacidad de reacción, relación y adaptación.

El abuso sexual atemoriza a los niños y afecta la confianza en ellos mismos y en los demás. Por encontrarse en un proceso evolutivo y disponer de menos recursos de afrontamiento que los adultos, son más vulnerables; el hecho delictivo les ocasiona un malestar significativo, que incide negativamente en su desarrollo psicológico ulterior. Un porcentaje significativo de ellos resulta afectado y, de no recibir tratamiento psicológico, el malestar podría persistir hasta la edad adulta. La intensidad de las consecuencias psicológicas, de acuerdo con Jumper (1995, citado por Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000), va a depender de la figura del agresor, de la etapa evolutiva del niño, de los traumas anteriores y de las reacciones de las personas que están a su alrededor.

El trauma es la reacción psicológica derivada de un suceso traumático, un acontecimiento negativo intenso generado por otros seres humanos, que aparece en forma abrupta y se percibe como incontrolable; constituye una amenaza a la integridad física o psicológica. Este tipo de acontecimientos desborda con frecuencia la capacidad de respuesta de la persona, que se siente sobrepasada para hacer frente a las situaciones que se ve abocada a padecer, sin confianza en sí misma y en los demás, indefensa, sin esperanza, paralizada e incapaz de gobernar su propia vida.

No todas las personas expuestas a un acontecimiento traumático reaccionan de la misma manera. Algunas de las víctimas del abuso sexual infantil quedan marcadas de por vida y, presas del resentimiento o desánimo, llevan una vida insípida y sin ilusiones; otras enfrentan adecuadamente los sucesos negativos vividos, superan

las adversidades y aprenden de las experiencias dolorosas, sin renunciar por ello a sus sueños. Las personalidades resistentes al estrés se caracterizan por el control emocional, la autoestima adecuada, criterios morales sólidos, un estilo de vida equilibrado, unas aficiones gratificantes, una vida social estimulante, un mundo interior rico y una actitud positiva ante la vida. Este tipo de personalidad funciona como un amortiguador contra el estrés (Echeburúa, 2012).

Según Finkelhor (1999, citado por Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000), la manera en que los niños respondan ante la victimización va a depender de su vulnerabilidad y de los recursos que dispongan para afrontar el suceso traumático. El grado de impacto emocional va a estar determinado por una serie de factores mediadores, que van a ser responsables, en buena medida, de las diferencias que se observan entre las víctimas en relación con las secuelas del suceso. Entre los factores que modulan el impacto de la agresión sexual se cuentan: el perfil individual de la víctima, las características del acto abusivo, la relación existente con el abusador y las consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso (Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000).

Daño psicológico es uno de los diversos términos asignados a la reacción de la víctima ante un ilícito y significa “la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que altere su integración en el medio social” Casiello (1997, citado por Cañas y Tapias, 2011, p. 60). Toma la forma o de lesión o secuela psicológica. Toda vivencia traumática es una expresión del daño psicológico padecido por la víctima. Algunos de los síntomas experimentados son comunes, pero otros varían en función de las características individuales y del tipo de suceso vivido.

En el contexto del abuso sexual infantil, la lesión psíquica se refiere a una alteración clínica aguda que sufre un niño como consecuencia de haberlo experimentado y que lo incapacita significativamente para hacer frente a exigencias de la vida ordinaria personal, académica, familiar o social. Las secuelas emocionales, a modo de cicatrices psicológicas, se refieren a la cronificación del daño psíquico, es decir, a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado. Se está en presencia de una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual, de un menoscabo de la salud mental (Echeburúa, 2012).

El límite temporal referido a los denominados efectos a corto plazo o iniciales se suele situar en los dos años siguientes al suceso; a partir de ese momento, se habla de efectos a largo plazo. Un 70 % de las víctimas de agresiones sexuales en la infancia presenta un cuadro clínico a corto plazo, pero disminuye hasta un 30 % si se toman en consideración las repercusiones a largo plazo. Al no ser despreciable el número de personas que no quedan afectadas, especialmente a largo plazo, conviene determinar tanto

los factores amortiguadores del impacto del abuso sexual en el desarrollo emocional posterior y que contribuyen a metabolizarlo, como aquellos que propician una mayor vulnerabilidad psicológica y favorecen la aparición de consecuencias psicopatológicas (Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000).

La sintomatología vinculada al abuso sexual se ha intentado explicar desde diversos modelos; sobresalen el modelo del trastorno de estrés postraumático y el modelo traumatogénico. El más utilizado ha sido el modelo del trastorno de estrés postraumático postulado por Wolfe y otros autores (1989, citados por Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000), quienes ven en las consecuencias del abuso sexual una forma de trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, en opinión de Finkelhor (1988, citado por Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000), este modelo tiene limitaciones en el ámbito del abuso sexual infantil: solo puede emplearse con algunas víctimas, no permite explicar de una forma clara la relación entre el suceso traumático y el cuadro clínico, y no recoge todos los síntomas, en especial los relacionados con las dimensiones cognitivas y atencionales (Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000).

A modo de alternativa, Finkelhor (1988, citado Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000) propone el modelo traumatogénico, que es más específico y según el cual las razones del impacto psicológico son las siguientes: sexualización traumática, pérdida de confianza, indefensión y estigmatización, que constituyen la causa principal del trauma al distorsionar el autoconcepto, la visión sobre el mundo y las capacidades afectivas de la víctima. Estos factores se relacionan, a su vez, con el desarrollo de un estilo de afrontamiento inadecuado y con el surgimiento de problemas de conducta.

No existe un síndrome particular ligado a la experiencia de abusos sexuales en la infancia y la adolescencia. No obstante, es necesario hacer una exhaustiva evaluación de las consecuencias negativas que el evento traumático puede ocasionar en la persona examinada (Echeburúa y Guerricaechebarria, 2000). La víctima de ASI no tiene que convertirse en un enfermo mental para que se concluya la existencia del daño psicológico; basta con que su cotidianidad se haya visto alterada en forma significativa (sueño, atención, apetito, relación con las demás personas, actitud hacia la sexualidad, etc.) durante un lapso relevante.

El diagnóstico del daño psicológico requiere que se establezca un nexo causal entre el hecho delictivo y las afectaciones encontradas, es decir, que se determine si la enfermedad, el trastorno o la sintomatología es resultado de la situación delictiva a la que se expuso. No siempre es fácil poner en conexión el daño psicológico sufrido ahora con el suceso violento padecido anteriormente; sin embargo, la relación de causalidad entre el delito violento y la lesión psíquica es esencial a efectos penales y de responsabilidad civil; tal relación puede no ser unívoca, sino que está enturbiada

por concausas que, a diferencia de las causas, son necesarias, pero no suficientes, para generar el daño psicológico. Las concausas pueden ser preexistentes, asociadas a un factor de vulnerabilidad en la víctima, simultáneas o posteriores (Echeburúa, 2012).

Se debe distinguir con claridad entre el daño encontrado en el momento de la valoración correspondiente y el funcionamiento anterior de la víctima. En el caso de un mal funcionamiento psicológico previo hay que tener en cuenta dos puntos: i) qué aspectos del problema actual son atribuibles a la situación previa a la victimización, y ii) qué perfiles de la victimización han sido potenciados por la situación de previctimización o de personalidad previa. La presencia de una determinada sintomatología no implica que la persona examinada la hubiera desarrollado como consecuencia de la situación delictiva que se investiga.

En relación con la aplicación de pruebas psicológicas tendientes a medir el daño psicológico específicamente ocasionado, es preciso tener criterios claros. Es frecuente que se apliquen instrumentos de diagnóstico clínico elaborados en otros lugares, sin análisis previo, conocimiento de sus características ni de las condiciones del contexto y de la persona a la que se le aplican, o que se empleen pruebas psicológicas que no son pertinentes a la solicitud del funcionario judicial o a los propósitos para los que fueron construidas. Las pruebas psicológicas deben atender a la naturaleza de la evaluación que se va a realizar. Las pruebas exclusivamente forenses son muy pocas, pues en su gran mayoría han sido construidas para el campo clínico y no responden a asuntos estrictamente legales. Es necesario tener claro que estas pruebas son un complemento importante para obtener información relacionada con las hipótesis forenses, pero no constituyen la única fuente; resulta equivocado emitir una apreciación de un caso con base exclusiva en ellas. Cuando se aplica una prueba psicológica se deben conocer su confiabilidad, validez, el alcance de sus resultados, sus limitaciones del instrumento, las características de la población y, lo que es más importante, la coherencia de su empleo con la evaluación solicitada (Díaz, 2011).

Informe psicológico forense

Tras aplicar las pruebas psicológicas y realizar las entrevistas colaterales, en casos en los que se recurre a estas dos técnicas, se elabora el informe psicológico forense, lo cual constituye uno de los puntos álgidos de la evaluación. Se empieza a trabajar en él desde el mismo inicio de la evaluación y en su transcurso se van consignando los datos relevantes y pertinentes; para terminar con el análisis psicológico forense y las conclusiones (INMLyCF, 2009). Se espera que tenga, en esencia, la misma secuencia de la evaluación.

En Colombia, la base de la opinión pericial deberá estar contenida en un informe que debe obedecer las reglas establecidas en el *Manual de Policía Judicial* (Díaz, 2011). De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, la presentación de documentos periciales con la expectativa de ser validados como prueba en una audiencia oral, requerirá ceñirse a estándares de excelencia (Sicard, 2011). Para su elaboración, el informe psicológico forense precisa dominio de las exigencias y procedimientos del sistema de justicia, comprensión de la jurisprudencia y la doctrina del derecho, y sólidos conocimientos teóricos y prácticos sobre la evaluación psicológica (Díaz, 2011).

La redacción del informe es una de las tareas más delicadas de la labor pericial; es clave integrar los datos y los hechos, y mostrar que las inferencias expuestas están fundamentadas en lo observado y en los resultados de la entrevista, las pruebas aplicadas y la información previa aportada (Díaz, 2011). El informe pericial no solo debe dar cuenta de lo hallado en la evaluación, sino también sobre la forma como se llevó a cabo; en él se deben registrar las técnicas utilizadas, la información obtenida en la entrevista respecto a los hechos, la historia familiar y personal del examinado, los antecedentes específicos y el examen mental (INMLyCF, 2009).

En el informe se deben integrar los aspectos pertinentes de la información disponible (documentos aportados por el solicitante, resultados de interconsultas, etc.) con los hallazgos obtenidos durante la evaluación, así como reseñar los instrumentos psicométricos utilizados. Respecto a este ítem, dado que el sistema es oral y que el verdadero examen lo presenta el psicólogo forense en el momento de rendir testimonio, no hay necesidad de proporcionar en el informe pericial una exhaustiva información técnica sobre los instrumentos psicométricos utilizados; será en el contrainterrogatorio donde deberá demostrar que los conoce a fondo y que sabe por qué los empleó (Sicard, 2011).

En el análisis, el psicólogo forense interpreta y describe los hallazgos desde la óptica de los interrogantes periciales, de manera clara, precisa y detallada, soportado en los datos consignados en el cuerpo del informe; contrasta la información obtenida mediante las técnicas utilizadas con la que se posee sobre el caso; correlaciona los resultados de la entrevista y el examen mental con los observados en el material allegado por la Fiscalía. La fortaleza del análisis clínico forense está en su capacidad argumentativa. Es vital que tenga un hilo conductor, que muestre que las inferencias realizadas son fruto de la entrevista, las pruebas psicológicas aplicadas y los datos previos consultados. No se deben tocar temas que, aunque estén relacionados, no contribuyen de manera directa a explicar o comprender la situación (Díaz, 2011).

El perito remata el informe pericial con las conclusiones, que deben fluir del análisis clínico forense y, además de contar con respaldo científico, deben ser claras y

concisas, no generar ambigüedad y ceñirse estrictamente al terreno de lo psicológico. En este apartado, el perito también podrá resaltar aspectos como remisiones y sugerencias que considere procedentes.

Las ideas consignadas en el informe pericial deben estar conectadas y llevar lógicamente a las conclusiones. Dado el aporte de las ciencias formales, el psicólogo forense debe poseer un conocimiento mínimo sobre matemáticas y lógica y los beneficios que se derivan de ellas. Estas disciplinas señalan los estándares formales a seguir y organizan y sistematizan los contenidos fácticos. Las leyes formales establecen estándares que todo científico debería tomar en consideración y facilitan expresar información de manera coherente (Amaya, 2019).

En su redacción, el informe pericial debe seguir a los principios lógicos. Las premisas deben estar estrechamente conectadas con la conclusión y llevar a inferencias válidas. Con alguna frecuencia se suele llegar a conclusiones sin suficiente información; por ello, en el momento de argumentar, el psicólogo forense debe estar seguro de que las premisas de las que parte son adecuadas y estar atento a detectar la existencia de falacias en el informe. Estas deben contar con un valor de verdad o permitir la presunción de un valor de verdad suficiente para llegar a la conclusión (Amaya, 2019).

Un buen informe psicológico forense deberá contar con una extensión razonable, no estar recargado de información y tampoco carecer de argumentación. El autor de este artículo considera que el informe psicológico debe ser sobrio y contener estrictamente lo necesario, lo pertinente, lo relevante; además, debe ser preciso y riguroso, y mencionar los hechos en los que se ha basado (Vázquez, 2018), sin dejar fisuras que puedan ser aprovechadas por la contraparte. Sus resultados deben ser verificables, replicables y válidos (Sicard, 2011). En definitiva, debe reunir las características de un documento científico. Es importante que en él tan solo se consignen aquellas afirmaciones que se está en capacidad de defender y que se tenga presente que quienes lo leen son personas legas en psicología (Sicard, 2011).

En lo atinente a la estructura, aunque existen, como lo plantea Sicard (2011), tantos estilos de informes como psicólogos forenses, es conveniente estandarizar una secuencia. Por haber trabajado durante muchos años con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el autor de este artículo sugiere el formato de informe pericial diseñado en esta institución, que se encuentra como un anexo en el *Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses* (INMLyCF, 2009).

La práctica de la prueba

Se está en un error si se piensa que con el envío del informe pericial a la autoridad que lo ha solicitado el trabajo del perito ha terminado. Su exposición y defensa frente a las partes y al juez constituye el momento de la verdad para el psicólogo forense; el dictamen tan solo es la base pericial en la que se apoya al rendir su testimonio. En el sistema acusatorio, la ratificación se realiza en un juicio oral y el perito asiste como testigo; en ese momento cobra el valor de prueba pericial, pues antes de la audiencia solo es un escrito que carece de valor (Sicard, 2011).

En un sistema adversarial como el acusatorio, las dos partes presentan su caso ante una parte neutral. Cada hecho relevante y pertinente para la investigación debe presentarse durante el juicio y ningún hecho se toma en consideración si no se ha presentado antes a cada una de las partes. Se basa en el supuesto de que la verdad aflorará del choque o de la contraposición de las opiniones presentadas, así no sean totalmente objetivas y estén sesgadas (Díaz, 2011).

Será derecho del procesado controvertir las pruebas acusatorias, lo que les permite a las partes interrogar y contrainterrogar. En la audiencia pública, el perito se someterá primero a un cuestionario diseñado por su equipo y posteriormente a uno construido por la contraparte (Sicard, 2011) y será interrogado siguiendo las reglas de la prueba testimonial. Durante el interrogatorio se espera que el perito explique los antecedentes que acrediten tanto su conocimiento teórico sobre la ciencia, técnica o arte como el uso de instrumentos o medios en los cuales es experto; los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus verificaciones o análisis y grado de aceptación; los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso, etc. (Colombia, Congreso de la República, 2004).

Según el principio de inmediación, cada hecho relevante y pertinente de la investigación debe ser presentado durante la audiencia de juicio oral para que sea valorado de manera directa. Para que el informe pericial adquiera el carácter de prueba debe ser debatido en una audiencia pública (Colombia, Congreso de la República, 2004), lo que significa que el psicólogo forense debe someterse tanto al interrogatorio como al contrainterrogatorio para que las partes controviertan su dictamen; es el debate oral el que configura la prueba: lo que vale no es el informe, sino la manera como lo defiende en el juicio oral.

En el interrogatorio se busca presentar la evidencia, convencer al juez sobre las bondades de la prueba y exaltar las calidades del perito para darle valor a la evaluación realizada por él. La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en parte o en todo, lo que el perito ha manifestado (Colombia, Congreso de la República, 2004), se intenta

poner en duda la veracidad de las declaraciones del perito, cuestionar su idoneidad y la credibilidad de su opinión pericial. El contrainterrogatorio se hace sobre el objeto del testimonio del perito, sobre lo que fundamenta sus apreciaciones y sobre sus cualificaciones (Díaz, 2011).

El Artículo 420 del Código de Procedimiento Penal señala que para la apreciación se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y la exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos en los que se apoya, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de sus respuestas. De lo anterior se colige que la capacidad persuasiva que posea el perito constituye un elemento clave durante su intervención en la audiencia de juicio oral (Díaz, 2011).

El psicólogo forense debe saber transmitir sus ideas, ser convincente y persuasivo y poseer capacidad argumentativa. De nada sirve que un psicólogo produzca un informe pericial muy elaborado si a la hora de defenderlo carece de coherencia en sus respuestas, demuestra inseguridad o se paraliza frente a las preguntas de las partes. Lo que en la práctica cuenta para el juez es el desenvolvimiento del perito durante sus intervenciones en el momento de rendir su testimonio. El informe puede ser claro, coherente, tener un hilo conductor, contar con soportes fácticos, etc., pero si durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio el perito se muestra confuso, desordenado o inseguro, ello va a influir en forma marcada en la impresión que se hace el juez respecto a su trabajo. El sistema es oral.

Aunque se espera que su incidencia no sea significativa, al buen o mal desempeño que tenga el perito en la audiencia de juicio oral también aportan algunos factores emocionales. El miedo a ser ridiculizado o desacreditado en el momento del contrainterrogatorio puede afectar negativamente la imagen ante el juez y causarle la impresión de inseguridad, incompetencia o ignorancia. Por el contrario, hay peritos que poseen un gran control emocional y una muy buena capacidad de repentización que, a veces, sin poseer el conocimiento requerido, los lleva a salir airoso de las dificultades. Saber que detrás del fiscal o del defensor técnico hay un psicólogo forense connotado que aporta al contrainterrogatorio puede atemorizar a un perito. La defensa del informe pericial en una audiencia pública configura para el psicólogo forense uno de sus mayores retos profesionales.

La importancia de elaborar un trabajo calificado

El éxito profesional no es producto del azar. Para ser eficaz, el psicólogo forense debe poseer conocimientos y experiencia científica-técnica y también contar con algunas destrezas y rasgos de personalidad. Para empezar, es imprescindible que

tenga estudios especializados en psicología jurídica y específicamente en psicología forense, que lo habiliten como experto y lo hagan consciente de sus responsabilidades y las consecuencias legales de sus actuaciones.

Respecto a la necesidad de adelantar estudios especializados, es pertinente señalar que desde hace años la psicología colombiana optó por esta vía. De hecho, en el Colegio Colombiano de Psicólogos se ha aprobado la existencia de cerca de veinte campos profesionales. La época del psicólogo como todólogo desapareció; forma parte del pasado. Para ejercer la psicología en cualquiera de los campos profesionales hay que especializarse y eso vale para el subcampo de la psicología forense (Colpsic, 2019).

Contar con una trayectoria amplia como perito es muy importante. Así como a nadar se aprende nadando, no a leer libros sobre cómo nadar, a peritar se aprende haciendo peritajes, no al leer libros sobre cómo hacer peritajes. Señala Vázquez (2018) que el conocimiento no puede estar basado solo en la experiencia, pero tampoco solo en la teoría: surge de la dialéctica de las dos. Si bien la calidad del trabajo que realice el psicólogo forense va a estar determinada en muy buena medida por sus estudios y por las experiencias profesionales específicas que haya tenido, es clave su capacidad para derivar beneficios de unos y de otras y por la actitud de actualización permanente que posea.

En psicología forense, los conocimientos y los procedimientos están cambiando en forma constante, por lo que es muy importante mantenerse actualizado; se sabe que el conocimiento científico no es estático, que no hay verdades absolutas y que lo que hoy se acepta como verdad, mañana puede no serlo. Por todo ello, el autor de este artículo considera que no cualquiera puede desempeñarse como psicólogo forense. El hecho de que en cada audiencia pública corra el riesgo de ser ridiculizado o desacreditado y que sus conocimientos disciplinares y profesionales sean puestos a prueba, hace que el ejercicio de la psicología forense sea uno de los más exigentes. Es importante que se tome conciencia de la necesidad de hacer del ejercicio psicoforense la más rigurosa de las prácticas.

El profesional debe tener claro el procedimiento que ha de adelantar para llevar a cabo una pericia exitosa, que responda con idoneidad y claridad a los requerimientos de la administración de justicia y las exigencias técnico-científicas de la psicología. Se espera que posea un conocimiento suficiente de las características del sistema jurídico en el que va a operar; del derecho en el que va a desarrollar su trabajo, desde lo sustantivo, lo procedimental e incluso lo protocolario; de la connotación jurídica de la prueba y su alcance en el campo legal, aspecto que le permite comprender cómo un hecho de naturaleza psicológica se convierte en un hecho legal (Díaz, 2011). Los psicólogos forenses deben ser conscientes de que, con su trabajo, contribuyen a las

decisiones judiciales y que con sus errores podrían perjudicar a una persona (Vázquez, 2018). La actitud del psicólogo forense debe ser consonante con los principios de la buena praxis, la cadena de custodia, el conocimiento técnico, la rigurosidad y la idoneidad profesional (Sicard, 2011).

Se hace necesario darle seriedad y científicidad al ejercicio psicolegal. El psicólogo forense debe tener claros los principios que lo diferenciarán de un “charlatán” u opinador (Vázquez, 2018). Los conceptos que emita tienen que ajustarse a los avances de la ciencia y ser aceptados por la comunidad científica en cuanto a sus teorías, metodologías y procedimientos.

Es importante transmitir una imagen de objetividad, imparcialidad, rigurosidad, capacidad de argumentar y ecuanimidad, así como preocuparse por la calidad de los trabajos; de esta no solo depende el posicionamiento personal, sino también el de la psicología forense y, por extensión, del gremio.

Referencias

- Amaya, S. (2019). *Epistemología y psicología forense*. Manual Moderno.
- Bunge, M. (1959). *La ciencia: su método y su filosofía*. Penguin Random House.
- Bunge, M. (1967). *La investigación científica: Su estrategia y su filosofía*. Siglo XXI de España.
- Cañas, J. y Camargo, E. (2005). *Propuesta de valoración psicológica forense de la veracidad del testimonio de víctimas de abuso sexual infantil*. Psicología jurídica. <http://psicologiajuridica.org/psj166.html>
- Cañas, J. y Tapias, A. (2012). *En los laberintos mentales de Garavito*. Sic Editorial.
- Colegio Colombiano de Psicólogos [Colpsic]. (2019). *Deontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia* (7ª. ed.). Manual Moderno.
- Colombia, Congreso de la República. (24 de julio de 2000). *Ley 599 de 2000*, “Por la cual se expide el Código Penal”.
- Colombia, Congreso de la República. (31 de agosto 2004). *Ley 906 de 2004*, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
- Díaz, F. (2011). *Psicología y ley*. Psicom Editores.
- Echeburúa, E. (2012). *Superar un trauma*. Ediciones Pirámide.
- Echeburúa, E. y Guerricaechebarria, C. (2000). *Abuso sexual en la infancia: víctimas y agresores. Un enfoque clínico*. Ariel.
- Espinosa, A. (2011). La psicología del testimonio. En G. Hernández (ed.), *Psicología jurídica iberoamericana* (pp. 197-230). Manual Moderno.
- Hernández, G. (2011). *Psicología jurídica iberoamericana*. Manual Moderno.

- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [INMLyCF]. (2009). *Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses* [Archivo PDF]. <https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/40693/Protocolo+evaluaci%C3%B3n+b%C3%A1sica+en+psiquiatr%C3%ADa+y+psicolog%C3%ADa+forenses.pdf/84e68ebc-ad7f-ec85-241a-b07edbe95228>
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses [INMLyCF]. (2010). *Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas en niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales* [Archivo PDF]. <https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/40473/Gu%C3%ADa+para+la+realizaci%C3%B3n+de+pericias+psiqui%C3%A1tricas+o+psicol%C3%B3gicas+forenses+en+ni%C3%B1os%2C+ni%C3%B1as+y+adolescentes+presuntas+v%C3%ADctimas+de+delitos+sexuales..pdf/92f2a895-a717-fde9-f65c-12484302749>
- Intebi, I. (1998). *Abuso sexual infantil en las mejores familias*. Granica.
- Lobo, A. (2015). Evaluación forense del daño psicológico en víctimas. En A. Tapias (ed.), *Victimología en América Latina. Enfoque psicojurídico* (pp. 115-132). Leimone editores.
- Masip, J. y Garrido, E. (2007). *La evaluación del abuso sexual infantil*. Eduforma.
- Perrone, R. y Nannini, M. (1997). *Violencia y abusos sexuales en familia. Una visión sistémica de las conductas sociales violentas*. Paidós.
- Redondo, S. (2002). *Delincuencia sexual y sociedad*. Ariel.
- Rozanski, C. (2003). *Abuso sexual infantil: ¿denunciar o silenciar?* Vergara.
- Saray, N. (2016). *Procedimiento penal acusatorio*. Uniacademia Leyer.
- Sicard, R. (2011). El perito psicólogo y la prueba pericial psicológica: fundamento de la eficiencia judicial en Colombia. En G. Hernández (ed.), *Psicología jurídica iberoamericana* (pp. 231-282). Manual Moderno.
- Solórzano, C. (2011). La valoración de la prueba psicológica en la jurisprudencia penal colombiana. En G. Hernández (ed.), *Psicología jurídica iberoamericana* (pp. 283-308). Manual Moderno.
- Urra, J. (2002). *Tratado de psicología forense*. Siglo XXI de España.
- Vázquez, B. (2019). Prólogo. En S. Amaya (ed.), *Epistemología y psicología forense* (pp. XV-XVII). Manual Moderno.
- Zabin, H. (2005). *Conversaciones con un pederasta*. Ediciones Martínez Roca.

Luis Orlando Jiménez-Ardila*

Universidad Católica de Colombia

La mediación y la conciliación son alternativas extrajudiciales en procesos penales de tipo querellable, de familia, civiles de separación y divorcio, etc. Son maneras de resolver conflictos con la asistencia de una persona neutral, que ayuda a la solución pacífica del problema judicial, cuando el caso así amerita y permite. Sus características son: i) es voluntaria; ii) es confidencial; iii) es neutral, y iv) está libre de presiones. El mediador puede asumir varios roles: i) ayudar a las partes en conflicto a evaluar sus posiciones; ii) procurar la modificación conductual, y iii) facilitar la comunicación.

La psicología de la mediación y la conciliación es un subcampo de aplicación de la psicología jurídica cuyo constructo de intervención son las personas en conflicto judicial (Jiménez, 2017, citado por Norza y Egeo, 2017) que, dicho sea de paso, ocupa buena parte del tiempo y de los esfuerzos de la administración de justicia. Se basa en dos áreas de conocimiento: i) la teoría general de la comunicación, que plantea la conexión entre el enfoque cognitivo y la perspectiva social que estudia la conducta comunicativa del ser humano, y ii) la psicología social que, según Crespo (1995), es una rama o un campo de especialización de la psicología general y experimental; al decir de Salcedo (2006), produce conocimientos y tecnologías mediante las cuales el ser humano se conoce a sí mismo para reinterpretarse como ser social y agente de transformación. La aplicación de este campo estimula competencias comunicativas, habilidades asertivas y recursos de afrontamiento psicológico en las personas en conflicto judicial para que actúen en un ambiente de calidad afectiva y cada miembro pueda construir adecuadamente su proyecto de vida teniendo en cuenta las variables psicosociales.

El objetivo de la psicología de la mediación y la conciliación es conseguir la resolución pacífica del conflicto, mediante soluciones negociadas que no desgastan el sistema judicial y brindan la oportunidad para plantear una postura del gana-gana, beneficiosa para ambas partes, lo que evita de paso el resentimiento o el deseo de venganza. La actuación del psicólogo se enfoca en preparar un contexto de entorno

* Psicólogo, especialista en Ciencia Forenses, magíster en Psicología y doctor en Psicología. Coordinador del programa de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

cooperativo para facilitar la comunicación y en gestionar el conflicto con base en la evaluación y el diagnóstico de las condiciones psicológicas en las que se encuentran las partes para que se inicie el proceso conciliatorio; para ello ha de tener en cuenta factores como los rasgos de personalidad, las posibles psicopatologías, los errores atribucionales, el locus de control, el efecto halo, el efecto lenitivo y la influencia social. Es decir, se trata de preparar un contexto adecuado para que las partes puedan comunicarse con herramientas que les permitan manejar el conflicto, centradas en el bienestar psicológico y emocional durante la negociación, para lograr un mutuo acuerdo.

Referencias

- Crespo, E. (1995). *Introducción a la Psicología Social*. Universitas.
- Norza, E. y Egea, G. (2017). *Con-ciencia criminal: criminología, psicología jurídica y perfilación criminal*. Manual Moderno.
- Salcedo, E. (2006). La psicología social: fundamentos del orden y cambio social. *Psicogente*, 9 (16), 68-74.

7

LA PSICOLOGÍA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN

Carlos José Quintero-Cárdenas*

Resumen

Los conflictos humanos, tan diversos como las relaciones entre personas, constituyen la categoría de estudio de distintas disciplinas, entre las que la psicología se destaca por su amplio interés, no solo en describirlos, comprenderlos y explicarlos, sino también intervenirlos para facilitar una solución que preserve la salud mental y el bienestar general de las personas implicadas (Neery y Beheshtifar, 2015). Para la psicología jurídica de la mediación y la conciliación, los conflictos que sobrepasan la cotidianidad y, por su alcance jurídico, se resuelven dentro del derecho privado o público, representan el objetivo de estudio principal, en especial porque en cada uno de ellos el comportamiento humano es el factor determinante de su desarrollo, mantenimiento o extinción. El presente capítulo tiene como objetivo abordar esta subespecialidad de la psicología jurídica y su participación en la resolución pacífica de conflictos de orden jurídico por los que las partes intervenirían en largos y complejos procesos adversariales que no se escapan de la contradicción, la controversia y la confrontación. Para iniciar se definen el conflicto y sus tipos, los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) y el campo de la psicología jurídica de la mediación y la conciliación; seguido de esto, se describe el rol del psicólogo jurídico en el área de la mediación y conciliación de conflictos y por último se expone el estado actual de la investigación y los avances científicos de los países latinoamericanos.

Palabras clave: psicología jurídica, mediación, conciliación, MASC, conflicto.

Introducción

Las reacciones de las personas frente a la confrontación cobran especial relevancia cuando se trata de determinar si un conflicto evoluciona o se detiene: se detendrá si

* <https://orcid.org/0000-0003-1390-014X>

las reacciones de las partes se alejan de la oposición y por el contrario, evolucionará si estas se ajustan a un interés de resolución de conflictos basado en la competencia y en el beneficio individual, como suele suceder en los conflictos de alcance jurídico, los cuales se resuelven tras largos procesos adversariales (Vizcarra, 2011) en los que las partes compiten y no concilian. El estudio de este último tipo de conflictos, por ser expresión propia del comportamiento humano, le corresponde a las ciencias sociales, pues la psicología continúa con la intención de facilitar su solución y preservar la salud mental de las partes y el bienestar general. Se requiere no solo tener conocimientos propios del ser humano y de un contexto social general, como lo hace la psicología social, sino también de un contexto jurídico particular que ha sido organizado, regulado y protegido por el derecho.

La psicología jurídica, como subespecialidad de la psicología general, representa el campo más idóneo para abordar aquellos conflictos entre personas, que tienen alcance jurídico. Este campo aplicado de la psicología representa una de las tantas disciplinas que, con sus métodos, aporta a la resolución ordinaria (tradicional) y alterna (pacífica) de los problemas jurídicos. Esta última forma —la alterna— abre un interrogante adicional, el cual se tratará a lo largo del capítulo y se solucionará mediante el reciente rol de la psicología jurídica en el ámbito de la mediación y la conciliación (Torres, 2003): ¿Es posible, dentro del derecho, solucionar conflictos jurídicos sin recurrir a la confrontación y a la competición?

Para resolver la pregunta anterior, se describen los conflictos desde una comprensión general de las relaciones humanas, que suceden mayoritariamente fuera de contextos judiciales, luego se revisan aquellos conflictos que tienen implicaciones jurídicas y que representan un tema de especial interés para la psicología jurídica en el ámbito de la mediación y la conciliación, no sin antes definir qué se entiende por conflicto y cuáles tipos de conflicto podrían desarrollarse dentro del derecho público o privado.

Más adelante se definen los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) y se describen los más utilizados en Colombia para hacerles frente a los conflictos por incompatibilidad de intereses o derechos. Se revisan los mecanismos específicos de mediación y conciliación dentro de diversas áreas del derecho: la penal, la civil, la laboral y la contencioso-administrativa. Se destacan de este último apartado la forma en que se implementan los MASC en Colombia, la normatividad que los regula y sus beneficios generales en comparación con los procesos ordinarios.

A continuación, se desarrolla lo que se comprende por psicología jurídica de la mediación y la conciliación, no sin antes mencionar la compleja definición de la psicología jurídica y el porqué de un subcampo propio de la ciencia psicológica que estudia los conflictos con alcances jurídicos. En continuidad con esta temática, se

incluye también el rol general del psicólogo que ejerce su actividad profesional en esta especialidad y sus funciones principales en términos de valoración, evaluación, diagnóstico, intervención, asesoría, formación y capacitación, e investigación científica, dentro del ámbito de la mediación y la conciliación.

Por último, a partir de una breve revisión sistemática de las publicaciones sobre el área, específicamente de los recientes cinco años, se muestra el estado actual de la investigación y los avances científicos de los países latinoamericanos en la psicología jurídica de la mediación y la conciliación.

Conflictos humanos

La naturaleza humana ha sido descrita de diversas formas, de acuerdo con orientaciones tradicionales y contemporáneas de corte filosófico, sociológico y antropológico, en una larga y controversial historia de conceptualizaciones que, en conjunto, refieren características del ser humano como parte del mundo natural distinto a otras especies animales. Entre los rasgos más mencionados se incluyen su capacidad de conocer el mundo, sus formas variadas de actuar, pensar y sentir y, en especial, su ardua tarea de modificar el entorno para crear las condiciones básicas que le garanticen supervivencia y progreso, sin desconocer, claro está, la conexión con las demás personas (Arendt, 2009).

Gracias a la naturaleza, el ser humano ha logrado sobrevivir, pues esta le ha permitido acceder a recursos suficientes para suplir sus necesidades básicas, pero es por la cultura y su inmersión en ella que ha podido desarrollar habilidades adicionales que lo diferencian de otros animales y lo estabilizan en un mundo cambiante y dinámico, como el lenguaje y la socialización (relaciones humanas) (Terziev, 2017). Tales aspectos superan los objetivos primitivos de la conservación del territorio y de la especie a partir de la lucha y la reproducción. No obstante, estas neoformaciones, por más ventajosas que sean en términos filogenéticos, no siempre traen consigo consecuencias positivas y esto se evidencia en que, como producto de la socialización y de las relaciones humanas, las cuales se enmarcan en contextos histórico-culturales particulares, surgen también fenómenos problemáticos que se convierten en parte ineludible de la vida, como la aparición y el afrontamiento de conflictos entre personas.

En las relaciones interpersonales no siempre se garantiza un acuerdo total entre las partes y, para que no exista el conflicto, los seres humanos deberían ostentar características idénticas, lo cual es imposible. Los seres humanos se relacionan entre sí y esto conlleva desacuerdos, inconformidades y claras oposiciones en creencias,

percepciones, pensamientos, modos de actuar y decisiones que, en conjunto, conforman la base para el desarrollo de conflictos. Estas discrepancias pueden manifestarse en cualquier etapa del desarrollo, como la infancia, la adolescencia o la adultez. En la infancia es común encontrar disputas por la obtención de un juguete, de mayor atención o de afecto por algún progenitor o por la elección de un juego colectivo; en la adolescencia, por la identificación con algún grupo social particular; en la adultez, por desacuerdos o incumplimientos en la celebración de negocios, la custodia y la patria potestad de los hijos después del divorcio o por diferencias en el ejercicio de alguna actividad productiva.

Históricamente también se han registrado conflictos en los cuales se exhiben múltiples diferencias entre los seres humanos que se comportan en función de objetivos individuales o colectivos; entre estas situaciones se destacan: i) conflictos territoriales no resueltos, como la disputa por la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia, o Brasil y Bolivia por la isla Suárez en la Amazonía; ii) rivalidades históricas entre México y Estados Unidos por el cruce ilegal de migrantes centroamericanos; iii) diferencias de ideas entre conservadores y liberales en Colombia, lo que también ocasionó una guerra civil a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y iv) el conflicto armado colombiano que, por cierto, aún no se resuelve, por la amplia rivalidad entre las guerrillas y los grupos paramilitares y por la polarización en el ejercicio de la política en este país.

Para la sociedad, las confrontaciones podrán representar una valoración especial, es decir, podrán ser catalogadas como buenas o malas, de acuerdo con el tipo de conflicto, las consecuencias ocasionadas, el grado de implicación en la disputa de la persona que lo valora o califica, y las motivaciones que impulsaron la aparición del problema; ejemplos de ello son la valoración positiva que le da la madre a la competencia entre sus hijos por la búsqueda de su afecto, ya que esta situación le sirve como refuerzo de su autoconcepto o la valoración negativa que le atribuye una víctima del conflicto armado a la rivalidad entre guerrillas y grupos paramilitares en Colombia, pues ha experimentado en carne propia sus efectos sobre los derechos fundamentales.

En la actualidad se reconoce el progreso social internacional en términos de derechos humanos. Luchas sociales, expresadas en protestas y huelgas multitudinarias, han suscitado transformaciones significativas para la historia de América Latina, como la sindicalización del movimiento obrero en Perú y México, la revolución en la República de Cuba y la reivindicación étnica y de los derechos civiles de las mujeres en varios países del Cono Sur, entre otros. Lo anterior es evidencia de que la transformación social constituye la representación fáctica de lo que podría denominarse una sociedad dinámica a merced de las contradicciones y los antagonismos, en la

que el conflicto se convierte en un imperativo para el progreso y no en la causa del deterioro de las relaciones o de la involución de la naturaleza humana.

Definición de conflicto

Para efectos del presente capítulo, de acuerdo con Kriesberg (1975) y Entelman (2002), el conflicto se entiende como un fenómeno social consciente en el que se admite y mantiene una relación entre dos o más partes que tienen una incompatibilidad de intereses o propósitos y buscan una solución o respuesta. Son componentes necesarios para que surja: i) la oposición de intereses o propósitos; ii) al menos dos partes enfrentadas; iii) la consciencia de permanecer o desarrollar el enfrentamiento, y iv) la búsqueda de solución.

Las partes del conflicto o en oposición son definidas como unidades autónomas representadas en personas o colectividades (grupos, organizaciones, naciones y Estados) (Bercovitch et al., 2009). Una posible tipología de los conflictos acorde con esta definición podría ser la siguiente: conflicto interpersonal, intragrupal e intergrupal; el primero de ellos hace referencia a la incompatibilidad presentada entre dos o más personas; el segundo, entre dos o más personas de una misma colectividad, y el tercero, entre dos o más grupos.

Para Fuquen (2003), las personas en confrontación (partes principales) no son los únicos participantes del conflicto. Esta autora adiciona dos categorías: partes secundarias e intermedias. De esta forma, lo que se obtiene es la inclusión de los interesados en los resultados del conflicto, pero que no se encuentran en el enfrentamiento directo, y a quienes sirven como facilitadores para la resolución efectiva de la disputa; estos últimos ostentan especial importancia para el presente capítulo, ya que son los actores que, de forma imparcial, contribuyen a la obtención de un acuerdo estable para las partes, del cual se espera que se beneficie la relación entre ellos y se prevengan posibles consecuencias negativas.

Conflictos humanos en el ámbito jurídico

En muchas ocasiones, los conflictos exceden los ámbitos personales y adquieren relevancia jurídica, pues ya no solo hay incompatibilidad de intereses, sino también una contraposición de derechos. En aras de su efectiva solución, los Estados disponen de vías judiciales y extrajudiciales; es en las segundas en las que la psicología jurídica de la mediación y la conciliación desempeña un papel de especial relevancia.

Por vía extrajudicial, la resolución del conflicto se logra antes o por fuera del proceso judicial, con mecanismos alternativos no formales (MASC) como la negociación, la mediación, el arbitraje, la justicia de paz, la amigable composición y la conciliación. Estas alternativas permiten que las partes intervengan de forma activa en el conflicto, al considerar sus propias necesidades y proponer acuerdos efectivos que propicien el beneficio en común. En modalidades específicas, el conflicto requerirá de la presencia de un tercero imparcial que funja como facilitador.

Por vía judicial, se accede a la solución del conflicto dentro de un proceso judicial, mediante una decisión que será tomada por un juez imparcial que forma parte de la administración de justicia y que delibera en función de criterios objetivos ajustados al ordenamiento jurídico. Desde el derecho procesal, la decisión es producto de un encuentro adversarial en el que las partes son escuchadas por el juez, con la intención de que el interés individual prevalezca (completa o parcialmente) sobre el de la otra persona.

Independientemente de si la resolución de los conflictos se consigue por vía judicial o extrajudicial, por su relevancia jurídica e implicaciones judiciales, se enmarca en el derecho privado o público. El derecho privado se encarga de la regulación y del control de las relaciones entre particulares y el derecho público, por su parte, de la regulación y del control de las relaciones entre el sujeto público y los sujetos privados, es decir, entre el Estado y los particulares. En el derecho público también se incluyen las relaciones entre el Estado y las personas jurídicas y las del Estado consigo mismo (Guzmán, 2015).

Conflictos privados

Serán conflictos privados todos aquellos enfrentamientos y controversias que surgen en las relaciones jurídicas entre particulares, por incompatibilidad de intereses, propósitos o derechos.

Conflictos públicos

Serán conflictos públicos todos aquellos enfrentamientos y controversias que surgen en las relaciones jurídicas entre el sujeto público (el poder público o el Estado) y los sujetos privados (particulares y personas jurídicas), por incompatibilidad de intereses, propósitos o derechos.

Mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC)

Estos mecanismos son una respuesta a la evidente ineficacia de los sistemas de justicia tradicionales para resolver controversias de orden jurídico, lo que amplía las posibilidades (formales e informales) que tienen las personas para acceder a una solución concertada, pacífica y amistosa de la confrontación (Colombia, Corte Constitucional, 1996a; 1996b). La regulación jurídica de este asunto inicia con un importante antecedente: la Ley 23 de 1991 (Colombia, Congreso de la República, 1991), en la cual se crean oficialmente los mecanismos para descongestionar los despachos judiciales, además de algunas otras disposiciones. Más adelante aparecen algunos otros referentes normativos sobre mecanismos específicos, como la Ley 446 de 1998 y la Ley 640 de 2001, que regulan la conciliación (Colombia, Congreso de la República, 1998; 2001a) y la Ley 497 de 1999 que regula y crea a los jueces de paz (Colombia, Congreso de la República, 1999), entre otras.

La génesis de los MASC en el contexto colombiano se fundamenta en la cultura estable de violencia que se ha vivido a lo largo de los años en países latinoamericanos, en los que se prefiere la judicialización de las controversias en vez de una salida alterna pacífica, lo que ha provocado la alta congestión de la administración de justicia en todas sus jurisdicciones y algunas otras dificultades que no se escapan de la crítica de los funcionarios del derecho y de la población civil. A lo anterior se suman variables como las dificultades para el acceso a la justicia y el número limitado de jueces en comparación con el número de conflictos en Colombia, entre otros. Como consecuencia de la aparición de estos mecanismos alternos se destacan beneficios como la disminución sustancial del volumen de procesos administrados por el Estado, de la cantidad de confrontaciones violentas y poco amistosas y de casos sin resolver.

Para introducir de forma adecuada la participación del psicólogo jurídico en este campo, es menester describir los MASC, con la salvedad de que la actividad psicojurídica del profesional no es la misma en cada uno de ellos: en algunos será mediador o conciliador, pero en otros se centrará en la asesoría, formación y capacitación.

Entre los MASC se incluyen las modalidades de negociación, mediación, arbitraje, justicia de paz, amigable composición y conciliación. En Colombia se cuenta con regulación normativa o leyes que promueven la aplicación de cada uno de ellos, excepto para la negociación.

Negociación

Proceso al cual las partes implicadas en el conflicto llegan autónoma y voluntariamente a un acuerdo que pone fin a la controversia. Este método facilita el establecimiento

de convenios de forma directa sin la intervención de un tercero, ya que solo exige las voluntades de las partes y una adecuada comunicación en la que se intercambian posibles soluciones.

El Ministerio de Justicia y del Derecho en Colombia (s. f.) fija el procedimiento de negociación de deudas como mecanismo alternativo de solución de conflictos, para brindar a la persona, ya sea natural o jurídica, la oportunidad de reajustar sus pasivos financieros a un plan de pago que favorezca el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.

Mediación

En el proceso de mediación participa un tercero imparcial (mediador) para poner fin a la controversia (Arboleda, 2017). A diferencia de la conciliación, el tercero imparcial no necesariamente debe ser un abogado y puede serlo una persona con otra profesión. El mediador facilita la comunicación y la negociación escuchando a las partes involucradas y conduciendo la conversación, según las posibles soluciones en equidad que se logren identificar, aunque no tiene autoridad para decidir o pronunciarse frente a un acuerdo; su función solo corresponde a la facilitación del diálogo y al acceso autónomo a la solución (Arboleda, 2017).

Arbitraje

Es el proceso en el cual se decide sobre la controversia por medio de un tercero (árbitro) que funge transitoriamente como juez y toma decisiones basadas en su propio criterio. Las partes eligen al árbitro o acuden a un tribunal arbitral para que profiera lo que se denomina un laudo arbitral, decisión tomada de acuerdo con el derecho positivo vigente, a las reglas de la sana crítica o a conocimientos científico-técnicos específicos (Colombia, Congreso de la República, 1998).

Justicia de paz

En este proceso se toman decisiones sobre el conflicto con ayuda de representantes (jueces de paz) que, por su reconocimiento y trayectoria social, representan autoridad para la resolución de controversias de índole comunitaria (Colombia, Congreso de la República, 1999).

Amigable composición

Acorde con el Ministerio de Justicia y del Derecho (s. f.), en la amigable composición se delega a un tercero (amigable componedor) la facultad de decidir frente a

una controversia contractual de libre disposición. Quien delega al amigable compondor son los particulares, las entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas y se encuentre como participante de la controversia (Colombia, Congreso de la República, 1998).

Conciliación

A diferencia de la negociación, en la conciliación se requiere la participación de un tercero imparcial (conciliador) para poner fin a la controversia, quien suele ser profesional en derecho. El tercero imparcial facilita la comunicación entre las partes y coadyuva a conseguir soluciones jurídicas avaladas por la ley (Colombia, Congreso de la República, 1998; Colombia, Corte Constitucional, 1993). Este proceso busca un acuerdo que tenga efectos jurídicos.

La República de Colombia (s. f.), por medio del Ministerio de Justicia y del Derecho, dispone dos tipos de conciliación: en equidad y en derecho. En la primera, el tercero imparcial se denomina conciliador en equidad y puede ser elegido para facilitar la resolución del conflicto por una organización civil o comunitaria de acuerdo con sus capacidades o su reconocimiento. El conciliador, ya avalado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, no tiene la autoridad para decidir frente a la solución de la controversia, sino que actúa para que las partes, de forma autónoma, puedan conseguirla teniendo en cuenta el beneficio en común. La conciliación en derecho se llevará a cabo con terceros imparciales en plenas funciones conciliatorias, según las autoridades o los centros de conciliación.

La conciliación en materia penal

Se entiende por derecho penal al conjunto de normas que, dentro del derecho público, regulan el comportamiento de la sociedad en función de la protección de los bienes jurídicos de las personas (García-Pablos, 2012). A quienes ponen en riesgo o violan los bienes jurídicos de una persona, por la comisión de delitos, desde esta área del derecho se les atribuye consecuencias jurídicas como las penas y las medidas privativas de la libertad; estas fungen como soluciones a los conflictos que se suscitan entre el Estado y la persona (natural o jurídica) que sea hallada como responsable (García-Pablos, 2012).

Con fundamento en su naturaleza sancionatoria, el derecho penal se ocupa de un conflicto entre el Estado y la persona responsable del delito, el cual se resuelve por criterios autónomos del administrador de justicia y con herramientas jurídicas e instrumentos privados de carácter punitivo que buscan la sanción o absolución de la parte procesada. El derecho penal ha sido utilizado como un cuerpo normativo

que sirve de estrategia para el control social formal y para la protección de los bienes jurídicos de las personas. Los esfuerzos se enfocan en garantizar justicia exclusivamente por medio de la sanción penal del ofensor y excluye de sus acciones la atención de la víctima, es decir, la persona que sufre en sí misma las consecuencias del ilícito; en el mejor de los casos, ella se atiende parcialmente al final del proceso penal, cuando se abre el incidente de reparación.

Por lo anterior, los MASC se convierten en estrategias idóneas para acceder a soluciones pacíficas en situaciones que no revisten una considerable gravedad y se ve la posibilidad de una negociación asistida que propende por un mayor beneficio para las partes, como el restablecimiento del daño causado, la reconstrucción del tejido social y la satisfacción de los intereses de la víctima y de la sociedad. Un ejemplo son aquellos conflictos generados por la inasistencia alimentaria de un padre hacia su hijo: el segundo no requiere la medida privativa de la libertad del primero, sino una concertación que le garantice la satisfacción de sus necesidades básicas. En casos como estos, el empleo de mecanismos como la mediación y la conciliación podrán asegurarles al hijo y a su madre una justicia reparadora, rápida y de fácil acceso, en la que se cambie el castigo del ofensor por la responsabilidad del mismo; además, se logra la descongestión del sistema penal, lo que sin duda también sirve, dado que el Estado, con su potestad sancionatoria, debe orientar sus esfuerzos hacia la resolución adversarial de asuntos de mayor gravedad.

En Colombia, la implementación de los MASC se materializa en el área penal a partir de tres mecanismos de justicia restaurativa: i) la conciliación preprocesal, regulada por el Acto Legislativo 03 de 2002 (Colombia, Congreso de la República, 2002) y, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 522, puede ser implementado para delitos querellables, por fiscales, conciliadores de centros de conciliación y conciliadores; ii) la conciliación procesal, que se lleva a cabo después de la sentencia condenatoria del ofensor, a partir del ejercicio del incidente de reparación integral, y iii) la mediación, por medio de la cual se busca, antes de iniciar el juicio oral, la reparación, la restitución o el resarcimiento de los daños causados en delitos cuya pena mínima no exceda los cinco años de prisión (Colombia, Congreso de la República, 2004).

La conciliación en materia civil

Se entiende por derecho civil al grupo de normas y leyes que, dentro del derecho privado, regulan las relaciones entre personas (Medina, 2010) dentro de categorías como la familia y la vida patrimonial. Aquí se incluyen temas como la celebración de contratos, las obligaciones contractuales, las sucesiones, la propiedad, los matrimonios, las uniones maritales de hecho, los divorcios, la custodia, la patria

potestad, etc. (Colombia, Congreso de la República, 2012). Un conflicto jurídico en esta área podrá desarrollarse en cualquiera de los temas referidos y manifestarse en una demanda, lo que convoca un proceso litigioso en el que las partes en controversia serán el demandante y el demandado; ambos, de forma adversarial, tendrán como objetivo hacer prevalecer sus intereses individuales; así, al final del conflicto habrá un ganador y un perdedor (Colombia, Congreso de la República, 2012).

Los MASC en materia civil también constituyen una alternativa idónea para lograr una salida pacífica del conflicto. Ambas partes, por acuerdo o por una solución concertada, podrán obtener el beneficio común más que el beneficio particular, es decir, dejar de lado lo que para el derecho es la supremacía de una parte sobre la otra. Con los mecanismos alternativos como la conciliación se abre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que resulte satisfactorio y beneficioso para ambas partes, sin necesidad de acceder a la justicia para que el Estado ponga en marcha su potestad sancionatoria; ejemplo de ello es la solución concertada de una pareja que, después del divorcio, ha decidido extrajudicialmente mantener la custodia compartida de sus hijos, la modificación pactada de un contrato de arrendamiento, y la indemnización por el incumplimiento de alguna cláusula contractual.

La implementación de los MASC en el área civil en Colombia, se materializa con la mediación y la conciliación extrajudicial de equidad o de derecho (antes o fuera del proceso judicial), las cuales buscan, al igual que en otras jurisdicciones, garantizar el acceso a la justicia para las partes, coadyuvar a gestionar pacíficamente los conflictos y descongestionar los despachos de la administración de justicia (Colombia, Congreso de la República, 1991). De acuerdo con la legislación colombiana vigente, la conciliación sirve como herramienta para resolver de modo pacífico los conflictos (desistibles o conciliables) concernientes a relaciones o situaciones patrimoniales u obligacionales; este mecanismo requiere un tercero facilitador, que puede ser un funcionario del Estado, un profesional que forme parte de centros de conciliación o un conciliador de alguna organización civil (Colombia, Congreso de la República, 1991; Ministerio de Justicia y del Derecho, s. f.).

La conciliación en materia laboral

Se entiende por derecho laboral el grupo normativo que, dentro del derecho privado, reglamenta relaciones entre personas con ocasión del trabajo, es decir, empleadores y trabajadores (Fournier, 2011). Las relaciones desde esta área se regulan para garantizar las obligaciones de las partes, como el cumplimiento de una jornada laboral pactada, la remuneración al empleado por el trabajo desempeñado, el pago de incapacidades, etc.

Ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones, ya sea por parte del empleado o del empleador, es posible que se presente un conflicto de alcance jurídico, el cual se inicia con una demanda y se resuelve en un proceso de una única instancia que incluye dos etapas: i) la conciliación, y ii) el debate probatorio, que se lleva a cabo en caso de no lograr una salida concertada a la controversia (Colombia, Congreso de la República, 2001b). Lo anterior se puede representar de forma fáctica en una situación en la que, después de agotada la parte conciliatoria, el juez falla en contra del empleador por incumplir con el pago de la seguridad social de sus empleados.

Los MASC en materia laboral, como sucede en otras jurisdicciones, representan una alternativa para la resolución ordinaria del conflicto, en especial, la mediación y la conciliación; para la segunda, Colombia ya cuenta con avances normativos que abren la posibilidad de conciliar antes o después de interponer la demanda (Colombia, Congreso de la República, 2001b).

La conciliación en materia administrativa

Se entiende por derecho administrativo el conjunto de normas que, dentro del derecho público, normaliza la administración pública y sus relaciones con particulares (Fernández, 2015). Un conflicto en esta área sigue un proceso ordinario, el cual consta de varias etapas para llegar a su resolución: formativa o inicial, probatoria, de alegatos y de fallo (Colombia, Congreso de la República, 2011). Uno de los casos más sonados en Colombia durante los últimos tiempos y que podría servir de ejemplo para esta área del derecho es el de Odebrecht, que ya tiene un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de la constructora brasileña.

Los MASC en materia administrativa representan una forma de solución pacífica del conflicto, que garantiza la disminución de costos operativos, el beneficio común para ambas partes, la solución del conflicto sin dilaciones y la descongestión del sistema de administración de justicia. Por lo que se refiere a la conciliación (mecanismo formal), en Colombia se cuenta con normatividad vigente que vincula al agente del ministerio público, al juez y al tribunal o Consejo de Estado en lo judicial, como los terceros neutrales (conciliadores) idóneos para facilitar salidas alternas al proceso ordinario en conflictos contencioso-administrativos (Colombia, Congreso de la República, 2011; Fernández, 2015).

Psicología jurídica de la mediación y la conciliación

Definir la psicología jurídica es y será por algún tiempo un tema arduo, precisamente por la multiplicidad de conceptos, simples y generales, que han sido elaborados

hasta la actualidad; por las dificultades al intentar precisar un campo aplicado solo desde las funciones del psicólogo que ejerce su labor en ámbitos jurídicos, y por la ausencia de reflexiones profundas sobre el corpus teórico de una subespecialidad de tan reciente desarrollo (Gutiérrez, 2010). No obstante, para efectos del presente capítulo y en aras de ilustrar al lector acerca del porqué la psicología jurídica es la subespecialidad de la psicología encargada de abordar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, se describen a continuación algunas de sus definiciones, ampliamente difundidas entre la comunidad científica:

El Consejo General de la Psicología de España (COP) (s. f.) explica la psicología jurídica como una subespecialidad de la psicología que se encarga del comportamiento de los actores que intervienen en los ámbitos del derecho, de la ley y la justicia, lo que permite inferir un objetivo amplio de estudio que apunta al abordaje científico del comportamiento de las víctimas de delitos, los victimarios u ofensores, las personas privadas de la libertad en cumplimiento de una sentencia condenatoria, los testigos y, en general, aquellas en conflicto judicial. Además, los funcionarios judiciales también podrían ser de interés para este campo aplicado de la ciencia psicológica.

Aunado a lo anterior, en términos relacionales, Munné (1980) cataloga la psicología jurídica como la psicología social del derecho; por su misma etiqueta, comprende el comportamiento de una persona como una categoría determinada por la influencia del comportamiento de otras. Esto coincide con los intereses del presente capítulo, puesto que, para configurar un conflicto de implicaciones jurídicas, se necesita el enfrentamiento de incompatibilidades (conductuales, cognitivas o afectivo-emocionales) de dos o más personas, aspecto que también es de interés para la psicología social (Crespo, 1995). Sin embargo, esta conceptualización no es lo suficientemente específica para resolver el siguiente interrogante: ¿Por qué la psicología jurídica es la encargada de abordar los mecanismos alternativos de solución de conflictos?

En definiciones más recientes, como la proporcionada por Hoyos (2002), se comprende la psicología jurídica como el área de esta ciencia aplicada al derecho, es decir, aplicada al conjunto de normas y leyes que regulan el comportamiento humano y la convivencia en una sociedad. Se infiere que el psicólogo formado en jurídica ejercerá su actividad en ambientes jurídicamente regulados, en los cuales las actuaciones para resolver los conflictos pueden ser de orden judicial o extrajudicial; este último, como se mencionó, coincide con la implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Aunque encaje con el tema del presente capítulo, esta definición también resulta insuficiente para lo que sería la conceptualización de un campo aplicado como la psicología jurídica.

Razonablemente, el consenso en la interpretación no es posible y, por ello, esta temática no se abordará con profundidad. Es suficiente con mencionar que, para quienes ejercen su actividad profesional desde la psicología jurídica, esta subespecialidad permite emplear métodos propios de la psicología básica y experimental en el estudio del comportamiento humano que tiene implicaciones jurídicas y que se desarrolla en ambientes legales (Díaz, s. f.; Grupo de profesores posgrados en Psicología Jurídica, 2009; Morales y García, 2010). Ejemplo de lo anterior son los conflictos entre personas (naturales o jurídicas) que superan el área personal y alcanzan el ámbito jurídico, ya sea privado o público.

La psicología jurídica, como se observa en el presente texto, cuenta con múltiples subcampos de acuerdo con los objetivos de estudio específicos y los fenómenos psicológicos a intervenir enmarcados dentro de la relación psicología-derecho. Entre los tantos descritos por la literatura especializada se incluye la psicología de la mediación y la conciliación, encargada de apoyar la solución pacífica de los conflictos desde la cientificidad de la disciplina (Consejo General de la Psicología de España, s. f.). Para Jiménez (2017), esta área tiene como constructo principal de intervención a las personas en conflicto judicial, quienes exhiben algunos fenómenos psicológicos que deben ser abordados para la resolución efectiva y pacífica de los conflictos, como la comunicación, la motivación, la personalidad y la cognición, entre otros.

Para la psicología jurídica de la mediación y la conciliación son de principal interés los mecanismos alternativos de solución pacífica de conflictos de la mediación y la conciliación; esto no quiere decir que la participación del profesional se excluya de la negociación, el arbitraje, la justicia de paz y la amigable composición.

Rol del psicólogo jurídico en la mediación y la conciliación

El psicólogo jurídico es el profesional en psicología que se ha especializado en psicología jurídica mediante programas posgraduales y complementarios. Su actividad profesional científico-técnica, ajustada a las múltiples definiciones de la especialidad, es desarrollada en ámbitos donde se hacen presentes comportamientos de diversos actores (víctima, criminal, interno penitenciario, testigo, personas en conflicto, etc.), que alcanzan implicaciones jurídicas.

El psicólogo jurídico que ejerce su actividad profesional en los ámbitos de la mediación y la conciliación tiene como objetivo principal diseñar e implementar métodos de la psicología básica y experimental para la descripción, comprensión, explicación, predicción, intervención y el acompañamiento del comportamiento

humano de las personas en conflicto, para facilitar la resolución pacífica sin desconocer el marco normativo vigente de los contextos a los que atañe la controversia. De acuerdo con el alcance jurídico del conflicto y el tipo de personas participantes en la confrontación por incompatibilidad de intereses o derechos (personas naturales o jurídicas, públicas o privadas), el psicólogo jurídico de la mediación y la conciliación podría ejercer su actividad profesional en áreas del derecho (privado o público) como la penal, la civil, la laboral y la administrativa, entre otras.

De acuerdo con lo señalado por el Congreso de la República de Colombia (2006), en la Ley 1090 de 2006, que reglamenta el ejercicio de la profesión de la psicología en Colombia y dicta el Código Deontológico y Bioético, el psicólogo profesional, independientemente de su especialidad, desempeñará funciones de: i) diseño, ejecución y dirección de programas de evaluación, diagnóstico e intervención; ii) diseño, ejecución y dirección de investigaciones científicas; iii) asesoría y participación en el diseño y la formulación de políticas públicas, y iv) diseño, ejecución y dirección de programas de capacitación, en aras de abordar con suficiencia el comportamiento humano como objetivo principal de estudio. Todas estas competencias, vistas en particular desde la psicología jurídica de la mediación y la conciliación, buscan apoyar la resolución pacífica de conflictos a partir del estudio de los factores psicosociales de las partes intervinientes que dificultan el acceso a una solución de común acuerdo (no adversarial) o que facilitan la finalización de la contraposición.

El rol específico del psicólogo jurídico en este campo de la mediación y la conciliación, al igual que en los otros subcampos, depende directamente de las personas a quienes dirige sus acciones y de los procedimientos a desarrollar (Tapias y Gutiérrez, 2008). Entre las personas objetivo se incluyen las víctimas, los agresores, los internos penitenciarios, los profesionales y las demás personas en conflicto con la ley; y entre los procesos, la mediación y conciliación propiamente dicha, la asesoría y la capacitación, la investigación científica y los procesos de evaluación, diagnóstico (no clínico) e intervención (Consejo General de la Psicología de España, s. f.; Tapias y Gutiérrez, 2008).

A continuación se describe el rol general del profesional de acuerdo con las personas y los procesos mencionados.

Valoración, evaluación, diagnóstico e intervención

El psicólogo podrá desarrollar procedimientos valorativos o evaluativos que conduzcan al esclarecimiento y a la identificación de factores psicosociales que dificulten o faciliten la resolución pacífica y efectiva de un conflicto entre

personas. Para adelantar estos procesos podrá hacer uso de técnicas, métodos y herramientas propios de la ciencia psicológica como la observación, la entrevista y los instrumentos de evaluación psicológica.

Una vez elaborada la valoración o la evaluación, el psicólogo jurídico podrá confirmar o descartar hipótesis diagnósticas de las características psicosociales (facilitadores o no de la solución del conflicto) de los participantes, además de diseñar planes y estrategias de intervención que conduzcan a potenciar factores facilitadores y a disminuir los factores que dificultan el proceso de acuerdo.

Otro tipo de intervención que podrá hacer el psicólogo jurídico es la intermediación en el conflicto, pero esta se describirá más adelante en la función de mediación y conciliación.

Asesoría

El psicólogo, dentro del marco de la mediación y la conciliación, podrá asesorar abogados y otros profesionales con el fin de apoyar la implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esta asesoría contribuirá tanto en la adecuada implementación de los MASC, para prevenir daños psicosocioemocionales en las partes intervinientes, como en el desarrollo de nuevas técnicas de negociación.

Formación y capacitación

Dentro de estas funciones, el psicólogo podrá capacitar abogados y otros profesionales que cumplen funciones de intermediación en conflictos. Estos procesos estarán orientados a desarrollar competencias comunicativas y de negociación en los profesionales participantes, pues son ellos los que facilitarán la resolución pacífica del conflicto de modo imparcial. Otro aspecto importante para considerar en esta formación es el bienestar de las personas que se encuentran en conflicto con la ley; el desconocimiento por parte de los operadores jurídicos o profesionales intervinientes podría conducir a consecuencias negativas de tipo psicológico.

Mediación y conciliación

En esta oportunidad, el nombre de la función coincide con el nombre del rol a ejercer: mediador y conciliador. El psicólogo podrá desempeñar sus funciones como interviniente o tercero imparcial, para facilitar, desde sus conocimientos sobre el comportamiento humano, el acceso a soluciones negociadas y pacíficas para el conflicto. Estas actividades podrán adelantarse con víctimas y victimarios en materia

penal; con internos penitenciarios, para prevenir conflictos con otros internos a causa de la prisionalización, y con otros actores en conflicto para prevenir el escalonamiento de la confrontación.

Investigación científica

El profesional en psicología jurídica podrá adelantar investigaciones que conduzcan a desarrollar técnicas de negociación efectivas, así como a emplear métodos de intervención ajustados a la población en conflicto, puesto que el mantenimiento, el escalonamiento o la extinción de la confrontación dependerá de diversos factores psicosociales de las partes intervinientes.

La eficacia de la negociación dependerá de la exactitud de la intervención y esta se logra a partir de la implementación de procedimientos basados en la evidencia científica.

Actualidad de la psicología jurídica en la mediación y la conciliación en América Latina

Para este apartado se utilizó una metodología sistemática de búsqueda que permitiera acceder a los últimos avances en la psicología jurídica de la mediación y la conciliación en América Latina, específicamente, aquellos reportados en publicaciones científicas entre el año 2015 y lo que se lleva del año 2020. La estrategia de búsqueda recurrió a la combinación de palabras clave (en inglés y en español) con operadores booleanos; como resultado surgieron las siguientes sintaxis de búsqueda: i) “psicología” AND “mediación” AND “conciliación”, y ii) “psychology” AND “mediation” AND “conciliation”.

La muestra textual elegida para el análisis fue de dos archivos, como producto de los siguientes filtros de información: i) eliminación de duplicados de la búsqueda inicial en Google Académico, Scielo, Scopus y PsychINFO, la cual arrojó un total 1.380 archivos; ii) exclusión de estudios que no cumplieron con el criterio temático —psicología jurídica de la mediación y la conciliación— de acuerdo con la revisión de títulos y abstracts, y iii) exclusión de estudios que no cumplieron con el criterio espacial —América Latina— y de tipo de archivo —artículos de publicación—.

Se halló que, durante los últimos cinco años de publicación (2015-2020), los países latinoamericanos solo han publicado dos investigaciones que se relacionan con la psicología de la mediación y la conciliación, las cuales se fundamentan en la experiencia y la teoría de Colombia, Argentina y Nicaragua. Ambas publicaciones se

escribieron en español y se publicaron en revistas que no son específicas del área de la psicología, pero sí de las ciencias sociales.

Según las investigaciones recientes, registradas en la Tabla 1, la mediación y la conciliación son medios alternativos recientes para la solución de conflictos en procesos de familia y de justicia penal para adolescentes. Inicialmente, Arboleda (2017) adelanta una investigación de tipo hermenéutico en la que se plantea como objetivo describir el estado en el que se encuentran los mecanismos de la mediación y la conciliación para procesos de resolución de conflictos en el área de familia en Colombia. Describe los MASC y centra su atención en lo que representa la mediación y la conciliación para el derecho. Destaca un amplio campo de desarrollo en el que Colombia asegura un uso futuro de estos mecanismos, no solo en el área de familia, sino también del posconflicto.

En términos normativos, la autora compara a Colombia con otros países, con la finalidad de mostrar la carencia de legislación específica para mecanismos informales como la mediación; esto coincide con lo expresado en apartados anteriores de este capítulo, en los que se expone la conciliación, por su amplia regulación, como mecanismo de uso en materia penal, civil, laboral y administrativa.

Otro aspecto destacable de la investigación es la diferenciación que propone la autora entre la mediación y la conciliación, y la mención especial de las emociones como intervinientes en la resolución de conflictos. En lo que se refiere a las emociones, se discute su alta injerencia en los conflictos dentro de la familia, ya que su inadecuada expresión y regulación por alguno de los miembros podría ocasionar comunicaciones disfuncionales que, a su vez, sirven de cimiento para conflictos en los que se requiere la ayuda de un tercero idóneo que facilite su resolución. Al mencionar la idoneidad del mediador o conciliador como tercero, se alude a habilidades de comunicación y de relacionamiento que permitan a las partes en conflicto gestionar las divergencias de forma autónoma, pero mediada.

Rodríguez (2017) expone en su investigación el rol del psicólogo en los procesos de mediación penal juvenil, además de algunas variables psicosociales en adolescentes que han emitido comportamientos transgresores. De acuerdo con estadísticas oficiales, la autora plantea que en España, Argentina y Nicaragua, los adolescentes en conflicto con la ley se encuentran en una condición de desamparo y desprotección, ya sea por los bajos ingresos económicos de su familia, que no alcanzan para suplir necesidades básicas, o por el abandono de alguno de los progenitores. Se incluye, de manera descriptiva y porcentual, la presencia o ausencia de criterios como una educación formal culminada, el consumo de sustancias psicoactivas y la reiteración en comportamientos transgresores de los adolescentes. Al respecto, se observó un amplio porcentaje de adolescentes que no había terminado la educación formal o que no

culminó satisfactoriamente los años académicos de la primaria, con un alto consumo de sustancias y con expedientes robustos en los que se confirma la perseverancia en comportamientos transgresores.

En cuanto al rol del psicólogo en los procesos de mediación juvenil en materia penal, se trae a colación el paradigma restaurativo, desde cuyos principios apoya la reconciliación entre ofensor y ofendido, más que el castigo severo al agresor (Rodríguez, 2017). Tanto en España como en Nicaragua y Argentina, la legislación primera, es decir, su Constitución, avala implementar mecanismos alternativos de solución de conflictos y se resalta la importancia de instaurar el paradigma restaurativo en la justicia penal adolescente (Rodríguez 2017). No obstante, la mediación propiamente dicha no se emplea en ninguno de estos tres países, sino que se menciona la resolución pacífica de conflictos mediante la conciliación y se considera también la posibilidad de reparar al ofendido de forma voluntaria y no forzada (Rodríguez, 2017).

El ejercicio del psicólogo en el área de la mediación representa características y procesos distintos según el país en cuestión. Para Rodríguez (2017), una primera diferencia es que Argentina y España cuentan con equipos interdisciplinarios para la mediación y la conciliación; en cambio, Nicaragua no: allí se designa en exclusiva al juez para esta función. En el equipo español se incluyen los psicólogos como profesionales de apoyo, quienes deben hacer entrevistas preliminares o directas con el joven en conflicto con la ley o su familia; los profesionales se pronuncian frente a jueces y abogados, y elaboran informes e intervenciones que conducirán a determinar cuál es la mejor medida a adoptar para los transgresores de la ley, teniendo en cuenta sus necesidades y el paradigma restaurativo. Similar sucede en Argentina, pero aún se encuentra disparidad en los procesos por la falta de actualización en la normatividad. Finalmente, en Nicaragua se conforman equipos disciplinarios para abordar casos de privación de la libertad del menor de edad transgresor y no procesos alternativos de solución de conflictos, lo que es una carencia importante para el país.

Tabla 1. Muestra textual seleccionada

Número	Autores	Título	País	Año	Revista
1	Arboleda, Adriana Patricia. Rodríguez, Soledad.	Conciliación, mediación y emociones: una mirada para la solución de los conflictos de familia.	Colombia	2017	<i>Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas</i>
2	Rodríguez, Soledad.	Variables psicosociales en las transgresiones de adolescentes y el rol de psicólogas/os en la mediación penal juvenil	Argentina, España y Nicaragua	2017	<i>Cuaderno Jurídico y Político</i>

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, de acuerdo con la escasa publicación en los países del Cono Sur y el amplio número de archivos excluidos de la muestra textual —por no responder al criterio espacial—, se proponen algunas conclusiones:

1. Son escasos los avances latinoamericanos en el campo de la mediación y la conciliación durante los últimos cinco años, pues solo se encuentran dos estudios de corte teórico.
2. Los países latinoamericanos carecen de investigaciones empíricas que permitan obtener avances en el área durante los cinco años anteriores a la escritura de este capítulo.
3. El subcampo de la mediación y la conciliación para América Latina aún no representa una categoría sólida, en términos científicos e investigativos.
4. Los avances de la psicología de la mediación y la conciliación en América Latina durante los últimos cinco años se registran fundamentalmente en libros, disertaciones, colecciones electrónicas y trabajos de investigación que no han sido publicados en revistas científicas (repositorios universitarios y memorias de eventos académicos).
5. El ejercicio de la psicología de la mediación y la conciliación se basa en estudios científicos y en avances obtenidos en períodos anteriores a 2015, los cuales corresponden en gran proporción a países que no son de América Latina.

Referencias

- Arboleda, A. (2017). Conciliación, mediación y emociones: una mirada para la solución de los conflictos de familia. *Civilizar. Ciencias sociales y humanas*, 17(33), 81-96. doi: <http://dx.doi.org/10.22518/16578953.900>
- Arendt, H. (2009). *La condición humana*. Paidós.
- Bercovitch, J., Kremenyuk, V. y Zartman, W. (2009). *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*. SAGE.
- Colombia, Congreso de la República. (10 de febrero de 1999). *Ley 497 de 1999*, “Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento”.
- Colombia, Congreso de la República. (12 de julio de 2012). *Ley 1564 de 2012*, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (18 de enero de 2011). *Ley 1437 de 2011*, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
- Colombia, Congreso de la República. (19 de diciembre de 2002). *Acto legislativo 03 de 2002*, “Por el cual se reforma la Constitución Nacional”.

- Colombia, Congreso de la República. (21 de marzo de 1991). *Ley 23 de 1991*, “Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales, y se dictan otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (31 de agosto de 2004). *Ley 906 de 2004*, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
- Colombia, Congreso de la República. (5 de diciembre de 2001b). *Ley 712 de 2001*, “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”.
- Colombia, Congreso de la República. (5 de enero de 2001a). *Ley 640 de 2001*, “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (6 de septiembre de 2006). *Ley 1090 de 2006*, “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (7 de julio de 1998). *Ley 446 de 1998*, “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
- Colombia, Corte Constitucional. (1993, abril 29). *Sentencia C-165 de 1993*.
- Colombia, Corte Constitucional. (1996a, agosto 22). *Sentencia C-381 de 1996*.
- Colombia, Corte Constitucional. (1996b, febrero 5). *Sentencia C-037 de 1996*.
- Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho. (s. f.). *¿Qué son los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC)?*
<http://info.minjusticia.gov.co:8083/MASC/-Qu%C3%A9-son-los-MASC>
- Consejo General de la Psicología de España. (s. f.). *Psicología jurídica*. <https://www.cop.es/perfiles/contenido/juridica.htm>
- Crespo, E. (1995). *Introducción a la psicología social*. Universitas.
- Díaz, F. (s. f.). *Psicología jurídica latinoamericana* [Archivo PDF]. <https://es.scribd.com/document/220142935/Fernando-Diaz-Colorado-Psicologia-Juridica-Latinoamericana>
- Entelman, R. (2002). *Teoría de conflictos: hacia un nuevo paradigma*. Gedisa.
- Fernández, I. (2015). *Manual de derecho procesal administrativo y contencioso administrativo*. (Tomo I, Vol. I). Editorial Universitaria Universidad La Gran Colombia.
- Fournier, A. (2011). *Derecho laboral I*. (Vol. I). Universidad Estatal a Distancia.
- Fuquen, M. (2003). Los conflictos y las formas alternativas de resolución. *Tabula rasa* (1), 265-278. <https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf>
- García-Pablos, A. (2012). *Introducción al derecho penal. Instituciones, fundamentos y tendencias del derecho penal*. Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Grupo de profesores posgrados en Psicología Jurídica. (2009). *Reflexiones sobre la psicología jurídica* [Documento de trabajo]. Universidad Santo Tomás.

- Gutiérrez, C. (2010). Revisión sobre la definición de psicología jurídica. *Diversitas: perspectivas en psicología*, 6 (2), 221-235. <http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v6n2/v6n2a03.pdf>
- Guzmán, A. (2015). El derecho privado y el derecho público. *Persona y derecho* 72, 11-21. doi: 10.15581/011.72.11-21
- Hoyos, C. (2002). *Manual de psicología jurídica*. Señal Editora.
- Jiménez, L. (2017). Los constructos de intervención en psicología jurídica penal. En E. Norza y G. Egea (eds.), *Con-ciencia criminal* (pp. 3-10). Manual Moderno.
- Kriesberg, L. (1975). *Sociología de los conflictos sociales*. Trillas.
- Medina, J. (2010). *Derecho civil. Aproximación al derecho. Derecho de personas*. Universidad del Rosario.
- Morales, L. y García, E. (2010). Psicología jurídica: quehacer y desarrollo. *Diversitas: perspectivas en psicología*, 6 (2), 237-256. <http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v6n2/v6n2a04.pdf>
- Munné, F. (1980). Sobre Carbonnier: delimitación conceptual de la psicología social del derecho. En S. Muñoz, R. Bayes y F. Munné (eds.), *Introducción a la psicología jurídica* (pp. 143-156). Trillas.
- Neery, M. y Beheshtifar, M. (2015). The Role of Mental Health in Conflict Management. *Journal of Social Issues & Humanities*, 3 (10), 26-29.
- Rodríguez, S. (2017). Variables psicosociales en las transgresiones de adolescentes y el rol de psicólogas/os en la mediación penal juvenil. *Cuaderno jurídico y político*, 3 (9), 55-68. <https://portalderevistas.upoli.edu.ni/index.php/4-CuadernoJuridicoyPolitico/article/view/127/123>
- Tapias, A. y Gutiérrez, C. (2008). *Manual latinoamericano de psicología jurídica*. Edición electrónica.
- Terziev, V. (2017). Social Adaptation and Socialization as Processes: Characteristics, Principles, Factors. *European Journal of International Law*, 28 (4), 914-922.
- Torres, J. (2003). El nuevo papel de la psicología en la solución de conflictos. *Psicología desde el Caribe* (12), 5-10. <https://www.redalyc.org/pdf/213/21301201.pdf>
- Vizcarra, J. (2011). *Teoría general del proceso*. Porrúa.

Luis Orlando Jiménez Ardila*

Universidad Católica de Colombia

Tradicionalmente, la psicología jurídica se ha especializado en varias áreas intradisciplinarias que estudian fenómenos relacionados con el testimonio ante los jueces, la victimización, la criminalidad, las cárceles y penitenciarías, entre otras; en fin, se ocupa de un sinnúmero de situaciones en las que los procesos psicológicos y conductuales de las personas son de interés para la justicia. Entre ellas se encuentran la psicología penitenciaria, la psicología policial, la psicología de los tribunales y las adicciones y violencia; todas estas de utilidad para los profesionales relacionados con la psicología, el derecho, la investigación criminal, la seguridad y las ciencias humanas y forenses, con las que pueden tener una visión más amplia y pertinente de la administración de justicia y ser capaces de aplicar sus técnicas y paradigmas teóricos a contextos civiles, penales, laborales, contenciosos y organizaciones no gubernamentales que apoyan el cumplimiento de la ley.

Una actividad poco conocida, pero no menos importante, del psicólogo jurídico es su participación en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, específicamente relacionada con las adicciones y la violencia en las que con frecuencia se involucran los menores de edad. Aquí el psicólogo tiene un trabajo clave con los padres de familia para sensibilizarlos sobre lo decisivo de su apoyo en el proceso reeducativo, en el que la entrevista psicológica es muy importante, porque de ella deriva información para perfilar el caso y diagnosticar al joven. En este proceso, el profesional conceptúa sobre las condiciones psicológicas y la dinámica familiar y social; adelanta las intervenciones que sean del caso y que se derivan del diagnóstico y de la caracterización, con el propósito de restablecer los derechos de los adolescentes, desde el entendido de que cualquier tipo de adicción que presente es una forma de victimización estatal o parental y el Estado tiene la obligación de intervenir para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional.

Adicional a lo anterior, el psicólogo jurídico está llamado a participar en la política oficial sobre adicciones, por ejemplo, en la Política integral para la prevención y

* Psicólogo, especialista en Ciencia Forenses, magíster en Psicología y doctor en Psicología. Coordinador del programa de Especialización en Psicología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

atención del consumo de sustancias psicoactivas, del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, así como en las discusiones y los planteamientos acerca de la dosis mínima permitida para el porte, al tenor de los criterios de diagnóstico del DSM-V sobre los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas.

La reincidencia en el consumo, cualquiera que sea la edad, tiene el riesgo de propiciar la vinculación con ciertas conductas criminales, propiciadas por factores como el fracaso escolar, la desestructuración familiar, los desórdenes mentales y psicológicos, y la falta de oportunidades educativas y laborales; por ello es trascendental que las intervenciones tengan criterios de efectividad para garantizar una verdadera prevención del delito y sus consecuencias, esto es, la victimización, la inestabilidad social y la improductividad.

8

PERSPECTIVA PSICOJURÍDICA DE LA ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

José Raúl Jiménez-Molina*

Lina Marcela Aldana Coronado

Danna Carolina Rubiano García

Karen Lorena Ruiz Pérez

Natalia Zamudio Barragán

Resumen

El presente capítulo tiene como objetivo elaborar una aproximación teórica a la perspectiva psicojurídica de la adicción a sustancias psicoactivas (SPA), por lo que se abordan conceptos para contextualizar esta problemática, sus causas, sus consecuencias y su tratamiento. Además, se exponen estadísticas sobre la adicción a sustancias psicoactivas y el marco legal y ético para la población colombiana. Como conclusión, se identificó la limitación de la información estadística actualizada disponible en Colombia y las dificultades que se presentan en la práctica de la normatividad para la prevención y el control del consumo de SPA por factores económicos y culturales. Se resalta la necesidad de seguir realizando estudios en este campo, que permitan el desarrollo y el crecimiento científico respecto a datos cuantitativos y a estrategias de intervención en términos de efectividad y disponibilidad de acceso.

Palabras clave: adicción, ética, leyes.

Introducción

Para comenzar es necesario precisar el concepto de sustancia psicoactiva. La Organización Mundial de la Salud (2004, citado por Peniche, 2019) define las sustancias psicoactivas (SPA), también denominadas drogas ilegales, como toda sustancia que, introducida en el organismo, genera alteraciones en el sistema nervioso central con efectos narcóticos, depresivos, estimulantes o alucinógenos y una alta probabilidad

* <https://orcid.org/0000-0003-4806-5068>

de causar dependencia psicológica o fisiológica. Asimismo, son traficadas, fabricadas y consumidas sin una prescripción médica y fuera de un marco legal.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2016), las SPA son sustancias que pueden ser introducidas en el organismo de forma inhalada, ingerida, fumada o inyectada y que ocasionan alteraciones en los procesos cognitivos, la consciencia, el estado de ánimo, la memoria y el pensamiento.

El presente capítulo surge con el objetivo de realizar una aproximación teórica a la perspectiva psicojurídica de la adicción a SPA, los conceptos asociados a esta problemática y sus implicaciones éticas y legales. Debido a la importancia de aportar información acerca de esta situación en el entorno nacional, esta contextualización es un punto de partida para implementar estrategias de evaluación, diagnóstico, intervención y prevención y establecer su efectividad.

Clasificación de sustancias psicoactivas

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (2017), es pertinente considerar que, con el paso del tiempo, la diversidad de sustancias que pueden encontrarse en el mercado se ha incrementado significativamente, dado que, además de seguir en venta las sustancias tradicionales, también han ido apareciendo otras; el policonsumo ha sido una modalidad frecuente.

Las sustancias se clasifican en diferentes tipos. Su consumo ha ido aumentando debido al desconocimiento sobre las drogas lícitas e ilícitas y los efectos de cada una (Lastre et al., 2013), por lo que cobra vital importancia contextualizar las categorías. A continuación se expone la clasificación de las sustancias psicoactivas elaborada por Becoña (1995, citado por Herrera, 2014), a partir de los efectos en el sistema nervioso central, la condición legal y el contexto cultural.

Según efectos en el sistema nervioso central

En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud (2004, citado por Herrera, 2014) afirma que las sustancias psicoactivas pueden clasificarse en las categorías de estimulantes, depresoras, alucinógenas, psicotrópicas y sintéticas.

Sustancias estimulantes

La Organización Mundial de la Salud (1969, citado por Chávez et al., 2016) las define como aquellas que incrementan la actividad del sistema nervioso central y provocan efectos como euforia, desinhibición, disminución del control emocional,

irritabilidad, agresividad, disminución de la fatiga, disminución del sueño, excitación motora e inquietud. Entre las más comunes se encuentran la cocaína, la pasta base de cocaína, anfetaminas, cafeína y éxtasis (3,4-metilendioximetanfetamina) (Fuentes et al., 2016), nicotina y bazuco (Barraza y Lastre, 2018). Otras menos conocidas son el metilfenidato (MTF), el modafinilo y el dextrometorfano (Barreto et al., 2015).

Sustancias depresoras

Son aquellas que disminuyen o inhiben los mecanismos cerebrales relacionados con el estado de vigilia y pueden provocar distintos niveles de inactivación según la dosis suministrada. A su vez, pueden producir efectos desde relajación, sedación y somnolencia, hasta estados de hipnosis, anestesia y coma (Molina, 2013). Adicionalmente, tienden a afectar la memoria, disminuir la presión sanguínea, tener un efecto analgésico, ralentizar el pulso cardíaco y, en ocasiones, funcionan como anticonvulsivos; también pueden producir dificultad respiratoria e incluso la muerte (Iglesias et al., 2018). Algunas de estas sustancias son el alcohol, los sedantes hipnóticos e inhalantes-solventes volátiles (Robles et al., 2018).

Sustancias alucinógenas

Según el Departamento de Salud de Estados Unidos (2010, citado por Pulla, 2019), estas sustancias son aquellas que perturban el sistema nervioso central, debido a que alteran el funcionamiento neuroquímico. Una vez llegan al cerebro, afectan de manera específica la forma en la que se percibe la realidad y en ocasiones da lugar a trastornos sensoriales severos o alucinaciones. Entre ellas se encuentran la fenciclidina (PCP), la dietilamida de ácido lisérgico (LSD) (Robles et al., 2018), la marihuana, la heroína y el popper (Barraza y Lastre, 2018).

Sustancias psicotrópicas

Pueden ser naturales o sintéticas y hacen referencia a aquellas que alteran los procesos mentales. Aunque varias de estas suelen usarse para el tratamiento de algunos trastornos mentales —como es el caso de los ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, antimaníacos y neurolépticos—, por sus efectos en el estado de ánimo, la consciencia, la percepción y el rendimiento físico o mental, también tienen un elevado potencial de “abuso”, como podría pasar con la fenciclidina (PCP) y la dietilamida de ácido lisérgico (LSD) (alucinógenos), la morfina, la heroína y los sedantes hipnóticos (opiáceos), la cocaína, las anfetaminas y el éxtasis (estimulantes), y el alcohol, los sedantes hipnóticos y los inhalantes-solventes volátiles (depresoras), que impactan

en el funcionamiento del cerebro (Robles et al., 2018). Otras sustancias que se encuentran dentro de esta clase son el diazepam, el clonazepam, el lorazepam y el flunitrazepam, que a su vez forman parte de las categorías de ansiolíticos y tranquilizantes (Valdivia et al., 2015).

Sustancias sintéticas

Hacen referencia a aquellas sintetizadas químicamente y que incrementan la actividad de algunos neurotransmisores como la serotonina, la cual regula el estado de ánimo, el sueño, las emociones y el apetito, o la dopamina, encargada del sistema de gratificación cerebral; tienden a incrementar los efectos de las sustancias psicoactivas y de la norepinefrina, los cuales se consideran placenteros (Ministerio de Sanidad y Consumo de España, 2007, citado por Herrera, 2014). Un ejemplo de este tipo de sustancias es el éxtasis (MDMA) (Ministerio de Sanidad y Consumo de España, 2007, citado por Herrera, 2014).

Según su condición legal

En segundo lugar, Herrera (2014) afirma que se encuentran las sustancias legales e ilegales, pero tiene en cuenta que no por ser legales disminuyen su peligrosidad o daño para el organismo.

Sustancias legales

Son aquellas que se encuentran disponibles, cuya circulación está de acuerdo con lo establecido en la ley, debido a que hay alguna prescripción médica o a que está permitida su comercialización en una determinada jurisdicción. Entre estas se cuentan el alcohol, la nicotina (tabaco) y la cafeína (café) (Barreto et al., 2015).

Sustancias ilegales

Son las que están legalmente prohibidas, por lo que no están autorizados su producción, porte, transporte o comercialización; incluye sustancias que se usan sin su respectiva prescripción médica. Entre ellas están la marihuana, la cocaína, el éxtasis y la heroína (Barreto et al., 2015), entre otras.

En la legislación colombiana se encuentra el Decreto 1844 de 2018 (Colombia, Presidencia de la República, 2018), el cual establece que cuando la policía advierta sobre una posible infracción respecto a la prohibición de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas, por ejemplo: i) marihuana, cocaína o sustancias derivadas de la misma, heroína, derivados de la amapola o drogas sintéticas; ii)

cualquier sustancia natural o sintética figurada en las listas I y II de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y su Protocolo de modificación; iii) sustancias contenidas en las listas I, II, III y IV del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, o iv) cualquier otra sustancia legalmente prohibida, procederá como se dispone en el trámite del proceso verbal inmediato expuesto en el Artículo 222 de la Ley 1801 de 2016 (Colombia, Congreso de la República, 2016).

El procedimiento indica que, en los casos mencionados, la policía presentará descargos al presunto infractor y, si este es encontrado responsable por comportamientos contrarios a la convivencia, específicamente relacionado con el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se le impondrá una medida correctiva de la destrucción de la sustancia en todos los casos (Congreso de la República de Colombia, 2018).

Según el contexto cultural

En tercer lugar, Becoña (2002, citado por Herrera, 2014) afirma que se hace referencia a aquellas cuyo consumo está asociado a la cultura en el contexto histórico y social, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Sustancias sociales

Se adquieren y se consumen en contextos sociales, principalmente, teniendo en cuenta su condición de legalidad. Algunas de ellas son el tabaco y el alcohol (Herrera, 2014).

Sustancias industriales

Son medicamentos, ya sean analgésicos o tranquilizantes, es decir, son drogas cuyo consumo tiene un fin terapéutico (Herrera, 2014).

Sustancias folclóricas

Están ligadas a tradiciones culturales o costumbres. Incluyen la hoja de coca en forma de mate y chacchado, una práctica social que consiste en masticar coca (Herrera, 2014) y también algunos alucinógenos como plantas y hongos (Barreto et al., 2015).

En ciertas comunidades, el consumo de unas sustancias psicoactivas tiene un significado; por ejemplo, para las comunidades indígenas, existen plantas sagradas y su ingesta se justifica en la idea de tener un buen estado de salud y, sobre todo, en su implicación espiritual. Entre ellas se reconocen el vino, el yagé y la marihuana (Mendoza et al., 2015).

Conceptualización de adicción

Como se mencionó, las sustancias psicoactivas pueden causar en el organismo una adicción fisiológica y psicológica. Sin embargo, Tavera y Martínez (2012) hacen una distinción entre el uso y el abuso de sustancias: el abuso es el consumo continuo o recurrente por parte del individuo, pese a los problemas sociales, familiares y laborales e incluso el riesgo físico que le ocasiona, y el uso es el consumo ocasional de la sustancia. En conclusión, el uso y el abuso se definen según la cantidad, la frecuencia y las consecuencias de la ingesta.

Una vez dicho lo anterior, la adicción se entiende como la necesidad o dependencia que tiene el individuo de consumir la sustancia, ocasionada por el abuso, con una respuesta ansiosa para obtenerla. También es conocida como drogodependencia, denominada así por la OMS en 1964 y definida como una intoxicación prolongada y recurrente por el consumo de una droga ilegal o legal sin prescripción médica (Tavera y Martínez, 2012).

Asimismo, la adicción se asume como el deseo recurrente de consumir e incrementar la dosis de la sustancia requerida o como dependencia física, que puede verse en síndromes de abstinencia, los cuales conducen a un patrón de consumo desadaptativo que conlleva diversos síntomas (Tavera y Martínez, 2012).

En la última adaptación del DSM-IV para la elaboración del DSM-V, se dejó de utilizar el término adicción, aunque sigue siendo utilizado en muchos países como diagnóstico para determinar el consumo habitual y compulsivo, y se reemplazó por el término “trastorno por consumo de sustancias” para lograr describir la amplitud de síntomas, desde un estado leve a uno grave, que se puede presentar con un consumo desmedido de sustancias (American Psychiatric Association, 2014).

Dada la clasificación del DSM-V, a continuación se expondrá la diferencia entre tolerancia y abstinencia por consumo de sustancias.

Tolerancia

La tolerancia, en el DSM-V, se define como la necesidad de consumir cantidades cada vez mayores para conseguir una intoxicación o como un efecto reducido de manera notable tras el consumo repetitivo de la misma cantidad de la sustancia. Para Barbera (2018), la tolerancia surge cuando el cuerpo se adapta a una dosis específica; por tanto, debe ser incrementada para conseguir los efectos deseados. En consecuencia, en el momento en que se reduce la dosis de manera abrupta aparecen síntomas del síndrome de abstinencia.

Síndrome de abstinencia

Es una alteración clínicamente significativa de los procesos del sueño, de la alimentación, del bienestar físico y del desempeño laboral o social del individuo, que no pueden ser explicados por ninguna otra condición médica u otro trastorno mental. Los síntomas de la abstinencia más comunes son ansiedad, hipersomnia, insomnio, malestar gastrointestinal, depresión, temblores, mareos, tensión, falta de concentración, cefaleas, cambios en la presión sanguínea, sudoración, hormigueos y deseo intenso de consumir la sustancia (Lara et al., 2007).

Así mismo, el DSM-V define la abstinencia como todos aquellos síntomas aparentes luego del cese del consumo de alguna sustancia, identificados como activación del sistema nervioso autónomo. Además de los mencionados, incluye alucinaciones, ilusiones y convulsiones tónicoclónicas generalizadas.

A continuación se presentan los criterios establecidos para el diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias (American Psychiatric Association, 2014).

Tabla 1. Criterios diagnósticos por consumo de sustancias

A. Un modelo problemático de consumo de sustancias que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un lapso de doce meses:	
1	Se consume la sustancia con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto.
2	Existe un deseo persistente o esfuerzo fracasado de abandonar o controlar el consumo de sustancias.
3	Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir SPA, consumirlas o recuperarse de sus efectos.
4	Ansias, un poderoso deseo o la necesidad de consumir SPA.
5	Consumo recurrente de sustancias que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar.
6	Consumo continuado de sustancias, a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos de este.
7	El consumo de SPA provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio.
8	Consumo recurrente de SPA en situaciones en las que provoca un riesgo físico.
9	Se continúa con el consumo de SPA, a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por este.
10	Tolerancia, definida por alguno de los siguientes signos: Una necesidad de cantidades cada vez mayores de SPA para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de SPA.
11	Abstinencia, manifestada por alguno de los siguientes signos: Presencia del síndrome de abstinencia característico de sustancias (según los criterios A y B del conjunto de criterios de abstinencia). Se consume SPA para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia.

Fuente: elaboración propia con base en American Psychiatric Association (2014).

Para un trastorno por consumo de sustancias solo se tendrán en cuenta de dos a tres de los anteriores criterios y para un consumo moderado, de cuatro a cinco síntomas.

Por otro lado, Leshner (1997, citado por Marie et al., 2019) explica la adicción como una enfermedad cerebral que ocurre en el sistema dopaminérgico, que es el sistema encargado de los comportamientos adictivos. Cada vez que el individuo consume una sustancia el cerebro genera unos cambios fisiológicos inducidos por esta misma, estos cambios se conocen como homeostasis, definida por Antonio Damasio (como se citó en Grijalba y Echarte, 2015) como “el conjunto de reacciones coordinadas y automáticas que mantienen los estados internos del organismo.” (p. 82).

Con base en lo anterior, se comprende que la neuroadaptación ocurre cuando el organismo, con tal de mantener la homeostasis, compensa y mantiene los cambios fisiológicos producidos por las sustancias que generan adicción, esto puede llevar a la tolerancia de la misma, ya que antes de la ingesta de la sustancia, el cuerpo se encuentra en una homeostasis que va alterando y modificando cambios en los neurotransmisores que generan una dependencia neurológica para mantener dicho equilibrio (Marie et al., 2019).

En otras instancias, Enkema y otros autores (2020) describen como una característica central en el trastorno de uso de sustancias el craving, que es el deseo, antojo, anhelo o la necesidad de consumir la sustancia. Según los autores, este es uno de los factores explicativos del porqué la persona continúa o recae en el consumo, aun cuando desea abandonarlo o reducirlo.

En la investigación de Loftis y otros autores (2019) se encontró que la influencia que tiene el craving en la recaída en el consumo es la estimulación de la sustancia sobre el receptor dopaminérgico, el cual genera una mayor resistencia en la sinapsis de dopamina a las personas con antecedente de uso crónico, lo que incrementa el anhelo o deseo por consumir.

Factores asociados a la adicción

Las causas de las adicciones pueden ser varias. Caravaca y otros autores (2015) afirman que la adicción y la vulnerabilidad ante el consumo son multicausales, resultantes de un conjunto de factores sociales, culturales, políticos y económicos.

A continuación se expone una revisión sobre factores que pueden influir en la etiología de la adicción. Se aclara que, dado que esta enfermedad es padecida en su mayoría por adolescentes, la revisión de los artículos corresponde a esta población.

Caravaca y otros autores (2015) evaluaron factores socioculturales que pueden propiciar el consumo de sustancias, como la influencia de las personas alrededor del

consumidor, las relaciones familiares, la participación en actividades sociales y la espiritualidad. Encontraron que personas con familias de estructuras fuertes, con buena comunicación y confianza tienen menor probabilidad de consumir alguna sustancia que los que viven en familias con violencia, falta de comunicación y desapego. Respecto a la variable de participación en actividades sociales, los autores sostienen que el entretenimiento basado en fiestas aumenta esta probabilidad, pues hay mayor exposición a las sustancias y disponibilidad de tiempo para la ingesta. Finalmente, respecto a la espiritualidad, los autores afirman que esta variable puede ser tanto protectora como de riesgo, puesto que cuando no está bien estructurada y no hay unos valores definidos bajo una estructura espiritual, se aumenta la probabilidad de consumo de sustancias.

Otra variable que influye en el consumo de sustancias es la condición socioeconómica. Fantin y Barbenza (2007) hallaron que hay mayor tendencia de uso en niveles altos y bajos, mientras el medio es el que presenta menor ingesta. Además, respecto al alcohol, hay mayor consumo en contextos altos de estatus económico, pero se presenta mayor dependencia en los de bajo. Observaron que las sustancias más comunes son el alcohol, el tabaco y la marihuana, siendo esta última, en los niveles medio y bajo, mientras que en los niveles altos, el consumo de medicamentos es mayor.

También se debe tener en cuenta el factor genético en la etiología del trastorno; sin embargo, los genes, por sí mismos, no determinan una enfermedad. Ibáñez (2008) dice que ha existido consenso sobre un modelo multifactorial que explica que las adicciones se forman a partir de la vulnerabilidad genética de un 40 a un 60 % y el resto se debe a factores ambientales prenatales, perinatales y postnatales, experiencias psicosociales o mutaciones en el ADN que se producen debido a estos elementos.

Asimismo, hay varios rasgos personales que influyen en el consumo de sustancias. Guzmán y Pedrão (2008) hallaron que variables como el sexo, la edad y el riesgo de sufrir alguna enfermedad mental aumentan la probabilidad de consumo y, por ende, de adicción. Encontraron que hay mayor probabilidad en hombres que en mujeres, quizá debido a los roles culturales que ejerce la mujer, pues ha sido instruida desde la niñez a cuidarse para desempeñar su rol como madre. Reportan que, cuanto mayor edad, mayor probabilidad de sufrir adicción y esto se debe a la oportunidad de interacción con nuevas personas y la oportunidad de tener un empleo estable y, por eso, la capacidad para comprar sustancias. Respecto a la salud mental, los autores encontraron que hay mayor comorbilidad entre la adicción y la depresión o la ansiedad y que tal relación podría deberse a los métodos de afrontamiento que se tienen.

Tratamiento para el consumo de SPA

Un tratamiento de rehabilitación se define, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento de la persona y la reducción de la discapacidad con condiciones de salud como enfermedades, trastornos, lesiones o traumatismos. De acuerdo con esto, Hernández (2010) afirma que un tratamiento de rehabilitación para las drogas es un conjunto de intervenciones para tratar los problemas de salud y de otra índole causados por el abuso de drogas y para aumentar su desempeño tanto personal como social.

A continuación se presenta el resumen de una revisión realizada por Secades y Fernández (2001) en la que se describió la efectividad de algunos tratamientos para sustancias como la nicotina, el alcohol, la cocaína y la heroína. En relación con la nicotina, los autores hallaron que los programas psicológicos multicomponentes o las terapias conductuales multimodales tienen mayor efectividad. Esta terapia consta de tres fases: i) preparación, en la que se trata de incrementar la motivación y el compromiso del paciente para abandonar el consumo de cigarrillos; ii) abandono del tabaco, en la que se emplean algunas de las estrategias existentes para dejar de fumar, y iii) mantenimiento, en la que se trata de potenciar la abstinencia a largo plazo mediante la aplicación de estrategias para prevenir las recaídas. Esto se logra a través de tres tipos de intervenciones: técnicas aversivas, reducción gradual de nicotina, alquitrán y prevención de recaídas, y estrategias de autocontrol (Secades y Fernández, 2001).

Respecto a la adicción al alcohol, los tratamientos con mayor eficacia son la aproximación de reforzamiento comunitario (CRA), el entrenamiento en habilidades sociales, la prevención de recaídas (PR) y la terapia conductual familiar y de pareja.

El primero —y el que cuenta con mayores tasas de éxito— tiene cinco etapas: i) uso de disulfiram; ii) empleo de técnicas operantes para reforzar la adhesión; iii) el entrenamiento en habilidades de comunicación, incluso terapia conductual familiar y de pareja: se entrena a familiares y amigos para que promuevan actividades sociales reforzantes para el alcohólico; iv) el establecimiento de un “club social abstemio”, lo cual ofrece actividades sociales a los pacientes y acceso a actividades recreativas no relacionadas con el alcohol, y v) el entrenamiento para enfrentarse a las urgencias y deseos de beber, y para resistir la presión social (Secades y Fernández, 2001).

En cuanto a la cocaína, encontraron eficacia al utilizar el programa de reforzamiento comunitario más terapia de incentivo y la terapia cognitivo-conductual en la prevención de recaídas. El programa de reforzamiento comunitario integra un esquema de manejo de contingencias en el que los pacientes pueden ganar puntos y canjearlos por determinados reforzadores a cambio de mantenerse en el tratamiento sin consumir

cocaína. Los sujetos han de hacer cambios en el estilo de vida en cuatro áreas fundamentales: relaciones familiares, actividades de ocio, relaciones sociales y área vocacional. Acerca de la terapia cognitivo-conductual en habilidades de afrontamiento, hay elementos activos característicos: el análisis funcional del abuso de la droga, el entrenamiento en el reconocimiento y afrontamiento del craving, la solución de problemas, el afrontamiento de emergencias, las habilidades de afrontamiento, examen de los procesos cognitivos relacionados con el consumo, la identificación y el afrontamiento de las situaciones de riesgo y empleo de sesiones extras para el entrenamiento en habilidades (Secades y Fernández, 2001).

Para la heroína se proponen como tratamiento las terapias basadas en el manejo de reforzadores contingentes a la abstinencia, los programas cognitivo-conductuales y la exposición a pistas; dado que ya se han explicado las terapias en el manejo de reforzadores y las terapias cognitivo-conductuales, solo se ahondará en la exposición a pistas, intervención que consiste en la exposición repetida a señales de preingestión de la droga en ausencia de consumo (prevención de respuesta), con la consiguiente extinción de las respuestas condicionadas (Secades y Fernández, 2001).

Si bien existen tratamientos efectivos para la rehabilitación de la adicción a sustancias, hay algunos factores que los afectan. De acuerdo con Hernández (2010), la rehabilitación implica tratar la desintoxicación, adquirir consciencia de la enfermedad y motivación para el tratamiento y seguir el plan estructurado para cada persona. En su investigación evaluó las entidades disponibles para este proceso en Colombia y halló que pocas entidades tenían el recurso humano capacitado; además, se subestima el consumo de alcohol, debido a que está vinculado con patrones culturales, y la poca disponibilidad de acceso a estos programas dificulta la intervención de esta enfermedad.

Además de las fallas estructurales del tratamiento, también hay algunas variables que influyen en la intervención y rehabilitación de las personas con un consumo problemático.

Una de estas variables es el autoengaño. Según Martínez y otros autores (2016), este se define como el sesgo en el procesamiento de la información que permite la entrada o no de información. Los autores evaluaron a 79 personas en tratamiento y observaron que esta variable está relacionada significativamente con la abstinencia, las creencias y el deseo de la adicción. Los autores utilizaron un cuestionario y encontraron que hay tres factores que influyen directamente en la no rehabilitación: i) la proyección, que significa que los pacientes culpan a otros por las fallas en su abstinencia; ii) percepción distorsionada, para la que los pacientes solo tienen en cuenta lo que les interesa y descartan información que contradice su versión de realidad, y iii) el

autoengaño, que es la tendencia de los pacientes a distorsionar su pensamiento para crear una realidad convincente y justificar su permanencia en el consumo.

Otro factor influyente en la deserción del tratamiento es la solicitud de cambio conductual y la modificación ambiental. De acuerdo con Escobedo y otros autores (2007), quienes evaluaron los factores asociados a la deserción en un tratamiento breve para usuarios de cocaína, las expectativas de cambio inmediato al entrar al programa influyen en la deserción, pues, los consumidores que creen que el cambio será inmediato y al poco tiempo pierden el interés, al no percibir resultados, y abandonan el tratamiento.

La influencia de terceros también es una variable que puede influir en la adaptación de un programa de rehabilitación. López (2009) realizó un estudio acerca de la influencia que tienen los terceros en la decisión de entrar a un tratamiento de adicciones, y encontró que la influencia de terceros puede verse como una condición coercitiva, este puede facilitar también la decisión de entrar a un programa de rehabilitación y el mantenimiento en el mismo.

Marco ético

Factores contextuales

Desde la medicina, las drogas son empleadas para prevenir la enfermedad, producir cambios fisiológicos o psíquicos en el organismo y dar como resultado un estado placentero. Por eso, estas sustancias pueden llevar a la habituación y a la necesidad de ingerir dosis más altas y crear dependencia.

Las drogas se dividen en duras y blandas, según los efectos nocivos para la salud; en drogas legales e ilegales, de acuerdo con el país y, por último, en drogas antiguas y nuevas. En cuanto a la drogadicción, la raíz no es el producto, sino la persona, ya que manifiesta una fuerte necesidad por satisfacer de forma inmediata sus deseos y su ansiedad como individuo, hasta carecer de control interno, reducir su tolerancia a la frustración y tener constante evitación al dolor (Vidal, 2001).

El individuo atrapado en las drogas percibe un sinsentido de la vida misma y todo lo que le rodea, como la familia, los amigos, los compromisos, los proyectos, etc.; vive por y para el consumo de las drogas. La falta de puntos de referencia en una persona, desde el punto de vista de la sociedad moderna, se puede tomar como una crisis de valores, ideales y certezas, que en la actualidad se han derrumbado y eran considerados pilares para un horizonte de superación y cauce de servicio (Vidal, 2001).

Contexto social e institucional

Las estructuras sociales e institucionales forman parte de los factores que permiten el desenvolvimiento del fenómeno conocido como consumo de drogas; consumo, tráfico comercial, injusticia social, política, familia y religión son algunos de estos escenarios. Acerca de la política, en primer lugar, se ha encontrado que, en el terrorismo, el medio de pago es la droga para cometer actos terroristas y así estabilizar y adormecer la conciencia social; en segundo lugar está el interés económico en torno a las SPA por la gran cantidad de dinero que representa y así financiar macroempresas y, en tercer lugar, se usa la droga para movilizar la política; en Colombia es de conocimiento público que el narcotráfico es un medio para sobornar funcionarios fijar posiciones de poder y decisión política (Vidal, 2001).

Colombia es consciente y reconoce su interacción con las drogas, debido a que es un problema que se vive desde los años ochenta y se sigue presentando en la actualidad. Por esto, el cambio en la dinámica interna de producción, tráfico y consumo de drogas psicoactivas ha obligado a que expertos y autoridades admitan que es crucial promover los esfuerzos de control de demanda tanto como el de oferta. Es alarmante el creciente ascenso del consumo, puesto que la edad promedio de inicio es a los 11 años (Henao, 2012).

Una de las instituciones en las que se hace más énfasis, por la interdependencia, es la familia, en particular, el estilo de crianza, porque es uno de los factores más significativos que pueden conducir (o no) al abuso de sustancias psicoactivas. Kumpfer y Alvarado (2003, citado por Muñoz et al., 2012) sugieren que los lazos emocionales fuertes entre padre e hijo y con funciones eficaces, como el establecimiento de reglas, límites, etc., disminuyen la probabilidad de que en un futuro surjan conductas de consumo de SPA, prostitución o robo; por el contrario, si los lazos son débiles o ausentes y los padres consumen SPA, hay una probabilidad muy alta de que se promueva esta misma conducta.

En línea con lo anterior, en el plan de desarrollo elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (2018) se destaca que los estratos sociales vulnerables y los estratos con poder adquisitivo se ven asociados con la falta de cuidado de los padres, de límites y de confianza. En los sectores vulnerables también se observan falta de oportunidades y condiciones económicas precarias, variables que repercuten en las decisiones de NNA al no tener sus necesidades cubiertas ni acceso a derechos fundamentales como la educación, pues comienzan a trabajar de forma clandestina y terminan pensando en el consumo como una forma de escape y supervivencia.

Si bien el núcleo familiar y las formas de interacción entre los individuos es parte necesaria del marco explicativo del consumo de SPA, también es fundamental comprender el contexto histórico-social de Colombia, específicamente el tráfico de drogas y su incidencia en las relaciones personales, políticas y económicas.

Al respecto, Fernández (2002, citado por Muñoz et al., 2012) refiere que “la violencia estructural, las desigualdades sociales y desarraigo, generalmente relacionada con pobreza, desplazamiento forzado, desempleo, hacinamiento y migración, favorece el desarrollo de la cultura del narcotráfico, como un fenómeno histórico social, de gran magnitud” (p. 2). Por eso, el consumo de SPA tiene una connotación sociopolítica y económica global que se relaciona con la moral, la ética y el derecho, lo que dificulta el desarrollo de las estrategias de control (Ministerio de Protección Social, 2009, Muñoz et al., 2012).

Muñoz y otros autores (2012) afirman que:

Los estudios realizados en Colombia evidenciaron que la creciente expansión del consumo de SPA trascendió los límites de lo esperado en poblaciones vulnerables hasta convertirse en un mecanismo cotidiano de expresión de la adolescencia y la juventud, en todos los grupos sociales, en familias funcionalmente normales y en hogares o personas que lo utilizan para afrontar situaciones derivadas de la exclusión, la pérdida de valores, el desempleo y la violencia (p. 2).

Respecto a la religión, el consumo de drogas se ve severamente castigado por las implicaciones que tiene sobre la persona, pues se vincula a la pérdida de valores y pilares fundamentales como la familia y se considera al consumidor como una persona con una gran falta de Dios; se ve el producto como un medio de llenar el vacío que esto le genera, pero no solo el consumidor es cuestionado, sino también quien lo comercializa. El Papa Juan Pablo II (1991, citado por Vidal, 2001) ha definido a los traficantes de drogas como mercaderes de muertes. Una muerte que puede no ser física, sino más bien moral: de la libertad y la dignidad de la persona.

Debate ético sobre el consumo de SPA y tratamiento

El consumo de drogas es muy cuestionado debido a los efectos nocivos no solo para la persona, sino para sus allegados y para la sociedad. No obstante, puesto que el ser humano es un ser libre y autónomo, surge la pregunta: ¿hasta dónde le asiste el derecho a consumir drogas, si la realización de los actos que desee debe tener el límite de no afectar su propio ser ni el de los demás? La reflexión ética considera el valor, la dignidad y la grandeza de ese ser único y libre que es la persona como

bienes moralmente protegidos; de ahí que el orden jurídico positivo intente tomar medidas de prevención o represión, mediante intervenciones vinculadas al desarrollo de los valores del individuo para afrontar con más eficacia los problemas asociados al consumo de drogas (Sofos, 2012).

Esta reflexión se ha debatido durante un tiempo considerable, puesto que en Colombia el consumo está penalizado. Aquellos que apoyan su despenalización afirman que esta medida de control atenta contra la autonomía, ya que el Estado estaría interfiriendo con los límites, las decisiones y las libertades personales, con un corte conservador; incluso hacen un paralelo con una posible penalización de la comunidad LGBTI y critica la legislación moralista que toma como excusa casos severos de drogodependencia para criminalizar a todo aquel que haga uso de las SPA, así sea ocasional, y así ejercer sus modelos de ciudadanos virtuosos, con un estilo de vida impuesto (Uprimny, 1997).

Esto se debe, en resumen, a que surgen diferentes perspectivas frente a los derechos y los deberes éticos. La primera se relaciona con la responsabilidad ética de los profesionales, la familia y la sociedad hacia la persona que consume SPA y su comportamiento. La segunda es la responsabilidad ética de la sociedad con respecto a la comercialización (se incluye producción e industrialización) de drogas psicoactivas y al derecho de la ciudadanía a escoger su propio medio de distracción. Lo que surge de este debate es la polarización y la reducción de solución y control a una única perspectiva (França, 2013).

Intervenir en una situación como el consumo de SPA requiere un análisis exhaustivo del empleo de técnicas de prevención y promoción que no sean invasivas y atiendan las necesidades de las personas. En un informe epidemiológico se revelan algunos problemas éticos y legales a la hora de investigar el abuso de drogas, entre ellos, los límites del consentimiento que abarca la confidencialidad, la protección de la vida privada y la protección contra el riesgo de procesamiento judicial. Al recolectar información personal se pueden encontrar actos ilegales y dar la posibilidad de que un tercero tenga acceso a información delicada sobre el abuso de drogas y otras estigmatizaciones de los participantes en el estudio y la use en perjuicio de ellos, exponiéndolos a discriminación o a procesamiento penal. Puesto que algunas investigaciones no protegen la privacidad y la confidencialidad de poblaciones vulnerables, se deben examinar y revisar continuamente el efecto y el grado de compromiso que estas estrategias de evaluación, intervención, prevención y promoción pueden tener sobre la población (Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, 2004).

Consumo de SPA y principios de la bioética

El tratamiento y el problema no están exentos del análisis ético y de múltiples conflictos. Para entenderlo, se debe definir la bioética, es decir, la ciencia que examina las conductas de la sociedad y los profesionales de la salud en relación con el respeto por la vida (Padovani y Clemente, 2010).

Este análisis atiende cuatro principios básicos:

- i) Beneficencia u obligación de obrar en función del mayor beneficio para el paciente; el profesional de la salud debe asistir a las personas que lo necesiten y algunas acciones derivadas de este principio es brindar un servicio de calidad y atención respetuosa (Ferro et al., 2009).
- ii) No maleficencia o no hacer daño al paciente. Las obligaciones derivadas incluyen respetar la integridad física y psicológica de la vida humana, al ponderar riesgo/beneficio ante la toma de decisiones, específicamente en el área de la salud (Ferro et al., 2009).
- iii) Autonomía o capacidad de autodeterminarse para escoger y conducir la vida propia en concordancia con sus intereses, deseos y creencias. Da origen a la norma moral de no coartar la libertad de la persona y remite a la obligación de diligenciar el consentimiento informado ante la toma de decisiones en el campo de la salud (Ferro et al., 2009).
- iv) Justicia o dar a cada uno lo que necesita, como hacer una adecuada distribución de los recursos, proveer a cada paciente de una apropiada atención y disponer de los elementos indispensables para garantizar una óptima atención de salud (Ferro et al., 2009).

Según Darras (2004), hay dos puntos de controversia entre la salud pública y los principios de la bioética, pues la salud pública transforma el problema de un individuo en un cuerpo social que debe regirse por los lineamientos del bien común, pero deja de lado la individualidad y las opiniones propias. Por ejemplo, el principio de no maleficencia que sustenta la prohibición de fumar en espacios públicos, para no comprometer la salud de los no fumadores, se opone al principio de autonomía, que lleva a tomar en cuenta la elección de los fumadores para dar curso a una necesidad propia.

Otro conflicto ligado al tratamiento de la drogodependencia y a la ética es el diagnóstico, ya que entra en conflicto el principio de no maleficencia y beneficencia. Morera (2000) afirma que diagnosticar con drogodependencia no dependiente “daña” al sujeto que recibe la etiqueta, no solo por las consecuencias personales, familiares y sociales, sino porque en función de dicho diagnóstico se pueden emplear medidas

terapéuticas innecesarias o que supongan riesgos físicos o psíquicos. Por el contrario, el no diagnóstico del trastorno puede privar al sujeto de la ayuda y los medios necesarios para su tratamiento.

Marco legal

A continuación se expone, en forma de tabla, la normatividad referente al consumo de SPA, incluidas algunas de las políticas de seguridad de espacio público, políticas de prevención y control de la problemática, medidas de intervención y acciones penales relativas a la persecución de un delito delimitado por el órgano legislador.

Tabla 2. Normatividad relacionada con SPA

Resolución 089 de 2019	Política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
Constitución Política	Art. 49. El Estado tiene el deber de garantizar la atención de la salud, junto con los servicios de promoción, protección y recuperación.
Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia	Art. 20, num. 3. “Los niños, las niñas y los adolescentes deben ser protegidos del consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes o bebidas alcohólicas, y de las actividades asociadas a estos productos”.
Ley 1616 de 2013	Art. 8. Acciones de promoción: se centra en el impacto que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social en la intervención eficiente de variables asociadas a la salud mental, como la inclusión social, la discriminación, la prevención de las modalidades de violencia en diversos escenarios, como la prevención del suicidio y del consumo de SPA.
Ley 1566 de 2012	Resalta la importancia de la atención integral por parte del Estado al consumo, al abuso y a la adicción de SPA, como asuntos de carácter público y bienestar para la comunidad. Las personas que presenten algún tipo de trastorno a causa del consumo de SPA tienen el derecho de ser atendidas por las entidades correspondientes. Art. 29. Instituye el Consejo Nacional de Salud Mental, como responsable del seguimiento y de la evaluación con la finalidad de decrementar el consumo de SPA y sus efectos negativos para la sociedad.
Ley 1751 de 2015	Art. 5. El Estado se encuentra en la obligación de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Para ello deberá formular y adoptar políticas de salud para garantizar su efectividad y su acceso a todo el sistema, para proyectar acciones transversales para su prevención y tratamiento.
Ley 30 de 1986	Capítulo I: Campañas de prevención y programas educativos Art. 2, lit. j): define la dosis para uso personal como “la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo”. Declarado exequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-221 de 1994). La dosis personal de marihuana no puede exceder los 20 gramos, la marihuana hachís no debe

Perspectiva psicojurídica de la adicción a sustancias psicoactivas

exceder los 5 gramos, la cocaína no debe exceder 1 gramo y la metacualona no debe exceder 2 gramos. La dosis personal no es para distribución o venta, sin importar su cantidad.

Art. 3. “La fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales éstos se produzcan se limitará a los fines médicos y científicos, conforme la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud”.

Capítulo VIII: Tratamiento y rehabilitación

Art. 84. “El objetivo principal de las medidas sanitarias y sociales para el tratamiento y rehabilitación del farmacodependiente consistirá en procurar que el individuo se reincorpore como persona útil a la comunidad”.

Art. 85. El Ministerio de Salud “incluirá dentro de sus programas la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de farmacodependientes”.

Capítulo V: De los delitos

Art. 32. Aquel que sin permiso de autoridad cultive, conserve o financie cualquier planta o droga que produzca dependencia o produzca más de un kilogramo de semillas de dichas plantas incurrirá en prisión de cuatro a doce años.

Art. 36. El profesional o practicante de medicina, enfermería, farmacia u otra profesión que, en su ejercicio ilegalmente formule, suministre alguna droga que produzca dependencia incurrirá en prisión de tres a ocho años.

Art. 37. Quien suministre o facilite alguna droga que cause dependencia a menores de 16 años se incurrirá en prisión de seis a doce años.

Capítulo VI: De las contravenciones

Art. 51. Aquel que lleve consigo o conserve para su propio uso drogas que causen dependencia en cantidad de una dosis de uso personal incurrirá en sanciones como prisión por treinta días, si es por primera vez y, por segunda vez, de un mes a un año. En ambos eventos se impondrá una multa equivalente a un salario mínimo: en caso de ir a prisión por un año, la multa será mensual. Por último, el usuario o consumidor que se encuentre bajo efectos de SPA, así sea sorprendido por primera vez, será internado para su recuperación y no se aplicará multa ni arresto.

Políticas para regular los espacios públicos y el consumo de SPA

Art. 7. Se deben identificar con señales los espacios donde sí se puede fumar.

Art. 8. Se debe advertir de las implicaciones que tiene el consumo de SPA.

Art. 9. Se prohíbe el consumo de alcohol, drogas no prescritas, posesión, distribución, venta, incitación al consumo y la presencia del trabajador con efectos directos o signos de consumo de sustancias alucinógenas durante el horario de prestación del servicio, bajo el riesgo de hacerse acreedor a las investigaciones disciplinarias correspondientes.

Art. 10. Prohíbe el consumo y el porte de SPA que afecten el comportamiento de forma inaceptable dentro del espacio.

Art. 48. Estipula que es una falta grave consumir SPA en el trabajo y en sitios públicos, así como el asistir al trabajo bajo sus efectos, lo cual es una conducta sancionable.

Resolución 1081
de 2014

Circular 38 de 2010
del Ministerio de
Protección Social

Se deben cumplir los aspectos técnicos y jurídicos respecto a los espacios libres de humo y SPA en empresas.

Fuente: elaboración propia.

Estadísticas

En el 2017 el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) preparó un informe en el que resalta que cerca de la mitad de la población utiliza con alguna frecuencia el alcohol y no menos de la quinta parte se encuentra en situación de riesgo o con problemas asociados a su abuso. También sostiene que el consumo de alcohol tiene relación con la etapa escolar, pese a la prohibición; los datos arrojaron que un 65,71 % de los escolares encuestados ha consumido alcohol en el último año, un 20 % de los estudiantes entre los 11 y 12 años refieren haber consumido alcohol en el último mes y la tasa más alta de consumo es entre los 16 y 18 años, con un 58,16 % (Observatorio de Drogas de Colombia, 2017).

Asimismo, se reportó que en 2013 el uso perjudicial de bebidas alcohólicas tuvo un mayor impacto en jóvenes de 18 a 24 años y de 25 a 34 años, aunque también se registró que la edad promedio de inicio fue de 17 años (Observatorio de Drogas de Colombia, 2014).

Tabla 3. Estadísticas de consumo por edad para 2013

Categoría	Edad
Mayor consumo	18-35
Inicio	17

Fuente: elaboración propia con base en Observatorio de Drogas de Colombia (2014).

Respecto a los datos sociodemográficos, el Observatorio de Drogas de Colombia (2014) halló que, en 2013, el porcentaje de personas con un consumo riesgoso o perjudicial de alcohol era mayor en estrato 1 (743.072), estrato 2 (1.022.289) y estrato 3 (585.395).

Tabla 4. Estadísticas de consumo por estrato para 2013

Estrato	Cantidad
1	743.072
2	1.022.289
3	585.395

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia. (2014). *Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 2013* [Archivo PDF]. https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consumo_UNODC.pdf, p. 57.

Por otro lado, el departamento con mayor presencia de usuarios “problemáticos” de alcohol en relación con la población total es Chocó (20,5 %) y los departamentos con porcentajes inferiores a 10 % fueron Huila, Tolima, Risaralda, Nariño, Quindío

y Cauca. Sobre las sustancias psicoactivas ilegales, un 13 % de las personas reportó haber consumido alguna sustancia ilícita al menos una vez en la vida, con una ingesta tres veces superior en hombres que en mujeres (Observatorio de Drogas de Colombia, 2014).

Tabla 5. Estadísticas de consumo por estrato para 2013

Mayor consumo	Menor consumo
Chocó	Huila
	.....
	Tolima
	.....
	Risaralda
	.....
	Nariño
	.....
	Quindío
	.....
	Cauca
	.....

Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia. (2014). *Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 2013* [Archivo PDF].

https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consumo_UNODC.pdf, p. 59.

A lo largo de los años se ha registrado un incremento significativo y alarmante sobre el consumo de SPA, en gran medida por la diversificación y el fácil acceso. Al respecto, el Observatorio de Drogas de Colombia (2015) refiere:

El aumento significativo en el uso de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína), tanto en la prevalencia de uso alguna vez en la vida de 8,8 % en el 2008 a 12,2 % en el 2013, como en uso durante el último año de 2,6 % a 3,6 %. Se estima que alrededor de tres millones de personas han consumido drogas ilícitas alguna vez en su vida (p. 21).

De igual forma, en 2017 el ODC halló:

Al igual que en el resto del mundo, en Colombia la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo, seguida por la cocaína, el bazuco y el éxtasis. Del total de consumidores de drogas ilícitas en el último año, el 87 % consume marihuana (p. 31).

La segunda sustancia de mayor consumo es la cocaína. Un 69,1 % de quienes la han usado son ya dependientes, consumidores habituales o adictos. Aunque las diferencias socioeconómicas no presentan brechas significativas, se registra una mayor frecuencia de consumo de cocaína, éxtasis y bazuco en estratos 1, 2 y 3 (Observatorio de Drogas de Colombia, 2017).

Conclusiones

En esta revisión se encontraron dos aspectos principales: el primero, la falta de investigaciones sobre adicciones en Colombia; si bien existen estudios, no abarcan la totalidad de la población, lo cual dificulta precisar el porcentaje de adicción del país, pues en su mayoría, las investigaciones realizadas usan muestras determinadas por características específicas. Esto se evidencia en la limitación (en términos de tamaño de la muestra) de los informes efectuados por el Observatorio de Drogas de Colombia. Por tanto, las estadísticas pueden no ser tomadas como el porcentaje total de la población debido a los costos que esto también podría incluir.

Por otro lado, no se encontraron estudios recientes, por lo que se tuvieron en cuenta estadísticas de los años 2013, 2014, 2015 y 2017, lo que indica que no se posee información actualizada.

El segundo aspecto es el contraste que hay entre el marco político (que sustenta las políticas de prevención y control del consumo de SPA) y la aplicabilidad de esta normatividad al contexto colombiano. Hay un avance significativo en lo que respecta a la atención integral y la prevención desde diferentes escenarios, pero sigue existiendo una brecha en esta práctica de prevención, por factores culturales y económicos. En el tratamiento, la cultura es un factor externo que influye en la rehabilitación; por ejemplo, en Colombia, una SPA que goza de gran facilidad de acceso y aceptación es el alcohol, lo que representa un obstáculo contextual para la prevención y la rehabilitación. En el aspecto económico se observa escasez de los recursos destinados: si bien la Ley 30 de 1986 establece las campañas de prevención y los programas educativos para reducción del consumo, ignora el hecho de que no todas las instituciones académicas cuentan con los fondos necesarios para implementarlos.

Por otra parte, aunque se encontraron varios tratamientos que han demostrado efectividad en la intervención de la adicción a SPA, se considera importante profundizar en la investigación sobre estos con población colombiana.

Referencias

- American Psychiatric Association. (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5*. Masson.
- Barbera, R. (2018). *Síndrome de abstinencia por consumo de heroína y sus efectos físicos y psicológicos en el ser humano* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Babahoyo]. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/5058>
- Barraza, D. y Lastre, G. (2018). Conocimientos y prácticas de estudiantes sobre sustancias psicoactivas en una Universidad de Barranquilla. *Investigaciones Andina*, 20 (36), 55-70. <https://revia.areandina.edu.co/index.php/IA/article/view/969>

- Barreto, P., Pérez, M., Roa, M., López, A. y Rubiano, G. (2015). Consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, factores de protección y de riesgo: estado actual. *Revista de investigación en salud. Universidad de Boyacá*, 2(1), 31-50. <http://200.21.15.145/index.php/rs/article/view/128/124>
- Caravaca, J., Noh, S., Hamilton, H., Brands, B., Gastaldo, D. y Wright, M. (2015). Factores socioculturales y consumo de drogas entre estudiantes universitarios costarricenses. *Texto y contexto-Enfermagem* 24, 145-153. doi: 10.1590/0104-07072015001170014
- Chávez, J., Menjivar, J., Sánchez, A., Murcia, M. y Pineda, M. (2016). Consumo de estimulantes por estudiantes universitarios ¿se usa o se abusa? *Revista científica de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud*, 1(1), 10-17. <https://camjol.info/index.php/RCEUCS/article/view/2886>
- Colombia, Congreso de la República. (31 de enero de 1986). *Ley 30 de 1986*, “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (8 de noviembre de 2006). *Ley 1098 de 2006*, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
- Colombia, Congreso de la República. (31 de julio de 2012). *Ley 1566 de 2012*, “Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional ‘entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas’”.
- Colombia, Congreso de la República. (21 de enero de 2013). *Ley 1616 de 2013*, “Por medio de la cual se expide la Ley de salud mental y se dictan otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (16 de febrero de 2015). *Ley 1751 de 2015*, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
- Colombia, Congreso de la República. (29 de julio de 2016). *Ley 1801 de 2016*, “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
- Colombia, Corte Constitucional, Sala de Casación. (1994, mayo 5). *Sentencia C- 221 de 1994*.
- Colombia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (28 de julio de 2014). *Resolución 1081 de 2014*, “Por la cual se establece la política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.
- Colombia, Presidencia de la República. (1 de octubre de 2018). *Decreto 1844 de 2018*, “Por el cual se adiciona el Capítulo 9 del Título 8 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015”.
- Darras, C. (2004). Bioética y salud pública: al cruce de dos caminos. *Interfaces: acta bioethica* (2), 227-233. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v10n2/art10.pdf>
- Enkema, M., Hallgren, K. y Larimer, M. (2020). Craving is Impermanent and it Matters: Investigating Craving and Cannabis Use Among Young Adults with Problematic Use Interested in Reducing Use. *Drug and Alcohol Dependence* 210, 2-6. doi: <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.107957>
- Escobedo, J., Vite, A. y Oropeza, R. (2007). Factores asociados a la deserción en un tratamiento breve para usuarios de cocaína. *En-claves del pensamiento*, 1(2), 117-131. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-879X2007000200007

- Fantin, M. y Barbenza, C. (2007). Nivel socioeconómico y consumo de sustancias en una muestra de adolescentes escolarizados de San Luis, Argentina. *Fundamentos en humanidades* (15), 133-145. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2484051>
- Ferro, M., Molina, L. y Rodríguez, W. (2009). La bioética y sus principios, *Acta Odontológica Venezolana*, 47 (2), 1-6. <https://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/2/art-26/#>
- França, O. (2013). Ética, asistencial y políticas respecto a la adicción, *Cultura y droga*, 18 (20), 57-78. [http://vip.ucaldas.edu.co/culturaydroga/downloads/Culturaydroga18\(20\)_4.pdf](http://vip.ucaldas.edu.co/culturaydroga/downloads/Culturaydroga18(20)_4.pdf)
- Fuentes, R., Medina, P. y Nazar, C. (2016). Consideraciones perioperatorias en pacientes consumidores de drogas ilícitas de uso frecuente. *Revista Chilena de Cirugía*, 68 (5), 384-389. doi: <https://doi.org/10.1016/j.rchic.2016.03.008>
- Grijalba, M. y Echarte, L. (2015). Homeostasis y representaciones intelectuales: una aproximación a la conducta moral desde la teoría de la emoción de Antonio Damasio. *Persona y bioética*, 19 (1), 80-98. doi: 10.5294/pebi.2015.19.1.7
- Guzmán, F. y Pedrão, L. (2008). Personal and Interpersonal Risk Factors in the Consumption of Illicit Drugs by Marginal Adolescents and Young People from Juvenile Gangs. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 16 (3), 368-374. doi: 10.1590/S0104-11692008000300006
- Henao, S. (2012). Representaciones sociales del consumo de “drogas” en un contexto universitario, Medellín, Colombia, 2000, *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 30 (1), 26-37.
- Hernández, D. (2010). Tratamiento de adicciones en Colombia. *Revista Colombiana de Psiquiatría* 39, 153-170. <http://www.scielo.org.co/pdf/rcpv/v39s1/v39s1a11.pdf>
- Herrera, L. (2014). *Relación entre consumo de sustancias psicoactivas y el rendimiento académico, en estudiantes de la Universidad del Tolima* [Tesis de Maestría, Universidad del Tolima]. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/1480>
- Ibáñez, A. (2008). Genética de las adicciones, *Adicciones*, 20 (2), 103-110. doi: 10.20882/adicciones.273
- Iglesias, O., Escalona, A., Escalona, M. y Álvarez, A. (2018). Efectos del uso de las drogas y los peligros que su consumo implica jóvenes y estudiantes, *Revista Médica Multimed*, 22 (6), 1280-1298. <http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/1038/1427>
- Lara, G., Ramírez, A., Sansores, R., Espinosa, A. y Regalado, J. (2007). Indicadores de síntomas de abstinencia en un grupo de fumadores mexicanos. *Salud Pública de México* 49 (2), 257-262.
- Lastre, G., Gaviria, G. y Arrieta, N. (2013). Conocimiento sobre el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enfermería. *Ciencia e innovación en salud*, 1 (1), 46-51. <http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/innovacionsalud/article/view/84>
- Loftis, J., Lasarev, M., Shi, X., Lapidus, J., Janowsky, A., Hoffman, W. y Huckans, H. (2019). Trace Amine-Associated Receptor Gene Polymorphism Increases Drug Craving in Individuals with Methamphetamine Dependence. *Plos One*, 14 (10), 2-15. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220270>

- López, C. (2009). La decisión de entrar a un tratamiento de adicciones: motivación propia e influencia de terceros. *Terapia psicológica*, 27(1), 119-127. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/terpsicol/v27n1/art12.pdf>
- Marie, N., Canestrelli, C. y Noble, F. (2019). Role of Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Parameters in Neuroadaptations Induced by Drugs of Abuse, with a Focus on Opioids and Psychostimulants. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 106(10), 217-226. doi: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.06.006>
- Martínez, J., Vilar, R., Becoña, E. y Verdejo, A. (2016). Self-deception as a Mechanism for the Maintenance of Drug Addiction. *Psicothema*, 28(1), 13-19. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26820418>
- Mendoza, A., Reyes, J., Gutiérrez, G. y Posada, I. (2015). Significados del consumo de sustancias psicoactivas en indígenas estudiantes de una universidad de Medellín, Colombia. *Universitas Psychologica*, 14(3), 975-983. doi: 10.11144/Javeriana.upsy14-3.mpsc
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). *ABECÉ de la prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas* [Archivo PDF]. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/Abece-salud-mental-psicoactivas-octubre-2016-minsalud.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (16 de enero de 2019). *Resolución 089 de 2019*, “Por la cual se adopta la Política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas”.
- Molina, R. (2013). Consumo de tabaco, alcohol y drogas en la adolescencia. *Pediatría integral*, 17(3), 205-216. <https://www.adolescenciasema.org/usuario/documentos/4-consumo-drogas.pdf>
- Morera, B. (2000). Aspectos bioéticos de la asistencia al drogodependiente. *Adicciones*, 12(4), 515-526. <http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/662>
- Muñoz, M., Gallego, C., Wartski, C. y Álvarez, L. (2012). Familia y consumo de sustancias psicoactivas: una búsqueda de lo ausente. *Index de enfermería*, 21(3), 136-140.
- Observatorio de Drogas de Colombia. (2014). *Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 2013* [Archivo PDF]. https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consumo_UNODC.pdf
- Observatorio de Drogas de Colombia. (2015). *Reporte de drogas de Colombia* [Archivo PDF]. http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/OD0100311215_reporte_de_drogas_de_colombia.pdf
- Observatorio de Drogas de Colombia. (2017). *Reporte de drogas de Colombia* [Archivo PDF]. http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/reportes_drogas_colombia_2017.pdf
- Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. (2004). *Módulo 7 del manual. Problemas éticos de la epidemiología del abuso de drogas: cuestiones, principios y directrices* [Archivo PDF]. https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13919:rehabilitation&Itemid=41651&lang=es

- Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. (2017). *Informe mundial sobre las drogas 2017* [Archivo PDF]. https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Spanish.pdf
- Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. (2018). *Caracterización del consumo de drogas en el Distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta* [Archivo PDF]. <http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/locales/Caracterizacion-consumo-drogas-Sta-Marta.pdf>
- Padovani, A. y Clemente, M. (2010). ¿Qué es la bioética? *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 14(1), 370-374. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942010000100036
- Peniche, M. (2019). Consumo de drogas ilegales en jóvenes de Mérida. *Antrópica: revista de ciencias sociales y humanidades*, 5(9), 57-75.
- Pulla, J. (2019). Consumo de sustancias psicodélicas en adolescentes de bachillerato general unificado. *Revista de Educación* (16), 211-230. http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/2951/3315
- Robles, M., Vergara, M., Touriz, M. y Cedeño, M. (2018). Consumo de sustancias psicotrópicas en jóvenes de medicina. *Espirales: revista multidisciplinaria de investigación*, 2(23), 123-132. <http://revistaespirales.com/index.php/es/article/view/400/337>
- Secades, R. y Fernández, J. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para la drogadicción: nicotina, alcohol, cocaína y heroína. *Psicothema*, 13(3), 365-380. <http://www.psicothema.com/pdf/460.pdf>
- Sofos. (10 de marzo de 2012). *Reflexiones en torno al problema de la droga en el contexto de ordenamiento social e institucional colombiano. ¿Qué se entiende por prevención?* Seminario Problemas colombianos contemporáneos. Ciclo de conferencias 2012, Tunja, Colombia.
- Tavera, S. y Martínez, M. (2012). *Prevención de las adicciones y promoción de conductas saludables para una nueva vida. Guía para el promotor de "Nueva Vida"* [Archivo PDF]. http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/nv1e_prevenccion.pdf
- Uprimny, R. (1997). Ética, droga y derecho: Una contribución al debate sobre la despenalización. *Revista Colombiana de Psicología* (4), 143-150. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/15931/16750>
- Vidal, M. (2001). Drogadicción y ética. *Bioética y ciencias de la salud*, 5(1), 1-16. https://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion_temas/adicciones/Drogadiccion_y_etica.pdf
- Valdivia, L., Casique, L. y Muñoz, T. (2015). Consumo de drogas psicotrópicas y capacidad de autocuidado en mujeres de Tepic, Nayarit. *Enfermería global*, 14(3), 65-75.

CONCLUSIONES GENERALES

Los autores

El presente texto muestra algunos escenarios de la psicología jurídica que se han desarrollado en los últimos años y lo hace de manera estructurada, al asumir la relación entre psicología y derecho como fuente epistemológica de su paradigma disciplinar, esto es, la explicación, la predicción y el control de las conductas que tienen connotaciones jurídicas. Su enfoque por campos aplicados contribuye a orientar la toma de decisiones de los operadores de justicia.

La psicología así entendida posibilita la instrumentalización del conocimiento sobre la conducta por parte de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley o de administrarla, cuya finalidad es atender, de manera efectiva y en condiciones de bienestar psicológico, los intereses de los usuarios que buscan solucionar sus conflictos. Además, ayuda a mejorar los procesos misionales de tales entidades, de maneras que se garantice la gestión judicial efectiva y oportuna y se incremente la competencia de los servidores públicos en cuanto a unificar, consolidar y fortalecer los sistemas de gestión.

Esta obra brinda información relevante sobre el análisis y la comprensión de los factores psicológicos presentes en las dinámicas psicojurídicas, su praxis e interpretación de las causas y motivaciones de la conducta fuera de la ley, así como algunos estudios que contribuirán a ampliar el panorama regional de la psicología jurídica.

Este libro surge como respuesta a la necesidad de información sobre temas relacionados con la psicología jurídica y sus respectivas áreas, debido a que en Colombia son limitadas las publicaciones en las que se trate este contenido; además, con dificultad se encuentra un consenso tanto epistemológico como ontológico entre la comunidad científica propia de esta ciencia. Por lo tanto, este libro ofrece una

visión objetiva más amplia sobre esta rama de la psicología, que permite observar las diversas perspectivas y herramientas para la praxis en psicología jurídica y brinda un gran aporte a la formación tanto de estudiantes de pregrado como de posgrado y de todo aquel que se encuentre interesado en profundizar y expandir sus conocimientos sobre estas áreas. A su vez, promueve la importancia de ampliar las investigaciones en este enfoque por subcampos aplicados que converge con diferentes disciplinas, lo que también es relevante para la discusión interdisciplinar y multidisciplinar.

En el marco de la psicología forense, la autopsia psicológica es concebida como un método válido para un ejercicio de investigación retrospectiva para identificar las circunstancias que rodearon la muerte de una persona, cuando esta es dudosa o cuando sus familiares quieren comprender mejor los elementos que la llevaron a tomar una presunta decisión de quitarse la vida. En esta técnica de la psicología forense, el énfasis está en el establecimiento de aspectos de la personalidad, del comportamiento y de las motivaciones que pudieron rodear la vida de la persona y los períodos más cercanos al suceso vital. Entre los desarrollos metodológicos de mayor aceptación se encuentra el modelo MAPI y el método de la estrella, cuya utilidad ha sido ampliamente documentada en escenarios nacionales e internacionales. La aplicabilidad de la autopsia psicológica en el contexto colombiano presenta una regulación específica, pero aun así, su desarrollo ha estado homogenizado por los procedimientos definidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La psicología del testimonio posee diversas alternativas para ser empleadas al servicio de la administración de justicia. No obstante, aún existe desconocimiento por parte de profesionales en psicología y del derecho acerca de técnicas, protocolos e instrumentos que pueden utilizarse para ello, lo cual mantiene la implementación tradicional del ACBC. EL ACBC, como técnica para el análisis del comportamiento verbal, solo permite evaluar una parte de la complejidad del engaño (el lenguaje verbal), además de examinar solo el contenido de un relato (semántica), sin incluir la valoración de otros aspectos pragmáticos y sintácticos que podrían ser evaluados a partir del análisis del estilo lingüístico. Adicionalmente, el engaño es una conducta compleja y multifactorial, por lo cual se sugiere implementar diferentes perspectivas de forma paralela y complementaria para detectarlo y así aumentar la solidez de la credibilidad de un relato. Así mismo, se requiere incrementar la investigación en este tópico en países latinoamericanos, con el propósito de tener opciones validadas a las realidades sociales y jurídicas de estos contextos, como las situaciones relativas a la familia y los aportes al Sistema de protección y responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes.

Parte importante de formación en la psicología jurídica es el área de la psicología victimal, cuyos objetivos incluyen comprender el daño psicológico (lesiones o secuelas psicológicas) que emergen a consecuencia de la interacción con el agresor y el hecho victimizante. Es necesario comprender las consecuencias que puede traer un fenómeno como la negligencia como expresión de la violencia intrafamiliar que, de acuerdo con la revisión, pueden ser sociales o de salud física (que podrían ser letales) y psicológicas (cambios en el comportamiento y estado del ánimo, afectación en el desarrollo cognitivo, trastornos). Ello exige implementar procesos en pro de caracterizar y delimitar las expresiones de la negligencia y sus consecuencias, diseñar instrumentos que permitan a los profesionales la identificación de las expresiones de negligencia que suelen pasar desapercibidas y las consecuencias victimológicas, conocer las rutas de atención específicas para este fenómeno y, desde luego, incentivar la investigación para comprender y mitigar este fenómeno.

La psicología jurídica colombiana es un área en pleno desarrollo en la última década, que se ve reflejado en la creación de nuevos programas universitarios de posgrado y en la realización de eventos académicos en los que se invita a psicólogos reconocidos del campo, a estudiantes, profesores y profesionales de las áreas sociales y a organismos relacionados con la seguridad ciudadana y el sector justicia. Por ello, es hecho significativo que la Especialización en Psicología Jurídica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia haya concretado una producción editorial. Es deseable que esta iniciativa se mantenga y que cada año las publicaciones venideras contengan más datos científicos, mayor evidencia empírica e invitados relevantes que aporten a este avance, aunque tenemos la certeza de que este volumen es un claro aporte.

Editado por la Universidad Católica de Colombia en
diciembre de 2020, en tipografía Minion Pro, tamaño 11 pts.

Bogotá, D. C., Colombia

COLECCIÓN

LOGOS SIGNUM

Subcampos de
aplicación de la
psicología jurídica

5

La lectura de esta obra contribuye, de manera indirecta, con el conocimiento del trabajo del psicólogo jurídico en sus dos vertientes fundamentales: por un lado, la práctica forense, dedicada a la evaluación de conductas y procesos cognitivos que son útiles como elementos materiales de prueba y que se formalizan en un dictamen pericial (informe) que se debe sustentar en la corte legal; por otro lado, la actividad psicojurídica propiamente dicha, esto es, la intervención con los usuarios del sistema que no implique el actuar forense en el tribunal.

El libro muestra la adicción a sustancias psicoactivas como una categoría emergente de la psicología jurídica, dada su posible relación con nuevas formas delictivas.